

Áreas Protegidas

territorios para la vida y la paz

Tomo II. | Áreas protegidas, paisajes rurales y urbanos:
uniendo esfuerzos de conservación



II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas
2014

II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas

Comité organizador general

Julia Miranda Londoño
Coordinación general

Jorge Hernán Lotero Echeverri
Coordinador académico

Luis Alfonso Cano
Coordinador comunicaciones

Fanny Suárez
Coordinadora logística

Melisa Betancur
Asistente

Secretarías técnicas

Sylvia María Schlesinger Charry

Oscar Guevara

Clara Matallana

Paula Ximena Marín

Juan Bernardo Vargas Reyes

Liliana Rodríguez-Salamanca

Sonia Estupiñán

Juliana Echeverri

Madelaide Morales

Paola Sáenz Okuyama

Carlos Tapia

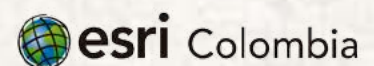
Ángela Gómez

Andrea Buitrago

Fernanda Del Pino

Pilar Lemus Espinosa

Alexandra Pineda Guerrero



SIDAP Valle - SIRAP Caribe - SIRAP Eje Cafetero - Corpoguajira - CARDER
CRQ - DOI - ICAA - Universidad de Freiburg - ANDESCO

**Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP)
Julio de 2014**

Luz Helena Sarmiento Villamizar
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Pablo Vieira Samper
Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Julia Miranda Londoño
Directora de Parques Nacionales
Naturales de Colombia

Edna María Carolina Jarro Fajardo
Subdirectora de Gestión y
Manejo de Áreas Protegidas
Secretaria del CONAP

María Claudia García Dávila
Directora de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Luz Angela Peña Marín
Secretaria de Medio Ambiente de
la Gobernación de Antioquia
Delegada SIRAP Andes Occidentales

César Humberto Melendez Sáenz
Director CDA
Delegado SIRAP Amazonia

Betsy Barrera Murillo
Directora Cormacarena
Delegada SIRAP Orinoquia

Luis Manuel Medina Toro
Director Corpoguajira
Delegado SIRAP Caribe

William Klinger Braham
Director General del IIAP
Delegado SIRAP Pacífico

Flor María Rangel
Directora General CAS
Delegada SIRAP Andes Nororientales

Juan Manuel Álvarez Villegas
Director General CARDER
Delegado Subsistema Eje Cafetero

Rey Ariel Borbón Ardila
Director General CAM
Delegado Subsistema Macizo Colombiano

Luis Lizcano Contreras
Director General Corponor
Delegado Corporaciones ASOCAR

Luz Marina Mantilla Cárdenas
Directora Instituto SINCHI
Delegada Institutos de Investigación del SINA

Dirección del proyecto

Jorge Hernán Lotero Echeverri

Comité editorial

Jorge Hernán Lotero Echeverri

Luis Alfonso Cano Ramírez

Carolina Hernandez Calderón

Director editorial

Andrés Barragán

Director de arte

Mateo Zúñiga

Sara Daniela Vergara Romero

Corrección de estilo

Jonatan Ahumada

Diseño y diagramación

Sara Daniela Vergara Romero

Carlos Daniel Silva Villalba

Helman Ivan Beltrán Ocaña

Vanessa Viasus Garzón

Catalina Ochoa Hernández

Andrés Álvarez Franco

Natalia Esquivel Sanabria

Archivo fotográfico

Archivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia

ISBN 978-958-8426-45-7**Obra completa**

Áreas Protegidas: Territorios para la Vida y la Paz

ISBN 978-958-8426-47-1**Tomo II**

Áreas protegidas, paisajes rurales y urbanos:

uniendo esfuerzos para la conservación

Citar como: *Áreas Protegidas: Territorios para la Vida y la Paz. Áreas protegidas, paisajes rurales y urbanos: uniendo esfuerzos para la conservación.* Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá D.C. 2015.

El contenido de esta publicación hace parte de las memorias del Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia durante los días 16,17 y 18 de julio de 2014. Contiene los artículos, ponencias, charlas magistrales y transcripciones de los foros y paneles. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad del (de los) autor (es).



.Puntoaparte
bookvertising

Agradecimientos

Simposio 5. Visiones institucionales y comunitarias frente al uso y ocupación de las áreas protegidas

Secretaria técnica

Liliana Rodríguez-Salamanca
GIZ-Parques Nacionales Naturales
Sonia Estupiñán
Parques Nacionales Naturales

Comité coordinador

Lucía Correa
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Ana Elvia Arana
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Carmen Candelo Reina
World Wildlife Fund (WWF)
Sandra Valenzuela
World Wildlife Fund (WWF)
Beth-Sua Carvajal
World Wildlife Fund (WWF)
Héctor Fabio Gómez
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)

Simposio 6. Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación y sostenibilidad financiera

Secretaria técnica

Juliana Echeverri
GIZ-Parques Nacionales Naturales

Comité coordinador

Adela Patricia Castro
Secretaria Técnica SIRAP Caribe
Alexandra Areiza
Secretaria Técnica SIRAP Eje Cafetero
Ana Elvia Arana
Secretaria Técnica SIDAP Valle del Cauca
Diana Montealegre
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Caribe
Erika Nadashowski
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER)
Gregoria Fonseca
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira)
Natalia Gómez
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Martha L. Salazar
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Jaime Vásquez Ruíz
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
Lucia Correa
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Hernán Barbosa
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Luz Nelly Niño
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Yazmín Rojas
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Simposio 7. Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas

Secretaria técnica

Madelaide Morales
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Jorge Lotero
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Comité coordinador

María Elfi Chaves
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur)
Alejandro Olaya V.
Fundación Palmarito
Rafael Antelo
Fundación Palmarito
Andrea Svenson
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur)
Martha L. Cano
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur)

Simposio 8. Estrategias complementarias de conservación y biodiversidad rural-urbana

Secretaria técnica

Paola Sáenz Okuyama
TNC

Comité coordinador

Clara Solano
Fundación Natura
Iván Gil
The Nature Conservancy (TNC)
Ricardo Agudelo Salazar
Fondo Patrimonio Natural-SIRAP Macizo
Patricia Falla
Parques Nacionales Naturales de Colombia SIRAP Orinoquia
Alexandra Areiza
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Secretaría Técnica - SIRAP Eje Cafetero
Natalia Gómez
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Diana Marcela Rojas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Hernán Barbosa
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Clara Matallana
Instituto Alexander von Humboldt (IAvH)
Maria Elfi Chaves.
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur)
Luz Nelly Niño
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Daira Recalde
Patrimonio Natural

Contenido

Cap
01



Declaratorias
pág. 24

*

- Declaratoria del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas
pág. 25
- Principales reflexiones, consideraciones, propuestas e ideas del encuentro...
pág. 29
- Declaratoria de la Mesa de Jóvenes
pág. 34
- La Promesa de Sídney: Visión
pág. 36

Cap
02



**Visiones institucionales y comunitarias
frente al uso y ocupación de
las áreas protegidas**

pág. 40

*

- Presentación
pág. 41
- Visiones institucionales frente al uso y ocupación...
pág. 44
- Visiones institucionales frente al uso y ocupación de las áreas...
pág.68
- Síntesis
pág. 104
- Plenaria
pág. 108

Cap
03



Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación y sostenibilidad financiera

pág. 118

*

- Contexto general de subsistemas de áreas...
pág. 122
- Avances en la consolidación de sistemas completos...
pág.140
- Sostenibilidad financiera: construcción de sistemas...
pág.166
- Plenaria
pág. 194

Cap
04



Cap
05



Cap
06



Cap
07



**Las reservas naturales
de la sociedad civil en
los subsistemas**
pág. 200

*

- Experiencias en reservas naturales de la sociedad...
pág. 202
- Plenarias
pág. 230
- Pósteres
pág. 242

**Estrategias complementarias
de conservación y
biodiversidad rural-urbana**
pág. 260

*

- Estrategias complementarias de conservación: conceptos
pág. 264
- Biodiversidad urbana: retos y experiencias
pág. 276
- Experiencias locales: conservación rural
pág. 290
- Plenaria
pág. 304
- Pósteres
pág. 310

Eventos paralelos
pág. 332

*

- Conversatorio Conserva Colombia: aporte regional...
pág. 334

**Conclusiones y
recomendaciones**
pág. 340

*

- Áreas protegidas, paisajes rurales y urbanos: uniendo...
pág. 341
- Visiones institucionales y comunitarias frente...
pág. 345
- Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación...
pág. 347
- Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas...
pág. 350
- Estrategias complementarias de conservación...
pág. 352

Presentación general



Julia Miranda Londoño, Directora General
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Las áreas protegidas, por el aporte que hacen en términos de servicios ecosistémicos para el bienestar humano y su economía, más que un obstáculo para el desarrollo del país, deben ser vistas como la base natural que posibilita el mantenimiento de procesos productivos que demandan y dependen de esos servicios. En este escenario, el sector productivo, los gremios y las empresas, más que cumplir con las obligaciones que establecen las normas, deben buscar iniciativas para que los espacios naturales que proveen los bienes y servicios para el desarrollo de su actividad se mantengan. Si no se garantiza una base natural que provea servicios ecosistémicos,

la sostenibilidad a largo plazo de los sectores productivos estaría seriamente comprometida y, por ende, el bienestar del ser humano que depende de ese suministro.

En el 2010, se efectuó un análisis de efectividad a nivel del Sistema de Parques Nacionales Naturales donde, adicionalmente, se dieron recomendaciones a nivel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Una de las recomendaciones principales fue precisamente la de analizar e incorporar las presiones emergentes que estamos evidenciando, como la vulnerabilidad y el riesgo climático, no solo a nivel de cada área protegida individualmente considerada, sino como sistema.

Las políticas públicas en conservación con enfoque en derechos –participativas, diferenciales, transicionales y territoriales– aportan a la construcción de los escenarios rurales de paz, la vida digna y la conservación.

El panorama del uso y la ocupación de las áreas protegidas del SINAP son variados y complejos; por lo tanto, las alternativas para el manejo y la conservación deben ser diversas a la vez que promuevan el cumplimiento de los objetivos de conservación y el bienestar de las poblaciones. Para lograrlo, es necesario identificar los intereses y posiciones de los actores relacionados con el uso y la ocupación de los territorios y encontrar alternativas incluyentes y participativas que generen un valor agregado a las áreas naturales y a las poblaciones locales.

Muchos de los retos de las áreas protegidas se deben enfocar a partir de la información y los procesos de los diferentes subsistemas de áreas protegidas de Colombia, sobre los que se ha venido consolidando el SINAP. Estas experiencias buscan enriquecer la construcción de sistemas completos, ecológicamente representativos y efectivamente manejados.

No podemos desconocer que en Colombia, al igual que en muchos sitios del mundo, existe la propiedad privada, que constitucionalmente cumple una función ecológica y social. Es por esto que las iniciativas de conservación de la sociedad civil constituyen una alternativa importante para completar los esfuerzos del Estado. En Colombia, la legislación reconoce estos esfuerzos a través de la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC), la cual hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las experiencias que se presentarán resaltan los avances en la armonización entre producción sostenible, desarrollo y conservación, y resaltan los retos y oportunidades de la conservación privada en el país.

En este congreso se incorporó el concepto de las estrategias complementarias de conservación (ECC), el cual está relacionado en la misma Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Con este concepto se identifica la importancia de las acciones adicionales a las áreas protegidas que puedan responder a diferentes intereses y necesidades propias de cada territorio y sus habitantes.

En este sentido, con este ejercicio académico buscamos aportar en el entendimiento de las ECC, que deben ser vistas como una oportunidad en el fortalecimiento a la conservación de la biodiversidad del territorio colombiano. Este ejercicio viene siendo discutido por diferentes entidades del país y deberá seguir construyendo espacios de discusión y participación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, los subsistemas de áreas protegidas y con las organizaciones comunitarias. Uno de los retos del II Congreso fue seguir posicionando este tema y avanzar en las claridades técnicas y normativas que se requieren.

Resaltamos y valoramos la enorme heterogeneidad de iniciativas de conservación y manejo de los territorios que son promovidas y desarrolladas por los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas del país, que promueven la pervivencia física, diferentes modos de vida, formas de organización, instituciones e identidad cultural.

Estas experiencias surgen, en variados arreglos y alianzas con entidades públicas y muchas ONG, y se renuevan cotidianamente como respuesta creativa y forma de resistencia frente a diferentes presiones y amenazas.

Las acciones comunitarias de ordenamiento y gestión territorial, impulsadas por las organizaciones indígenas, campesinas y populares desde referentes culturales y saberes tradicionales y locales propios, abarcan un gran número de

figuras de protección de territorios y áreas o zonas específicas que poseen valores culturales y naturales fundamentales. Algunas veces incluyen todo el territorio de una comunidad; otras enfatizan en sitios de particular importancia, como cerros, lagunas, quebradas, salados, peñas, áreas de selva, etc., o sitios de especial significación ecológica o simbólico-religiosa que se entretajan con zonas de cacería, recolección o agricultura, muchas veces también consideradas como objetos de protección.

Las diversas concepciones del conocimiento de la biodiversidad y el territorio permiten promover una discusión sobre los diferentes aspectos de la valoración integral de los servicios ecosistémicos en las áreas protegidas en Colombia, desde diferentes visiones e incluyendo valores socioculturales, ecológicos y económicos. Durante el Congreso se

analizará la evolución del concepto y de las visiones de servicios ecosistémicos en el contexto de las áreas protegidas, se identificarán las diferentes formas de valor asociados a los servicios ecosistémicos en las áreas protegidas brindando lineamientos para vincular diferentes visiones y formas de valoración en la gestión de las áreas protegidas.

Por último, esta publicación recopila el esfuerzo de las personas que participaron en el II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas. Como se podrá apreciar en las páginas siguientes, una gran variedad de instituciones tanto públicas como privadas, los jóvenes, las organizaciones campesinas, los indígenas y los afrodescendientes están contribuyendo a que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia sea la base para la conservación del patrimonio natural y cultural.



 Parque Nacional Natural Chingaza. *Giovanny Pulido.*

Antecedentes



Compilado por: Jorge H. Lotero E, Asesor
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Colombia es un país mundialmente reconocido por sus riquezas naturales y culturales. Esa enorme diversidad de culturas, especies, paisajes, ecosistemas y formas de vida, de lo cual nos falta mucho por conocer, quizás no se percibe en la cotidianidad del colombiano, a pesar de que el país viene avanzando en la consolidación de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Hoy en día, a noviembre de 2015, se cuenta con un área de 23.593.500,73 ha² con apenas alguna categoría de área protegida¹.

1 Cifra tomada del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), a corte de noviembre de 2015. La información relacionada con las áreas protegidas del SINAP es actualizada de manera permanente por las autoridades ambientales dado que se pueden presentar nuevas declaratorias, sustracciones y homologaciones. Así mismo, algunas áreas están en proceso de contraste y homologación, por lo que pueden llegar a presentarse variaciones.

La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012 establece que el país ha avanzado significativamente en la consolidación del SINAP (CONPES 3680 de 2010, Decreto 2372 de 2010). Sin embargo, la representatividad ecosistémica y la sostenibilidad financiera del SINAP aún no están garantizados. En tal sentido, el país ha identificado un portafolio de prioridades de conservación que identifica cerca de 40 millones de hectáreas prioritarias, a partir de 33 estudios de prioridades de conservación realizados a diferentes escalas, que buscan determinar los sitios estratégicos para el SINAP, donde se logren representar cada vez mejor los ecosistemas que caracterizan el país y que conforman el patrimonio natural nacional.

Este II Congreso fue el espacio donde se discutieron las políticas públicas de cada sector productivo y su armonización con los procesos de conservación de la biodiversidad. Aquí se

articularon metas de crecimiento económico y social con las prioridades y necesidades de conservación requeridas, con el fin de proteger el patrimonio natural y cultural del país como parte de la base fundamental para garantizar la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de nuestra población.

El contenido temático fue estructurado con los aportes de personas e instituciones comprometidas con la conservación del patrimonio natural y cultural del país, recogiendo las metas y compromisos de Colombia en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y las temáticas que fueron presentadas en el Congreso Mundial de Parques realizado en noviembre de 2014 en Sidney, Australia, así como los compromisos adquiridos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en el I Congreso de áreas protegidas realizado en el 2009.

Estructura del II Congreso de Áreas Protegidas

Este II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas realizado en la ciudad de Bogotá entre el 16 y el 18 de julio del 2014, tuvo como lema: “Áreas Protegidas: Territorios para la vida y la paz”, con una estructura de tres ejes temáticos y once simposios, cuyos objetivos son:

- Visibilizar y posicionar las áreas protegidas, los subsistemas y las estrategias complementarias de conservación de cara a los nuevos retos del desarrollo económico y social del país como territorios para la vida y la paz.
- Analizar las dinámicas sociales y ambientales en los paisajes urbanos y

Algunos datos generales del evento

- » 2140 personas inscritas, se duplicó la asistencia del I Congreso.
- » 147 reuniones realizadas de coordinación.
- » 98 personas de la coordinación de la agenda académica de 40 instituciones.
- » 101 conferencistas.
- » 7 ponencias de empresas.
- » 15 moderadores.
- » 30 panelistas.
- » 80 trabajos exhibidos en pósteres.
- » 39 stands.
- » 1 encuentro comunitario “Sembrando y tejiendo saberes para proteger el territorio” durante el 14 y 15 de julio de 2014.
- » 6 experiencias de comunidades campesinas y urbanas.
- » 15 experiencias de pueblos indígenas.
- » 7 experiencias de pescadores y de comunidades afroscendientes.
- » Cubrimiento por parte de 25 emisoras universitarias en el país, más de 30 medios locales, regionales, nacionales e internacionales.

rurales como retos para la administración de las áreas protegidas y la articulación de estrategias complementarias.

- Generar espacios para intercambio cultural, conocimiento y valoración social de las áreas protegidas en Colombia.

01 | Áreas protegidas para el desarrollo



Figura 1. Presentación, enfoque y estructura del II Congreso Nacional de Áreas Protegidas.

Las áreas protegidas en Colombia

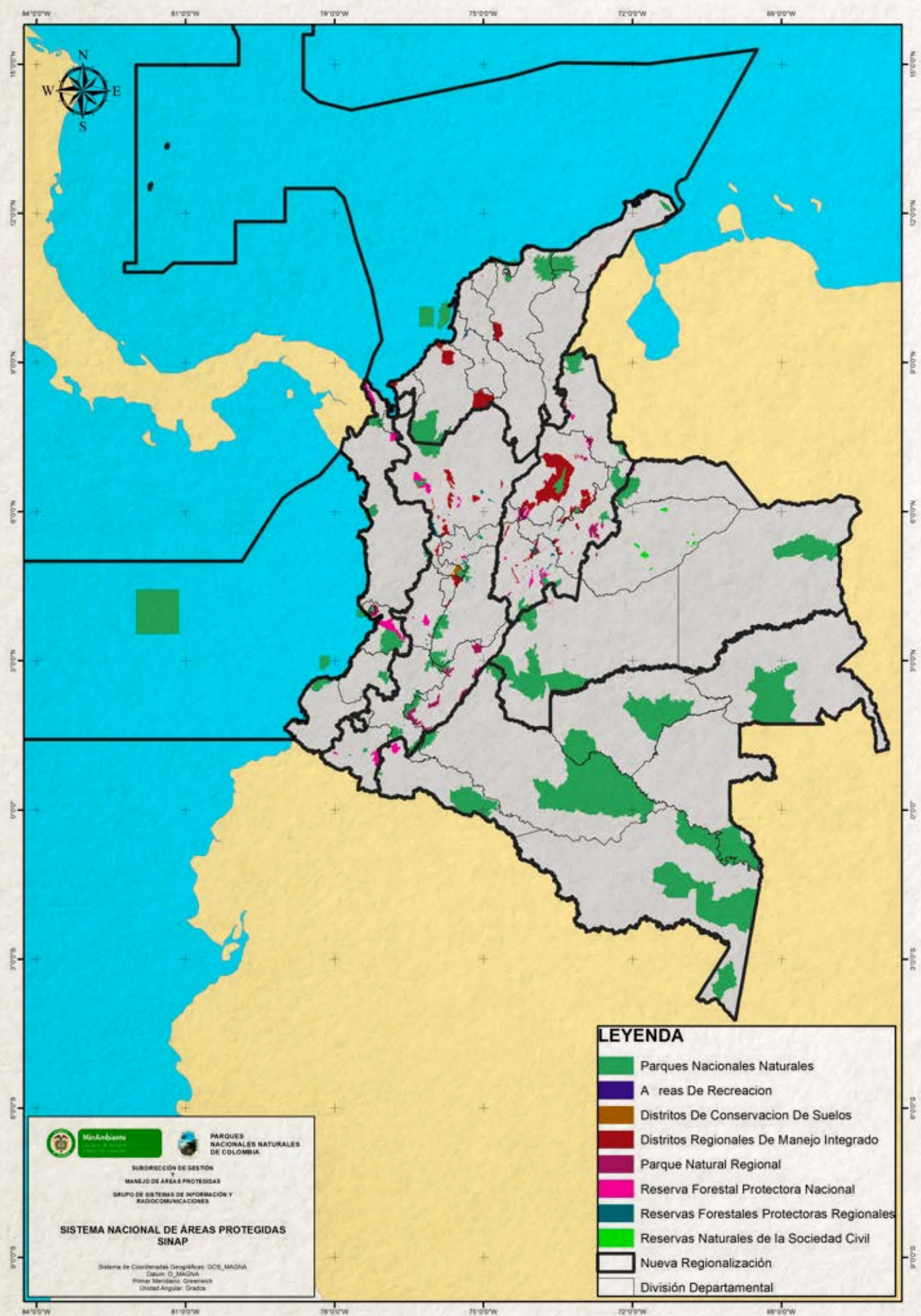
Las áreas protegidas como estrategia de conservación *in situ* de la biodiversidad tiene varios antecedentes en Colombia. Uno referente importante y ejemplo a seguir es el predio Meremberg en el Huila. Esta fue una iniciativa de conservación de la familia Büch Kolsdorf, quienes desde 1932 manejaron la Finca Meremberg bajo lo que podría llamarse los actuales principios de la sostenibilidad ambiental y social. La Finca Meremberg, ubicada en el municipio de La Plata en el departamento del Huila, se reconoce por ser la primera reserva natural privada que, siendo liderada por Gunther Büch, y luego por sus hijos, se

abre como un espacio para la conservación, la investigación y la educación ambiental y, a partir de la década de los ochenta sirve de semillero para el establecimiento de muchas más reservas naturales de la sociedad civil.

Como antecedentes de áreas públicas, están la creación de la Reserva de La Macarena en 1948 y luego la creación del PNN Cueva de los Guácharos en 1960, mediante el Decreto 2631 del 9 de noviembre. A nivel regional, desde los años ochenta se han establecido parques regionales naturales. Un referente es el Parque Ucumarí, creado en 1984 en el departamento de Risaralda. A partir de allí, el Estado colombiano ha consolidado un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que en la actualidad alcanza aproximadamente un área de 23.593.500,73 ha².



Parque Nacional Natural La Macarena. Carolina Hernández.



Mapa 1. Fuente: RUNAP, corte a noviembre de 2015

Ámbito de Gestión	Categoría	Nº de AP por categoría	Área cubierta (ha²)
Áreas protegidas nacionales	Reservas Forestales Protectoras Nacionales (RFPN)	56	599.589,43
	Distrito Nacional de Manejo Integrado Reserva de Bósfera Sea Flower	1	6.500.000,00
	Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales - SPNN	59	14.268.224,29
	Total Áreas Protegidas Nacionales	116	21.367.813,72
Áreas protegidas regionales	Áreas de recreación	10	792,92
	Distritos de conservación de suelos (DCS)	10	43.738,00
	Distritos Regionales de Manejo Integrado	67	1.489.593,35
	Parques Naturales Regionales (PNR)	36	429.109,20
	Reservas Forestales Protectoras Regionales (RFPR)	92	184.994,02
	Total Áreas Protegidas Regionales	215	2.148.227,49
Áreas protegidas privadas	Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC	389	77.459,52
	Total de RNSC:	389	77.459,52
Totales		720	23.593.500,73



Tabla 1. Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), corte a 4 de noviembre de 2015, Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia (SINAP)

La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció un conjunto de deberes ambientales a cargo del Estado, entre los que sobresale el artículo 79, que señala el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines.

Así mismo, en el artículo 80, se señala que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas fronterizos.

Además, la Constitución consagró deberes compartidos entre el Estado y los particulares, como la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación prevista en el artículo 8, así como obligaciones a cargo de las personas de manera exclusiva como la de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. El artículo 63 de la Carta señala que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

La Ley 99 de 1993, en su artículo 1, establece a su vez unos principios generales ambientales para Colombia, donde plantea entre otros que “la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada de forma sostenible”; “la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado”.

En Colombia, la idea de conformar un sistema a partir de las iniciativas nacionales, regionales públicas, privadas y comunitarias se empezó a



desarrollar desde el siglo pasado. Una de las primeras alusiones que se hizo a un sistema de áreas protegidas fue en el Decreto 622 de 1977, donde se habla del “conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que debido a sus características naturales y en beneficio de los habitantes de la Nación, se reserva y declara dentro de alguno de los tipos de áreas definidas y en el artículo 329 del Decreto Ley número 2811 de 1974”.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) se entiende como “el conjunto de todas las áreas protegidas del país de gobernanza pública, privada y comunitaria que comprende los ámbitos de gestión nacional, regional y local y vincula diferentes actores, estrategias e instrumentos de gestión, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país” (UAESPNN, 2007).

La Ley 165 de 1994, por la cual se ratifica en Colombia el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), en su artículo octavo sobre conservación *in situ* alude al establecimiento de un sistema de áreas protegidas, que “cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica” (Artículo 8b).

En julio de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt actualizan y lanzan nuevamente la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que plantea un cambio significativo en la manera en que se ha abordado el tema de la biodiversidad en Colombia hasta el presente. Amplía el concepto de biodiversidad, entendiendo que la componen diversos procesos que incluyen los esfuerzos integrados de preservación, restauración, uso sostenible y construcción de conocimiento e información.

La Política también reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad como fuente principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos que son indispensables para el desarrollo del país, para su competitividad a nivel internacional y para consolidar el bienestar de la sociedad colombiana. Los principales ejes temáticos de la PNGIBSE 2012 son: 1) Conservación y el cuidado de la naturaleza, 2) Gobernanza y creación de valor público, 3) Desarrollo económico, competitividad y calidad de vida, 4) Gestión del conocimiento, tecnología e información, 5) Gestión de riesgo y suministro de servicios ecosistémicos y 6) Corresponsabilidad y compromisos globales.

Desde el I Congreso de Áreas Protegidas en el 2009

En Bogotá, entre el 27 y el 29 de octubre de 2009, se realizó el I Congreso Nacional de Áreas Protegidas, evento que contó con una participación aproximada de 1200 personas, se presentaron cerca de 72 trabajos de investigación, 18 stands de exhibición y 7 actividades complementarias.

Para esa ocasión, se contó con un comité organizador conformado por el MADS, PNNC, USAID, la CAR y Patrimonio Natural, además de un grupo de 15 entidades que apoyaron su realización: TNC, CI, el Área Metropolitana del Valle de *Aburra*, ANH, CVC, Ecopetrol, Humboldt, WWF, CAM, Corpoguajira, Coralina, Bavaria, ACEID, WCS y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México.

Este I Congreso Nacional de Áreas Protegidas tuvo el lema: “Hacia un sistema nacional completo, representativo y eficazmente gestionado” y contó con el siguiente contenido temático:

Este espacio sirvió para que el país avanzara en la discusión y divulgación de los avances, procesos y orientaciones para la conformación del SINAP en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y del Plan Nacional de Desarrollo, para construir acuerdos sobre las propuestas de marco político y normativo del SINAP, para que se intercambiaran experiencias y lecciones aprendidas desde lo nacional a lo local y se afianzaran las metas y propósitos nacionales de conservación *in situ* del país.

Los participantes del I Congreso Nacional de Áreas Protegidas comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural asociado y conscientes de la necesidad de avanzar hacia un Sistema Nacional de Áreas Protegidas completo, representativo y eficazmente gestionado, adoptaron una declaración, donde se reconoció:

Contenido temático de los simposios



- Que el desarrollo productivo y social del país se sustenta en la base natural que poseemos y por ende son necesarias acciones tendientes para su conservación.
- Que la conservación de la diversidad biológica es una política de Estado y que una de las mejores formas de lograr este propósito, es la conformación y gestión de áreas protegidas, donde se aglutinen diferentes intereses y visiones.
- Que es posible la conservación de la biodiversidad y la gestión y manejo de áreas protegidas, solamente cuando es un objetivo social, que en el contexto pluriétnico y multicultural, implica el respeto a las formas de vinculación entre sociedad, cultura y naturaleza. Que la cultura es un elemento fundamental para el logro de objetivos de conservación y se evidencia que hay resultados locales, regionales y nacionales en esta valoración.

- Que las áreas protegidas y los sistemas que conforman, entendidos como los procesos que las integran a todo nivel, son mecanismos de especial importancia para la protección, uso sostenible, restauración y conocimiento de la biodiversidad.
- Que la gestión y manejo de las áreas protegidas hace parte de los procesos de ordenamiento del territorio y planificación ambiental y por ende se complementa con otras iniciativas u oportunidades de conservación de la biodiversidad del orden global, nacional, regional y local, y del ámbito público, privado y comunitario.
- Que, aún en el incipiente posicionamiento de las áreas protegidas en la elaboración e implementación de políticas sectoriales y gremiales, existen voluntades en torno a la oportunidad que representan las acciones de conservación para el desarrollo económico y social del país.

Desde el I Congreso Nacional de Áreas Protegidas: Hacia un sistema nacional completo, representativo y eficazmente gestionado, realizado en octubre de 2009, hasta la realización del II Congreso, fueron muchos los avances logrados en el tema de áreas protegidas, lo que nos permite afirmar que vamos por una ruta que le ha permitido a Colombia avanzar en la consolidación del SINAP.

A continuación, un análisis de los retos que nos proponíamos en el 2009, los compromisos internacionales del país y los avances logrados hasta el momento 1.

1. Con relación al marco normativo y de política

Las recomendaciones del I Congreso fueron:

- El sistema de categorías de manejo de áreas protegidas del país debe fundamentarse en los objetivos de conservación, las características naturales de las áreas y su regulación de usos y actividades y permitir su homologación internacional con el reciente sistema propuesto por la UICN.
- Es necesaria la adopción de una política de Estado que consolide un Sistema Nacional de Áreas Protegidas completo, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado.

El país actualmente cuenta con un marco normativo para el SINAP establecido por el Decreto 2372 de 2010, y un marco de política adoptado mediante el documento CONPES 3680 del 2010.

En el reto de la implementación de estos dos instrumentos y bajo el marco de un escenario de diálogo y construcción entre los diferentes actores

de la conservación, hoy podemos evidenciar grandes avances en la consolidación del SINAP y, aunque reconocemos que tenemos un largo camino por recorrer y que son muchos los retos en los que debemos avanzar para su consolidación, hoy podemos decirle al país con tranquilidad que hemos cumplido con la tarea encomendada, que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas hoy se constituye como la principal estrategia de conservación de largo plazo. Pero al mismo tiempo debemos decirle al país que es necesario fortalecerlo, reconocer los aportes de sus áreas protegidas y posicionarlo en todos sus proyectos de desarrollo, para garantizar que sea posible el desarrollo sostenible y la paz.

2. Con relación a la participación y articulación entre los actores de la conservación

Las recomendaciones del I Congreso y del CONPES 3680 de 2010 fueron:

- Construir un SINAP participativo, legítimo y representativo que incorpore diferentes visiones y esfuerzos sobre el territorio.
- Consolidar los subsistemas de áreas protegidas y que estos aporten al ordenamiento territorial y la planificación ambiental.
- Integrar a la gestión de las áreas protegidas la voluntad y el esfuerzo de la Academia, las comunidades étnicas, la sociedad civil y los sectores económicos.

Los logros del país a la fecha son:

- Seis (6) subsistemas regionales de áreas protegidas y varios subsistemas temáticos, como el de áreas marinas protegidas, el del Macizo colombiano y el del Eje Cafetero. Adicionalmente, contamos con 23 sistemas departamentales y 61 sistemas municipales de áreas protegidas.

1 Balance general presentado por la directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Dra. Julia Miranda Londoño, en la charla inaugural, Bogotá, 16 julio 2014.

- El Memorando de entendimiento para la implementación del Plan de Acción del SINAP del que hacen parte más de 72 entidades y que opera a través de cuatro (4) mesas temáticas (Prioridades de Conservación, Investigación y Monitoreo, Comunicaciones y Sostenibilidad Financiera).

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que se viene reuniendo de manera periódica para tratar temas centrales de política para el SINAP.

Todo lo anterior nos permite concluir que contamos con un 86% de participación en el SINAP. Los espacios de articulación con los sectores de desarrollo para el posicionamiento del SINAP, las prioridades de conservación y sus zonas de influencia son cada vez escenarios más efectivos que han permitido construir acuerdos sobre flujos de información, criterios de trabajos, mecanismos de articulación y en donde se ha buscado tres temas esenciales prevenir y mitigar los impactos generados por los proyectos de desarrollo, así como orientar los procesos de compensación. Podemos señalar que el diálogo con los sectores constituye en un referente internacional y permite evidenciar los avances del SINAP en su posicionamiento.

3. Con relación al logro de un sistema ecológicamente representativo

Los planteamientos del I Congreso fueron:

- Afinar las metas de conservación considerando la vulnerabilidad y la amenaza de los ecosistemas, e incorporar la restauración, como dimensión del concepto de conservación.
- Fortalecer procesos de conservación sustentados en objetivos culturales de conservación.



Los principales logros del país a la fecha frente al tema son:

El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas hoy es una herramienta en un importante nivel de consolidación, que ha sido producto de un esfuerzo conjunto entre todas las autoridades ambientales y que actualmente es nuestra principal herramienta de diálogo con los sectores del desarrollo.

El registro actualmente cuenta con 628 áreas protegidas en las diferentes categorías de manejo, que cubren 17061.645 distribuidas en todo el territorio nacional, tanto continental, como marino-costero y oceánico y corresponden al 8,24% del total nacional. Un sistema que actualmente tiene una representatividad del 56,03% en un ejercicio realizado a escala 1:100.000 a partir de la generación del mapa de provincias y distritos biogeográficos, elementos que en este congreso presentamos y están recogidos en el primer Atlas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Por otra parte, actualmente el ejercicio de prioridades de conservación, tanto en las escalas nacional como regional, ha venido logrando desarrollos técnicos para mejorar sus escalas de trabajo y la calidad de la información, lo cual ha permitido cada día tener mayor certeza sobre las zonas que tienen un interés claro de conservación y que viene generando múltiples espacios de diálogo con los sectores para la planificación de sus actividades, entre las cuales debemos mencionar:

La Resolución 1517 de 2012 por medio de la cual se adopta el *Manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad*, donde el referente de análisis es por una parte evitar la pérdida neta de biodiversidad y por otra darle una mayor relevancia a aquellos ecosistemas no representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para esto dentro de los mecanismos de compensación están las áreas protegidas actuales, el apoyo a procesos de nuevas áreas, así como el apoyo a otras iniciativas de conservación que se realicen desde la sociedad civil.

Por otra parte, se cuenta con el Decreto 1374 de 2013 un ejercicio que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que actualmente se encuentra en proceso de actualización, donde se define una Reserva Temporal de Recursos Naturales, en aplicación del principio de precaución, dando fuerza al ejercicio de prioridades de conservación y facilitándole al sector minero los elementos jurídicos para armonizar los procesos de planeación sectorial.

4. Con relación al logro de un sistema efectivamente gestionado

Las recomendaciones del I Congreso y del CONPES 3680 son:

- Fortalecer la evaluación de efectividad del manejo del SINAP a nivel de área y analizar los sistemas desde el cumplimiento de

sus atributos: completo, ecológicamente representativo y efectivamente gestionado.

- Consolidar la estrategia de sostenibilidad financiera del SINAP, a partir de información financiera, identificación de vacíos y necesidades del Sistema.
- Articular la investigación y el monitoreo a todas las fases del proceso de establecimiento, manejo, gestión y administración de las áreas protegidas y de los Sistemas que conforman.

Los avances logrados en el país son:

Se cuenta con una estrategia de sostenibilidad financiera para el SINAP y se cuenta con esfuerzos regionales para concreción de las mismas, en particular en la elaboración de la estrategia de sostenibilidad financiera del subsistema de áreas marinas protegidas (SAMP), se identificaron instrumentos potenciales a desarrollar para disminuir la brecha financiera y se ha avanzado en el diseño, ajuste y gestión e implementación de algunos de ellos.

Se ha avanzado en la revisión y análisis del Formato Único Territorial (FUT) en el cual se deben reportar las inversiones por la obligación del 1% de los entes territoriales y en Pago por Servicios Ambientales (PSA), se homologó la metodología del cálculo de brecha financiera del SINAP, adicionalmente se avanzó en el cálculo de la brecha financiera para PNNC, que se ha venido implementando con el Invemar, Corpoboyaca, CAR y Corpochivor.

Se han realizado propuestas normativas, entre otras, la modificación de las transferencias del sector eléctrico, la ampliación del cobro de la sobretasa ambiental en los peajes, compensaciones a entes territoriales donde se encuentren áreas protegidas, cobro por el servicio adicional por actividades recreativas acuáticas y tránsito de embarcaciones en áreas marinas protegidas.

Además, se ha venido gestionando la formulación de proyectos que estas tienen que cumplir para las obligaciones de compensaciones por pérdida de biodiversidad y de inversión del 1% por el uso del recurso hídrico en proyectos licenciados, en un trabajo concertado con las respectivas autoridades ambientales regionales, para ser presentados ante la ANLA, lo que beneficia las áreas protegidas.

PNNC cuenta con una herramienta para medir la efectividad del manejo y a nivel del SINAP se ha venido avanzando en la evaluación de la efectividad en el subsistema de áreas protegidas Marino Costero. Esperamos que, con el desarrollo del proyecto GEF SINAP, este tema sea fortalecido y permita que en todas las escalas del SINAP se puedan realizar estas evaluaciones.

Finalmente, se encuentra en desarrollo e implementación del sistema de información y monitoreo para el SINAP que funciona con base en el RUNAP, vinculado al Sistema de Información de Biodiversidad. Con relación al monitoreo, se cuenta con el Plan de Investigación y Monitoreo para el SINAP, que se viene liderando desde el Instituto Humboldt y se trabaja con los diferentes subsistemas. Adicionalmente, Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con un sistema de monitoreo que funciona en línea y se denomina SULA e inicia el proceso de implementación de la herramienta de control y vigilancia denominada SICO, donde el reto es lograr llevar esta herramienta a todas las áreas del SINAP.



 Parque Nacional Natural Cahuinarí. *Rodrigo Durán.*

01

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas

2014

TOMO I. Áreas protegidas para el desarrollo

Declaratorias

Contenidos



Declaratoria del II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas
pág. 25



Declaratoria de la Mesa de Jóvenes
pág. 34



Principales reflexiones, consideraciones,
propuestas e ideas del encuentro intercultural...
pág. 29



La Promesa de Sídney: Visión
pág. 36



Índice

Declaratoria del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas

Nosotros, los participantes del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, realizado entre los días 16 y 18 de julio de 2014 en la ciudad de Bogotá, desde diversas visiones, conceptos e intereses, compuesto por jóvenes, académicos, empresarios, pueblos urbanos, campesinos, indígenas, negros y raizales, que representan la riqueza étnica y cultural del país, comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural hacia una consolidación de las áreas protegidas como territorios de vida y de paz, adoptamos la siguiente declaración:

Reconociendo:

1. Que ratificamos lo contemplado en la declaración del I Congreso Colombiano de Áreas Protegidas en el 2009, en todos

sus puntos y en especial cuando menciona que “la conservación de la biodiversidad, la gestión y el manejo de áreas protegidas es posible solamente cuando es un objetivo social, que en el contexto pluriétnico y multicultural, implica el respeto a las formas de vinculación entre sociedad, cultura y naturaleza”.

2. Que se retoma lo enunciado por Naciones Unidas en 1982, en *La carta a la naturaleza* donde persuade a los países que “Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia de la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales”.

3. Que las áreas protegidas y los diferentes territorios conservados son espacios donde se expresan valores y prácticas culturales que promueven la vida y la paz contribuyendo al bien ser, bien estar y el buen vivir de la población.
4. Que, en la conservación de la diversidad biológica y cultural desarrollada a través de diferentes procesos territoriales y en las áreas protegidas, están las soluciones para afrontar, en la actualidad, los principales desafíos de la humanidad como el cambio global, la atenuación de eventos climáticos extremos, la disponibilidad del abastecimiento de agua, la provisión de recursos genéticos, alimentos y el mantenimiento de las condiciones de salud.
5. La conservación de la naturaleza está estrechamente relacionada con los significados que las diferentes culturas otorgan a espacios determinados y con los consecuentes modelos de uso y manejo de los recursos.
6. Que si bien la estructura de distribución de la inversión pública se define a través de sectores, los temas ambientales y particularmente el de las áreas protegidas, suponen una visión transversal e integradora e implica el posicionamiento de la conservación en el modelo de desarrollo.
7. Que las dinámicas sociales, económicas y ecológicas en los paisajes urbanos y rurales son un reto para la administración de las áreas protegidas, así como su articulación efectiva con estrategias complementarias para el ordenamiento territorial.
8. Que el país ha avanzado en la consolidación del SINAP definiendo y reglamentando las categorías de áreas protegidas; creando instancias de coordinación nacionales, regionales y locales; fortaleciendo las capacidades de los actores; identificando vacíos y

prioridades de conservación en distintas escalas y estructurando mecanismos de sostenibilidad financiera.

9. Que la tendencia en la distribución de la población del país viene cambiando de rural a urbano, lo que implica desafíos para la conservación de los espacios naturales en contextos urbanos.
10. Que, para Colombia, las áreas protegidas como territorios biodiversos, juegan un papel fundamental en un escenario de posconflicto donde es posible armonizar diferentes visiones e intereses.

Declaramos:

1. Que es necesario incrementar la investigación científica como fuente de información para conocer lo que se conserva en las áreas protegidas, así como el conocimiento tradicional, que son insumos básicos para asegurar su manejo.
2. Que se requiere que las políticas de educación y comunicación promuevan la conexión del ser humano con la naturaleza, su identidad con el territorio y su responsabilidad con el cuidado de la riqueza natural y cultural del país y sus servicios ecosistémicos.
3. Que el país deberá avanzar hacia un marco normativo y de políticas que complemente el sistema de categorías actual a otras escalas y formas de gobernanza.
4. Que las estrategias complementarias de conservación aportan al cumplimiento de los objetivos de conservación del país y requieren de un marco conceptual y normativo que incorpore la innovación y el conocimiento desde las distintas visiones y contextos culturales.

5. Que es necesario que todas las áreas protegidas del Sistema Nacional cuenten con financiación que permita un real manejo que contribuya al mantenimiento de su integridad ecológica.
6. Que se requiere garantizar la financiación para la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, generando esfuerzos que produzcan y articulen el conocimiento científico y tradicional, de igual manera que reconozcan a las áreas protegidas como las alternativas naturales para la conservación de los mares.
7. Que es relevante impulsar la declaración y el manejo de nuevas áreas marinas y marino-costeras como sitios fundamentales en la prestación de los servicios ecosistémicos y de soporte vitales para las poblaciones locales.
8. Que los usos sostenibles que se adelantan en las áreas protegidas son una oportunidad tanto para el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas como para garantizar la soberanía alimentaria, la autonomía y gobernanza efectiva de las comunidades aledañas aportando a la construcción de la paz.
9. Que no es posible hablar de paz sin pensar en la conservación y la sostenibilidad del territorio, por lo que el país en el marco del proceso de negociación, la firma de la paz y el posconflicto debe lograr conservar las áreas protegidas y contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población que se encuentra en sus zonas de influencia y que han estado en el marco del proceso de conflicto.
10. Que las áreas protegidas son fundamentales para mantener el patrimonio natural y cultural, “el tejido social” de la Nación; por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre el territorio, frente al crecimiento económico, el desarrollo y bienestar de la población, deben apuntar a evitar su deterioro y degradación.
11. Que desde el Sistema Nacional y los subsistemas de áreas protegidas se hace necesario fortalecer las instancias de participación de los sectores de la economía del país. De forma paralela, los subsistemas deberán incidir en las decisiones políticas y económicas que se tomen sobre el territorio.
12. Que es necesario consolidar la articulación de los diferentes sectores que orientan el desarrollo del país, con el objetivo de generar acciones coherentes que como estado permitan la consolidación, gestión y ordenamiento efectivo de las áreas protegidas.
13. Que se debe valorar integralmente los servicios ecosistémicos que se derivan de las áreas protegidas, de manera que se puedan establecer con mayor precisión las retribuciones mínimas requeridas para garantizar su mantenimiento y definir los esquemas institucionales más adecuados para canalizarlas.
14. Que el país requiere una política de desarrollo territorial específica para la economía de las áreas protegidas y las zonas de influencia en la que se incorpore como eje central el reconocimiento financiero a la función social, ambiental y económica que tales áreas brindan al país.
15. Que la financiación de la política de conservación de las áreas protegidas tiene que provenir del país, en especial de los centros urbanos, quienes dependen de ellas y deben pagar las deudas ambientales acumuladas, así como las de los sectores económicos que no han compensado los servicios prestados.
16. Que las acciones y decisiones que se toman sobre el uso y la ocupación de las áreas protegidas deben estar orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas y además el

desarrollo económico, el bienestar de las poblaciones y comunidades que se benefician, directa e indirectamente, de estos territorios.

17. Que se debe establecer e implementar una estrategia para posicionar las áreas protegidas como las soluciones naturales menos costosas para la adaptación y mitigación al cambio climático.
18. Que se deben fortalecer modelos de gobernanza que incorporen innovaciones en la gestión compartida de las áreas protegidas, orientadas a la prevención y resolución de conflictos en el manejo del territorio y de los servicios ecosistémicos, a la participación en el diseño de medidas en el diseño de instrumentos de manejo y al seguimiento y ajuste de las diferentes prácticas involucradas.
19. Que debe darse un proceso de reflexión que involucre a todos los actores y que permita

identificar las acciones que generen un cambio en el paradigma de la conservación.

20. Que la participación es inherente a la democracia, y a la gobernanza. La sostenibilidad de las áreas protegidas está garantizada por la identidad, apropiación y reconocimiento de la gente, el empoderamiento de los habitantes frente a su función y necesidad. La participación de las comunidades es considerada como una oportunidad y exigencia para avanzar en la conservación efectiva del patrimonio; en tanto que estas comunidades son relacionadas como los socios naturales.
21. La participación tanto de las comunidades como de las instituciones es fundamental en los procesos de planificación y ordenamiento del uso de los territorios de las áreas protegidas.



Principales reflexiones, consideraciones, propuestas e ideas del encuentro intercultural: participantes de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, pescadores y comunidades negras de Colombia

Entre el 14 y 15 de julio del 2014 en el Jardín Botánico de la ciudad de Bogotá se desarrolló el Encuentro Comunitario “Sembrando y tejiendo saberes para la protección del territorio”, en el marco del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas: Territorios para la vida y la paz, llevado a cabo entre el 16 y 18 de julio del mismo año en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

En este conversatorio, participaron representantes de pueblos indígenas, negros, comunidades campesinas y habitantes de áreas urbanas de la Amazonia, el

Pacífico, la Orinoquia, la región Andina y el Caribe, y miembros de instituciones y organizaciones, todos comprometidos con la defensa de los territorios, la cultura y la vida en todas sus expresiones.

Se desarrolló así un trabajo de diálogo intercultural debatiendo sobre los avances y retos de más de 25 experiencias de trabajo para defender los territorios y todas las formas de vida que los constituyen. El presente documento reúne las principales reflexiones, consideraciones, propuestas e ideas que resultaron de este encuentro intercultural.

Algunas consideraciones

Los pueblos indígenas, pueblos negros, comunidades campesinas, habitantes de áreas urbanas del país, han desarrollado históricamente y continúan impulsando iniciativas propias de protección de los territorios que les dan la vida y garantizan su pervivencia física, sus modos de vida, formas de organización, instituciones e identidad cultural.

Estas comunidades no conciben la conservación de la naturaleza como una acción aislada, ya que sus cosmovisiones entienden el territorio de manera integral y holística, y la vida humana en estrecha relación con otros seres vivos, con el agua, el aire, el fuego y las fuerzas de la madre tierra. Ricos significados y valores se expresan en diferentes culturas, que se despliegan como relaciones recíprocas con otras formas de vida no humana.

Sus territorios se protegen porque estas culturas conocen, comprenden y respetan el orden natural que los rige y del cual hacemos parte los seres humanos.

Estos procesos de protección territorial y relación con el entorno:

- Se despliegan en variadas condiciones sociales y ecológicas y se expresan como una enorme heterogeneidad, riqueza de acciones y formas organizativas. Igualmente, recogen profundas tradiciones, valores, estructuras de gobierno y conocimientos locales, surgen en contextos político administrativos diferentes, y se proyectan de manera autónoma o a través de alianzas con entidades públicas y las ONG.
- Se renuevan cotidianamente como respuesta creativa y forma de resistencia frente a amenazas crecientes sobre los territorios que constituyen la base fundamental de la vida de pueblos y comunidades.

- Se multiplican como luchas permanentes por enfrentar presiones externas que buscan apropiarse de sus valores e imponer procesos de transformación de territorios y culturas.

Los pueblos y comunidades han impulsado estrategias que resaltan su intención de proteger ecosistemas y culturas, mediante mecanismos que abarcan un gran número de formas de cuidado de territorios y áreas o zonas específicas que poseen valores culturales y naturales fundamentales.

Estas formas propias algunas veces incluyen todo el territorio de una comunidad, otras enfatizan en sitios de particular importancia como cerros, lagunas, quebradas, salados, peñas, áreas de selva, bosques de galería, morichales, cananguchales, etc. o sitios de especial significación ecológica o simbólico-espiritual que se entretajan con zonas de cacería, recolección o agricultura, muchas veces también consideradas como objetos de protección.

Algunas reflexiones

En relación a las políticas públicas y la planificación del territorio:

- La diversidad de perspectivas y prácticas comunitarias, muchas veces opuestas a las intervenciones de los gobiernos regionales o del nivel central, es sin duda una gran riqueza que debe ser mejor entendida y acogida en políticas públicas que garanticen derechos fundamentales de la gente, posibiliten ejercicios de gobernanza en los que se evidencien y refuercen las interrelaciones entre la biodiversidad, los ecosistemas y la cultura.
- Las prácticas culturales y comunitarias que se traducen en el orden natural y el buen vivir no solo de los grupos étnicos y comunidades, sino de la sociedad en

general que recibe los beneficios de unos territorios vivos y conservados, son la materialización de acuerdos colectivos ya sea por mandato de la ley de origen, cumplimiento de leyes consuetudinarias, o resultado de procesos de concertación y toma de decisiones comunitaria.

- Esta gran riqueza de propuestas sociales, surgidas en condiciones difíciles, superan las propuestas oficiales de desarrollo económico y ordenamiento territorial que continúan promoviendo esquemas que excluyen o invisibilizan a las comunidades, sus autoridades y el valor de sus conocimientos tradicionales, propician la pérdida de su identidad cultural, imponiendo políticas centralizadas, ajenas y restrictivas.
- Es de vital importancia garantizar la participación plena de los pueblos y comunidades en todas las instancias de decisión que afectan sus territorios de manera que el conocimiento tradicional y local sea considerado en la acción de las instituciones y en los instrumentos de planificación, reconociéndolo en el mismo nivel del conocimiento científico como elemento fundamental para la toma de decisiones sobre territorios compartidos.
- Las políticas públicas no se han articulado de manera clara para contribuir a consolidar las iniciativas de pueblos y comunidades para proteger sus territorios, sus formas de vida y su cultura.
- Son crecientes las presiones y amenazas que provienen de intereses privados legales e ilegales, de grupos armados y de intervenciones estatales que promueven un modelo económico sectorizado y políticas de desarrollo, y enfatizan actividades extractivas, de construcción de infraestructura atadas a la lógica del mercado por encima del bienestar de la gente y de la garantía plena de sus derechos.



En relación al Sistema Nacional Ambiental y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas:

- Las estrategias y formas comunitarias de protección de territorios, naturaleza y cultura no están claramente recogidas en las políticas ambientales y, especialmente, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- No se ha desarrollado adecuadamente y en todas las áreas protegidas del SINAP la política de participación social “Parques con la gente”, y el SINAP continúa impulsando un modelo de administración centralizado que enfatiza criterios de creación y diseño de áreas en las cuales no se priorizan claramente los valores e importancia cultural de los territorios.
- Los mecanismos tangibles e intangibles de relación con el territorio, las concepciones y las vivencias de los diferentes grupos humanos determinan su transformación y protección, que por lo general desborda

los límites de las áreas protegidas o de otras categorías legales de conservación. Es el caso de la delimitación de los páramos, que contraría la dinámica misma del territorio y desconoce las culturas tradicionales que han convivido en esas zonas de alta montaña.

- La normatividad de áreas protegidas, especialmente el Decreto 2372 del 2010, inconsulto con los pueblos y comunidades, es restrictiva y no reconoce la posibilidad de incluir reservas o áreas protegidas comunitarias, y formas de gobernanza locales basadas en la autoridad de los pueblos y las comunidades.

Un llamado a generar cambios

- Es urgente hacer una ruptura con enfoques convencionales y proponer debates innovadores que transformen y enriquezcan los esquemas actuales de conservación y la práctica de creación y manejo de áreas protegidas como una función centralizada y exclusiva de especialistas.
- La protección del territorio debe construirse desde la perspectiva de los sujetos sociales más que desde el enfoque de “objetos de conservación”.
- Se debe avanzar en la construcción de criterios que orienten las intervenciones oficiales para la conservación mas allá de la representatividad ecosistémica.
- Se debe trabajar en el reconocimiento de las formas propias y de nuevas formas basadas en el pleno respeto de derechos y que surjan desde referentes culturales de los pueblos y las comunidades, lo que implica adecuaciones institucionales, cambios en las políticas públicas y en la normatividad nacional.

- Las figuras de protección no deben constituir el fin, sino el medio para la generación de espacios de diálogo intercultural entre los pueblos, las comunidades y las instituciones del Estado.
- Debe considerarse que es más efectivo consolidar las iniciativas comunitarias de defensa del territorio, la vida y la cultura, lideradas por las mismas comunidades a través de sus organizaciones y autoridades.
- En las actuales circunstancias es necesario promover acuerdos y alianzas entre sectores comunitarios y populares, lo mismo que con ONG y entidades públicas, para promover estrategias más integrales y efectivas de protección de los territorios, la vida y la cultura. Estos acuerdos pueden consolidarse como “acuerdos territoriales” locales y regionales en los que las comunidades y las AP, las entidades del SINA, empresas y los actores privados, definan derroteros que superen las intervenciones sectoriales y garanticen el bienestar de las personas y la pervivencia de los modos de vida, la cultura y la base natural. Los planes de desarrollo integral deben responder a una visión de territorio-región atendiendo las particularidades del mismo, e incluir la visión de desarrollo, los mecanismos propios de gobierno y los planes de vida de las comunidades y los pueblos.
- Dichos ejercicios de diálogo intercultural y construcción de acuerdos territoriales deben enfatizar temas fundamentales, como la gobernanza del agua, como un bien público y derecho fundamental, el mantenimiento y el intercambio libre de las semillas propias, base de las economías familiares y de la soberanía alimentaria, la protección y el reconocimiento del valor de los conocimientos tradicionales y locales y

de las prácticas y formas de organización propias que los sustentan, y la protección de los sitios sagrados como elementos fundamentales territorio.

- Además de ampliar el marco de categorías de AP del sistema actual, se reclama que las formas propias de defensa de los territorios sean fundamento del modelo de país que se quiere construir en el que prevalezca el respeto por la vida en todas sus formas, el bienestar, la justicia social, la reconciliación y la paz.

Algunas ideas y propósitos comunes para seguir avanzando

- Continuar trabajando de manera conjunta y en condiciones de igualdad en una ruta propia de discusión y consolidación de acuerdos en torno a figuras comunitarias de protección del territorio y la vida
- Garantizar espacios de concertación representativos, la participación, la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, en todos los órdenes para garantizar una verdadera representatividad y la participación efectiva en la toma de decisiones sobre el devenir de los territorios.
- Comprender la dimensión integral del territorio para su protección y cuidado, procurando articular las competencias estatales y la autoridad territorial de pueblos y comunidades
- Llamar a la búsqueda de articulación y coherencia en las intervenciones de las instituciones oficiales en el territorio, a fin de superar la fragmentada acción del Estado, la multiplicidad de planes y programas que genera conflictos permanentes e impide el relacionamiento adecuado con los pueblos y comunidades

- Celebrar un evento nacional de territorios comunitarios protegidos en el año 2015 que reúna los avances alcanzados en el tema y promueva las transformaciones institucionales y normativas necesarias para facilitar el ejercicio de la autoridad y el manejo propio de los pueblos y comunidades del país. Para tal efecto, se constituirá un grupo de trabajo conformado por delegados de los pueblos y comunidades presentes en el Encuentro.
- Consolidar una red o mesa de trabajo permanente para la defensa de los territorios como escenarios de vida y de paz en el contexto de reconciliación y paz que queremos ayudar a construir para nuestro país multiétnico y pluricultural.
- Promover el reconocimiento de pueblos y comunidades como “sujetos de paz” y protagonistas principales del proceso de reconciliación en escenarios de posconflicto.



Declaratoria de la Mesa de Jóvenes

Todos hablan de dejar un mejor mundo para nuestros hijos, nosotros proponemos dejar mejores hijos para nuestro mundo. Si investigas, difundes y proteges, podrás preservar un ecosistema para heredar.

Nosotros, los jóvenes colombianos, reunidos del 16 al 18 de julio de 2014 en Bogotá D.C. en el marco del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, conscientes de nuestro papel en la conservación del patrimonio natural de Colombia, consideramos que la educación, la comunicación, la política, la identidad y la cultura son pilares fundamentales que contribuyen a la paz y el equilibrio ambiental, social y económico. Por esto, declaramos que:

- Exigimos incluir la formación ambiental dentro de la educación formal e informal en todos los aspectos, niveles y espacios de la cotidianidad. Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que contribuyan en la formación de ciudadanos con prácticas más responsables

con el medio ambiente. Nosotros, los jóvenes, nos comprometemos a ejercer el papel de educadores en nuestras familias, base de la sociedad.

- Exigimos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República mayor apoyo presupuestal para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que, en conjunto con la comunidad urbana y rural, permite la defensa y ampliación de dichas áreas de conservación, basándose en la investigación. Proponemos que las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y la participación de los jóvenes sean determinantes para la reformulación de los planes de ordenamiento territorial (los POT). Como jóvenes, nos comprometemos a ser partícipes, testigos y veedores de la aplicación de las normas y proyectos que benefician las áreas protegidas.

- Resaltamos la importancia de la inclusión de las prácticas tradicionales y saberes ancestrales en los planes de conservación. Nos comprometemos a promover el diálogo intercultural y a tomar parte en los procesos de transmisión cultural de generación en generación.
- Exigimos mantener y recuperar nuestras semillas nativas y libres ante los retos de producción sostenible. Consideramos importante incentivar y acompañar los procesos de producción orgánica en las diferentes regiones del país, especialmente en las zonas de influencia de las áreas protegidas. Convocamos a la sociedad civil, el Estado, la academia y al sector productivo para que se articulen con el fin de fomentar estos procesos. Nos comprometemos a difundir en nuestras comunidades buenas prácticas de consumo.
- Nos comprometemos a diseñar y desarrollar estrategias junto a nuestras comunidades para difundir y compartir la importancia de prácticas en pro de la revaloración, restauración y conservación de las fuentes hídricas, la flora y la fauna.
- Exigimos al gobierno cumplir con la prohibición de la actividad minera en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, y

una mayor rigurosidad en la supervisión y seguimiento de los procesos de exploración, extracción minera, así como en los procesos de compensación ambiental. Proponemos que se implementen y masifiquen alternativas energéticas limpias. Nos comprometemos a conocer y entender la complejidad de la problemática minera para actuar como veedores frente al desarrollo de esta actividad.

- Somos conscientes que la basura que generamos es nuestra responsabilidad. Por esto, nos comprometemos a generar menos desechos y a reeducarnos a nosotros y nuestras familias para consumir responsablemente, extender la vida útil de los productos y buscar alternativas para disposición final de los residuos. Hoy lo decimos los jóvenes; mañana lo dirá la vida.
- Entendemos la paz como el eje fundamental para la conservación de nuestro medio natural. Proponemos al gobierno nacional y a la mesa de diálogos de paz que tengan en cuenta las oportunidades que brindan las áreas protegidas como escenarios para la construcción de iniciativas locales de desarrollo sostenible, como el ecoturismo, que aportan a los proyectos de vida de los jóvenes y familias que han sido víctimas del conflicto armado.



La Promesa de Sídney: Visión

Más de 6.000 participantes de 168 países se reunieron en el Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN en Sídney, Australia. Al tiempo que reconocimos a los custodios tradicionales de la tierra donde nos reunimos, celebramos una enorme variedad de formas inspiradoras de responder a los retos que enfrenta nuestro planeta, por medio de enfoques de áreas protegidas que respetan y conservan la naturaleza a la vez que benefician la salud y bienestar humano. Reconocimos que es fundamental reencontrar el equilibrio en la relación entre la sociedad humana y la naturaleza, y que los ecosistemas y la variedad de vida que encierran son indispensables para nuestra existencia, identidad cultural y espiritual, economías y bienestar.

Celebramos de manera entusiasta el incremento, así como la gobernanza y gestión mejoradas, de las áreas protegidas y conservadas alrededor del mundo desde que nos reunimos en Durban en el 2003, lo mismo que el liderazgo y las iniciativas de muchas regiones, incluyendo el primer Congreso de Parques del Asia en la historia. En particular, recibimos con beneplácito el establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas, ya que los océanos saludables son fundamentales para la vida sobre la tierra y deben ser protegidos a mucha mayor escala. Reconocemos el creciente papel que juegan las áreas y territorios conservados por pueblos indígenas, comunidades y entidades privadas para poder alcanzar los objetivos sociales y de conservación de la biodiversidad, así como las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías de comunicación y otras para comprender mejor

y reclutar nuevos constituyentes, incluyendo a jóvenes de las ciudades en rápido crecimiento alrededor del mundo. Aplaudimos las numerosas mejoras en prácticas corporativas, así como las variadas historias de éxito y diversas alianzas intersectoriales logradas en pos de la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad.

A pesar de estos avances, reconocemos que las amenazas a la naturaleza, su diversidad biológica y las áreas protegidas han alcanzado su nivel más alto en la historia, debido a la convergencia a inmensa escala de los patrones de consumo humano, el crecimiento de la población y la actividad industrial. Muchas áreas protegidas y conservadas se encuentran en riesgo o son víctimas de una mala gestión, y muchos de los custodios de áreas en la primera línea de campo lo han sacrificado todo por esta causa. Es necesario enfrentar esta realidad en forma directa, veraz y colaborativa. Requerimos de una visión valiente y una acción concertada si queremos alcanzar tanto los objetivos de conservación como las aspiraciones humanas de las generaciones presentes y futuras. No hay tiempo que perder.

Por lo tanto, nosotros:

Prometemos VIGORIZAR nuestros esfuerzos para garantizar que las áreas protegidas no retrocedan, sino que avancen. Aumentaremos la protección de paisajes terrestres, humedales y paisajes marinos para asegurar la representación de todos los sitios esenciales para la conservación de la naturaleza, especialmente los océanos. Mejoraremos la diversidad, calidad y vitalidad de la gobernanza y la gestión, incluyendo un reconocimiento y apoyo apropiados a las áreas conservadas por pueblos indígenas, comunidades locales y entidades privadas. Nos esforzaremos por promover los usos sostenibles de la tierra y eliminar las actividades y políticas que degradan, amenazan o producen



la extinción o la pérdida de los ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo el desenfrenado comercio ilegal de vida silvestre y el impacto de especies exóticas invasoras. Reconoceremos, respetaremos, aportaremos recursos y apoyaremos a nuestro personal de primera línea en el campo para que puedan llevar a cabo su trabajo, a menudo peligroso, pero siempre decisivo.

Prometemos INSPIRAR a toda la gente, de todas las generaciones, geografías y culturas, para que experimenten la maravilla de la naturaleza por medio de las áreas protegidas, para seducir sus mentes y sus corazones y generar una asociación de por vida para su bienestar físico, psicológico, ecológico y espiritual. Motivaremos y reclutaremos a las nuevas generaciones de las comunidades urbanas y rurales, como una inversión en el futuro

de la sostenibilidad en el planeta, y en la calidad de vida de la gente en todas partes. Más allá de esto, trabajando en alianza con y reconociendo la larga tradición y conocimiento, los derechos colectivos y las responsabilidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales en relación con la tierra, el agua, los recursos naturales y la cultura, trataremos de rectificar y remediar las injusticias pasadas y presentes en cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Prometemos INVERTIR en las soluciones de la naturaleza, con el apoyo de políticas públicas, incentivos, herramientas y garantías que ayuden a detener la pérdida de biodiversidad, mitigar y responder al cambio climático, reducir el riesgo y

el impacto de los desastres, mejorar la seguridad alimentaria y de suministro de agua, y promover la salud y dignidad humanas. Trabajaremos para permitir que las áreas protegidas y conservadas, así como sus custodios, puedan diseñar y controlar respuestas eficaces, basadas en la evidencia y culturalmente apropiadas para esos retos, y para presentar una defensa irresistible de la necesidad de un mayor reconocimiento, incentivos, capacidad y financiamiento directos. Estimularemos las redes regionales de aprendizaje y las iniciativas que apoyan estos objetivos. Colaboraremos con nuevos socios para promover economías sostenibles y equitativas que respetan los límites planetarios y la justicia social.



Sidney, Australia. Jorge Lotero.



02

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Visiones institucionales y comunitarias frente al uso y ocupación de las áreas protegidas

Contenidos



Presentación
pág. 41



Visiones institucionales
frente al uso y ocupación...
pág. 44



Visiones institucionales frente al
uso y ocupación de las áreas...
pág. 68



Síntesis
pág. 104



Plenaria
pág. 108



Índice

Presentación

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)¹ es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales, estrategias e instrumentos de gestión que las articulan que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. De esta manera, el SINAP incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública y privada y del ámbito de gestión nacional, regional y local.

1 Incluye las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Nacionales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las Áreas de Recreación y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Para ello, se han definido distintas categorías de manejo según su nivel de biodiversidad y tipos de usos. Dichos usos y actividades permitidas, se podrán realizar siempre y cuando no afecten tanto los atributos ecológicos del área como sus objetivos de conservación.

Actualmente, se encuentran inscritas en el SINAP 628 áreas protegidas de las cuales 570 admiten diferentes tipos de uso sostenible. Se debe tener en cuenta que las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) son categorías destinadas a la preservación, y estas corresponden al 83,7% del total del SINAP. Sin embargo, y debido a la historia de poblamiento del territorio colombiano, al interior de ellas existen diferentes pobladores, entre ellos las comunidades ancestrales,

a quienes se les reconoce derechos territoriales y con quienes se regulan de manera conjunta los usos en dichas áreas. Otros pobladores como comunidades campesinas, colonas, habitantes locales y ciudadanos se encuentran en situaciones diferenciales de ocupación y uso, por distintas razones, causas e intereses.

Lo anterior, sumado al desarreglo de la política agraria del país, el conflicto armado interno, la extracción ilegal de recursos naturales, las acciones no coordinadas de fomento del Estado y el desarrollo de actividades ilícitas asociadas al narcotráfico, factores que han influido en que, actualmente 34 de las 58 áreas protegidas del SPNN estén siendo deterioradas por los usos inadecuados que se dan.

Es importante mencionar que entre las áreas del SINAP que permiten usos sostenibles, las más numerosas son las reservas naturales de la sociedad civil, donde hoy se protegen más de 60.000 ha. Igualmente, dentro de las áreas protegidas de carácter público, en categorías que permiten algún tipo de uso sostenible, se encuentran 220 áreas, con una superficie de más de 2 millones 300 mil hectáreas, lo que demuestra que es posible conservar usando la biodiversidad con principios de sostenibilidad y fortalecer la relación entre la sociedad y la naturaleza, de forma tal que se garantice el mantenimiento de los beneficios directos o indirectos que se derivan de ella.

Con base en lo anterior, el Simposio 5 se propuso analizar el panorama de uso y ocupación de las áreas protegidas del SINAP y las posibles alternativas que generan mejores oportunidades para la conservación de la biodiversidad y por tanto el bienestar de las poblaciones que en ellas habitan. Además, permitió conocer experiencias exitosas en áreas protegidas relacionadas con procesos de uso sostenible como aporte a la conservación de estas.



Por medio de dos foros, se presentaron las visiones institucionales y comunitarias para reflexionar sobre las problemáticas socioambientales existentes relacionadas con los usos en las áreas protegidas. Además, se identificaron diferentes intereses y posiciones frente al tema, la relación entre conservación y derechos de uso y las presiones que sufren los distintos paisajes y comunidades asentadas allí.

Enfoque general

El Simposio 5 visibilizó las percepciones, visiones y enfoques institucionales y comunitarias alrededor del uso y la ocupación de las áreas protegidas, de forma tal que aporten tanto a la conservación de la biodiversidad como a la construcción de una política de tierras del SINAP que resuelva las problemática de uso y ocupación de tierras en las áreas.

Temas principales

Los temas claves que trató el Simposio 5 fueron:

- Los conflictos de uso, incluyendo el tema de la propiedad rural.

- Los derechos de las comunidades.
- Los beneficios de las áreas protegidas (tangibles e intangibles).
- Herramientas para su manejo como oportunidad de gestión.
- La articulación intersectorial.

Preguntas orientadoras

Para orientar los contenidos y las discusiones del Simposio 5, se definieron las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Cuál es el escenario deseable para garantizar los objetivos de conservación y el reconocimiento de los derechos de las comunidades que viven las áreas protegidas?
- Desde el sector que usted representa, ¿qué fortalezas y oportunidades identifica para atenuar las presiones generadas por la ocupación de las áreas protegidas y cómo hacerlas viables?
- ¿Cómo articular las instituciones relacionadas con el uso y la ocupación de tierras de cara a los retos de desarrollo que se presentan en la actualidad?
- ¿Cuáles serían los acuerdos mínimos a los que se debes llegar para abordar la situación de uso y ocupación en las áreas protegidas, en aras de encontrar soluciones definitivas?
- ¿Qué acciones consideran necesarias para fortalecer los usos tradicionales que aportan a la conservación de las áreas protegidas?

Principales resultados

Se recogieron elementos que contribuirán a la caracterización y comprensión de los conflictos de uso y ocupación de las áreas protegidas; se evidenciaron y conocieron las visiones, intereses y posiciones de los diferentes participantes sobre la problemática de uso y

ocupación de las áreas protegidas, así como ideas que fortalecerán la construcción de una nueva forma de relacionarse entre los actores clave que se encuentran en las áreas protegidas.

Igualmente, fue posible visibilizar las preocupaciones de las comunidades que usan y ocupan las áreas protegidas. Además, se identificaron los posibles roles que pueden jugar los diferentes actores (academia, instituciones públicas y comunidades locales) relacionados con las áreas protegidas en la solución de los conflictos por uso y ocupación de éstas.

Fue posible identificar que los posibles acuerdos sobre uso y ocupación de las áreas protegidas se deben construir sobre los intereses comunes, basados en lineamientos claros que enfoquen la gestión de las áreas protegidas hacia los usos sostenibles como aporte al ordenamiento territorial, teniendo en cuenta su condición de determinante ambiental.



02

**Visiones institucionales y comunitarias frente
al uso y ocupación de las áreas protegidas**

Visiones institucionales frente al uso y ocupación de las áreas protegidas

Contenidos



Retos institucionales y escenarios deseables frente
al uso y ocupación de las áreas protegidas
pág. 45



Construcción colectiva de ordenamiento
territorial en áreas protegidas en el Quindío
pág. 49



Incidencia de un área protegida en el ordenamiento
territorial de Leguízamo: retos y oportunidades.
pág. 52



La experiencia desde Parques Nacionales
Naturales de Colombia
pág. 54



Retos institucionales y escenarios deseables frente al uso y ocupación de las áreas protegidas



Zoraida Guevara Charry

Unidad de planificación Rural Agropecuaria

La Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentó los principales retos y avances de la gestión territorial para usos agropecuarios y su relación con las áreas protegidas partiendo del marco institucional de la UPRA. Además, realizó una breve explicación sobre la problemática general del acceso inequitativo a la tierra y uso ineficiente del suelo, haciendo énfasis en aspectos como la concentración y fraccionamiento de la propiedad, la informalidad en la tenencia y transacciones, los conflictos de uso del suelo rural, la débil planificación rural del componente rural de los POT y una visión parcializada y de corto plazo del territorio.

Para ello, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha definido la estrategia para el sector agropecuario y el desarrollo rural, que contiene, entre otros componentes, temas relacionados con el

ordenamiento productivo¹ y social de la propiedad rural². Adicionalmente, presentó el modelo conceptual normativo de la gestión del territorio para usos agropecuarios (Figura 1) y una síntesis del Plan de Ordenamiento Social y Productivo a través del cual se busca establecer directrices y mecanismos para planificar, gestionar y controlar el uso del suelo

1 “Es un proceso participativo de planificación multisectorial, de carácter técnico, administrativo y político, que busca a través de sus instrumentos contribuir al uso sostenible del territorio con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la competitividad local, regional, nacional e internacional bajo principios de responsabilidad social y ambiental”. (Fuente: UPRA, 2013).

2 El ordenamiento Social de la propiedad rural se define como el conjunto de procesos encaminados a la distribución equitativa de la propiedad y el reconocimiento físico, jurídico, administrativo, económico y fiscal del alcance de los derechos de la propiedad con el objeto de lograr la utilización eficiente del territorio, el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones y la mejora de la calidad de vida de la población rural. (Fuente: UPRA, 2013).

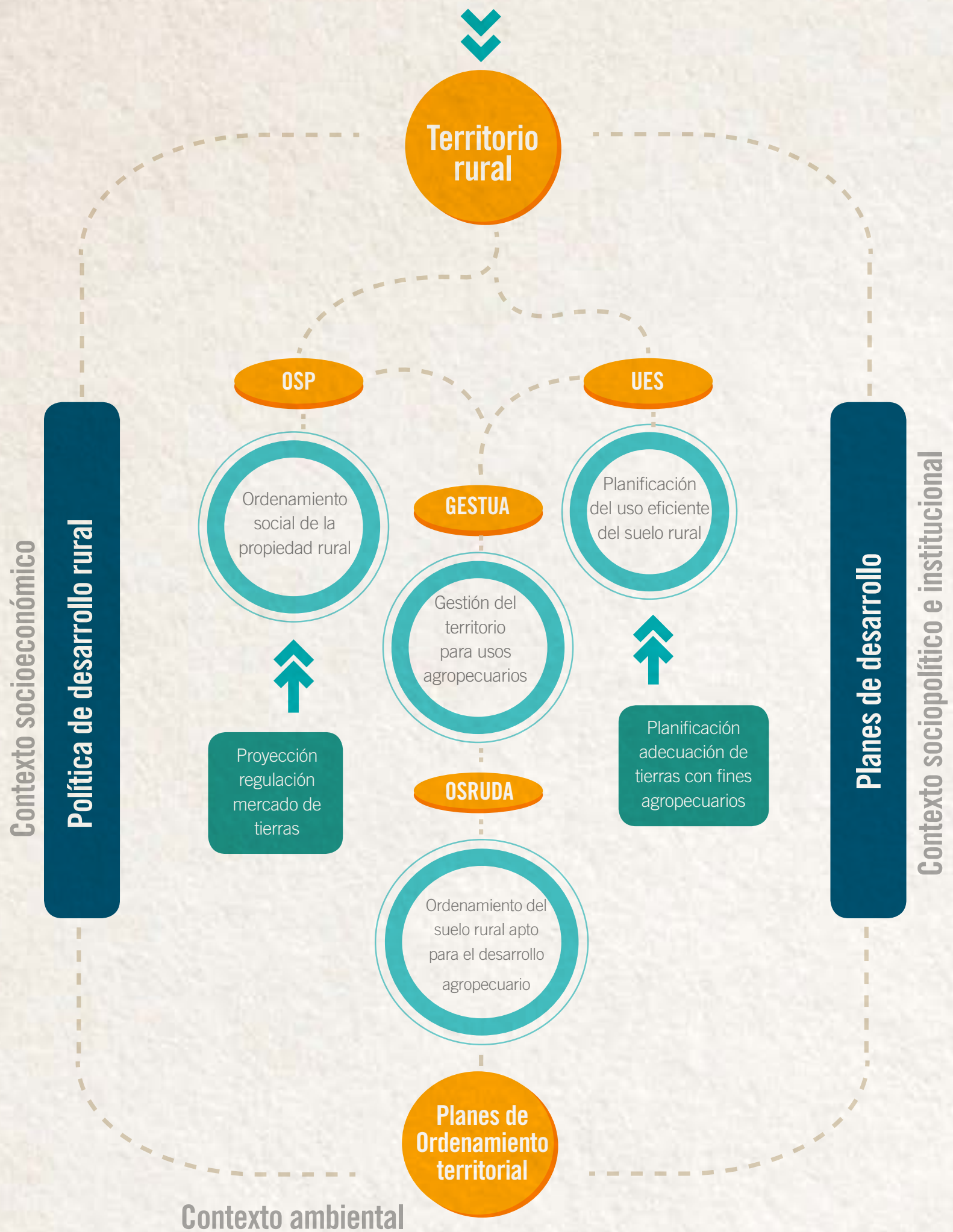


Figura 1. Modelo conceptual normativo de la gestión del territorio para usos agropecuarios (UPRA 2013).
 Autor: Zoraida Guevara (UPRA).

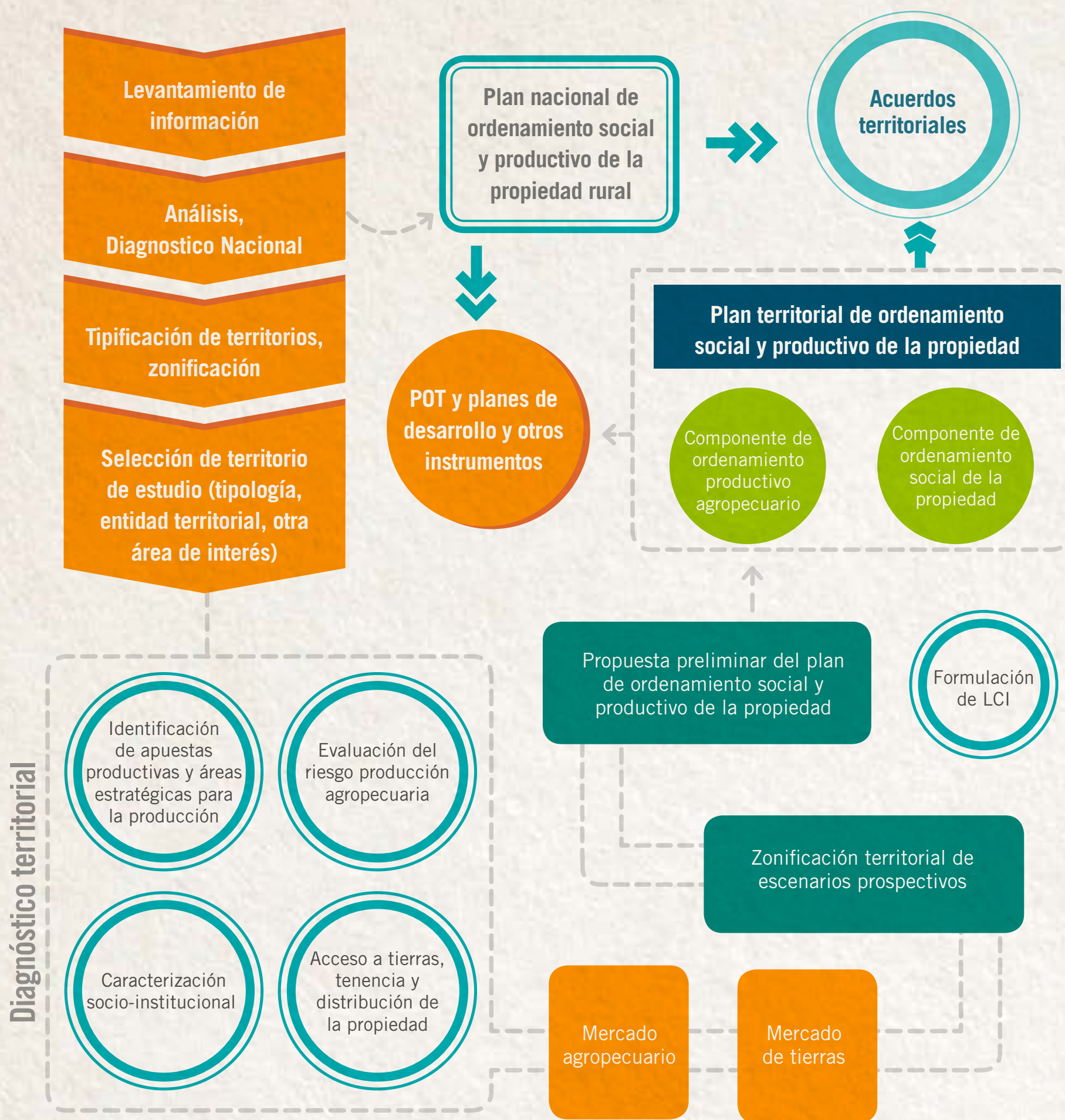


Figura 2. Síntesis del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Social y Productivo para la Prosperidad.
Autor: Zoraida Guevara (UPRA).

rural bajo criterios de distribución y democratización de la propiedad, el cumplimiento de su función social, ecológica y económica, así como incidir en las políticas de intervenciones que permitan el acceso equitativo a la tierra, el uso eficiente del suelo y la garantía de derechos sociales y derechos de propiedad. El proceso de formulación de dicho plan se presenta en la Figura 2.

Finalmente, expuso los avances más relevantes relacionados con el trabajo en áreas protegidas entre los que se destacan: una estrategia de coordinación sectorial e intersectorial, la definición de lineamientos generales y criterios técnicos de gestión territorial de usos agropecuarios aplicables a planes de desarrollo y de ordenamiento territorial municipales y departamentales. la obtención de Insumos para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la realización de estudios piloto en los PNN La Paya y Alto Fragua.

En cuanto a los retos, mostró la necesidad de armonizar dos derechos fundamentales: 1) la protección especial del Estado a la producción de alimentos y 2) el derecho a un ambiente sano. Para esto se requiere de una visión integral e intersectorial del territorio rural; el trabajo coordinado entre los diferentes sectores, la articulación normativa, la definición de instrumentos para la gestión en áreas del SINAP; una planificación dinámica y diferenciada; la definición sobre proyectos y sistemas productivos acordes con las limitantes de uso de las áreas protegidas y sus áreas adyacentes; la armonización entre los niveles nacional, regional y local y el reconocimiento de la importancia de las áreas protegidas, los bienes y servicios ambientales como aporte al desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la producción agropecuaria.



 Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Danilo Villafañe.

Construcción colectiva del ordenamiento territorial en áreas protegidas en el Quindío



Héctor Fabio Gómez

Profesional Corporación Autónoma Regional del Quindío

El Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Quindío (SIDAP Quindío) es un proceso de planificación y gestión que tiene por objetivo articular los actores sociales e institucionales, las áreas y las políticas que tienen relación e interés en el manejo y conservación de los espacios naturales, para fortalecer la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en el departamento del Quindío.

En el SIDAP Quindío se vienen desarrollando acciones desde hace más de 40 años que involucran operaciones como:

- 1970. Compra de predios por parte de la CRQ.
- 1982. Constitución Fundación Herencia Verde.
- 1992. Creación de Resnatur.
- 1997. Realización del convenio con ADECOQUIN y ECOFONDO “Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental de áreas silvestres en el departamento del Quindío”.
- 2000. Creación de la Organización Quindiana de Ambientalistas (Orquidea).
- 2005. Es oficializado el Sidap Quindío. (Acuerdo 002 de 2005 del Consejo Directivo de la CRQ)
- 2005-2007. Creación de 12 SIMAP. (incentivos a la conservación).
- 2007-2008. Declaratoria y creación de 3 APs.
- 2010-2011. Decreto 2372 de 2010, homologación de áreas protegidas.
- 2011-2014. Proyecto Planificación y Gestión de las Áreas Protegidas del Quindío.

Inicialmente en el Quindío se declararon tres áreas protegidas del orden regional:

- Parque Regional Natural Barbas Bremen (PRNBB), ubicado en los municipios de Circasia y Filandia y compartido con el departamento de Risaralda, jurisdicción de la CARDER.
- Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca Alta del Río Quindío, ubicado en el municipio de Salento.
- Parque Regional Natural Páramos y Bosques Altoandinos de Génova (PRNPBAA).

Cada una de estas áreas protegidas ha tenido diferentes motores para su creación:

- El PRNBB fue motivado por la realización del Proyecto Andes, ejecutado por el Instituto Humboldt, donde se evidenciaron datos importantes sobre la diversidad biológica allí existente y se implementaron 5 corredores biológicos que generaron un aumento en la conectividad y una valoración social hacia esta área protegida (AP).
- El DMI de Salento fue motivado desde la intención interinstitucional de personas, entidades y algunas ONG entorno al recurso hídrico, ya que allí aflora el Río Quindío, principal fuente hídrica del departamento que abastece más del 60% de la población.
- El PRNPBAA de Génova fue motivado desde la sociedad civil; la ONG Fundación Las Mellizas ha dinamizado este proceso con la formulación participativa de un plan de manejo para los ecosistemas de alta montaña, la declaratoria del AP, entre otros.

Con la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010, la CRQ, como parte activa del SIDAP Quindío, asumió el reto de continuar dinamizando estas AP, las cuales fueron homologadas bajo las siguientes categorías de manejo:

- Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen (DCSBB).
- Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Quindío de Salento.
- Distrito Regional de Manejo Integrado Páramos y Bosques Altoandinos de Génova.
- 1982. Constitución Fundación Herencia Verde.
- 1992. Creación de Resnatur.
- 1997. Realización del convenio con ADECOQUIN y ECOFONDO “Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental de áreas silvestres en el departamento del Quindío”.
- 2000. Creación de la Organización Quindiana de Ambientalistas (Orquidea), lidera y convoca la primera mesa para la construcción de el Sistema Departamental de Áreas Protegidas.

Con un elemento aglutinador, poseer tierras potenciales para la conservación, lo que llevo a convocar actores del estado y privados para hacer conservación.

- 2003-2005. Convenio ORQUIDEA-FPAA, “Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental de áreas protegidas en el departamento del Quindío-Creación del Sistema Departamental de áreas protegidas”.

La visión institucional desde la CRQ para la construcción colectiva del ordenamiento en las tres áreas protegidas se basa en la continuidad de los procesos desarrollados por los actores del SIDAP, analizando las lecciones aprendidas y fortaleciendo

aún más la participación de la gente. En el proceso de homologación, se evidenció que nuestras áreas protegidas tenían un uso y ocupación permanente, que debe ser valorado y potencializado hacia la organización comunitaria y conservación de la diversidad biológica. Es por esto que se han declarado tres (3) AP de uso múltiple.

No es fácil para un CAR como la CRQ hacer una incursión en el territorio, teniendo en cuenta la relación débil que existe entre el estado y las personas. Este reto se asumió con compromisos puntuales y con base en las exigencias de los actores inmersos en las áreas protegidas.

Las acciones partieron de fortalecer confianzas, por medio del desarrollo y construcción de espacios colectivos para cada áreas protegidas, con una realidad propia. Una vez fortalecida la confianza se generó un proceso de ajuste de los planes de manejo que involucró en todas sus fases la participación de las personas.

La planificación participativa en las áreas protegidas regionales del Quindío se ha convertido en un proceso dinámico que no solo contempla de una manera cuadriculada el componente de diagnóstico, ordenamiento y estratégico; ha tratado de ir más allá, para que sean los actores sociales los principales gestores. Algunos logros identificados son:

- Las AP ahora no son solo para preservación, también existen allí procesos productivos y de desarrollo local que den ser articulados para la conservación de la diversidad biológica.
- Mejores prácticas en los sistemas productivos
- AP ahora son oportunidades de desarrollo humano
- Apropiación frente a las amenazas y presiones de las áreas protegidas
- Articulación social con los instrumentos de planificación



Incidencia de un área protegida en el ordenamiento territorial de Leguízamo (municipio trifronterizo)



Miguel Ángel Rubio, Alcalde de Leguízamo, Putumayo

El municipio de Leguízamo es un ente territorial trifronterizo que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo el desarrollo humano participativo e incluyente bajo los principios de respeto a los derechos humanos y a la conservación del medio ambiente, aprovechando su ubicación geoestratégica.

Para ello, busca ser un modelo de desarrollo amazónico sostenible, participativo e incluyente, capaz de responder a las necesidades de la comunidad de manera confiable, eficaz, eficiente, efectiva y justa, reflejada en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Con una extensión de 10.788 km², el municipio de Leguízamo, posee una población de 30.412 habitantes, 33% de ella se encuentra asentada en la cabecera municipal, 29% es

población rural, 13% desplazada y 23% comunidades indígenas. Entre las principales actividades económicas del municipio se destacan la agricultura de subsistencia (plátano, yuca, arroz, maíz, caña, chontaduro y piña), la ganadería, porcicultura, avicultura y piscicultura, así como la minería y el suministro de bienes y servicios (principalmente a la armada) y servicios institucionales.

Para el municipio más grande del Putumayo (44% del departamento), los conflictos relacionados con el uso y la propiedad de la tierra no son ajenos, teniendo en cuenta que casi todo el territorio del municipio se encuentra traslapado con el Parque Nacional (PNN) Natural La Paya. Uno de los problemas más evidentes en Leguízamo tiene que ver con que únicamente se puede titular y se podría cultivar de manera

legal el 19% del territorio, ya que el 41% del territorio leguizameño es el PNN La Paya; el 28% son resguardos indígenas y el 12% corresponde a Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959, quedando únicamente el 19% para ordenar los usos y la ocupación del territorio municipal.

Lo anterior ha generado que las comunidades indígenas y demás habitantes del municipio vean al PNN como un problema; para ello, el Plan de Desarrollo Municipal, en trabajo conjunto con las instituciones y demás actores involucrados, busca posicionar en el imaginario de las comunidades una mirada distinta sobre este. ¿Cómo lograrlo?

Desde la Alcaldía Municipal se ha querido enfocar en las oportunidades existentes no solo en el PNN La Paya, sino en las demás figuras de conservación existentes, como los resguardos indígenas y la reserva forestal de Ley 2ª. Entre ellas, se destacan:

- Ubicación geoestratégica:
 - » Amazonia megadiversa, pulmón del mundo: 300 especies de mamíferos, 1.500 especies de aves y 3.000 especies de peces.
 - » Cultural: En Leguízamo comparten un mismo territorio los pueblos indígenas múrui, sionas, coreguajes, kichwas y la población mestiza de toda Colombia.
 - » Oferta de bienes y servicios: Biodiversidad, minerales, petróleo, regulación hídrica (ríos Caquetá y Putumayo), regulación climática, vías de comunicación (hidrovías).
- La producción sostenible amazónica, basada en conocimientos tradicionales y un proceso de adaptación milenaria al medio.
- Un área protegida de carácter nacional, el PNN La Paya, que además desarrolla un proceso de coordinación con las áreas protegidas de Perú y Ecuador en el marco

del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del corredor de áreas protegidas La Paya (Colombia), Cuyabeno (Ecuador) y Gueppí (Perú). Desde el plan de desarrollo municipal actual, se ha propuesto la construcción de un plan de desarrollo para los tres municipios relacionados con estas áreas protegidas. Dicha propuesta ha sido acogida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo modelo de gestión para otras instancias

- Los procesos binacionales: colombo-ecuatoriano, colombo-peruano.
- Caso piloto de asociatividad entre los municipios de frontera Leguízamo (Colombia), Puerto el Carmen (Ecuador) y Soplín Vargas (Perú).

Entre los retos más importantes del municipio están el lograr el modelo de ordenación y armonización institucional que permita el desarrollo sostenible y la conservación, donde el ser humano viva bien, como principio fundamental. Para ello es necesario el fortalecimiento institucional del municipio, el ordenamiento ambiental, la articulación entre instrumentos de ordenación y planificación de los diferentes sectores y la consolidación de instancias y mecanismos interinstitucionales e intersectoriales, en el marco del esquema asociativo de fronteras.

Este modelo de ordenación y armonización institucional se logrará con la participación de la población, el fortalecimiento organizativo y de capacidades (de organizaciones indígenas, como ACIPS, APKAC y ACILAPP, y organizaciones campesinas como ATCAL, ASTRACAM, ASCAP y Asojuntas) y la protección del patrimonio material e inmaterial del municipio. Se trata de empoderar a las comunidades que conviven en el territorio para que sean ellos mismos los que gestionen esas oportunidades en las áreas protegidas.

La experiencia desde Parques Nacionales Naturales de Colombia: política de uso y ocupación y tenencia de tierra para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales



Carolina Jarro, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
Parques Nacionales Naturales de Colombia

La protección especial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) responde al mandato constitucional de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, así como el cumplimiento a las metas que se han propuesto en los convenios internacionales ratificados por la ley colombiana que obligan a revisar la gestión institucional y sectorial en relación al mantenimiento de la función que cumplen.

De esta manera, la gestión del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC) que involucra 14.254.144,3 ha y que corresponden al 83,7% del total nacional de las áreas protegidas del SINAP, debe armonizarse con las actuales políticas ambientales emanadas por el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible. En primer lugar, con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (MADS, 2012), la cual tiene como objetivo “promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas a escalas nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”. En segundo lugar, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (MAVDT, 2010), la cual busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación

de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente.

La actual ocupación, uso y tenencia de la tierra en estas áreas protegidas obedece a una causa estructural histórica relacionada al desarreglo de la política agraria del país, el conflicto armado interno, la extracción ilegal de recursos naturales, las acciones no coordinadas de fomento del Estado que han promovido y consolidado la ocupación de las áreas y el desarrollo de actividades ilícitas asociadas al narcotráfico que han contribuido con la presencia de cultivos de uso ilícito. Estos factores han influido en que actualmente 37 de las 58 áreas protegidas que integran este sistema estén siendo deterioradas por el mal uso y ocupación del territorio. La ocupación en algunas de estas áreas ha traído consigo el desarrollo de infraestructuras como vías, viviendas, estaciones eléctricas y de telecomunicaciones, bases militares, proyectos agrarios productivos financiados para el desarrollo del país entre otras, lo que ha conllevado a su fragmentación y deterioro.

En este sentido, la ocupación, uso y tenencia de la tierra (UOT) al interior de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se debe considerar en la agenda del Estado colombiano, especialmente en la agraria, como una situación prioritaria dada la complejidad de la problemática, la multiplicidad de sus causas y la importancia de las áreas protegidas como ecosistemas estratégicos que conforman la estructura ecológica que provee servicios ambiental para el sustento del desarrollo económico, social y cultural del país. De tal suerte, es imprescindible la concurrencia de toda la institucionalidad con funciones y competencias concretas, la cual debe contar con los aprestamientos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros necesarios para avanzar en la solución de esta problemática.

De igual manera, las consideraciones políticas coyunturales en el marco de la actual agenda de conversaciones que camina hacia un posible acuerdo de paz y sus implicaciones al posconflicto ameritan una profunda reflexión al interior de la institución para aportar soluciones frente a la resolución de conflictos por el UOT.

Es necesario, entonces, avanzar en la formulación de una política de uso, ocupación y tenencia de tierras para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que contribuya a la armonización del ordenamiento ambiental del territorio. Esta debe tener un enfoque diferencial de sus áreas ecológicas protegidas e involucrar la participación y articulación de los diferentes actores e instrumentos de planificación del orden nacional, regional y local, para buscar la preservación de la biodiversidad, la permanencia de los servicios ecosistémicos y la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

Es impostergable avanzar en la construcción de un Plan de Acción que aborde compromisos concretos por parte de todos los actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para reducir la conflictividad por el uso del territorio, mejorar las condiciones de vida de la población ocupante, implementar los determinantes ambientales para armonizar el ordenamiento territorial, garantizar la restauración ecológica de las áreas protegidas y aportar a la construcción de escenarios de paz.

Diagnóstico

Es importante resaltar la coincidencia que existe entre las áreas golpeadas por el conflicto armado que padece Colombia y las áreas protegidas del SPNN. Si se mira el mapa de los 100 municipios críticos que ha identificado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el informe a la Unidad de Restitución de Tierras (INCODER), trabajo realizado

Región	Departamento	Número de Municipios	Área protegida
Región Caribe	Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar y Guajira	17 municipios	PNN Tayrona PNN Sierra Nevada de Santa Marta PNN Ciénaga Grande de Santa Marta Vía Parque Isla de Salamanca(VIPIS) Santuario de Fauna y Flora Corchal Mono Hernández
Región Noroccidente	Córdoba, Antioquia, Chocó, Risaralda y Caldas	24 municipios	PNN Paramillo PNN Las Orquídeas PNN Los Katíos
Región Pacífico	Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Quindío	21 municipios	PNN Munchique PNN Farallones PNN Sanquianga PNN Nevado del Huila
Región Sur	Putumayo, Caquetá y Meta	16 municipios	PNN La Macarena PNN Picachos PNN Tinigua
Región Nororiente	Casanare, Boyacá, Santander, Arauca y Norte de Santander.	13 municipios	PNN Catatumbo Barí PNN Tama ANU Estoraques PNN Cocuy PNN Pisba

 **Tabla 1.** Áreas protegidas por municipio.

En conclusión, existe una relación directa positiva entre áreas de conflicto y las áreas protegidas que conduce a realizar un análisis sobre las dinámicas particulares que se asocian a los conflictos socioambientales generados por aspectos de uso, tenencia y ocupación de áreas protegidas.

A continuación, se desarrollan los principales aspectos relacionados con el conflicto agrario y

su incidencia en las áreas protegidas, los cuales constituyen elementos básicos para un necesario diagnóstico a una escala predial, que precise desde las tipologías identificadas, las rutas o alternativas de solución incorporando elementos de viabilidad normativa, jurídica, técnica, y financiera para dar solución integral y pertinente a esta problemática.



para todo el país en un horizonte de tiempo de los últimos 20 años, permite agrupar estos 100 entes territoriales en 6 grandes regiones. Analizando cada una de las 6 regiones y haciendo cruces de jurisdicciones político-administrativas de estos 100 municipios y las áreas protegidas del SPNN que están en cada una de esas zonas, encontramos en resumen el siguiente panorama (Tabla 1).

Contexto nacional del origen de la problemática de ocupación de tierras y conflictividad por uso en las áreas protegidas

En Colombia la ocupación de las áreas protegidas, antes y después de su declaratoria, ha estado asociada a problemas agrarios de larga duración que se relacionan con la distribución de la tierra

y la inequidad rural, aspectos que en buena medida explican las dinámicas de colonización¹ y la ampliación de la frontera agraria, por lo que a continuación se relacionan algunos de los elementos que más han incidido en la consolidación de esta problemática:

La estructura agraria colombiana

Colombia posee una estructura agraria bimodal (latifundio-minifundio) caracterizada por su gran conflictividad, incertidumbre sobre los derechos de propiedad, concepción de la tierra como bien especulativo y no productivo, alta concentración de la tierra, uso ineficiente del suelo, informalidad en las relaciones de propiedad, exclusión social,

¹ De acuerdo con Darío Fajardo, la colonización se ha distinguido como el establecimiento relativamente reciente de una población en un área con un nuevo sistema de asentamiento.

Ocupación de los parques nacionales

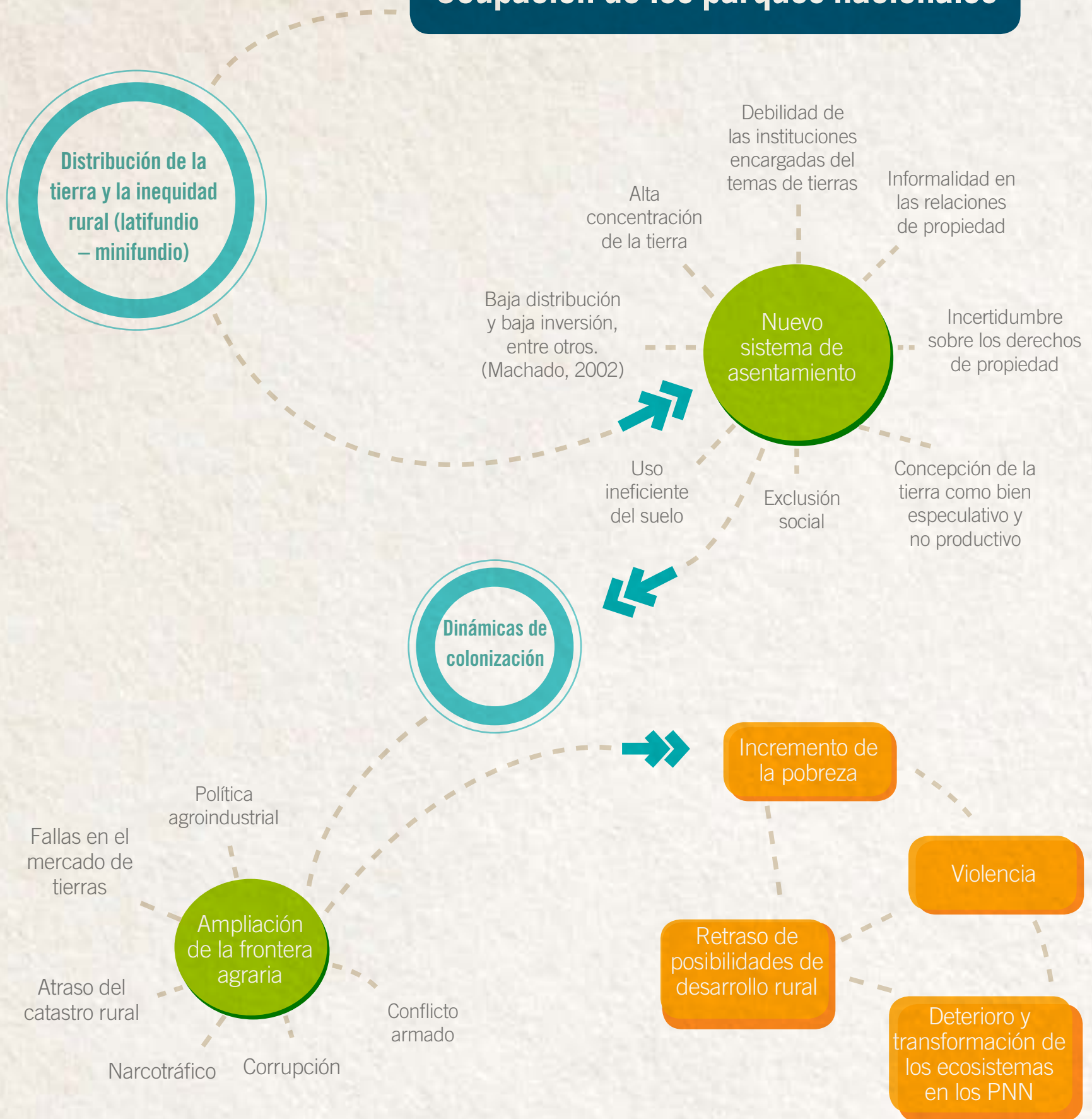


Gráfico 1. Resumen: Conflictos socioambientales por uso, tenencia y ocupación de tierras en SPNN.

debilidad de las instituciones encargadas del tema de tierras, baja tributación y baja inversión, entre otros (Machado, 2002). Panorama que unido a las fallas en el mercado de tierras, el atraso del catastro rural, el narcotráfico, la corrupción y el conflicto armado, contribuyen a incrementar la pobreza, el retraso de posibilidades de desarrollo rural, la violencia y la ocupación de áreas protegidas como los parques nacionales naturales entre otras.

Ante los problemas de estructura agraria, el país ha gestionado, sin éxito, reformas y contrarreformas agrarias, desde hace cincuenta años; sin embargo, las cifras en unidades agrícolas familiares (UAF) para 2009, permiten evidenciar una alta concentración de la tierra representada en predios de gran propiedad², la cual pasó de ocupar del 39,2% al 52,2% del área total del país. Por su parte, los microfundios y la mediana propiedad disminuyeron³; esta situación se ha traducido en el acaparamiento y en el control de grandes superficies agropecuarias que excluyen el acceso a la tierra a sectores importantes de la población en áreas legalmente permitidas.

De otro lado, en Colombia las características de uso del suelo en relación con su potencialidad reflejan una situación que evidencia un claro desorden respecto a la dinámica de la producción. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural (MADR), Colombia tiene aproximadamente 22 millones de hectáreas con potencial para dedicación a la agricultura, 15 millones de hectáreas aptas para explotaciones ganaderas y un área potencial de 14 millones de hectáreas para plantaciones forestales. Sin embargo, para 2012 la ganadería colombiana dedicó 34 millones de hectáreas a este renglón productivo sin distinguir su desarrollo en áreas de estricta conservación, mientras que las actividades agrícolas comprometieron cerca de 5,3 millones de hectáreas y sólo se ocuparon 350.000 ha en plantaciones forestales. Es decir que la superficie dedicada a estos usos productivos presentó una expansión que riñe con las áreas potenciales para su explotación, evidenciando claramente una alta conflictividad por usos del suelo.

En el contexto nacional, el enfoque de la política agraria y las distintas propuestas de gobierno muestran evidentes tendencias dirigidas a promover producción extensiva y fomentar la expansión agroindustrial como instrumento para el fortalecimiento de la competitividad regional y como estrategia central para solucionar los problemas del desarrollo. Bajo este panorama, la existencia de una frontera abierta sirve de válvula de escape a los conflictos generados por la expulsión de la población y de reservorio para la explotación de recursos naturales.

La informalidad en la tenencia de la tierra

El desconocimiento de los procedimientos, los altos costos y demoras en los trámites, las expectativas de adjudicación por programas especiales del Estado, la cultura de compraventa de predios fundamentada en la tradición y la creencia en la suficiencia de derechos adquiridos sobre la tierra a través del método de posesión, la descoordinación entre instituciones competentes en el tema de tierras, la desactualización del catastro rural, las dificultades para acceder a

2 De acuerdo con la extensión en UAF, la tipología de la tenencia para agrupar los predios corresponde a: microfundio, menor a 0,5 UAF;; pequeña propiedad, más de 0,5 a 2 UAF; mediana propiedad, más de 2 a 10 UAF; gran propiedad, más de 10 UAF. Esta tipología vista desde el reporte de ingresos significa que los titulares de derechos con condición de microfundio tienen ingresos excedentes mensuales inferiores a un salario mínimo por familia, el ingreso neto promedio mensual de la pequeña propiedades de 2,5 SMLV, en la mediana propiedad es de 12 SMLV mensuales y en la gran propiedad es de más de 20 SMLV al mes.

3 Los datos corresponden a los reportados por presidencia de la República en el marco del proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada en el documento Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Bogotá (2011).

oficinas de notariado y registro y el precario acompañamiento de programas de desarrollo rural se han identificado como las principales causas de la informalidad en la tenencia de la tierra.

Esto configura un escenario de gran incertidumbre y debilidad en los derechos de propiedad rural, circunstancias que se constituyen en un terreno fértil para el testaferrato, la usurpación de derechos o el despojo de estos. La informalidad en la tenencia de la tierra se ha concretado en títulos no registrados, falsas tradiciones, posesión, ocupación de terrenos baldíos de la Nación o ausencia de título de propiedad predial. Esta situación ha favorecido el proceso de asentamientos al interior de las áreas protegidas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como los procesos de compra y venta de tierras al interior de las mismas que se traducen en la transformación y explotación de los recursos naturales presentes en ellas.

Desactualización del catastro rural

Un poco más del 40% de los predios en Colombia no poseen títulos registrados, lo anterior debido a los problemas de formalidad antes mencionados y al déficit en el número de peritos y técnicos en temas catastrales, hecho que influye en el atraso del catastro rural y en la demora en la ejecución de procesos de inspección ocular. Los datos desactualizados de catastro rural al interior de las áreas protegidas no permiten tener claros los derechos de propiedad sobre la tierra, estimar el valor de los predios o mejoras, monitorear de manera sustentada la evolución de los procesos de ocupación al interior de las áreas, evaluar la efectividad de saneamiento predial. Esto facilitaría los procesos de planeación ambiental, ordenamiento territorial y regulación de usos y actividades en el contexto del plan de manejo así como un mejoramiento en el ejercicio de autoridad ambiental en el desarrollo de programas de control y vigilancia.



De igual manera, se requiere la conformación catastral en muchas de las áreas del Sistema de Parques, lo que implica también una actualización cartográfica, que optimice la escala de delimitación de los Parques Nacionales, ya que, en su mayoría, estos fueron declarados con base en trabajos realizados desde su declaración a escalas 1:100.000, así como para el abordaje y precisión de una política, en campo se requerirá alcanzar una mayor resolución de trabajo como la escala 1:10.000.

Conflicto armado y desplazamiento

El conflicto armado colombiano es sumatoria de varios factores asociados a temas de orden económico, social y político que se manifiestan de manera diferencial a través de prácticas de violencia en el territorio. La informalidad, desigualdad en la distribución tenencia y acceso a la tierra, el despojo, la dificultad en el acceso a factores de producción, han determinado diásporas o migraciones internas, desplazamientos, crecimiento en los índices de pobreza y en consecuencia el abandono o procesos de colonización espontánea y dirigida. Es un fenómeno complejo y heterogéneo en el que el desarrollo de economías ilegales tales como el contrabando en las

regiones de frontera, la explotación irregular o ilícita de yacimientos mineros, de biodiversidad o recursos naturales en zonas de colonización y la siembra, procesamiento o negocio de cultivos de uso ilícito, se constituyen en un caldo de cultivo que alimenta el conflicto colombiano. Las áreas protegidas son un nicho propicio para el asentamiento de la población vulnerable o el desarrollo de estas actividades.

Desarrollo sectorial desarticulado

Las nuevas economías que retoman la explotación de recursos naturales en territorios de gran oferta ambiental en minerales, agua, suelos, así como su adecuación en infraestructuras o equipamientos para oferta de servicios energéticos, de transporte o ambientales implican una visión intersectorial. Sin embargo, la planificación de su uso y aprovechamiento presenta serias dificultades en su concurrencia. En algunas ocasiones, estos megaproyectos coinciden con territorios étnicos, poblados campesinos o áreas ecológicamente estratégicas o de alto valor ambiental, situación que genera o incrementa las presiones sobre la tenencia y el uso de la tierra, provocando la expulsión de comunidades o “eliminación” de los obstáculos jurídicos de intervención (Bello, 2003). Situación que, para el caso de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en muchas ocasiones ha puesto en juego su integridad e incluso su misma naturaleza de categorías destinadas a perpetuidad para la conservación de sus valores naturales.

En el concepto de megaproyecto se incluyen las empresas que extraen y explotan recursos naturales (minería, hidrocarburos, maderas), los sistemas de producción extensiva e intensiva (industriales y agroindustriales), infraestructura para la expansión y sostenibilidad urbano-comercial (puertos, vías, bases militares, canales, etc.) y el turismo de aventura o ecoturismo en áreas Protegidas (Serje, 2010).

Todas estas obras traen consigo facilidades para la ocupación que adicionalmente demandan servicios básicos que se acompañan con el desarrollo de infraestructuras como centros de salud, colegios, internados, entre otros. Adicionalmente, proyectos como gasoductos, interconexión eléctrica, grandes plantaciones de cultivos, vías, entre otros, son planificadas sin tener en cuenta la limitación para el desarrollo de estas actividades al interior de los Parques Nacionales Naturales, situación que se convierte en una amenaza para la conservación de estas áreas protegidas y para el sector que contrata la obra en un obstáculo para su desarrollo.

Problemática de ocupación de tierras y conflictividad por uso en las áreas protegidas del SPNN

Desde 1960 se inicia la declaratoria de Parques Nacionales partiendo de la presunción de que las áreas a declarar eran una reserva de baldíos, en la medida que se encontraban desocupadas y sobre ellas no existían actividades agrícolas, pecuarias o industriales y se ajustaban a las previsiones legales para ser concebidas como tal, esto es a la legislación agraria y fiscal⁴, cuya dimensión

4 La Ley 135 de 1961 dispuso en los artículos 3 y 39 que el INCORA tenía la facultad para administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, adjudicarlas o constituir reservas destinadas a la conservación de los recursos naturales. Artículo 96 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912): Siempre que se destine un baldío para un servicio o un uso público, por disposición de una ley o decreto ejecutivo, se debe proceder al levantamiento de un plano y al pronunciamiento de una resolución ministerial, en la que se expresa el nombre del terreno, si lo tiene, su situación, sus colindantes y sus linderos, resolución que se publica en el diario oficial y se registra en la oficina respectiva de la ubicación del baldío para que deje de tener ese carácter. Artículo 97 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912): Cuando una ley destine un baldío para un objeto determinado, se debe dictar, por el ministerio respectivo, previo levantamiento del plano, una resolución semejante, la que debe publicarse y registrarse en los términos expresados en el artículo anterior.

y aplicación ha de ser comprendida dentro del contexto de las presunciones establecidas en los regímenes agrarios (Ley 200 de 1936 o Ley 160 de 1994, según las áreas se hayan creado durante la vigencia de una u otra normatividad).

El contexto de conflicto, sumado a la debilidad institucional en la planificación e implementación del ordenamiento territorial, ha generado un complejo y delicado escenario para la gestión y manejo de las áreas protegidas, constituyéndose para los funcionarios no solamente en grandes retos para tratar de hacer respetar la normatividad de las áreas y proteger la biodiversidad en medio de la guerra con los riesgos que esto implica. La situación conlleva en muchos casos a la imposibilidad de ingreso y control a numerosos sectores, que han sido ocupados por cultivos de uso ilícito, cultivos de pancoger, ganadería extensiva, vías, y centros poblados que han recibido gente como resultado del conflicto.

De acuerdo con los análisis de cobertura, en las áreas de Parques se ha evidenciado un área apreciable de unidades agropecuarias de 304.168,2 ha que representan cerca del 3% de la cobertura de las áreas protegidas, de donde se puede discriminar en actividades agrícolas 212.715,41 ha, que corresponden al 2% aproximado, mientras las actividades pecuarias abarcan un área de 90.910 ha equivalentes a cerca del 1%. Del mismo modo, se aprecia una baja incidencia de territorios artificializados con menos del 0,5% con 417 ha⁵. Existen diversos tipos de presión sobre las áreas protegidas asociados a los factores antes descritos, sobre la situación de uso tenencia y ocupación (Mapa 1).

De acuerdo con información obtenida en los planes de manejo de las áreas protegidas, así como de los análisis temporales de transformación de coberturas vegetales (trabajo en campo que han realizado algunas áreas) y estimaciones realizadas en los recorridos de control y vigilancia, se tiene un estimado de 467.727 ha ocupadas al interior de los Parques Nacionales. Dentro de estas, los parques que más ocupación tienen son el PNN Paramillo, el PNN Sierra de la Macarena, el PNN Cocuy y el PNN La Paya, entre otros.

La tasa de deforestación calculada en 25.150 ha anuales hace pensar que el problema viene en aumento y si no se toman medidas a nivel de las entidades competentes del Estado, el deterioro y el incremento en los costos para asumir su restauración será mayor. Lo mismo sucederá con la pérdida de biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos, como la producción de agua, la retención de sedimentos, la regulación de caudales y la capacidad de fijación y captura de carbono será cada vez menor, lo que se traduce para el país en mayor impacto en la población en efectos causados por fenómenos naturales, así como en inversión en redes y tratamiento de sistemas de acueducto, entre otros.

Antecedentes de la política

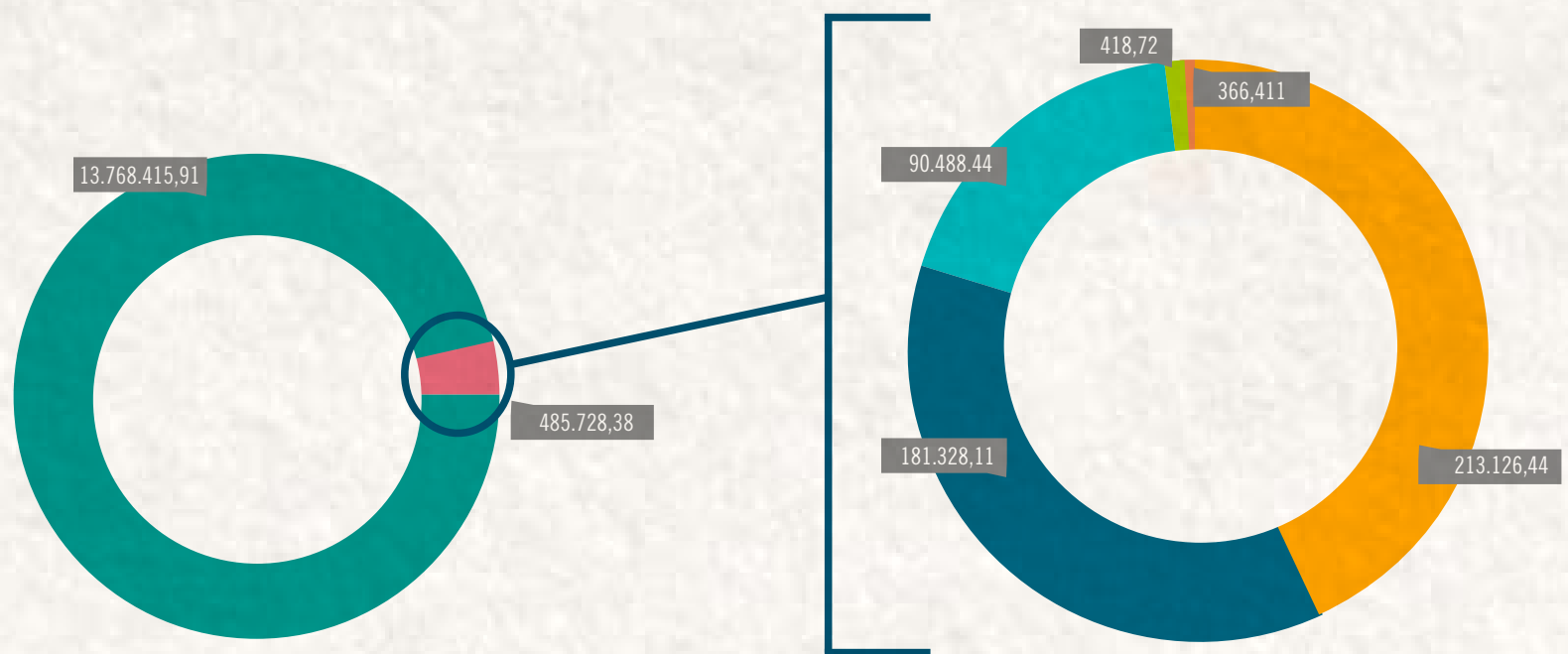
Acuerdo para la Prosperidad Número 79 denominado “por la conservación y aprovechamiento sostenible de nuestro patrimonio natural y cultural”.

- Mesa de Uso, Ocupación y Tenencia.
- La UAESPNN, INCODER, IGAC, DNP y la Superintendencia de Notariado y Registro conformarán una mesa de trabajo para

5 Fuente: PNN,SGM & Grupo SIR, noviembre 2013



Mapa 1. Condición estado presión de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (2010-2012). Fuente: Parques Nacionales Naturales & SGM, 2013.



	ha	%
■ Total áreas intervenidas	485.728,38	3,41
■ Área conservada PNN	13.768.415,91	96,59
Área total PNN	14.254.144,29	100

	ha	%
■ Áreas artificiadadas	418,72	0,09
■ Cultivos limpios	366,411	0,08
■ Pastos	90.488,44	18,63
■ Mosaicos cultivos/pastos	213.126,44	43,88
■ Vegetación secundaria	181.328,11	37,33

● **Gráfica 2.** Área de los parques nacionales naturales con alguna intervención.



● **Gráfico 3.** Resumen Problemática de ocupación, uso y tenencia de tierras al interior del SPNN.

abordar la temática de ocupación al interior de las áreas protegidas, con la participación de representantes campesinos para la generación de una política de tierras.

- El INCODER estructurará un programa especial interinstitucional para el saneamiento de los Parques Nacionales Naturales, en conjunto con UAEPNN, IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro.
- El MADS se compromete a delimitar y reglamentar las zonas amortiguadoras de los parques nacionales naturales, así como a realizar una revisión y actualización de las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 existentes.

Objetivos

Objetivo central

Resolver conflictos derivados de los usos asociados a la ocupación y tenencia indebida de la tierra al interior de los Parques Nacionales Naturales mediante la implementación de acciones interinstitucionales que brinden alternativas de desarrollo integral a los ocupantes en zonas aptas y legalmente permitidas, garantizando la recuperación de los ecosistemas y sus servicios ambientales derivados.

Objetivos específicos

- Recuperar al dominio de la Nación sobre las tierras ocupadas en los parques nacionales naturales.
- Generar programas interinstitucionales que brinden alternativas de desarrollo integral a los ocupantes, en zonas aptas y legalmente permitidas.

- Implementar acciones de restauración ecológica en los ecosistemas alterados o degradados al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a causa del uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas, aportando en la conservación y recuperación de los servicios ambientales que de allí se generan.
- Prevenir la ocupación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Enfoque de la política

Se establecen como enfoques de la política los siguientes:

Diferencial: Referente al carácter diferencial que caracteriza cada contexto local y cada tipo de ocupante de los PNN; adicionalmente, aspectos como el momento de llegada a estos, la titularidad o no de los predios que ocupan y el uso que le den al mismo.

Territorial: Hace referencia al reconocimiento de las diferentes variables que influyen en el territorio en el contexto nacional, algunos son el desplazamiento forzado, la distribución de la tierra y los escenarios de conflicto armado, entre otros.

Participativo: Esta política busca ofrecer soluciones a la situación de uso, ocupación y tenencia mediante la construcción participativa no solo de las instituciones, sino de los actores locales como comunidades y organizaciones sociales.

Transicional: Proceso que busca frenar, atenuar o disminuir las actividades que afectan la conservación de un parque nacional, iniciando con la suscripción de acuerdos que vincula a la población campesina en el desarrollo de actividades permitidas durante un tiempo determinado en el cual se implementan interinstitucionalmente los compromisos.



● **Gráfico 4.** Resumen de objetivos. Fuente: Elaboración propia.

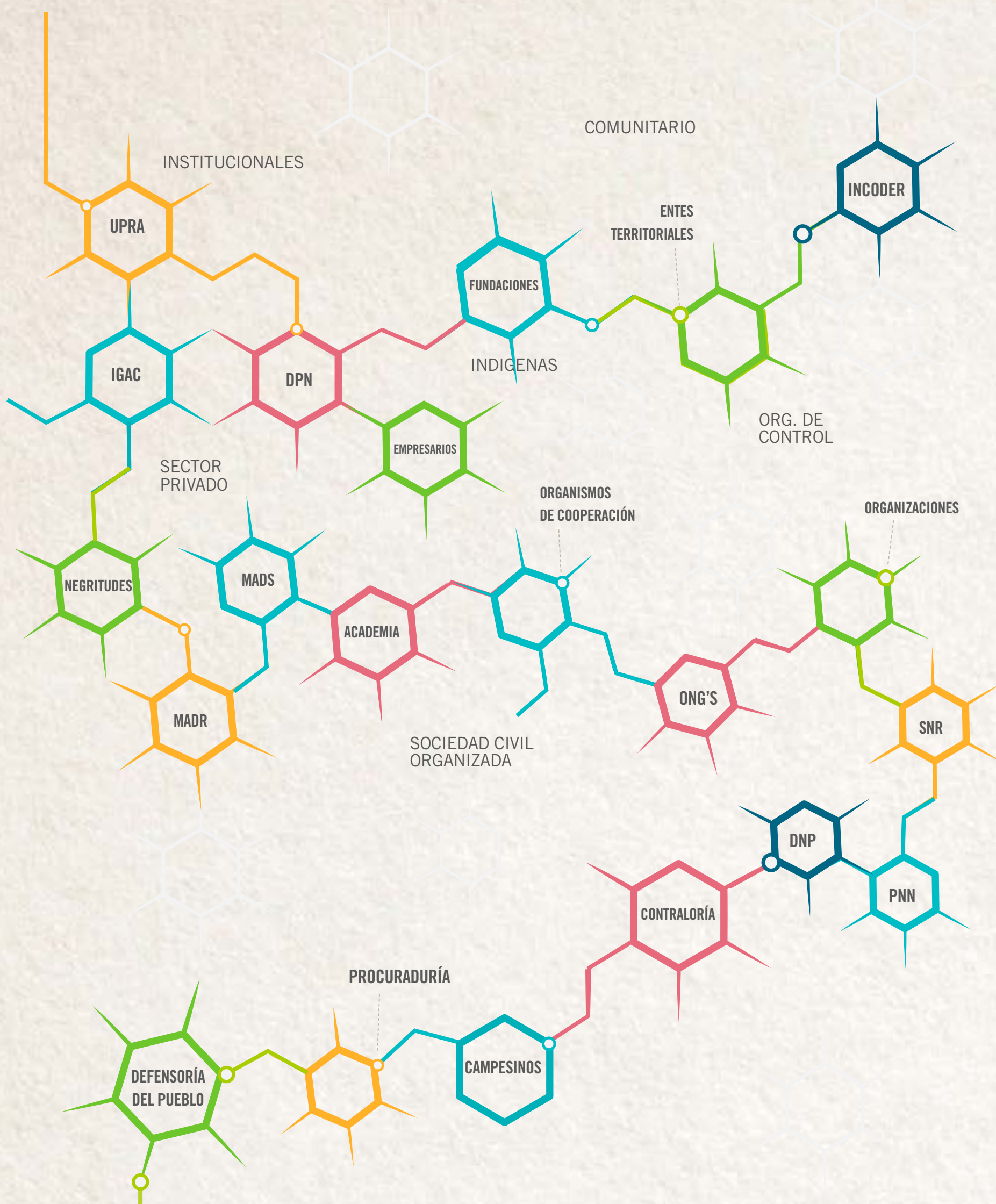


Gráfico 5. Actores de la política.

03

Visiones institucionales y comunitarias frente
al uso y ocupación de las áreas protegidas

Visiones institucionales frente al uso y ocupación de las áreas protegidas

Contenidos



Reconocimiento del campesinado, reordenamiento
territorial ambiental, y campesinos como sujetos...
pág. 69



El ecoturismo comunitario en las áreas protegidas:
un proceso social del cual aprender
pág. 83



Sostenibilidad integral del manglar con comunidades
locales en un área protegida (DMI Bahía Cispata)
pág. 99



San Cipriano: experiencia exitosa de manejo de
un área protegida, con participación comunitaria
pág. 75



Manejo conjunto del mosaico de conservación Bahía
Málaga: un desafío institucional y comunitario
pág. 90



Reconocimiento del campesinado, reordenamiento territorial ambiental, y campesinos como sujetos de conservación, condicionantes para la paz de Colombia



Ángel Torres & Juliana Cuencas

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) presenta un saludo especial a los participantes de este evento tan pertinente en la actualidad nacional agradeciendo su invitación a presentar nuestros puntos de vista y propuestas en este importante espacio, la cual comprendemos como un reconocimiento del campesinado como sujeto importante para la conservación de los recursos y en general del medio ambiente.

Saludamos que la consigna que ilumina este congreso sea la de “Áreas protegidas: territorios para la vida y la paz”, pues así comprendemos los

territorios rurales del país y las áreas protegidas que en muchos casos hemos poblado huyendo de la exclusión económica y política, y la violencia. Sin embargo, resulta necesario precisar los términos en que comprendemos la paz.

El histórico contexto colombiano que vivimos hoy día, marcado por el anhelo de la paz que parece acercarse, representa para el país el enorme desafío de repensar y reconstruir nuestro proyecto de sociedad, basándose, a nuestro juicio, en los principios fundamentales de la democracia y la justicia social. Solo sobre estas bases estaremos construyendo y sosteniendo la paz.



Así, se requieren cambios estructurales, entre otros, en el sistema político y en el modelo agrario. En el sistema político para llevarlo hacia uno que en realidad garantice el reconocimiento político y con ello la garantía de los derechos humanos y la efectiva participación de todos los sujetos en la toma de decisiones sobre los destinos del país; en el modelo agrario para efectuar una reforma agraria territorial integral que materialice las aspiraciones de justicia social de los pobladores rurales.

De estos cambios que proponemos, las organizaciones campesinas que promovemos las zonas de reserva campesina como instrumentos de política pública que pueden contribuir a la solución del persistente problema agrario del país, en este escenario resaltamos de un lado, los relacionados con el reconocimiento político del campesinado, y de otro, el relacionado con la implementación de un reordenamiento territorial, por tratarse de los más directamente relacionados con los importantes asuntos que este congreso se propone abordar.

Es decir, consideramos que la materialización de esa consigna que ilumina este evento: “áreas protegidas: territorios para la vida y la paz” pasa por el efectivo reconocimiento del campesinado como sujetos políticos protagonistas de la construcción de los territorios para la vida y la paz. También implica un reordenamiento territorial y ambiental del país que armonice el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales a favor de la dignificación de la vida, tanto de los pobladores rurales como de los urbanos, y garantice la soberanía alimentaria.

El reconocimiento de los campesinos y campesinas

Es indispensable que el Estado desarrolle una política de inclusión y reconocimiento que contemple la activa participación del campesinado en la toma de decisiones sobre los destinos del campo y sobre la relación campo-ciudad. Tal participación se debe hacer efectiva en la nueva institucionalidad que ha de crearse para aplicar esta política, mediante la elección de representantes campesinos en sus instancias directivas.

El estado y los gobiernos deben reconocer la territorialidad campesina como una serie de formas en que el campesinado ha orientado el uso y la organización de los territorios, aprovechando y protegiendo los recursos naturales y estratégicos, organizando la vida social, cultural, política y económica. Como consecuencia:

- Se debe respetar la identidad y modos de vida campesinos, las normas comunitarias, las estructuras organizativas propias, las formas de resolución de conflictos, los saberes y prácticas educativas, la economía campesina, es decir, su condición de sujeto político, social, cultural, ambiental y económico.

- Se debe reconocer el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas, otorgándoles el consentimiento previo, libre e informado, como requisito para las intervenciones que afecten el territorio en lo social, cultural y ambiental, particularmente en los casos de implementación de megaproyectos.
- Se necesita una institución oficial responsable de garantizar la participación del campesinado en la construcción del conocimiento, la ciencia y la tecnología para la producción agraria y la conservación. Esta institución prestará la asistencia técnica para la producción, transformación, comercialización y economía solidaria a las comunidades campesinas.
- Se debe respetar las formas en que las comunidades campesinas construyen y establecen mecanismos de autonomía territorial, desarrollos que se establecieron ante la falta de reconocimiento al campesinado y al abandono estatal. La concertación es el mecanismo idóneo para definir los términos del desarrollo.
- Reconocer y dar aplicación a la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos propuesta por La Vía Campesina y avalada por la ONU, tomando las medidas estructurales y legislativas que los hagan aplicables. Además del Estado, los medios masivos de comunicación, la academia y el sector agroindustrial, deben contribuir en su efectivo reconocimiento.
- Debe existir el reconocimiento con enfoque diferencial que promueva el acceso equitativo de jóvenes, mujeres, niños, adultos, mayores, personas del sector LBGTI, para el campesinado afrodescendiente, para los campesinos en estado de invalidez, así como para los y las campesinas mayores.

El reordenamiento territorial del país

Desde el reconocimiento de la territorialidad, el ordenamiento social y ambiental del país debe garantizar el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas.

- El uso de los suelos debe ser coherente con su vocación, revirtiendo el proceso de ganaderización con un aumento de la superficie destinada a la agricultura campesina organizada en pequeña y mediana propiedad, convirtiendo la ganadería en una actividad sostenible y amigable con el medio ambiente.
- Economía campesina y diversificación de cultivos (pluricultivo) con recuperación de semillas y prácticas limpias desde los saberes ancestrales, culturales y campesinos. Se debe reconocer la existencia de regiones u otros sistemas de ordenamiento del territorio que se desarrollen desde los niveles social, económico, político y cultural.
- Las figuras de protección ambiental del territorio deben contemplar los conocimientos tradicionales y las relaciones de las comunidades con la naturaleza, permitiéndoles habitar en ellas bajo normas claras y estricto cumplimiento de responsabilidades y límites, en los casos en que su permanencia ha sido histórica, promoviendo alternativas concertadas con las comunidades.
- Zonas de reserva campesina (ZRC) interculturales e interétnicas, concebidas en el marco del respeto de las identidades culturales y la armónica convivencia.
- A través de las ZRC la ocupación será equilibrada y sostenible con estímulos y desestímulos al poblamiento distribuidos en el territorio nacional, cerrando la frontera

agraria y garantizando las condiciones generadas por la reforma agraria integral.

- En términos ambientales, los planes de manejo ambiental incluyen la participación activa de las comunidades campesinas, es decir, son herramientas formuladas, ejecutadas y con seguimiento por parte de las organizaciones campesinas. Igualmente, contienen mecanismos campesinos de control ya establecidos en las comunidades, como la racionalización de la explotación de recursos maderables, la protección de especies en vía de extinción, delimitación de cuencas hidrográficas, entre otras cosas, que incluyan un enfoque relacional de género y generacional.
- Cada proceso local de desarrollo requiere que la vereda sea considerada como la unidad mínima del territorio para la planificación ambiental y territorial, siempre y cuando esté articulada a escala municipal, departamental y regional. En cuanto a la distribución de la tierra, se realizará mediante la figura de las Unidades Campesinas Ambientales (UACA). Esta unidad consiste en una figura a partir de la cual lo ambiental es primordial en la tenencia de la tierra.
- Se plantea mecanismos de sustitución gradual y concertada de todos los cultivos de uso ilícito en las zonas de reserva campesina y los territorios campesinos, iniciando por los proyectos piloto contenidos en los planes de desarrollo sostenible de las ZRC.
- Los mecanismos de coordinación interinstitucional de la administración pública deben diseñar la implementación de las estrategias sin descartar la articulación con otras fuentes de financiación, en términos de ordenamiento territorial y ambiental, que requieran de una articulación efectiva con el Sistema Nacional Ambiental.
- El ordenamiento territorial ambiental y productivo requiere avanzar en la identificación de las potencialidades productivas y ecológicas de los territorios. También requiere que planee dentro de ellos una zonificación ambiental que defina las zonas productivas de cada vereda, contemplando las particularidades ecológicas del territorio, las condiciones de acceso a los mercados y los insumos técnicos.
- Las ZRC integradas en un sistema, como inicio de un proceso de reforma agraria que solucione los problemas asociados con la exacerbada concentración de la tierra, así como el minifundio y el microfundio, serán un componente fundamental del reordenamiento territorial y ambiental del país, junto a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Las ZRC serán parte del reconocimiento constitucionalizado del derecho a la tierra y el territorio para el campesinado. Este reconocimiento, incluirá el papel de defensa y protección del medio ambiente que realiza el campesinado. El valor de las ZRC como escenarios de amortiguación de los parques naturales debe reconocerse y fortalecerse como estrategia de conservación.

Finalmente, recalamos que los parques naturales con gente deben ser retomados y promoverse como alternativa a la problemática de los asentamientos humanos que allí persisten y que se explican como ya señalábamos, por la sistemática exclusión a la que las comunidades campesinas hemos sido sometidas durante décadas, y como consecuencia natural del ejercicio de nuestros procesos de una territorialidad propia, que parece no ser comprendida y mucho menos respetada por el Estado.

Nuestros procesos territoriales han comprendido estrategias de ordenamiento del territorio, distribución de la tierra, cohesión social y principalmente diseño autónomo de formas de subsistencia desplegadas en medio de un absoluto abandono estatal. Este abandono solo se interrumpe por la acción militar que la mayor de las veces se manifiesta en violaciones a derechos humanos y todo tipo de atropellos.

Si bien es cierto que en algunos casos nuestros procesos territoriales han conllevado al deterioro de ecosistemas y riquezas ambientales, también lo es que esto se explica por la extrema marginalidad a la que se nos ha sometido y que nos ha obligado a usar excesivamente los recursos naturales por ser la única posibilidad de lograr nuestra subsistencia.

Sin embargo, también es cierto que nuestros procesos de territorialidad también implican el diseño y ejecución autónoma de estrategias de conservación de los recursos, las cuales al ser construidas desde nuestro conocimiento del territorio, de nuestras necesidades y prácticas de subsistencia, gozan de la legitimidad. Por otro lado, debido a la falta de aceptación y cumplimiento de las que carecen en la mayoría de los casos, las normas impuestas por la institucionalidad y construidas inconsultamente a la luz de estudios y teorías que suelen desconocer la realidad de los territorios se hacen impracticables e incluso patéticas por su distancia con la realidad.

Estas estrategias, manifestadas en normas comunitarias y en saberes tradicionales, deben ser reconocidas, estimuladas y fortalecidas por la política pública en escenarios de construcción de acuerdos para la conservación articulada a la dignificación de la vida del campesinado.

No es aceptable para nosotros que el acumulado histórico, político, socioeconómico y cultural que constituyen nuestros procesos de territorialidad sea desconocido, pretendiendo que la única solución a las problemáticas de uso,

ocupación y tenencia en áreas declaradas como protegidas sea la expulsión de los pobladores de estas y una reubicación incierta. Eso no solo no es viable dada la enorme magnitud de los asentamientos humanos en estas áreas, sino que violenta un elemento central de los procesos de territorialidad como el arraigo, es decir, los lazos y sentido de pertenencia que durante décadas se construyen y consolidan al interior de las comunidades y de estas con el medio natural que hemos modificado y al que nos hemos integrado.

En este proceso alimentamos el sentido de nuestros proyectos de vida individual y colectiva para consolidar nuestra identidad. En este sentido, la ANZORC, frente a la realidad histórica de los asentamiento humanos en parques naturales, propone:

1. Relocalización con justicia social.
2. Realinderoamiento de los parques.
3. Parques con gente.

Finalmente, reconocemos la importancia que tienen los escenarios de diálogos que vienen avanzando entre las comunidades y parques, diálogos de los que esperamos que surjan acuerdos que den los insumos para una nueva política de uso, ocupación y tenencia.

Reafirmamos nuestra disposición al diálogo y concertación, con el fin de avanzar en la construcción de una política que garantice el reconocimiento al campesinado como sujeto político de derechos, con capacidad de ser agentes de conservación que aporte a la construcción de paz con justicia social, desde lo local.

Por último, reconocer la importancia que para ANZORC tienen los escenarios de diálogo con parques existentes en la actualidad, de los cuales se espera que surjan los acuerdos que den bases a una nueva política de uso, ocupación y tenencia, de tal forma que nos mantengamos en la disposición al diálogo y la concertación.



San Cipriano: experiencia exitosa de comanejo de un área protegida con participación comunitaria



Lida Mabel Castro, Gilberto Manuel Hernández, Yerlin Xiomara Hernández, José Luis Moreno,

Yolima Plaza Gabriela Sinisterra, Marlen Rocío Sinisterra & Jainer Torres Valencia

Fundación San Cipriano, Buenaventura, Valle del Cauca

Presentación

La Reserva Forestal Protectora de los Ríos San Cipriano y Escalerete representa el área de mayor importancia estratégica para el desarrollo social económico del Puerto de Buenaventura en el Pacífico vallecaucano, en razón al abastecimiento de agua potable que esta zona hace a los habitantes del distrito y a las instalaciones del puerto de mayor importancia en Colombia. Además de tan alto renombre, es también una de las áreas mejor conservadas en nuestro país; según los reportes de CVC, el 85% del área es bosque natural sin intervención y en ella se han encontrado una gran cantidad de especies faunísticas y florísticas que

representan el pacífico, además se ha encontrado un nuevo género de pez denominado capitán (*Crusiglanis pacific*). Este pez se convierte en el nuevo emblema del territorio ancestral.

El área protegida de San Cipriano está localizada en la jurisdicción de los corregimientos de San Cipriano, Zaragoza y Triana, al Este del Distrito de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca. Tiene una superficie de 8.564 ha de bosques naturales tropicales, comprende las subcuencas hidrográficas de los ríos Escalerete y San Cipriano y las microcuencas de las quebradas Santa Bárbara, Jesús, Caballete, El Oso, Agua Mansa, Piedra Piedra, Kilómetro 28, Barbacuanita y Barbacuana, las cuales drenan sus aguas independientemente al río Dagua. Presenta

un paisaje donde se caracterizan tres (3) tipos de paisaje claramente diferenciados: colinas bajas, colinas altas y pequeños valles. Alberga especies y subespecies endémicas. Recientemente se han registrado nuevas especies endémicas para la zona en flora e ictiofauna: *Coussarea sancti ciprianii* (C. M. Taylor), *Duroia laevis* (Devia, Persson & C. M. Taylor), *Duroia sancti ciprianii* (Devia, Persson & C. M. Taylor), *en flora*; y *Cruciglanis pacifici* de la familia *Pseudopimeloididae* (Ostariophysi: Siluriformes) en peces, las cuales son el génesis con el que esta zona comienza a mostrar su potencial bioecológico y científico al mundo.

Antecedentes históricos del proceso

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC), en 1978, inició la construcción del nuevo acueducto para Buenaventura en cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano para la Ciudad. Contó con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Nacional y su costo fue de \$1.300 millones de pesos. El nuevo acueducto cumplió las características técnicas para satisfacer las necesidades de agua potable del 100% de la población urbana de Buenaventura, proyectada para el año 2007.

Paralelamente a la construcción del nuevo acueducto, el Gobierno Nacional, por iniciativa de la Alcaldía de Buenaventura, declaró Zona de Reserva Forestal Protectora al área de las cuencas hidrográficas de los ríos Escalérete y San Cipriano, mediante las resoluciones ejecutivas No. 047 de 1980 y la 012 de 1983 emanadas del ministerio de Agricultura.

La declaratoria de reserva forestal protectora era la garantía que exigía el BID al gobierno nacional, para darle el préstamo requerido para la construcción del nuevo acueducto

que abastecería de agua potable al Puerto de Buenaventura. Con este propósito, el proceso de declaratoria se inició rápidamente, omitiendo etapas importantes de concertación comunitaria determinantes para cristalizar el proceso. Las instituciones encargadas de dichas funciones asumieron el rol que les correspondía y por mandato presidencial el INDERENA, a través del Acuerdo 031 del 20 de noviembre de 1979, declaró el área como Reserva Forestal Protectora, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Agricultura a través de la Resolución Ejecutiva 047 del 20 de marzo de 1980.

El proceso, que en intención fue bueno, generó fuertes fricciones, ya que para esa época existía una comunidad que tenía más de un siglo de estar asentada en la zona y habían sido responsables de la conservación del ecosistema en estado natural, prueba de ello es el agua pura que se mantiene en cantidad y calidad en el territorio. Los líderes de la época iniciaron un proceso de lucha, mostrándole al estado su error al no generar e incluir en el proceso de declaratoria la etapa de concertación.

Conscientes de ello, las instituciones quisieron remediar la falta y adelantaron acciones de control y productivas que, para efecto de las funciones encomendadas en el marco del mandato de la ley, se consideraban ciertas, pero en el marco de la realidad no generaban los impactos requeridos para mitigar y hacer que las obligaciones de la resoluciones, acuerdos y demás normas evidenciadas en la Legislación Ambiental Colombiana para el manejo de reservas forestales protectoras se cumplieran de acuerdo con el mandato; con esto se generó la denominada desobediencia civil a todas las acciones emprendidas por el gobierno a través de sus instituciones para garantizar la conservación de los recursos naturales en las 8.564 ha de bosque natural.

En año de 1992, se inicia una nueva etapa del proceso en el cual se incluye a la comunidad en las dinámicas de planificación y se formula un plan de manejo ambiental desde la mirada comunitaria y se plantea el desarrollo comunitario como nuevo programa. Este permite ser consecuente con el estado real de la reserva, pero la toma de decisiones para esta época seguían siendo institucionales; no obstante, el logro más significativo fue la generación de confianza entre la comunidad y las instituciones. Así, se crean los comités verdales, los cuales permiten involucrar a la comunidad en el análisis de las acciones a desarrollar, este proceso duró hasta el año de 1995.

En el año 1996, se formula un nuevo plan de manejo con partición de la comunidad, donde se evidencian programas y proyectos que articulan las necesidades directas de la comunidad en el marco de la conservación. También se consolida el primer comité de comanejo y se inicia el proceso de cogestión para la conservación de la reserva; se logra que líderes bachilleres de la comunidad participen del proceso, así como se inicia con el control y vigilancia desde la comunidad. Por último, se inicia con el programa de desarrollo comunitario que integra el proyecto para organizar el turismo en la Reserva forestal protectora de los ríos Escalerete.

Entre los años 1997 y 2006, se constituye la Fundación San Cipriano, ONG ambiental de base comunitaria, conformada por los habitantes de la reserva; se crea la necesidad de ajustar el plan de manejo, se consolidan los programas «Gestión ambiental» y «Control y vigilancia comunitaria, investigación aplicada y desarrollo comunitario», se formulan y ejecutan proyectos importantes por parte de la comunidad, como “Recuperación de los valores étnico territoriales, a partir del fortalecimiento de los sistemas sostenibles de producción”, el cual en su primera etapa fue financiado por el Fondo para la Acción Ambiental y la segunda etapa por

el Ecofondo, con el acompañamiento técnico de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC); en esta fase se logró consolidar la cogestión comunitaria.

Para los años 2007 hasta 2014, el proceso pasa de la cogestión a la autogestión comunitaria, se logra que los programas de control y vigilancia, gestión ambiental y desarrollo comunitario se consoliden; de igual manera, se inicia el programa ecoturístico, donde se construye el primer centro de Educación Ambiental en el pacífico Vallecaucano. Con la consolidación de unos programas coherentes para la búsqueda del desarrollo sostenible en el área protegida y la fortaleza comunitaria, se decide comprometer a la Alcaldía Distrital de Buenaventura y a la empresa Hidropacífico con acciones de conservación y de desarrollo comunitario, las cuales hasta la fecha están aportando económicamente y abren puertas ante el Viceministerio de Turismo para que también aporten a la conservación y al desarrollo ecoturístico.

La Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San Cipriano

Localización y superficie

La Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San Cipriano se encuentra localizada en la jurisdicción de los corregimientos de San Cipriano, Zaragoza y Triana, al este del distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Tiene una superficie de 8.564 ha, cubiertas en el 95,5% de bosques naturales tropicales; comprende las subcuencas hidrográficas de los ríos Escalerete y San Cipriano y las microcuencas de las quebradas Santa Bárbara, Jesús, Caballete, El Oso, Agua Mansa, Piedra Piedra, Kilómetro 28, Barbacuanita y Barbacuana, las cuales drenan sus aguas independientemente al río Dagua (CVC, 2012).

Se caracteriza por presentar una precipitación promedio es de 6.647 mm anuales, con temperaturas promedio de 29,1 C° y humedad relativa del 90,21%. Corresponde a la formación vegetal bosque muy húmedo tropical (bmh-T), de acuerdo a la clasificación ecológica de L.R. Holdridge (CVC, 2012).

La reserva presenta un área menor a 10.000 has, por lo que su nivel de percepción es inferior a las subregiones fisiográficas del país y por ello se adopta la unidad especial PAISAJE, de acuerdo con el IGAC. Presenta tres (3) paisajes claramente diferenciados en razón a su topografía y relieve así: Colinas altas, colinas bajas y estrechos valles aluviales (CVC -2012)

Zonificación concertada de la reserva. De conformidad con el decreto 2372 de 2010 en la reserva se identifican tres zonas bien definidas así:

- **Zona de preservación:** Conocida anteriormente como zona núcleo de protección de la reserva, presenta un área de 6.434 ha, en esta zona la comunidad ha asumido no realizar actividades antrópicas y es considerada para la producción de agua y la conservación de la biodiversidad.
- **Zona de restauración:** Conocida como zona de recuperación y de manejo cobertura boscosa, presenta un área total de 1.800 ha y es donde se permite el turismo científico, principalmente el avistamiento de fauna silvestre e identificación y reconocimiento de árboles y flora silvestre de gran importancia ecológica.
- **Zona de interés general de uso público:** Los habitantes la conocen como zona ecoturística porque está integrada por nueve charcos principales, los cuales están destinados para la práctica del ecoturismo, esta área la constituyen 330 hectáreas y es donde se ubican las poblaciones de San Cipriano y Bodegas (km 32). Como se ubica en la parte baja, recibe las descargas de las acciones antrópicas, por ello se han implementado

acciones significativas como: manejo adecuado de residuos sólidos, construcción de sistemas sépticos, manejo de ruido, control de visitantes, adecuación de senderos y charlas de educación ambiental.

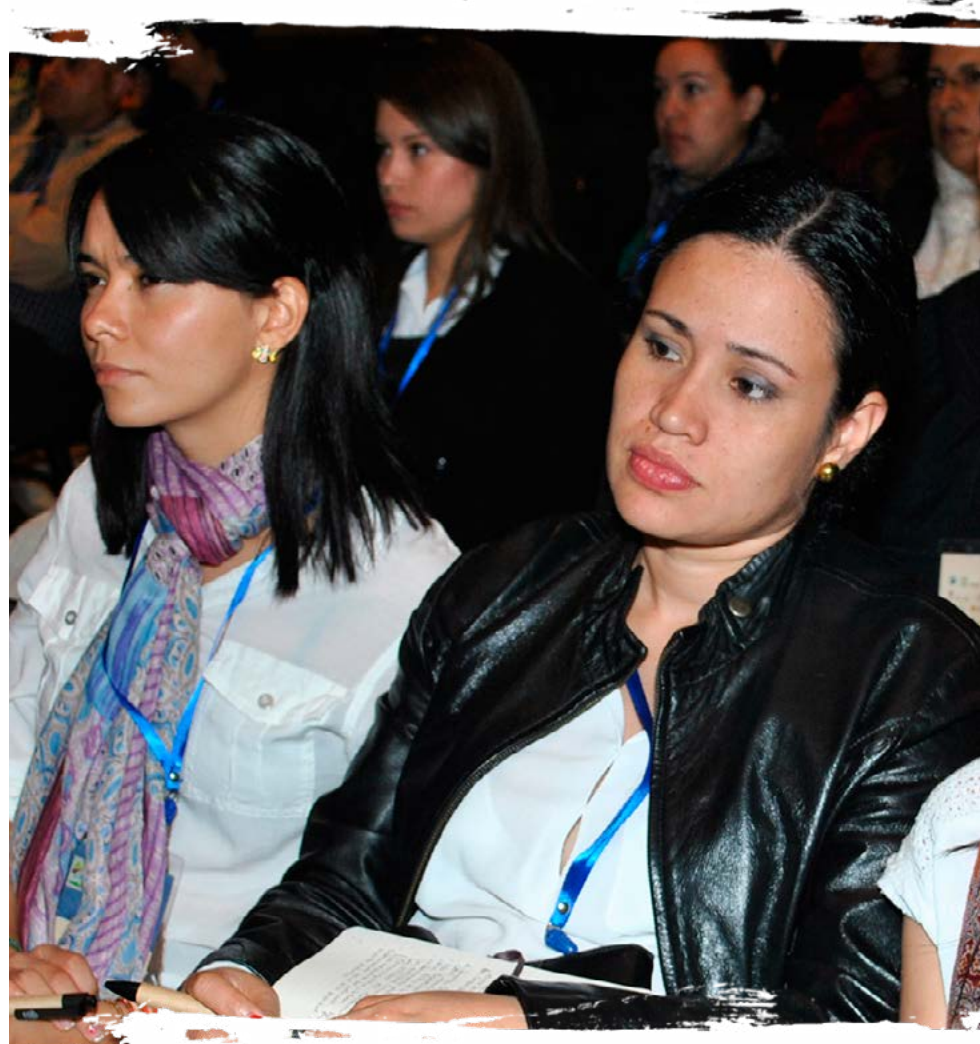
Objetos de conservación

Con base en la metodología definida por el Grupo Biodiversidad de CVC, en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), a través de talleres y/o conversatorios con la comunidad local se identificaron y definieron siete (7) objetos de conservación (OdC) para la Reserva Forestal Protectora de los ríos San Cipriano y Escalerete: los biomas y ecosistemas, la flora y fauna nativa, los nacimientos de agua, las especies con importancia sociocultural, las zonas de reproducción y alimentación de especies con algún grado de amenaza, la cultura ancestral y los sitios con atractivos turísticos.

- **Biomas y ecosistemas.** De acuerdo con el estudio sobre actualización de los mapas de ecosistemas del Valle del Cauca realizado por CVC & Funagua (2010), en la Reserva Forestal Protectora de los Ríos San Cipriano y Escalerete se hallan representados los siguientes biomas y ecosistemas del Valle del Cauca. El primero, el Zonobioma Tropical Húmedo del Pacífico se encuentra entre los menos transformados e intervenidos en el departamento, manteniendo 97,6% de su cobertura natural; sin embargo, en términos legales está expuesto perder su condición natural, ya que se encuentra poco representado (9,5%) en el sistema de áreas protegidas. El segundo, el Orobioma Bajo de los Andes, solo mantiene el 52,9% de su área con superficie natural, pero está mejor representado en el sistema regional de áreas

protegidas, con un 22,4%. Así mismo, de los tres ecosistemas, dos presentan un 91% de su área sin protección, por lo cual se caracterizan como ecosistemas con baja representatividad en el sistema departamental de áreas protegidas.

- **La flora y fauna nativa.** El estudio florístico realizado por CVC, Fundación San Cipriano & Universidad del Pacífico (2006) identificó 18 especies de flora con algún grado de amenaza a nivel regional o nacional y 45 especies faunísticas con algún grado de amenaza a nivel local, regional o nacional, pertenecientes a cuatro taxones de vertebrados. Esta situación fundamenta y reafirma la condición de área protegida de la localidad y genera la necesidad de promover y diseñar estrategias para la conservación y manejo de la flora y fauna silvestre en la Reserva.
- **Los nacimientos de agua.** En la Reserva Forestal Protectora de los Ríos San Cipriano y Escalerete, las principales fuentes hídricas identificadas como valores objeto de conservación del área son: el río Escalerete, que surte de agua al distrito de Buenaventura, y la quebrada El Oso, que surte de agua a la comunidad de Zaragoza (CVC, 2012). Se mencionan también las quebradas El Oso, Jesús, Piedra piedra, Caballete, , Quebrada Charco Oscuro, Natividad, La Conferencia, El Guatín, de Polo, Belén, Quebrada de la Bocatoma y el río San Cipriano, en tanto que sus partes altas presentan buena cobertura vegetal nativa que evitan o disminuyen los deslizamientos o inundaciones.
- **Las especies con importancia sociocultural.** Las especies de flora con potencial agrícola como el naidi (*Euterpe oleracea*), chontaduro (*Bactris gassipaes*), milpesos (*Oenocarpus bataua*), madroño (*Rheedia madrunno*),



papachina (*Xanthosoma sp.*), corozo (*Bactris sp.*), guaba churima (*Inga sp.*), paco (*Cespedesia sp.*), yuca silvestre (*Manihot sp.*), pepa de sande (*Brosimun utile*), leche de popa (*Couma macrocarpa*), caimito (*Manilkaria sp.*), pepa de pan (*Artocarpus altilis*) algarrobo (*Hymenaea palustris*), mielquemada (bejuco), entre otros; medicinales como la nacedera (*Trichantera gigantea*), sueldaconsuelda (*Symphytum officinale*), galve (*Cassia reticulata*), matarraton (*Gliricidia sepium*), celedonia (*Peperomia pellucida*), anamú (*Petiveria alliacea*), malva (*Malva sp.*), santamaría (*Piper peltatum*), secá (*Eritrina cf. costarricensis*), sauco (*Solanum aff. incomptun*), santamaría de anís (*Piper sp.*) y, árboles como popa (*Couma macrocarpa*), sande (*Brosimun utile*), anime (*Protium cf. nervosum*), peinemono (*Apeiba membranaceae*), entre otros, y artesanales, como bejucos, palmas y semillas de especies maderables.

- **Los animales con importancia sociocultural.** Como la guagua (*Agouti paca*), guatín (*Dasyprocta punctata*), tatabro (*Tayasu sp.*), armadillo (*Dasypus sp.*), perico (*Bradipus variegatus*, *Choloepus hoffmanni*), pava (*Penélope purpurascens*, *Penélope ortonii*), pavón (*Crax rubra*) y perdiz (*Tinamus major*); los peces de agua dulce, como la mojarra (*Cichlasoma cf. Atromaculatum*), sábalo (*Brycon meeki*), Sabaleta (*Brycon henni*), capitán (*Batrachoglanis trasmontanus*, *Cruciglanis pacifici*) y los crustáceos, como el camarón muchillá (*Macrobrachium americanum*); las babillas (*Caiman cocodrilus*) y tortugas bache (*Chelydra serpentina*), cinta (*Rhynoclemis sp.*) y tapacula (*Kinosternon leucostom*), de gran interés por su potencial en la zoocria y por su función ecológica.
- **Las zonas de reproducción y alimentación de especies con algún grado de amenaza, a nivel regional y nacional.** Sitios para reproducción de especies de anfibios de la familia Dendrobatidae, áreas boscosas de la zona de preservación y restauración que sirven como zonas de alimentación, percha y reproducción para especies de aves amenazadas, como las pavas (*Cracidae*) y mamíferos como el tigre mariposa y tigrillos (*Felidae*), quebradas usadas por la nutria (*Lontra longicaudis*) y peces como el capitán (*Cruciglanis pacifici*), entre otros.
- **La cultura ancestral.** Las tradiciones y prácticas culturales asociadas a las actividades productivas; los conocimientos asociados a la especies florísticas y faunísticas usadas en la medicina tradicional; los mitos y leyendas asociadas al territorio que han sido usados como mecanismos de control social para el manejo y conservación del mismo; la preparación de

las comidas tradicionales, la música, danza y narrativa oral propia de las comunidades negras del Pacífico colombiano.

- **Los sitios con atractivos turísticos.** En este valor entran las diferentes quebradas con sus charcos y cascadas, los miradores y los senderos, como: Sendero y Cascada La Venteadora, Quebrada La Conferencia, Sendero y charco del Refugio del Amor, Charco azul, Cascada El Oso, El Guatín, Quebrada de Polo, El Sande, Quebrada Jesús, Sendero a la quebrada Caballete y Centro de Educación Ambiental.

De igual manera, los sitios asociados a mitos, leyendas o vestigios de culturas ancestrales, como la Trompa del Diablo (historia con diablo); La Conferencia (sitios de encuentro de los viejos, área social); Quebrada El Guatín (es muy tendida y con mucha piedra, se fueron a pescar gua cuco, levantando piedra vieron un espanto, representado en la cabeza de alguien); la zona entre el río entre Sabaletas y San Cipriano, donde se han encontrado tumbas con murallas pequeñas de piedra y vasijas de barro; el área del km 28 donde se han encontrado piezas de oro trabajadas a la manera antigua, monedas de 1800; el área donde se encuentra actualmente el Centro de Educación Ambiental, por ser un sitio usado por los acuarelistas para inspirarse y pintar sus obras; La quebrada La Conferencia, donde se ubicó el primer pueblo de San Cipriano y donde los viejos se encontraban a contar sus historias; el puente llamado El Culebrero porque tenía muchas culebras, donde además se cuenta que hasta allí llegó Efraín (de la obra literaria María, del autor Jorge Isaacs); la ruta desde el puente hacia el ferrocarril, conocida como el Camino Real, por ser un camino usado durante la Conquista para desplazarse desde Buenaventura a Cali (CVC, 2012).



Una mirada de los logros alcanzados

En la actualidad, la comunidad organizada a través de la Fundación San Cipriano y con el apoyo institucional de CVC, Alcaldía Distrital de Buenaventura, Gobernación del Valle del Cauca e Hidropacífico ha trascendido en su proceso de autogestión y se convierte en ejemplo para Colombia y el mundo en el manejo sostenible de un área protegida, con la participación activa de la comunidad asentada. Esto demuestra que cuando el hombre se incluye como parte de la naturaleza es posible la protección y conservación de los recursos naturales y el bienestar social de quienes conviven en el territorio.

En este sentido, la Fundación San Cipriano, que es la representación viva de la comunidad promulga como misión: “Somos una organización ambiental, que propende

por el fortalecimiento organizativo, en el cuidado de la reserva y el impulso de las actividades ecoturísticas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de Bodegas y San Cipriano, a través de las actividades que coadyuvan a la cualificación de conocimientos ambientales, ecológicos, territoriales, económicos, sociales, políticos y sostenibles, en coordinación con las diferentes instituciones, contando siempre con el mejor talento humano, garantizando así el aprovechamiento integral de la zona de reserva de los ríos Escalerete y San Cipriano”. Hoy son evidentes los alcances de este precepto ya que se están vivenciando los resultados de lo que visionó en el Plan de Manejo de la Reserva, donde la comunidad es protagonista de su propio destino dentro de un área protegida manejada sosteniblemente.

Bibliografía

- CVC & ACUAVALLE. *Comunidades de San Cipriano y Bodegas Km. 32: interacción y convivencia*. Buenaventura: Alcaldía de Buenaventura, 1980-1997.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). *Procedimientos Metodológicos de Planificación en Cuencas hidrográficas*. Santiago de Cali.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). *Planes de Acción trienales de los periodos 2001 a 2003 y 2004 a 2006*.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). *Plan de Gestión Ambiental 2002 a 2012*.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). *Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalarte y San Cipriano*. Distrito de Buenaventura, 1997 a 2002.
- Fundación San Cipriano. *Recuperación de los valores étnicos culturales a través del fortalecimiento de los sistemas sostenibles de producción en las comunidades de Bodegas y San Cipriano, asentadas en la zona de reserva forestal protectora de los ríos Escalarte y San Cipriano*. Valle del Cauca: Buenaventura,. 2002 a 2004
- Cortés, L. M. *Informe final de actividades y resultados del componente del ecosistema boscoso en la reserva forestal protectora de los ríos Escalarte y San Cipriano*. Fundación San Cipriano, Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca & Universidad del Valle del Cauca, 2006.
- Arroyo, V., J. E., García, C., F., Mena-M, A., Palacios LL, J., Mosquera I., M, Mosquera, A. K., Ramos P, Y. A., Valoyes, H. Estructura de un bosque pluvial tropical (bp-t) intervenido (extracción selectiva de maderas). En: Instituto de Estudios del Pacífico (IEP), Universidad del Valle & Proyecto Biopacífico (PBP). (1995). *Memorias I Congreso Nacional sobre Biodiversidad* (pp.115-119).
- Devia, W. A., Cárdenas, D. & Cogollo, A. Contribución al estudio florístico de la Reserva Forestal Protectora de los ríos San Cipriano y Escalarte, Buenaventura, Colombia. En: Instituto de Estudios del Pacífico IEP, Universidad del Valle. (1994). *Memorias I Congreso Nacional sobre Biodiversidad* (pp.77-84). Santiago de Cali.
- Devia, W. A., Adarve , J. B., y Giraldo, G. (2002). Estado actual de los estudios fenológico y ubicación de especies de flora amenazada en el Valle del Cauca. *Cespedesia*, 25 (79), 21-53.
- Forero-P. L. E. (2002).Ubicación geográfica y estado actual de treinta especies de flora amenazada en el Valle del Cauca. *Cespedesia*, 25, (79), 55-82.
- Gentry, A. (1993). A field guide to the families and genera of woody plants of northwest South America (Colombia, Ecuador and Perú): with supplementary notes an herbaceous taxa. Conservation International. USA: Washington D. C., 895 pp.
- Mahecha-V. G. E. Fundamentos y metodología para la identificación de plantas.. 1997. Bogotá D.C.: Proyecto Biopacífico, Ministerio del Medio Ambiente, GEF & PNUD Colombia, 282 pp.
- Moreno, C. E. *Métodos para medir la biodiversidad*, Vol. 1. (2001). Zaragoza: M & T, Manuales y Tesis SEA. Cyted, Orcyt-Unesco & SEA. , 84 pp.
- Silverstone & Sopkins. P.A. (1990). *Manual de taxonomía vegetal*. Universidad del Valle, Facultad de Ciencias, departamento de Biología. 1ra Reedición. Santiago de Cali: 80 pp.
- Cifuentes, Miguel et al. (1996). *Determinación de la Capacidad de Carga Turística en los sitios de visita del Parque Nacional Galápagos*. Servicio Parque Nacional Galápagos. Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Ecuador: Puerto Ayora, Islas Galápagos.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Fundación San Cipriano, Fondo para la Acción Ambiental. (2004). *Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalarte y San Cipriano*. Buenaventura, Valle.
- Díaz, H. E., Muñoz, F. D. & Paredes G. G. (2005). *Informe final sobre la determinación de la capacidad de carga de visitantes en la zona turística de la reserva forestal protectora de los ríos Escalarte y San Cipriano*. Buenaventura: Fundación San Cipriano & CVC.

El ecoturismo comunitario en las áreas protegidas: un proceso social del cual aprender



Jaime Andrés López Loaiza, Representante legal, *Asociación Comunitaria Yarumo*

Blanco; Gloria Teresita Serna Alzate, Jefe, *SFF Otún Quimbaya*

El ecoturismo como estrategia de conservación en las áreas protegidas en Colombia, se concibe como una actividad que genera alternativas productivas sostenibles para las poblaciones humanas localizadas en los Parques Nacionales Naturales o en sus zonas aledañas. Precisamente, el modelo de ecoturismo comunitario permite la implementación de esta actividad por parte de las poblaciones locales, dándoles una mayor responsabilidad en la gestión del destino y el desarrollo del producto turístico.

Esta responsabilidad de la operación de los servicios ecoturísticos en áreas de gran importancia ecológica como los Parques Nacionales Naturales, implica que las comunidades locales incorporen procesos de sensibilización al visitante, partiendo de su conocimiento y empoderamiento del territorio.

El desarrollo de las comunidades locales entorno a las áreas protegidas, ha mostrado cambios importantes en los últimos años, en busca de modelos que permitan mayor bienestar local, el desarrollo humano y el beneficio económico de manera amigable con los recursos naturales. Un ejemplo de ello, es la experiencia de la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco que desde el año 2009 suscribió un contrato de ecoturismo comunitario con Parques Nacionales Naturales, para operar los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.

Derivado de un proceso que se remonta antes de la misma creación del área protegida, se vienen desarrollando acciones en pro de la conservación de la cuenca alta del río Otún, en el municipio de Pereira, muchas de ellas jalonadas desde los actores sociales y comunitarios organizados, es por ello importante presentar un panorama histórico de dicho proceso:

- 1948: La cuenca alta del río Otún fue declarada área de interés público para la conservación del recurso hídrico.
- 1963: Hasta esa fecha el señor Luis Enrique Mejía Marulanda fue propietario del predio hacienda La Suiza, donde es hoy el SFFOQ y que pasó a manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en convenio con el SENA construyen una ramada en la que funcionaría la Escuela de Guardabosques Forestales.
- 1969: Creación del Instituto Nacional de la Defensa de los Recursos Naturales (INDERENA). Paralelo a esto, el Ministerio de Agricultura entrega al INDERENA todas las áreas de carácter nacional que tenía bajo su administración, entre estas la Escuela de Guardabosques Forestales, ubicada en la Hacienda La Suiza.
- 1983: Se cierra el ciclo de la Escuela de Guardabosques Forestales, se realiza el Congreso Nacional de Organizaciones Ecológicas y se crea el CENIE (Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas). Alternamente, la Fundación Ecológica Autónoma (FEA) presenta la propuesta al Concejo Municipal de Pereira para la creación del Parque Ecológico Recreacional Ucumarí.
- 1984: Mediante Acuerdo Número 096 de 1984, el Concejo Municipal de Pereira crea el Parque Ecológico Recreacional Ucumarí y en sus predios queda comprendida el área del entonces CENIE.
- 1991: Se da la reforma constitucional de 1991 y con ello la creación del Ministerio de Medio Ambiente.
- 1992: Nace uno de los primeros grupos ecológicos de la cuenca del río Otún llamado Grupo de Observadores Aves (AGUILAS), con apoyo de la CARDER y la iniciativa del profesor William Carvajal Abad.
- 1994: Se crea la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales mediante Ley 99 de 1993.
- 1996: La Unidad de Parques Nacionales reclama a la Carder las 489 hectáreas que estuvieron bajo la administración del INDERENA, logrando la creación del Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, en reconocimiento al río más importante de la zona y a la cultura indígena que habitó el lugar.
- 1999: El 25 de enero sucede un terremoto que afecta considerablemente a los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, a causa de esto se crea el FOREC (Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero), que impulsó el potencial turístico de la región.
- 2000-2002: Durante este periodo se da inicio activo a los procesos de participación de las comunidades dentro de las proyecciones ecoturísticas, a través de dos planes pilotos de capacitación en interpretación ambiental y manipulación de alimentos, de los cuales surgen dos organizaciones comunitarias en la cuenca del Otún: La Cooperativa Multiactiva de Defensores del Medio Ambiente (COOMDEMA) y la Asociación de Intérpretes Ambientales Soledad de Montaña, siendo los pioneros en la prestación de servicios ecoturísticos comunitarios.
- 2006: Se suscribe la Concesión Otún-Quimbaya con entes públicos y privados (Aviatur, Comfamiliar, Aguas y Aguas de Pereira y Gobernación de Risaralda), durante este periodo se acondiciona la planta física. Después de ser liquidado el contrato de concesión, se hace un llamado a las comunidades organizadas por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se despierta el interés de sus

integrantes para el aprovechamiento de estas instalaciones en la prestación de servicios ecoturísticos a través del programa de ecoturismo comunitario.

- 2008: En noviembre se constituye la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, derivado de la unión entre COOMDEMA y Soledad de Montaña.
- 2009: Se suscribe el Contrato de Ecoturismo Comunitario No. 03 entre Parques Nacionales Naturales y la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, con el objeto de la prestación de los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.

El territorio en el cual se desenvuelve la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco es un espacio geográfico que cuenta con unas características especiales, que permiten el desarrollo de la biodiversidad y determina las condiciones bajo las cuales las comunidades se relacionan con la naturaleza.

Específicamente, en la cuenca alta del río Otún se han desarrollado procesos sociales en torno a la conservación que han permitido la creación de varias áreas protegidas administradas actualmente por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y Parques Nacionales Naturales de Colombia, con apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira.

El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya es una de esas áreas protegidas, un territorio destinado a la conservación de la biodiversidad de la selva subandina, ubicado en el flanco occidental de la cordillera central, a 15 km de la ciudad de Pereira.

Este territorio, en la época de la colonización, fue impactado por el aprovechamiento de los recursos naturales, la tala de árboles para la construcción de edificaciones y la producción de

carbón vegetal, las cuales fueron algunas de las actividades que sostenían las familias que llegaban a la zona; posteriormente, la potrerización para ganado lechero y la agricultura se convirtieron en la actividad más practicada. Pero esa relación entre las comunidades y su territorio fue cambiando.

Desde 1948 se declara la cuenca alta del río Otún como zona de interés para la conservación del recurso hídrico y para esto, las comunidades de la vereda La Florida, La Suiza y la vereda El Bosque, del corregimiento de La Florida inician la construcción de un modelo de desarrollo comunitario enfocado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Los grupos ecológicos fueron una de las primeras ideas de una comunidad más interesada por la conservación, ejemplo de ello son el grupo Observadores de Aves (AGUILAS), los Grupos ecológicos de Risaralda (GER), La Fundación Ecológica Autónoma (FEA), La Finca Agroecológica Los Genaros, la Cooperativa Multiactiva de defensores del Medio Ambiente (COOMDEMA), la Asociación de Intérpretes Ambientales Soledad de Montaña y otros esfuerzos comunitarios, que reflejan un verdadero cambio aplicado en los hábitos y sistemas económicos que inician su camino hacia la sostenibilidad, siempre en busca del beneficio para la comunidad local.

De esta larga trayectoria de desarrollo comunitario nace Yarumo Blanco, una organización integrada por habitantes de la comunidad de las veredas La Suiza, La Florida, El Cedralito, El Plan, El Porvenir, San Juan y otras zonas de la cuenca del río Otún. A través de esta asociación, se busca el desarrollo de la comunidad local por medio de la prestación de servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, bajo un esquema horizontal que deposita confianza en sus asociados para la construcción del sueño conjunto de permanecer en el territorio.



El nombre “Yarumo Blanco” se relaciona directamente con un árbol del mismo nombre, *Crecopia telenitida*, que se caracteriza principalmente por presentar pubescencias en sus hojas que generan un color blanquecino que da nombre a su especie. Además, se caracteriza por generar fructificaciones constantes de las que dependen gran número de especies de fauna, llegando a tener calificativos como “El supermercado del Bosque”, por eso la asociación es considerada entonces el sustento de la comunidad local.

Sus asociados, pertenecientes inicialmente a las organizaciones de base Asociación de Intérpretes Ambientales Soledad de Montaña y COOMDEMA, han desarrollado un trabajo arduo a través de actividades de educación ambiental, trabajo social, prestación de servicios hoteleros, gastronomía, así como la promoción y realización de eventos, entre otros. Se cuentan actualmente 25 asociados, 13 mujeres y 12 hombres, de siete veredas aledañas al Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.

En un ejercicio de análisis y evaluación interna, la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco ha identificado las siguientes fortalezas:

- La Asociación partió inicialmente de dos organizaciones de base, desde donde los integrantes se formaron con el SENA y con la experiencia en la prestación de los servicios ecoturísticos, esto quiere decir que este beneficio se dio desde mucho antes de suscribir el contrato de ecoturismo comunitario.
- La capacitación continua significa un proceso formativo que ha fortalecido a los asociados, sin dejar de lado la retroalimentación interna en espacios que han generado nuevas propuestas hacia la sostenibilidad.
- Los asociados tienen un alto arraigo al territorio y poseen un amplio conocimiento de la región, lo cual se refleja en el empoderamiento de sus procesos sociales.

Por otro lado, también se identificaron las siguientes debilidades:

- Insuficiente ingreso económico para algunos asociados: Se refiere a los roles temporales, relacionados con las temporadas altas y bajas.

- Débiles estrategias de vinculación de actores locales: Aunque en la actualidad se benefician diferentes actores locales, esta debilidad está relacionada con la capacidad de articulación y trabajo común, la asociación quiere extender los beneficios que genera el ecoturismo, de una manera más organizada y rentable para las comunidades locales.
- Desigualdad en la distribución de los beneficios generados: Relacionado con los perfiles y diversidad de funciones que algunos asociados tienen, lo cual permite su vinculación más frecuente a ciertas actividades, por lo cual se generan mayores beneficios económicos para algunos. Adicionalmente, se analiza la reciprocidad que debe existir entre lo que el asociado aporta y lo que recibe.
- Informalidad del vínculo laboral: Se refiere a la cantidad de empleos informales generados (20 aproximadamente) que no permiten garantías frente seguridad social y riesgos laborales.
- Resistencia al cambio: Ya que se ha presentado una reacción negativa de algunos asociados, a los cambios propuestos como alternativas de mejoramiento continuo.
- Baja participación en talleres de mejora continua: Se refiere al poco compromiso de algunos asociados que no participan activamente en los talleres internos que buscan la mejora progresiva
- El ejercicio de la interpretación ambiental que está a cargo de la comunidad local, pertenecientes a un segundo relevo generacional, reflejado en la participación de jóvenes que se han capacitado en Administración Turística y Tecnología en Turismo y Patrimonio, los cuales han adquirido conocimiento académico y dominio técnico.
- El apoyo a otras organizaciones locales, realizando trabajo social con los niños de las instituciones educativas de bajos recursos. Parques Nacionales Naturales exime del cobro de ingreso al área protegida a los niños de estrato uno y dos; asimismo, la Asociación Comunitaria brinda el servicio de interpretación ambiental completamente gratuita.
- La realización de actividades culturales que promueven la “salvaguarda” de las manifestaciones culturales en el territorio, contratando a músicos de la zona que interpretan hermosos pasillos, bambucos y música propia de los Andes Colombianos.
- La formación de 1 Administrador Turístico, 5 Tecnólogos en Turismo y Patrimonio, 1 Técnico en Turismo Sostenible, además de otras personas capacitadas por medio del SENA, con lo cual se cualifica el personal y se fortalece la actividad y administración ecoturística en el territorio.

Del análisis de la experiencia de ecoturismo comunitario de la Asociación Yarumo Blanco, se desprenden una serie de beneficios a la comunidad local, al entorno y en general al territorio, enfocado en la generación de una economía sustentable, incluyente, comunitaria y participativa. Los beneficios socioculturales específicamente se evidencian en:

En lo que respecta a los beneficios económicos, se han identificado:

- Adquisición de insumos gastronómicos locales, comprando a los productores primarios insumos como hortalizas, lácteos y cárnicos.
- Distribución de artesanías y obras artísticas elaboradas por pobladores locales.

- La totalidad de las personas que prestan los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya pertenecen a la comunidad. En la actualidad, el 80% de los asociados se benefician económicamente directa e indirectamente de las actividades ecoturísticas, que van desde la interpretación ambiental, hasta servicios gastronómicos y operativos, además de las funciones administrativas. A través de la tienda artesanal, se logran promover los productos de los artesanos locales, permitiendo la dinamización de la economía local, a través de actividades conexas al turismo, sin intermediarios.

Los beneficios ambientales, aunque son más difíciles de establecer y cuantificar, se ven reflejados en las acciones en torno a:

- El trabajo conjunto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, específicamente con el equipo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, en torno al apoyo en acciones de educación ambiental y restauración, lo cual redundará en la conservación del área protegida.
- Elaboración de piezas gráficas en torno a la sensibilización ambiental por medio de la página web de la Asociación Comunitaria (www.yarumoblanco.co), donde se promueve “el muro de la biodiversidad” y las prácticas ambientalmente sostenibles a través de la mascota Yamba (mono aullador).
- Campañas de divulgación de las especies Valor Objeto de Conservación del área protegida, esfuerzo conjunto con el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, que consiste en publicación

y difusión mensual de información sobre una especie a través de diferentes medios audiovisuales y virtuales.

- Implementación de protocolos de manejo de residuos sólidos y líquidos, donde se cuenta con un sistema séptico, un centro de compostaje y un programa de residuos reciclables, que son donados al grupo de la tercera edad del corregimiento La Florida.
- Participación en la formulación del plan estratégico de ecoturismo en las áreas protegidas de la cuenca alta del río Otún, siendo un actor clave en las fases de diagnóstico y planificación de esta actividad para la cuenca.
- Realización de la interpretación ambiental como claro ejemplo de la participación activa de la comunidad en la sensibilización y educación ambiental de los visitantes que ingresan al área protegida y otros atractivos de la región.

Producto del análisis de las fortalezas, debilidades y beneficios ofrecidos en este proceso de ecoturismo comunitario, se derivan aprendizajes susceptibles de replicar en otras experiencias similares:

- Los procesos de ecoturismo comunitario no deben ser vistos desde la rentabilidad de un negocio, sino como procesos que deben ir hacia la sostenibilidad en la integralidad del término (sociocultural, económico, ambiental).
- Los procesos comunitarios se fortalecen en la medida que sus integrantes se capaciten constantemente.
- El conocimiento del territorio es la herramienta para el empoderamiento de la comunidad y forma actores que deliberan en defensa de este.

- Es fundamental la participación de las comunidades en espacios interinstitucionales donde se decide sobre el territorio.
- Escuchar y considerar las ideas de los compañeros estimula la participación comunitaria.
- El ecoturismo es una de las alternativas económicas para el territorio, que garantiza el cuidado de los recursos naturales y la generación de beneficios socioculturales.
- Las comunidades están en capacidad de administrar y decidir sobre su territorio.
- El trabajo colectivo entre los diferentes actores locales permite el sueño conjunto de permanecer en el territorio.
- Las decisiones se deben tomar entre todos los involucrados, ya que lo que es bueno para unos, no necesariamente es bueno para los demás. En torno a los proceso de mejora

continua en la prestación de los servicios ecoturísticos, la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco se está proyectando hacia la certificación de la NTS-TS-002 para alojamientos sostenibles, con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Centro Nacional de producción más limpia; es así como se está iniciando la fase de implementación y se espera lograr la certificación para el año 2015. Adicionalmente, la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco se encuentra fortalecida y motivada por el reciente reconocimiento del Viceministerio de Turismo, que le asignó el primer lugar en el Premio Nacional de Turismo Sostenible año 2013, categoría “Mejor en acciones para el beneficio de comunidades locales”, con lo cual se demuestra una vez más que la conservación y el desarrollo social sí son compatibles.



Manejo conjunto del mosaico de conservación Bahía Málaga: un desafío institucional y comunitario



Hoover Carabalí Playonero & Jorge Antonio Viveros Batioja, *Consejo comunitario de La Plata, Bahía Málaga*; **Maribell González Anaya**, *Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Otún Quimbaya*; **Gustavo Adolfo Mayor Aragón**, *Parques Nacionales Naturales, Dirección Territorial Pacífico*

Presentación

Bahía Málaga está ubicada en la porción media de la costa Pacífica colombiana y, de acuerdo a sus características bioclimáticas, pertenece a la categoría de bosque muy húmedo tropical (BMHT). Se caracteriza por presentar una compleja estructura ecosistémica, representada en varias comunidades marinas y costeras y en una gran riqueza de fauna y flora continental y marina que le confieren un alto valor, en razón a su alta diversidad biológica, presencia de hábitats heterogéneos y procesos biológicos y geológicos, muy dinámicos. La riqueza natural de Bahía Málaga se complementa con su riqueza cultural, representada

principalmente por la presencia de comunidades negras e indígenas, los cuales a través de sus procesos históricos y culturales de ocupación, uso y manejo del territorio han contribuido a la conservación de sus ecosistemas.

El proceso de identificación de categorías de conservación pertinentes para el área, es un esfuerzo que se inicia en la década de los noventa y que actualmente se ha materializado en el Mosaico de Conservación de Bahía Málaga, donde confluyen áreas protegidas del orden nacional (PNN Uramba), del orden regional (PNR La Sierpe y DMI La Plata) y estrategias complementarias de conservación (RNE de Puerto España y Miramar y áreas de conservación en los resguardos indígenas).

Esta multiplicidad y diversidad de visiones culturales, políticas y técnicas, pone de manifiesto la complejidad en torno a la implementación de procesos de planificación, administración y manejo del área. Esto se constituye en un desafío institucional y comunitario y, a la vez, en un gran escenario de construcción participativa de Estado-Nación. Esto se logrará a partir de diseñar e implementar una estrategia conjunta de manejo de un área marino-costera, importante para el Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico colombiano (SIRAP Pacífico) y para las metas de conservación nacionales e internacionales.

Antecedentes históricos del proceso

El proceso de consolidación del actual mosaico de conservación de Bahía Málaga data desde la década de los noventa. En este periodo, a partir de múltiples y diversas iniciativas y esfuerzos comunitarios, gubernamentales, académicos y de organizaciones no gubernamentales, se lograron definir, concertar, designar y declarar en el territorio, las diferentes áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación, que hoy existen.

La alta diversidad de ecosistemas costeros, marinos y terrestres, su alta diversidad de especies y la presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas definen la importancia biológica, ecosistémica y cultural de Bahía Málaga, la cual ha sido objeto de estudios por varias instituciones del orden regional y nacional. (CVC, 1995, 1999; CALIDRIS & UNIVALLE, 1998; INCIVA & CVC, 2003; CVC, 2005; CVC & Consejo comunitario de La Plata, 2005; Capella *et al.*, 2005; INVEMAR, UNIVALLE & INCIVA, 2006; Flórez *et al.*, 2007; CVC & Consejo comunitario de la Plata, 2006; CVC & Consejos comunitarios

de Juanchaco y Ladrilleros, 2006; CVC & Consejo comunitario de La Plata, 2010; Parques Nacionales, WWF & Consejos comunitarios de La Plata, Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Puerto España y Miramar, 2009).

En contraste con esta situación, el área ha estado expuesta a diferentes factores de presión y amenazas, representados en propuestas y megaproyectos de desarrollo; así como en el desarrollo de prácticas productivas no sostenibles. Frente a estas amenazas, han sido varias las iniciativas realizadas desde 1989, para definir y asignar una categoría de conservación al área. En este sentido, vale la pena mencionar las propuestas realizadas por el INDERENA, Gobernación del Valle, CVC, Planeación municipal de Buenaventura y Univalle, (1989), en la que se elaboró el proyecto de «Decreto para la creación del Área de Manejo Especial de Málaga, Bajo San Juan». DNP (1992), conjuntamente con el Comité Interinstitucional Especial de Bahía Málaga, elaboró el estudio *Pautas para el ordenamiento territorial y manejo ambiental de la región de Bahía Málaga, departamentos del Valle y Chocó*, en el cual se incluía el establecimiento de áreas protegidas para la conservación de su inmensa biodiversidad de fauna y flora.

Posteriormente, en 1995 un grupo de personas interesadas en la protección de la naturaleza en el departamento de Valle del Cauca presentaron a consideración del Consejo Territorial Departamental una propuesta de estrategia para la creación del Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas en el Valle del Cauca y para buscar su inclusión en el Plan de Desarrollo Departamental. A su vez, en 1998 —en desarrollo de la Ley 388 de 1997— se estructuró el esquema de ordenamiento territorial de la región de Bahía Málaga, donde se proponían también suelos de protección para la conservación de la bahía. En ese mismo año, el Consejo Comunitario de la comunidad negra

de La Plata, Bahía Málaga, incluyó en su Plan de Bienestar Étnico y Territorial, en su Código de Régimen Interno y en su Zonificación Territorial, el establecimiento de zonas de uso sostenible, protección y conservación de los recursos naturales presentes en el Territorio Colectivo.

Entre 1993 y 1998, la propuesta de declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de Bahía Málaga fue un propósito de las distintas administraciones de la Gobernación del Departamento, propuesta que sin embargo no logró consolidarse dado que fueron insuficientes los espacios de participación para su discusión y concertación con los actores institucionales y comunitarios del orden regional.

En el 2003, a través del Convenio CVC-INCIVA, ambas entidades se comprometieron a continuar apoyando y desarrollando acciones de manera conjunta con diversos actores presentes en la zona, tendientes a la consolidación y el fortalecimiento el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), caso Bahía Málaga y sus actividades específicas: a) Definir lineamientos para la protección de Bahía Málaga y concertar con los actores una figura de manejo y b) Apoyar la coordinación del Comité Técnico para la declaratoria de Bahía Málaga como área protegida.

Teniendo como base estos antecedentes, en el 2005, el Colectivo Comunitario e Institucional por la Conservación de los Valores Naturales y Culturales de Bahía Málaga retoma los avances del Convenio entre CVC e INCIVA y, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Convenio TO 47 establecido entre el WWF Colombia y la Fundación CENIPACIFICO en el 2007, se entrega el documento técnico de soporte de la Propuesta de consolidación en Bahía Málaga de un mosaico de conservación, documento que se constituye en insumo básico para la gestión del Colectivo, orientado a garantizar la conservación de la zona a partir de la identificación, concertación,



declaratoria y construcción conjunta de los planes de manejo de las categorías de conservación que estructuren dicho mosaico. Dicho proceso continúa con la estructuración de alternativas entre las que se puede contemplar la declaratoria de áreas protegidas bajo categorías del ámbito local, regional y/o nacional.

Es así como, en el caso del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Puerto España y Miramar y en el marco del Convenio 023 de 2002, se consolidan la designación, en el marco del Artículo 55 de la Ley 70/93, de la Reserva Natural Especial de Puerto España y Miramar y, finalmente, en el 2007, el Plan de Manejo Integral para dicha Reserva. Posteriormente, en el marco del Convenio 115 de 2004, celebrado entre el Consejo Comunitario de Ladrilleros y la CVC, se avanza en la formulación e implementación de planes de administración y manejo de los recursos naturales en territorios étnicos de las comunidades negras de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra.

De igual manera, en agosto del 2008, se logra, mediante los acuerdos del Consejo Directivo de CVC no. 055 y 056, la declaratoria de dos áreas protegidas regionales: el Parque Natural Regional (PNR) La Sierpe y el Distrito de Manejo Integrado (DMI) La Plata.

A su vez, en agosto 4 del 2010, mediante Resolución 1501 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se logra la declaratoria de 47.094 ha, equivalentes a 137,34 M¹ en zona marina del Municipio de Buenaventura; definiéndose como el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga.

Mosaico de conservación

Ubicación geográfica de Bahía Málaga

La Bahía de Málaga se halla ubicada entre los 3° 58' y 4° 05' de latitud Norte y los 77° 19' y 77°21' de longitud Oeste. Tiene un área aproximada de 136 km², correspondientes a su componente marino-costero (Cantera, 1991a) y un área de influencia estimada en 200.000 ha. El área de influencia, tiene como límites el Río San Juan al Norte, al Este la carretera de acceso a la Base Naval de Bahía Málaga, al Sur la costa del Istmo de Pichidó y al Oeste la Isobata de los 20 m de profundidad del mar territorial (Gobernación del Valle, 1990).

Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga

El 4 de agosto del 2010, se declaran, reservan, delimitan y alinderan 47.094 ha, equivalentes a 137,34 M en la zona marina del municipio de Buenaventura; definiéndose como el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga; el

término Uramba es un patronímico de vocablo Afro, designado al trabajo conjunto, reflejado en la definición del Parque Nacional Natural como ha sido el proceso de construcción colectiva, que avanza en el cambio de paradigma en la declaración de áreas protegidas y aún más en su planificación y manejo, como es lo dispuesto en la Resolución No. 1501 del 04 de agosto de 2010, por medio del cual se declara esta unidad de conservación.

Actualmente se encuentra en formulación el plan de manejo del área; el cual cuenta con sus fases de diagnóstico y ordenamiento: en las cuales se exhiben elementos de contexto, entendimiento de presiones y efectos, análisis de integridad ecológica, precisión de valores objeto de conservación, elucidación hacia escenarios deseados, zonas de uso y manejo con actividades permitidas, condicionadas y prohibidas o no permitidas, todo con el sentido de conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y el fortalecimiento cultural entendido en la armonización de la naturaleza con las prácticas tradicionales de etnoproducción.

Parque Natural Regional La Sierpe

El 14 de agosto del 2008, mediante el Acuerdo No. 055 del Concejo Directivo de la CVC, se declara el Parque Natural Regional de La Sierpe, ubicado en Bahía Málaga, municipio de Buenaventura, el cual se incorpora al Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca y se adoptan otras determinaciones. Se localiza en el rango altitudinal de 100 msnm, cubriendo zonas de bosque Pluvial tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 25.178 ha.

A través del Convenio 139 del 2009, entre CVC y el Consejo comunitario de La Plata, se formuló el Plan de Manejo del Parque Natural Regional La Sierpe. En su construcción, las comunidades de Mangaña, La Plata, Miramar, La

1 Millas náuticas.

Sierpe y Chucheros, a través de diferentes ejercicios y herramientas participativas, diagnosticaron el estado del territorio colectivo con sus áreas protegidas, definieron los valores naturales y culturales más importantes a proteger, identificaron las amenazas que existen y definieron una ruta estratégica para alcanzar el territorio soñado (CVC & Consejo comunitario de La Plata, 2010).

Distrito de Manejo Integrado La Plata

El 18 de agosto del 2008, mediante el Acuerdo No. 056 del Consejo Directivo de la CVC, se declara un Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, en el territorio colectivo de la comunidad negra de La Plata, Bahía Málaga, municipio de Buenaventura, el cual se incorpora al Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca y se adoptan otras determinaciones. Se localiza en el rango altitudinal de 100 msnm, cubriendo zonas de bosque Pluvial tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 6.791 ha.

A través del Convenio 139 del 2009, entre CVC y el Consejo comunitario de La Plata, se formuló el Plan de manejo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales. En su construcción, las comunidades locales, a través de diferentes ejercicios y herramientas participativas, diagnosticaron el estado del territorio colectivo con sus áreas protegidas, definieron los valores naturales y culturales más importantes a proteger, identificaron las amenazas que existen y definieron una ruta estratégica para alcanzar el territorio soñado (CVC & Consejo comunitario de La Plata, 2010).

Reserva Natural Especial de Puerto España y Miramar

El 24 de mayo del 2009, mediante Resolución No. 001 de la Junta del Consejo comunitario de Puerto España y Miramar, de conformidad con la Ley 70 de 1993, el Consejo comunitario

estableció por mandato la Reserva Natural Especial de Puerto España y Miramar, ubicada en la República de Colombia, departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción del municipio de Buenaventura, en el rango altitudinal de 0 a 78 msnm, cubriendo zonas de bosque Pluvial tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 7.420 hectáreas.

A través del Convenio 023 de 2002 del Fondo para la Acción Ambiental, entre CVC y el Consejo comunitario de Puerto España y Miramar y Fundación ASDES, se formuló el Plan de Manejo Integral de la Reserva Natural Especial de Puerto España y Miramar, que permitió la caracterización ambiental y social del área, su zonificación teniendo en cuenta las características biofísicas, importancia ecológica y los usos y costumbres de las comunidades locales. Así mismo, producto de la participación comunitaria y consenso general se construyó la propuesta del Plan de Manejo Integral de la Reserva Natural Especial.

Visiones de manejo y gestión del mosaico de conservación

Visión institucional

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con la política de participación social en la conservación “Parques con la Gente”, como la base a través de la cual se ha logrado la adecuación institucional a la Constitución Política, a los Convenios de la OIT, de Diversidad Biológica y Acuerdo de Durban del 2003, y se han abordado los ejercicios de coordinación y concertación para la planeación y el manejo de las áreas protegidas.



El Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga presenta una sola planeación y su visión debe ser entendida como una sola en la establecida institución y consejos comunitarios de las comunidades negras enmarcada en el esquema de manejo conjunto que se define para las partes como: “Es un proceso permanente de construcción y toma de decisiones conjuntas, entre consejos comunitarios y parques nacionales, para lograr la planeación y manejo del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga fundamentado en los principios legales y los derechos ancestrales de las comunidades negras, en la corresponsabilidad y la armonización de los instrumentos de planificación que integre la gobernanza del territorio y la cultura orientado al desarrollo propio de las comunidades y la conservación de la biodiversidad”.

Es claro que la importancia de la diversidad cultural y la protección del medio ambiente se han establecido en la Constitución Política de 1991 como dos principios fundamentales y base del Estado colombiano, por lo que

a ninguno se le puede dar una importancia mayor ni menor que el otro, ni someterlos a un sacrificio tal que deslegitime su finalidad. En este sentido, el camino que queda es la adecuación de los medios que se utilizan para conseguir el fin (protección ambiental y cultural), los cuales solo se pueden adoptar por el camino de la concertación.

La concertación implica que en conjunto con los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras de bahía Málaga se construyan acuerdos de uso y manejo, donde se puedan conciliar los usos y costumbres de dichas comunidades con la aplicación de las normas que rigen las áreas protegidas.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

El Sistema Departamental de Aéreas Protegidas (SIDAP Valle) se fundamenta en el compromiso adquirido por Colombia a través del Convenio de Diversidad Biológica, el cual fue ratificado mediante la promulgación de la Ley 165 de 1994 y la formulación de la Política Nacional de Biodiversidad, con base en la cual se formuló el Plan de Acción Regional de Biodiversidad para el Valle del Cauca 2005-2015. El SIDAP se concibe como el conjunto de principios, normas, estrategias, acciones, procedimientos, recursos, actores sociales y áreas naturales protegidas en el Valle del Cauca, cuyo objeto es articular y coordinar las iniciativas de conservación in situ de la biodiversidad para el Valle del Cauca, bajo principios de responsabilidad, corresponsabilidad, participación y equidad.

El SIDAP fue formalizado en el 2005 con la expedición de la Resolución CVC No. 752, por medio de la cual se reconocen y reglamentan espacios de coordinación intersectorial para promover la articulación, el fortalecimiento y el establecimiento de áreas protegidas en el Valle

del Cauca, entre otros aspectos. Este Sistema Departamental se articula con los subsistemas regionales de áreas protegidas SIRAP Eje Cafetero, Macizo y Pacífico y con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

El Valle del Cauca cuenta con áreas protegidas públicas, privadas y étnicas, en los niveles nacional, regional y local, declaradas por diferentes instancias de acuerdo con las competencias. Con base en esto, el SIDAP Valle del Cauca lo integran las áreas protegidas del SINAP en diferentes niveles, áreas protegidas que por el momento no integran el SINAP. Hacen parte también del sistema las estrategias complementarias de conservación del SINAP, como son entre otros los humedales y los corredores biológicos (CVC, 2012).

El ejercicio de planificación, administración y comanejo de las dos áreas protegidas regionales de Bahía Málaga: PNR La Sierpe y DMI La Plata, se fundamenta en los capítulos III y IV, de los acuerdos CD CVC No. 055 y 056 del 2008, en los que se atiende lo correspondiente a las competencias previstas en la Ley 99 de 1993 en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales y las previstas en la Ley 70 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995 en cabeza del Concejo Comunitario local.

Visión comunitaria

La región está habitada mayoritariamente por comunidades afrocolombianas, muchas de las cuales tienen asentamientos de larga tradición en la región. La población presenta un rápido crecimiento, la cual está representada en personas y familias que han llegado en años recientes de otras regiones costeras del litoral Pacífico, principalmente de los departamentos de Cauca y Nariño. En la cuenca hidrográfica del Río San Juan vive la comunidad indígena Wounaan, la cual tiene sus asentamientos en varios resguardos indígenas, los

cuales en términos generales colindan con los de las comunidades negras. De igual manera, hay presencia de mestizos, en menor proporción.

Desde esta perspectiva de ocupación del territorio, la visión comunitaria de manejo del área de Bahía Málaga se enmarca en la Constitución Nacional de 1991 y en los principios esbozados, en el capítulo 2, artículo III, de la Ley 70 de 1993, que expresan:

1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.

Fortalezas y debilidades del proceso

La reflexión acerca del proceso hasta ahora trabajado y en proceso de construcción permite identificar algunos elementos que potencian y fortalecen el camino recorrido, así como también otros que deben ser considerados y armonizados para lograr la meta común, de conservación y manejo del Mosaico de Conservación de Bahía Málaga. En esta mirada se identifican como fortalezas:

- La declaratoria de las áreas protegidas es el resultado de iniciativas comunitarias que con soporte técnico y apoyo de comunidad

académica y científica fundamentaron los criterios de existencia de las diferentes figuras de conservación, que conforman el mosaico de conservación de Bahía Málaga.

- La Planificación y manejo de las áreas protegidas es de manera conjunta y reglada mediante resoluciones ejecutivas. El ordenamiento y manejo de las áreas protegidas se construye como una opción propia o autodeterminación de las comunidades con ejercicio equiparable y legal al interior de cada área protegida.
- Apoyo en cooperación nacional e internacional para el soporte funcional del manejo conjunto.
- Se reconocen como debilidades del proceso:
- La manera como se socializa y transmite la información al interior de las comunidades.
- La apropiación social del área protegida.
- Dificultades políticas de relacionamiento por diversas visiones del territorio por parte de los diferentes Consejos Comunitarios.
- La validez de la representación y participación.
- La falta de titulación colectiva en algunos consejos comunitarios que influye en la gobernanza sobre el territorio.

Apuesta en común: un desafío institucional y comunitario

La conformación y puesta en marcha de la Mesa Local Pacífico Oeste, del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca, con la participación de todos los actores sociales comunitarios y gubernamentales que hacen parte del Mosaico de Conservación de Bahía Málaga, se constituye en una apuesta en común. Esta apuesta permitiría la participación, discusión, análisis y construcción colectiva de una estrategia conjunta de manejo y conservación ambiental y cultural de las áreas protegidas y de estrategias

complementarias de conservación, que forman el Mosaico de Conservación de Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano.

Esta apuesta de trabajo en común, en el Valle del Cauca, es complementaria con la ruta para la implementación de la estrategia de participación de los actores comunitarios, en el Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico colombiano SIRAP Pacífico, que se está construyendo a nivel regional.

Bibliografía

- Asociación para el Estudio y Conservación de las aves acuáticas en Colombia, CALIDRIS & Universidad del Valle, Departamento de Biología, Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades Aviarias. (1998). *Evaluación de áreas importantes para aves marinas y playeras en el Litoral Pacífico colombiano*. Santiago de Cali, 116 pp.
- Consejo Comunitario de la Ensenada de Málaga. (2005). *Código de régimen interno de la comunidad negra de la ensenada de Málaga y su territorio colectivo: reconstruyendo identidad, cultura y mejores niveles de bienestar ambiental*. 39 pp.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) & Orejuela, J.E. (1999). *Diseño del Sistema Departamental de Áreas de Manejo Especial para la conservación de la biodiversidad en el departamento del Valle del Cauca*. Santiago de Cali, 128 pp.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. *Resolución de la Dirección General de la CVC Número 0752 de 2005*.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). *Resolución Número DG 752 del 18 de agosto de 2005*.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección Técnica Ambiental y DAR Pacífico Oeste (CVC). (2005). *Determinación de Objetivos de conservación y la necesidad de establecer áreas de conservación en Bahía Málaga*. Santiago de Cali, 40 pp.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). *Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC Número 028 de agosto 9 de 2005.*

Forero, G. J., Olmos, S. J., Puentes, E.J. & Comité Interinstitucional de la Región de Bahía Málaga. (1992). *Pautas para el ordenamiento territorial y manejo ambiental de la región de Bahía Málaga (departamentos del Valle y Chocó).* Santiago de Cali, 270 pp.

Fundación Centro de Investigaciones del Pacífico & Fundación CENIPACÍFICO. (1998). *Propuesta de ordenamiento territorial de la Región de Bahía Málaga: Oferta ambiental.* Santiago de Cali, 45 pp.

Fundación Centro de Investigaciones del Pacífico & Fundación CENIPACÍFICO. (2004). *Plan de manejo del ecoturismo en Bahía Málaga.*

Fundación Centro de Investigaciones del Pacífico & Fundación CENIPACÍFICO. (2006). *Propuesta de categorías y áreas de conservación y uso sostenible del territorio colectivo del Consejo Comunitario La Plata-Bahía Málaga.* Santiago de Cali.

Ávila, I., Capella, J., Falk, P., Flórez, L., Herrera, J. & Tobón, I. (2005). *Área Marina de Conservación en Bahía Málaga: Importancia para las ballenas y otros mamíferos marinos.* Serie Documentos Técnicos: FY-01-06/2005. Cali: Fundación Yubarta, 7 pp.

Ávila, I., Capella, J., Falk, P., Flórez, L., Fernando, F., Gibbons, J., Guzmán, H., Haase, B., Herrera, J. C., Peña, V., Santillán, L., Tobón, B. & Van Warebeek, I. (2007). *Estrategia para la conservación de la ballena jorobada del Pacífico Sudeste. Lineamientos de un plan de acción regional e iniciativas nacionales.* Cali: Fundación Yubarta. 106 pp.

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA). 2005. *El desarrollo de acciones tendientes a la consolidación y el fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) Área Bahía Málaga.* Convenio Interadministrativo CVC-INCIVA No. 200 de 2003 Informe Final. 124 pp.

Invemar & Universidad del Valle e INCIVA. (2005).

Bases Científicas y valoración de la biodiversidad marina y costera de la Bahía de Málaga (Valle Del Cauca), como uno de los instrumentos necesarios para que sea considerada un Área Protegida.

Informe Preliminar. Santiago de Cali, 11 pp.

Orejuela, J., Córdoba L., Rosero, A., Mosquera, D., Hurtado, J. D., Molano, M., Moreno, M., Gamboa, J., Salazar, M., Arias, J., Cuero, M.

& Mosquera, E. (1997). *plan comunitario de desarrollo ambiental de Bahía Málaga, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia.*

Ladrilleros, Bahía Málaga, Buenaventura, 69 pp.

Vásquez, J. y Falk, P. & Colectivo Comunitario e Institucional por la conservación de los valores naturales y culturales de Bahía Málaga. (2007).

Plan Estratégico. Santiago de Cali, 78 pp.



Sostenibilidad integral del manglar con comunidades locales en un área protegida (DMI Bahía Cispatá)



Ignacia de la Rosa Pérez

Asociación Comunitaria de Mangleros Independientes

La bahía de Cispatá en Córdoba recibe las aguas del río Sinú que transporta gran cantidad de sedimentos provenientes de las serranías del Parque Jaramillo en el Alto Sinú generando un área muy fértil que es aprovechada por colonos y descendientes de comunidades afro escapados de Cartagena y otros pueblo del Caribe. Éstos se asentaron en los manglares, playas, ciénagas y márgenes de los ríos de la bahía de Cispatá, donde la productividad del mar y del suelo les permitió vivir de los recursos pesqueros, la caza de animales y la extracción de recursos como madera y taninos empleados para curtir cueros, entre otros.

Con el cambio de la desembocadura del río Sinú de la bahía de Cispatá a Tinajones, ocasiona un cambio no solo físico, sino biológico, al pasar de deltaico a estuarino, ocasionando lentamente la desaparición de la agricultura y la ganadería

en la zona. No obstante, el manglar aumenta su producción y por esta razón las comunidades afrodescendientes continúan con sus actividades extractivas y con sus parcelas de agricultura en fincas aledañas a la bahía de Cispatá. Pero en 1973, los mangleros se marchan al casco urbano de San Antero, Lorica y otros pueblos debido a la escasez de agua dulce, desde allí continuaron aprovechando el mangle.

En 1976 la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS comunican a los mangleros la noticia de que el Inderena suspendía, hasta nueva orden, los permisos de aprovechamiento y salvoconductos para transporte de maderas de mangle. En este momento, se agrupan en una organización independiente con el fin de conseguir que los escuchen y les devuelvan las licencias porque ellos no tienen otra forma de ganarse el sustento para

sus familias. Es así como, en el mismo año, después de una visita al manglar por parte del Inderena, a la CVS y otras entidades les es otorgada la única licencia nacional para aprovechar mangle.

Los mangleros preocupados por las grandes extensiones de mangle muerto en el centro del bosque se reúnen y comentan el problema con Ignacia de La Rosa, quien viene liderando estos procesos. Ella se reúne con los mangleros más viejos y estos dicen que la situación se debe a la desaparición de los caños que refrescaban el bosque de manglar. Al cerrar estos caños, el bosque se vuelve un horno y por eso muere el mangle. Así que se trasladaron a la zona para buscar evidencias y se pudo constatar la realidad.

En el año 1989, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Zona de Manglar Antiguo Delta del río Sinú es entregado por la firma INCO Ltda. a la CVS y al DNP, con la información suministrada por los ancianos y es entregada a la CVS pensando que sería suficiente. Pero en 1991, en un foro al que no fueron invitados los mangleros, al que asistieron gracias a una invitación informal de algunos pescadores de la zona, fueron llamados depredadores ecológicos, generando entre ellos reacciones de protesta, pues los asistentes creyeron que el mangle había sido cortado por los mangleros.

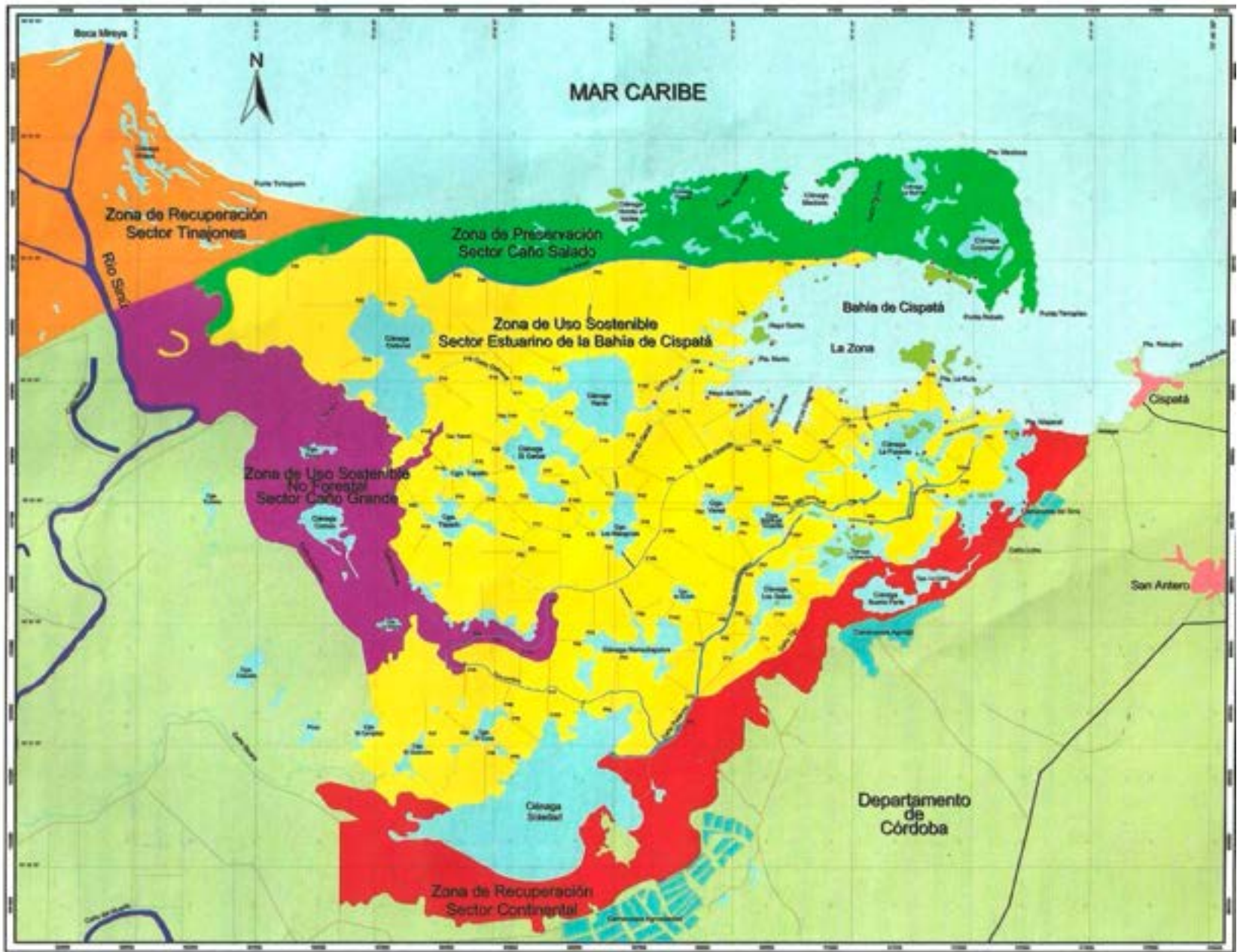
En el momento en que los mangleros intervienen para defenderse de los que los acusan, un periodista tomó fotos, hizo una entrevista y publicó un artículo sobre la existencia de los salitrales. Desde ese momento, un ingeniero forestal de la CVS se interesa por los manglares y es así como en 1993 se desarrolla el primer trabajo de reapertura de caños, para restaurar un salitral en Ciénaga de Mestizos y el caño Salao. Son sembradas 5.000 semillas de mangle en forma directa con el acompañamiento de la Universidad de Córdoba, CVS, Alcaldía de San Antero, Gobernación de Córdoba y estudiantes del Colegio de Bachillerato de San Antero.

El día 2 de febrero de 1993 se constituye, mediante Acta No. 01 de Asamblea General de Asociados, la Asociación de Mangleros Independientes de San Antero y es inscrita ante la Cámara de Comercio de Montería el día 12 de marzo de 1997, como organización sin ánimo de lucro.

El objeto de la asociación consiste en las siguientes actividades:

- Promover el desarrollo socioeconómico y cultural de sus asociados.
- Promover el intercambio comercial de los productos obtenidos de los recursos naturales del desarrollo sostenible.
- Promover la búsqueda de mercados para la transformación e incremento del valor agregado en la comercialización de los recursos naturales.
- Velar por que la explotación y exploración de los manglares de la zona sean hecha ajustándose a los preceptos legales y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutadas por las corporaciones regionales y autoridades locales.
- Continuar con la restauración de las zonas de manglares degradados.

La Asociación de Mangleros Independientes cumple sus objetivos organizando proyectos de capacitación en gestión de proyectos ambientales, como mantenimiento de caños, reforestación de arroyos y educación ambiental, resolución de conflictos, participación ciudadana, derechos humanos y educación para adultos. También participa en los inventarios forestales y estudios que hace la corporación CVS como conocedores de la zona y es quien se encarga de guiar a las comisiones de investigación.



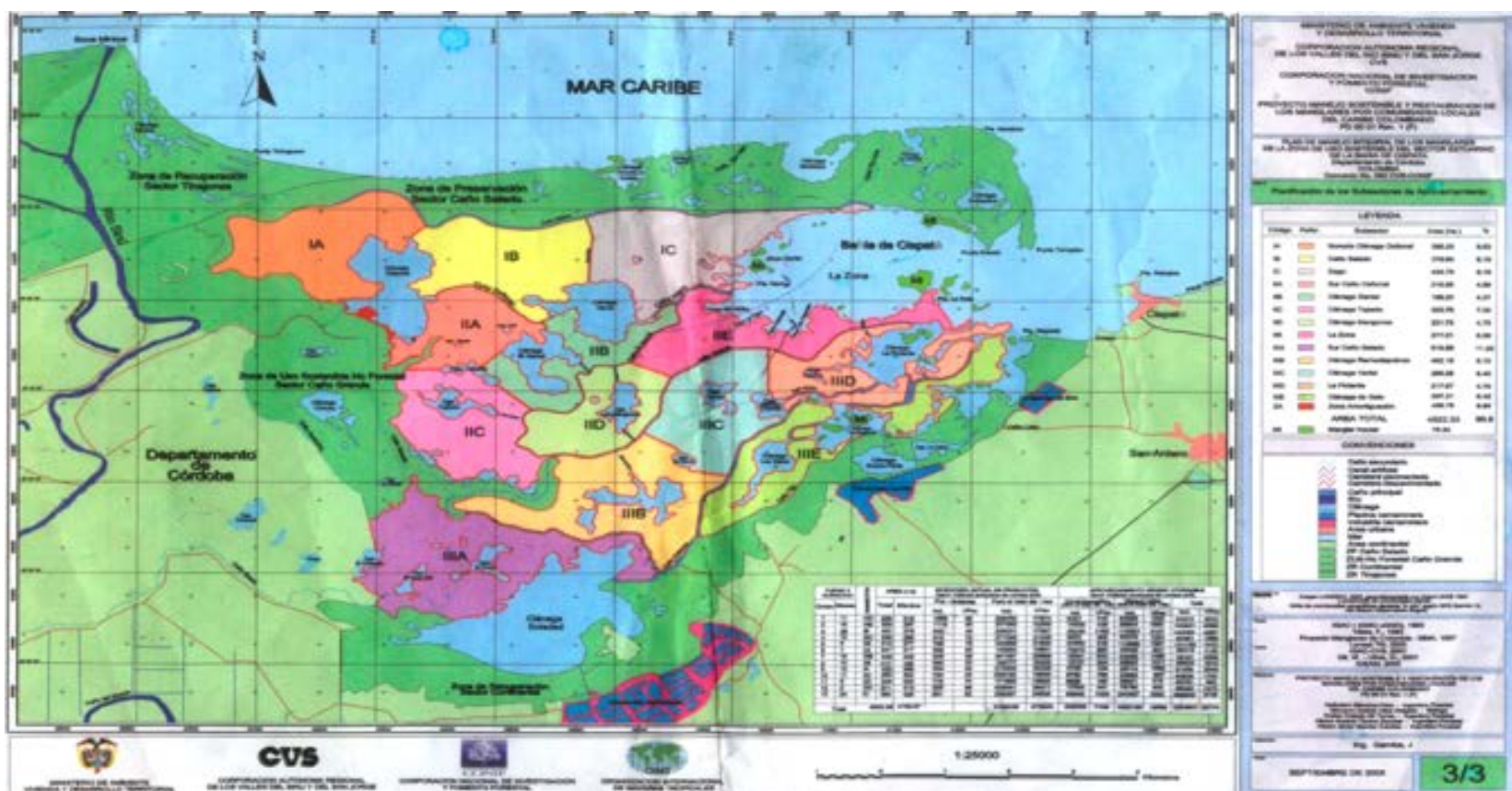
Mapa 1. Mapa de zonificación.

En 1995, es entregado a: Ministerio del Medio Ambiente, Dirección Nacional Forestal y Vida Silvestre, Organización Internacional de Maderas Tropicales Proyecto P D 171-91rev.2 (F) Fase 1 el estudio Diagnostico y Zonificación Preliminar de los Manglares del Caribe Colombiano (elaborado por Eliodoro Sánchez Páez y Ricardo Álvarez León).

En el año 2005, es entregado el Plan de Manejo Integral de los Manglares de la Zona de Uso Sostenible del Sector Estuario de la Bahía de Cispatá, Departamento de Córdoba, Colombia, elaborado por Eliodoro Sánchez Páez, Giovanni Andrés Ulloa Delgado, Héctor Arsenio

Tavera Escobar, Walter Octavio Gil Torres, a las siguientes entidades: Ministerio de Ambiente, Vivienda de Desarrollo Territorial, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF, Organización de Maderas Tropicales OIMT.

- Norte: Zona de preservación sector Caño Salao.
- Sur: Zona de preservación sector continental.
- Oeste: Zona de recuperación sector Tinajones, zona de uso sostenible no forestal.
- Este: Mar Caribe.



Mapa 2. Mapa de uso sostenible sector estuario de la Bahía de Cispatá.

La zona de uso sostenible está conformada por 13 parcelas de aprovechamiento, de estas parcelas es de donde la CVS autoriza las licencias de aprovechamientos y salvo conductos para el transporte de los productos a cualquier sitio del país o fuera de el y es controlado por medio de inventarios realizados por los mangleros y guiados por los profesionales contratados para la implementación del Plan de Manejo.

La Asociación de Mangleros Independientes de San Antero eran personas que vivían en completo hacinamiento, aun con los animales domésticos, algunos no sabían leer ni escribir, existía violencia intrafamiliar, no se conocían los derechos de la mujer, infancia y adolescencia, se consumía mucho ron (ñeque).

La comunidad de mangleros no era reconocida dentro de la sociedad, no tenía acceso a créditos ni participaba en las políticas públicas para la toma de decisiones en proyectos de desarrollo personal, social y comunitario.

Ente los logros obtenidos por la Asociación de Mangleros tenemos:

- Participar en los estudios realizados en los manglares por las corporaciones y otras entidades.
- Ser reconocidos en su trabajo como mangleros.
- Tener participación en los concejos de desarrollo territorial, rural, social, juntas de acción comunal, tener una vivienda propia.
- Estar participando en la implementación del plan de manejo de la zona de uso sostenible en la bahía de Cispatá, con una licencia de aprovechamiento de maderas en forma legal.
- Obtener educación para los hijos de lo mangleros en los colegios estatales, universidades, el SENA y educación no formal para los adultos.

Se han recibido capacitaciones de CVS, Alcaldía de San Antero, ARD Colombia, Fundación Oleoductos de Colombia, WFF, GTZ, ASIF, Universidad del Sinú, Ecopetrol, UMATA de San Antero, Gobernación de Córdoba

La Asociación de Mangleros Independientes de San Antero, entre los años 1993 y 2011, ha restaurado 512 hectáreas de mangle por siembra directa de semillas y plántulas producidas en viveros; realizó la reapertura de 21.000 m lineales de caños y el mantenimiento de 28.000 m de caños en el manglar de la Bahía de Cispatá, con el apoyo de CVS, Ministerio de Ambiente, Cardique, Carsucre,

Alcaldía de San Antero, Ecopetrol, Ocesa y Oleoductos de Colombia y Proyecto Manglares de Colombia. La producción y recolección anual de productos agrícolas es aproximadamente de 50 toneladas de ñame, 5 toneladas de yuca y 6 toneladas de maíz y algunos frutos, como la patilla, entre otros.

Otra de las actividades que realizan son la pesca artesanal y la recolección de mariscos y crustáceos para su consumo.

Alrededor del Plan de Manejo, existen otros proyectos como conservación del caimán, producción de peces en jaulas, granjas integrales, programas ecoturísticos y de ganadería.



04

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

**Estrategias complementarias de
conservación y biodiversidad rural-urbana**

Síntesis



Índice

Este ejercicio se realizó con base en las ponencias institucionales y comunitarias realizadas en el Simposio 5. Brevemente reúne los siguientes aspectos:

El tema de las áreas protegidas y el ordenamiento ambiental es distinto dependiendo de qué tan lejos vive uno del área protegida

No es lo mismo ser un campesino o un indígena que vive allí en estas zonas o una persona que vive en otra parte. Dichas diferencias pueden ser:

Las percepciones del centro son más abstractas; es decir, un parque nacional es una definición abstracta mientras uno no lo recorra; es un nombre, una localización; una ubicación en un mapa

(que también es una representación abstracta) y probablemente un texto de una Ley o Decreto Ley. En el caso de aquellos donde actualmente trabajo, el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), donde el Decreto Ley 1989 de 1989, que en su esencia era casi perfecto, pues estaba muy bien formulado, con ciertos términos perentorios como inembargable, inajenable e imprescriptible. Este último concepto es fuerte, pues significa “para siempre”. Así, estos son términos perentorios para la definición de un área protegida.

Por su parte, ya en terreno, un campesino llega buscando donde hacerse porque lo han sacado de otras partes o porque en esas otras partes no tuvo oportunidades para sostenerse. Entonces llega a un territorio. El ve el territorio, y lo ve como una

oportunidad y se vuelve una oportunidad para su familia. Sin embargo, en algún momento se “entera” de que hay una norma sobre ese territorio y, como lo mencionó el alcalde de Leguizamo, empieza a ver al parque como una amenaza, mientras que, donde se formuló la norma se planteó como un instrumento para el bien común, se habla de la conservación, que favorece a la Nación en su conjunto, pero el campesino lo ve como una amenaza y allí hay un problema.

Es muy importante mirar cómo están formulados los temas relativos a los parques, como se formulan las leyes; por ejemplo, los *límites*, ¿dónde es un parque y dónde no lo es? Pero allá en el campo, porque en el mapa es clarísimo, pues uno ve las líneas e incluso se puede leer las coordenadas y realmente es sencillo. Por ejemplo, mirando el Decreto Ley 1989 de 1989, que redefinió el parque de La Macarena y su área de manejo especial y dice cosas como estas: «del punto número 37 se sigue aguas arriba por el río Samsa hasta encontrar la desembocadura del caño nuevo donde se localiza el punto número 38». Entonces, si uno va caminando y encuentra un puente colgante y un río muy bonito, ese es el río Samsa, y luego “estoy en el parque”, a no ser, porque uno no ve bosque, uno ve unas vacas y unos potreros y si sigue caminando, ve cultivos de coca por todas esas laderas y claro, por supuesto, entra en la selva también. Pero miren este siguiente punto: “se sigue en la línea recta imaginaria de azimut de aproximado 80 grados y distancia aproximada de 45 km hasta su intersección con el río Cabra». Lo único que entendí fue “río Cabra”.

¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de límites, que son límites que están en el mapa, pero no son posibles de diferenciar en terreno, ¿entonces? Hay campesinos que llevan 30 años preocupados por saber si su finca está parcialmente dentro del parque, o totalmente dentro del parque. Un Decreto Ley formulado hace 24 años todavía no es una realidad clara para las comunidades.

Se ha avanzado, pero los compañeros de Parques Nacionales que trabajan en nuestros procesos, en el territorio, saben que se llega a una alcaldía y le habla al alcalde del AMEM y se piensa que es cristiano, no saben lo que es el Área de Manejo Especial de La Macarena, muchos de los que viven allá hace mucho tiempo no tienen ni idea.

¿Todo esto para qué? Para decir que no basta con la política, tampoco con el buen diseño de la política. Ya lo mencionó el alcalde de Leguizamo: “hay que trabajar para que las personas entiendan de qué se trata, para que ese parque, que parece una amenaza, se convierta en una oportunidad”. Y, esto es importante porque en las conversaciones de paz, nos vamos a dar cuenta de que el concepto de *conservación* también lo comparten ellos (la guerrilla); porque ellos también sienten que *ya es la hora, se están secando los ríos*. La gente le dice a uno en el territorio: “los caños veraneros se secaron”, entonces ellos entienden de lo que se trata.

Hay que tratar de no enfrentar la discusión desde las posiciones

Si vamos al parque La Macarena a una zona entre San Juan de Arama y Mesetas y un campesino que vive dentro del parque, un señor de 70 años, delgadito, pero se ve fuerte y sano, le dice a uno: “¡Yo llegué aquí hace 45 años y de aquí me sacan muerto!”; entonces, esa es una posición. Uno no puede negociar así. ¿Qué más hacemos?.

Lo mismo pasa con el Estado, que plantea unas cosas que son “inamovibles”; si se plantea en esos términos, pues no hay nada que discutir. Si decimos “no vamos a cambiar nuestras posiciones, pero no las vamos a colocar en primer lugar”; entonces, empezamos a hacer algo que también aparece en la presentación de Carolina Jarro: ¿cuáles son nuestras necesidades y nuestros intereses? Y es posible que mirando necesidades e intereses encontremos puntos de acuerdo.

Si la necesidad de los campesinos es la conservación y la necesidad del Estado es la conservación, podrá haber algún punto de acuerdo. Ángel Torres de Anzorc no lo mencionó; pero, en la zona de Lozada-Guayabero, cada campesino tiene por lo menos 80 ha de conservación, eso es conservación y no está dentro de un parque. Mucha de esa conservación está entre el interfluvio del Lozada perdido, y allí se contribuye a los objetivos de conservación.

Se debe trabajar con las organizaciones, no importa si son de carácter productivo o de carácter político, lo importante es que tengan capacidad de convocatoria

En la zona en donde estamos trabajado, buena parte de la conservación se debe a las normas de la guerrilla, que ha dicho “prohibido matar danta”, “prohibido matar cajúche” “prohibido pescar amarillo”. Hay zonas importantes en donde no se ha tocado un árbol.

Surge la pregunta: cuando se firme el acuerdo de paz y se logre una desmovilización ¿qué va

a pasar con eso? En general, una desbandada de depredadores, porque eso es lo que ocurre cuando hay tanta riqueza natural. ¿Quién puede garantizar la gobernabilidad ambiental en esos territorios? ¿Tienen que ser las comunidades! y las instituciones deben darle fuerza a las comunidades para que eso ocurra.

Un ejemplo de eso es lo que contó Ignacia de la Rosa con los mangleros de Cispatá, que muestra algo hermoso porque es recuperar algo que estaba acabándose, ¿con base en qué? En el trabajo comunitario, con un aspecto muy importante que ella resaltó y es la articulación institucional. Pero, para que podamos conversar, tenemos que escucharnos. Y este es un elemento clave.

El diálogo es la vía más demorada

Quizás si se hubiera tenido desde el principio, no tendríamos estos problemas. Hay que conversar, y conversar y conversar y seguir conversando.



Archivos Parques Nacionales Naturales. Javier Serna.

05

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Estrategias complementarias de
conservación y biodiversidad rural-urbana

Plenaria



Índice



Zoraida Guevara, *Unidad de Planeación Rural Agropecuaria*; **Carolina Jarro**, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, *Parques Nacionales Naturales de Colombia*; **Lida Riascos**, *Fundación San Cipriano*; **Ignacia de la Rosa**, *Asociación Comunitaria de Mangleros Independientes*; **Hoover Carabalí**, *Bahía Málaga*; **Héctor Fabio Gómez**, *Corporación Autónoma Regional del Quindío*; **Miguel Ángel Rubio**, Alcalde, *Leguízamo*

En la plenaria con los expositores se realizaron preguntas propuestas por los asistentes al Simposio 5.

El primer bloque de preguntas se realizaron a la representante de la UPRA, Zoraida Guevara así:

¿Qué papel juegan las variables culturales en los lineamientos que se están construyendo desde la UPRA?

Zoraida Guevara. En los diferentes ejercicios que está haciendo la UPRA, las variables culturales están siendo tenidas en cuenta tanto para los procesos de evaluación de tierras, donde lo que se busca es identificar la aptitud del suelo, no solo basado en criterios biofísicos, sino en criterios socioeconómicos y parte de esto, es la identidad cultural que hay en el territorio. Estas variables culturales están siendo tenidas en cuenta tanto en los procesos de formulación de ordenamiento de la propiedad como en los ejercicios de zonificación forestal, evaluación de tierras y mercados de tierras.

¿Cómo detener la tendencia de acumulación de tierras en el país?

Zoraida Guevara. Actualmente se trabaja en un proyecto que va de la mano de formalización. Este proyecto, incluye parte de una estrategia para contener la extranjerización, que es algo que no está contemplado en la legislación colombiana, y la acumulación de tierras en diferentes formas. Se está abordando a través de desarrollos normativos al interior de la UPRA.

¿Qué se plantea en términos de política para armonizar las diferentes figuras de ordenamiento cuando se traslapan en un mismo territorio?

Zoraida Guevara. Se está trabajando en unas agendas interministeriales. En ese marco, se está viendo como se pueden conciliar o coexistir realmente las diferentes figuras de ordenamiento, cada una con diferentes fines. Se espera tener, para el primer semestre del 2015, un consolidado e incluso una propuesta

de ajuste normativa de algunos de los decretos que consideramos es importante modificar, ya que hasta ahora el ordenamiento territorial solo tiene en cuenta las variables ambientales desde los determinantes ambientales de las CAR; pero no hay lineamientos del sector agropecuario para que también aporten allí.

¿Cuál ha sido el proceso de resolución de conflictos con respecto a la permanencia de las comunidades dentro de las áreas protegidas? ¿Quiénes han sido los mediadores? ¿Cuál es el estado de tenencia de las tierras y si estas personas ubicadas en estas áreas tienen escrituras?

Carolina Jarro. Parques Nacionales Naturales, desde su gestión, ha venido enfrentando diferentes situaciones que nos han llevado a aprender a generar respuestas y buscar soluciones a los conflictos en diferentes contextos; por ejemplo, cuando se declara un área que tiene traslape con territorios, indígenas muchas de estas áreas se han trabajado de manera conjunta; no obstante, en alguna ocasión se ha dado por ejemplo que luego aparece un interés, ya sea por algún tipo de sector en donde las comunidades también cambian parte de su posición frente a la declaratoria. Allí entramos a revisar parte de los objetivos del por qué fue creada y en conjunto se busca generar una alternativa o una solución para ese conflicto.

Esto es lo estamos viviendo con las organizaciones campesinas. Aquí, la experiencia nos ha permitido aprender que tenemos que construir también con las organizaciones que en este momento están al interior de los parques y que si bien los vemos como un problema, son mucho más parte de esa solución. Ver como esas poblaciones campesinas y colonias pueden entrar a realizar acciones en torno a la conservación que permita la integridad de esas áreas protegidas; pero que también generen alternativas que reduzcan las tasas de deforestación y de transformación.



Actualmente, con respecto al estado de la tenencia de todos los predios que se han estudiado de las áreas de parques, con información que ha suministrado el IGAC (alrededor de 6.000 predios), se han podido estudiar más o menos unos 2.900. Se tiene que tan solo un 30% acredita propiedad, lo que quiere decir que ese 70% son mejoratorios o que se van a procesos de recuperación agraria. Lo anterior implica un reto en el tema de compra de mejoras y que la mejora se compre, no como dice la ley agraria, que entre más intervenido esté el predio con procesos productivos más valor tiene, sino que, entre mas conservado esté el predio, más valor pueda dársele. De igual forma, es un reto empezar a trabajar alternativas y firmar acuerdos donde, como Estado, pueda haber una respuesta a esa población campesina y colona que está al interior de los parques. Lo mismo sucede con las poblaciones afro, en donde con ellos, definitivamente hay una alta oportunidad y unas grandes posibilidades de poder trabajar en conjunto la construcción y la conservación de estas áreas protegidas.

¿Es posible la existencia de una Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) al interior de un parque nacional?

Carolina Jarro. No es posible. Las RNSC son otra categoría del SINAP, que funciona muy bien y, de hecho, Parques Nacionales promueve su creación, pero en zonas de influencia de los parques. Ya serían dos categorías de conservación que no pueden traslaparse sobre el territorio.

¿Por qué el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales están autorizando la explotación de recursos naturales en las zonas de las áreas protegidas, violando la ley, la Constitución y el Acuerdo 169 de la OIT y en particular el derecho a la consulta libre e informada en territorios indígenas?

Carolina Jarro. Aquí hay que tener en cuenta que, dentro de las diferentes categorías existentes que conforman el SINAP, hay dos categorías que son de conservación estricta, de preservación, son las categorías o las áreas de los parques nacionales naturales y los parques regionales y hay otras categorías de áreas que permiten el uso. Aun así, cualquier tipo de actividad dentro de un parque nacional tiene que ser acorde con sus objetivos de conservación y en el marco de las actividades permitidas; por lo tanto, no se puede, por ejemplo, autorizar o licenciar un título minero ni un bloque petrolero. No obstante, por ejemplo, actividades permitidas como el ecoturismo en áreas en donde de acuerdo con el plan de manejo sean consideradas en su zonificación como de alta densidad de uso o de recreación general exterior, podría darse un proyecto ecoturístico siempre y cuando haya licenciamiento.

Para el caso de las otras áreas del SINAP es posible, por ejemplo, actividad productiva, o actividad minera y aun actividad hidrocarburífera, siempre y cuando medie la licencia ambiental; así es como está constituido el marco normativo que rige el SINAP.

Con el tema de consulta previa, en ningún momento se debe omitir este paso cuando efectivamente están las comunidades o hay presencia de ellas y además obviamente se certifica, necesariamente hay que garantizarles el derecho a la participación, pero también el derecho a la consulta previa.

¿Cuáles son los mecanismos de participación comunitaria para concertar esta política?

Carolina Jarro. Parques Nacionales Naturales cuenta con una política de participación que se ha venido implementando muy fuertemente con las comunidades afro y comunidades indígenas y que ahora muy fuertemente ha comenzado a trabajar con comunidades campesinas y colonas.

¿En qué consiste la relocalización digna de la población que se encuentra en los parques?

Carolina Jarro. Es poder llegar a un acuerdo, donde efectivamente se logre la salida de parte de esta población, es una relocalización voluntaria, donde como una respuesta del Estado, esa relocalización se pueda dar y esa persona pueda recibir tierra y por ejemplo un acompañamiento en la implementación de un proceso productivo que le permita, adicionalmente, recibir toda la atención del Estado. Al interior de un parque, esta población no puede recibir un crédito, no puede recibir educación, no puede recibir atención en salud, entonces definitivamente las posibilidades son muy reducidas y lo que se está buscando es mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.

¿Cuál es la disposición de la institucionalidad pública ambiental para reformular y actualizar la normatividad ambiental?

Carolina Jarro. Hay temas como por ejemplo la compra de mejoras, de la que hablé hace un momento. El tema de compra de mejoras

definitivamente requiere un ajuste en la normatividad, pero necesita un planteamiento desde lo técnico. Obviamente, cada proceso de construcción se irá dando dentro del campo que hay que recorrer para lograr la conservación de estas áreas protegidas.

El siguiente bloque fue para el representante de ANZORC, Ángel Torres, quien respondió las siguientes preguntas:

¿Cómo se solucionan los conflictos entre zonas de reserva campesina (ZRC) y proyectos de infraestructura, por ejemplo hidroeléctricas?

Carolina Jarro. Lo que se plantea, cuando se piense desarrollar esos proyectos en las áreas de las ZRC, que existen legalmente, se deben consultar los proyectos antes de ejecutarse. Por esta razón, estamos exigiendo los derechos campesinos y debemos luchar para que se nos reconozcan y que sea consultado, porque somos nosotros los que vivimos en esos territorios, sabemos qué es lo que sucede allí.

¿Qué proyección hay a largo plazo de esta experiencia que usted presentó? Esta pregunta surge porque hay una comunidad que conserva recursos naturales desde hace 30 años, pero hoy no puede hacer uso de esos recursos.

Carolina Jarro. Hemos venido planteando que no queremos talar más; pero que haya compromisos de las instituciones y del gobierno para que nuestras familias puedan sobrevivir dignamente. A largo plazo, venimos trabajando para convertirnos en guarda parques, sin sueldo, porque por ahora la instituciones ganan la plata y nosotros conservamos. Eso es una de las cosas que suceden, incluso con las CAR y Parques. A pesar de que somos las comunidades las que protegemos prácticamente lo que queda en muchas zonas. Si no fuera por las comunidades, ya no existirían muchos pedazos grandes de parques que se conocen.

¿Cuáles han sido las principales limitantes con las cuales se han enfrentado, en la constitución y funcionamiento de las ZRC, en la interlocución con instituciones dedicadas a la conservación como Parques Nacionales Naturales?

Carolina Jarro. Con Parques no hemos tenido limitantes para la creación de las ZRC, teniendo claro que estas áreas en estos momentos no pueden traslaparse con parques; pero sirve como zona de amortiguación alrededor de los parques, que es lo que hemos venido planteando, e incluir aquellas que están muy afectadas, correr el límite del parque para que esa área se anexe a la ZRC.

Una limitante ha sido a través de otras instituciones del Estado, que no han permitido avanzar en la constitución de las nuevas ZRC que se han propuesto, y los recursos que necesitan los planes de desarrollo, que hoy en día tienen las 6 ZRC constituidas desde 1999.

¿Cómo sería una reubicación efectiva en la tercera propuesta?

Carolina Jarro. Nosotros estamos planteando que la reubicación debe ser elaborada y concertada con las comunidades y con garantías. Esa fue la propuesta que se hizo a la institución y cuya idea es que, después de la última reunión, salgamos a elaborar la propuesta con la comunidad.

¿Cuáles son las acciones que en el contexto del ordenamiento territorial se han llevado a cabo para compatibilizar y buscar soluciones a la situación de tener un parque nacional en todo el municipio?

Miguel Ángel Rubio. En mi presentación mencioné que el principal problema de tenencia de tierras en Leguízamo es la existencia del parque y la Ley 2 de 1959. Lo primero que hemos hecho es concertar con la institucionalidad, posicionar el tema a nivel



nacional y hoy hemos recibido la noticia de que en el DNP somos proyecto piloto. La UPRA nos tiene como proyecto piloto, con lo que logramos conseguir los recursos por parte de la gobernación del departamento, por parte del gobierno nacional, y por parte de Corpoamazonia hay unos compromisos. La próxima semana los concretaremos. En el tema de ordenamiento territorial de Leguízamo, creo que lo principal era eso, que la institucionalidad entienda la situación que tenemos, pero que también nuestros campesinos e indígenas se involucraran. Por eso hablamos del conversatorio social, hemos hablado del posicionamiento de los pueblos indígenas para darles autonomía en sus cosas, como por ejemplo la educación de los pueblos Quichua y Muruy; ahora estamos trabajando el Sispen lo que tiene que ver con salud. De igual manera, Parques Nacionales viene concertando con ellos también el manejo de esa área protegida. No es fácil, como alcalde es el tema más complejo que manejo, pero se ha ido posicionando e involucrando a las instituciones relacionadas. Si un alcalde quiere hacer las cosas solo, va a ser muy difícil; pero, cuando entiende que es sin pelear e involucrando a la comunidad y la institucionalidad, se logra y eso es lo que hemos hecho.

¿Cuál es el alcance del concepto de aprovechamiento forestal sostenible propuesto en la reserva forestal según la experiencia que usted presentó?

Héctor Fabio Gómez. Nosotros no hemos llegado a ese concepto; es más, no lo utilizamos mucho sobre el aprovechamiento sostenible, dentro de lo que tenemos de nuestras áreas protegidas. Estamos implementando acciones que aportan a la conservación, como cerramientos, sacar el ganado de fuentes hídricas, o negociaciones para bajar 5-10 reses del páramo que significa mucho. Pero de este tema de aprovechamiento forestal sostenible no hablamos; no está muy claro para nosotros, no sé si para ustedes. Las acciones son enfocadas a conservación.

¿Qué experiencia exitosa en Colombia conoce usted de estrategias complementarias en áreas protegidas que tengan población dedicada a la minería?

Héctor Fabio Gómez. En muchos de los territorios que representan áreas protegidas en Colombia existen diferentes explotaciones de minería. Para el departamento del Quindío, que es de lo que yo puedo hablar, existen unos polígonos mineros que cuando usted los traslapa sobre las áreas protegidas, sobre los polígonos declaradas de las áreas, pues usted dice “ahí está”. Estamos en la zona alta con muchas presiones, pero las estrategias complementarias de conservación, precisamente se convierten en ese bastón que debe tener un área protegida, que debe de tener un sistema departamental de áreas protegidas. Es un deber fomentar esas estrategias complementarias de conservación; en el departamento del Quindío precisamente, muchas de esas intenciones de desarrollar proyectos mineros se han frenado por esas estrategias complementarias de conservación sumadas a las áreas protegidas.

¿Cómo vender una alternativa de conservación en un territorio en el que la minería es la principal entrada económica, partiendo de la idea de que seguramente las alternativas como el ecoturismo y la agricultura no proporcionan los mismos beneficios económicos?

Héctor Fabio Gómez. Pues nosotros hemos tratado de fomentar la conservación en los campesinos que viven en las zonas de áreas protegidas del departamento del Quindío porque todas tienen ocupación y todas tienen uso. Lo principal es fortalecer la organización comunitaria, integrar a esas comunidades presentes en las áreas protegidas bajo un proceso que, como decía el moderador, es necesario primero hacerlo, es hablar, conversar; hacerles ver a ellos que el área protegida puede tener mejores oportunidades desarrollando acciones sostenibles que vender su predio para la minería. No es fácil, es muy difícil cuando llevas 5, 6 u 8 años trabajando con la comunidad y de pronto baja la persona comprando predios, no solo para minería, sino para otras actividades. Allí se comienza un juego de intereses, donde si la comunidad no está organizada ni convencida de que se debe quedar allí, pues fracasa.

¿Cómo definieron el bono ecológico dentro del programa de ecoturismo que presentó?

Lida Riascos. El bono ecológico surge casi en el inicio del proceso, una de las líderes del comité veredal que les mencioné dijo “está entrando mucho turista a la zona y nos dejan los residuos, entonces, iniciemos pidiendo una contribución de 200 pesos para hacer el mantenimiento a la zona”; y así se comenzó a pedir la contribución y los turistas lo hacían. Con el paso del tiempo, el valor llegó a 1.500 pesos, que es lo que actualmente se le cobra a los turistas. Los niños menores de 10 años no lo pagan, pero esto es lo que nos permite tener el ingreso para mantener la Reserva.

¿Cuáles son los siguientes pasos para el sostenimiento de las iniciativas que ustedes presentaron?

Ignacia de la Rosa. Ignacia responde que los siguientes pasos son la construcción de unos acuerdos con la CVS para que las comunidades estén presentes en todos los procesos, ya sean científicos o de todo lo que se vaya a realizar en la Bahía, donde han vivido hasta ahora, que estemos ahí, para que no nos sorprendan con acuerdos con otras organizaciones que han entrado a la zona a hacer estudios en los manglares. Por ello, queremos que la CVS solicite la información para conocer qué es lo que están haciendo en la zona y poder participar en ellos, que se mejore la comunicación con las instituciones y demás actores.

Jaime Andrés Lozada. Jaime Andrés responde que en cuanto al tema de conservación tienen un panorama muy diferente al resto del país. De Otún Quimbaya hasta Parque Nevados, la ocupación del territorio por parte de campesinos es mínima, quizás de 10 a 15 habitantes en toda la cuenca, entonces a nivel de conservación hemos sido muy pasivos, simplemente, nos hemos vinculado a los procesos de formación, capacitación, de organización y ahora con el programa de ecoturismo comunitario de parques.

El paso a seguir es cómo hacer para que el turismo, como actividad comercial, que trae un sin número de impactos sociales, no impacte la vereda a nivel cultural. No queremos que suceda lo mismo que nuestros vecinos de Salento, porque allá el turismo llegó por “accidente”, como en muchos lugares del país. No ha sido algo planeado ni organizado y, justo cuando llega, detrás viene un montón de gente, sobretodo extranjeros con sus bolsillos llenos de dinero, a comprarle las casas al pobre campesino que no sabe qué hacer con ella. El extranjero ya tiene en mente un súper hostel con restaurante y una estrategia de comercialización que hará que venda demasiado.

Lo que buscamos los campesinos humildes, pero no tontos, con Yarumo Blanco, es poder replicar todos esos aprendizajes en la comunidad más grande, que es la vereda La Florida y es donde es la zona de amortiguación de estas áreas protegidas. Lo que queremos hacer allí es una construcción de identidad para lograr lo que ya hicieron en San Cipriano; son todos ellos beneficiándose, todos, de una actividad de todos, donde los recursos son para todos y no para los pocos inversionistas que vienen a llenar sus bolsillos. Nuestro paso es prevención de impactos negativos y potencializar los positivos.

¿Cómo se entiende el manejo conjunto?

Hoover Carabalí. Quiero ejemplarizar el esfuerzo que andamos haciendo los colombianos: mientras que alguna franja de los colombianos andamos buscando de manera consciente y desde el entendido de que sin naturaleza y territorio no hay vida, hay otra franja que no entiende eso, así como el auditorio está casi solo, así está el interés de la estructura y la infraestructura de Colombia en torno a protección y conservación de los recursos naturales. Por eso, es tan duro volver esto una realidad.

El manejo conjunto de una área protegida con presencia de algún grupo étnico en su interior es el esfuerzo de comanejo (manejo compartido) del área objeto de atención e interés de PNN y la comunidad referida, que tienen como base o fundamento artículos constitucionales y legales; así, como convenios internacionales. Parte tanto de los esfuerzos de distintos actores locales, como institucionales, que reconocen la importancia de las áreas desde el punto ecosistémico y estratégico; así como el reconocimiento de la existencia misma de los grupos étnicos que allí habitan. Es claro que a la conservación no hay que meterle

política ni economía, porque estas dos matan la conservación. A la conservación se le deben agregar dos elementos importantes: *el ser*, es decir lo que son los grupos étnicos, que son y existen en los territorios y por eso somos conservación y el *querer* parte del interés del Estado (institucional) que reconocer la importancia de la naturaleza, Colombia lo entendió en el 91 cuando en su constitución le incluyó estos elementos. Desde el enfoque económico y otro enfoque no hay posibilidad de conservación.

Bahía Málaga es un ejemplo de eso; las comunidades hemos puesto lo que somos en el territorio y la institucionalidad que pone lo que “quieren ser” desde lo institucional cuando hay voluntad política, a pesar de que existe una ausencia de regulación formal normativa entorno a los derechos que tienen las comunidades sobre sus recursos naturales en sus territorios.

Entendemos que el SINAP está haciendo esfuerzos muy buenos a nivel nacional, pero sentimos y entendemos que este sistema está solo, en la medida en que la infraestructura colombiana y la estructura de este país, no ve en la conservación un elemento trascendental para la vida y la existencia de los colombianos. Y aquí está el punto de quiebre entre lo que queremos los naturalistas y lo que quiere otro segmento del país.

La ausencia de reglamentación de la Ley 70 del 93 no es obstáculo para avanzar en la construcción de bases para el manejo conjunto de áreas protegidas con particularidad sociocultural; ya que, en el momento, se puede avanzar con el marco legal y constitucional existente, la reglamentación del capítulo 4 de la Ley 70 del 93, lo que establecerá con mayor claridad el alcance de este tipo de manejos compartidos y de manera específica con comunidad negra.

¿Por qué este ejercicio de comanejo que presentaron los compañeros de Bahía Málaga y que se realiza en Sanquianga, no se aplica en otras partes del país?

Carolina Jarro. Bueno, la apuesta es que en esas áreas que recientemente se han declarado y las que tienen traslapes con territorios indígenas se pueda hacer un manejo coordinado entre dos autoridades: la autoridad ambiental y la autoridad territorial ancestral, donde mutuamente haya un ejercicio de corresponsabilidad que permita lograr la conservación de ese territorio; pero también lograr la conservación de esa cultura que se protege también en ese territorio. La idea es que, efectivamente, se implemente en todos los territorios que tienen traslapes.

Hoover Carabalí. Hoover Carabalí. complementa la respuesta de Carolina Jarro. Menciona que el tema del manejo conjunto

no va a tener fuerza mientras el tema de los derechos especiales de los grupos étnicos, que de una u otra manera comparten un área, no tenga dientes. Parques puede tener mucha voluntad, políticamente hablando, pero este es un país de leyes y el ordenamiento jurídico colombiano no ha sido expreso con relación a los derechos de los grupos étnicos en sus territorios asociados al tema del manejo de corresponsabilidad en los territorios. Puede haber voluntad política, como la tiene Parques, un ejemplo de eso es el Parque Uramba Bahía Málaga y anteriormente a Uramba la teníamos allá en el sur, en Sanquianga; allí lo que hay de fondo es voluntad política, pero no hay formalidad en función del derecho que permita que esos dos actores (institucionalidad y comunidad) asociados a conservación puedan tener la misma fortaleza en torno al propósito.



 Archivos Parques Nacionales Naturales. *Carolina Rivera.*



03

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación y sostenibilidad financiera

Contenidos



Contexto general de
subsistemas de áreas...
pág. 122



Avances en la consolidación
de sistemas completos...
pág. 140



Sostenibilidad financiera:
construcción de sistemas...
pág. 166



Plenaria
pág. 194



Índice

Los *subsistemas regionales* se conciben como el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes, así como los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. Así mismo, se considera que al interior de los subsistemas regionales podrán conformarse subsistemas de áreas protegidas que obedezcan a criterios geográficos. Existen seis subsistemas regionales de áreas protegidas en Colombia: **Orinoquia, Caribe, Andes Occidentales, Amazonia, Andes Nororientales y Pacífico**. Por su parte, los *subsistemas temáticos* son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan; los subsistemas temáticos conformados a la fecha son: SIRAP Macizo, SIRAP Eje Cafetero, SIDAP Antioquia, Sistema de Áreas Protegidas Marinas (SAMP).

Se planteó como objetivo general conocer las experiencias en el diseño y consolidación de estos subsistemas de áreas protegidas en relación con la participación efectiva de los actores estratégicos, su planificación integral, su sostenibilidad y la efectividad en su gestión como contribución a la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Las preguntas que orientaron el desarrollo de este objetivo fueron:

1. ¿Cómo se acordó que operaría el subsistema y cómo está operando el sistema, quiénes lo conforman, quiénes lo integran, quiénes lo lideran?
2. ¿Tiene o no, y cuál considera usted, es la estrategia que garantiza que los actores permanezcan, se comprometan y que sus capacidades incidan en los procesos de planificación, la gestión proyectos u otras acciones a favor del subsistema?
3. ¿La planificación del subsistema incide en la toma de decisiones para la declaratoria de nuevas áreas, a partir de las prioridades de conservación nacional, regional, de los municipios, grupos étnicos y las comunidades locales?
4. ¿Qué factores inciden en la toma de estas decisiones?
5. ¿Qué dificultades y retos ha enfrentado para aplicación de las categorías y la implementación de esquemas en la administración y manejo?
6. ¿Qué elementos, según su experiencia, deben guiar la construcción de una estrategia de sostenibilidad financiera para el sistema y cómo articular esos elementos con los demás actores de la sociedad?
7. ¿Cuáles han sido las oportunidades y dificultades que ha planteado la sostenibilidad financiera para lograr una efectiva gestión del sistema de áreas protegidas?

8. ¿Con qué sistemas de incentivos y acuerdos de cofinanciación para la conservación cuenta el subsistema (tributarios, pago por servicios ambientales, compensaciones u otros)?
9. ¿Cuáles considera han sido las estrategias más efectivas para el logro de los objetivos de conservación en su subsistema?

De acuerdo a los objetivos y a las preguntas que orientaron la discusión, se plantearon cuatro temas estratégicos que respondieran a lo que se estaba planteando frente a los avances de los subsistemas:

1. Conocer los procesos de participación efectiva en términos de la construcción de estrategias que garanticen que los actores permanezcan, se comprometan y que sus capacidades incidan en los procesos de planificación, la gestión de proyectos u otras acciones a favor del subsistema.
2. Conocer los mecanismos que permiten la articulación en la planificación del subsistema y la toma de decisiones, para la declaratoria de nuevas áreas, a partir de las prioridades de conservación nacional, regional, de los municipios, grupos étnicos y las comunidades locales, como también conocer las dificultades y retos que se enfrentan para la aplicación de las categorías y la implementación de esquemas en la administración y manejo.
3. Presentar experiencias en procesos de sostenibilidad financiera de los subsistemas de áreas protegidas tanto a nivel internacional como a nivel nacional, enfatizando sobre el Sistema de Parques Nacionales como aporte a la construcción del SINAP, las cuales permiten analizar los avances nacionales y reflexionar sobre los posibles caminos algunas oportunidades, dificultades y sistemas de incentivos que facilitan la gestión.



4. Reflexiones sobre la gestión efectiva que incentiva la búsqueda de alternativas para el logro de los objetivos de conservación.

Este objetivo se cumplió en su totalidad, el Simposio contó con la presentación de prospectivas, retos y oportunidades de la visión 2020 de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, lo que resaltó que se debe mantener las áreas protegidas como una prioridad para alcanzar la sostenibilidad, incluyendo su fortalecimiento legal y cultural. Se presentaron avances de la consolidación de sistemas de áreas protegidas de Colombia recopilando experiencias, entre ellas del SIDAP Valle, SIRAP Pacífico, SIRAP Eje Cafetero, SIDAP Caqueta, SIDAP Antioquia y la Asociación de municipios del Parque Nacional Natural Tatamá, sumadas a la experiencia

del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y en el marco internacional se presentaron elementos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SINAP). Se presentaron experiencias puntuales en relación a instrumentos de incentivos a la conservación como el caso de BanCO2 de Cornare en Antioquia, las alianzas público-privadas del municipio de Buga, Valle del Cauca, y la Estrategia de Sostenibilidad Financiera de Parques Nacionales.

Como conclusiones, se resalta que Colombia ha avanzado en la consolidación de los subsistemas regionales de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Hasta el momento, se han consolidado cinco de los seis subsistemas definidos para el país, estos

han reglamentando y declarando áreas protegidas en las diferentes categorías; han creado instancias de trabajo y articulación que generan procesos de participación y construcción colectiva en el ámbito nacional, regional y local, fortaleciendo las capacidades de los actores y estructurando mecanismos de sostenibilidad financiera, los cuales nos permiten abordar los atributos de completos, ecológicamente representativos y efectivamente gestionados.

El evento se desarrolló el 16 de julio de 2014, participaron todos los ponentes que se aceptaron y convocaron y asistieron alrededor de 500 personas para conocer estas experiencias que buscan enriquecer la construcción de subsistemas completos, ecológicamente representativos y efectivamente manejados.



 Archivos Parques Nacionales Naturales. *Melissa Valenzuela.*

01

**Los subsistemas de áreas protegidas, su
planeación y sostenibilidad financiera**

Contexto general de subsistemas de áreas protegidas y sostenibilidad financiera

Contenidos



Las áreas protegidas y su sostenibilidad financiera
desde la perspectiva de la comisión ...
pág. 123



Presentación de los avances y retos de los
subsistemas de áreas protegidas en Colombia
pág. 130



Índice

Las áreas protegidas y su sostenibilidad financiera desde la perspectiva de la comisión mundial de áreas protegidas



Ernesto Enkerlin-Hoeflich, Presidente
Comisión Mundial de Áreas Protegidas y Monterrey

Transcripción de la presentación realizada por Juliana Echeverri

Los límites planetarios se pueden visualizar dentro del punto de vista biofísico, pero también desde el punto de vista social. Una de las grandes falacias en las que vive la sociedad del último siglo es que se ha convertido en esclava de la economía en vez de usar la economía para lograr su propio bienestar, la sociedad ha caído en la trampa. Las personas hacen lo que la economía le dice y no la economía lo que la sociedad necesita y quieren las personas. Una de las fallas fundamentales que hay que recordarle constantemente a quienes toman las decisiones –y es un rol fundamental de

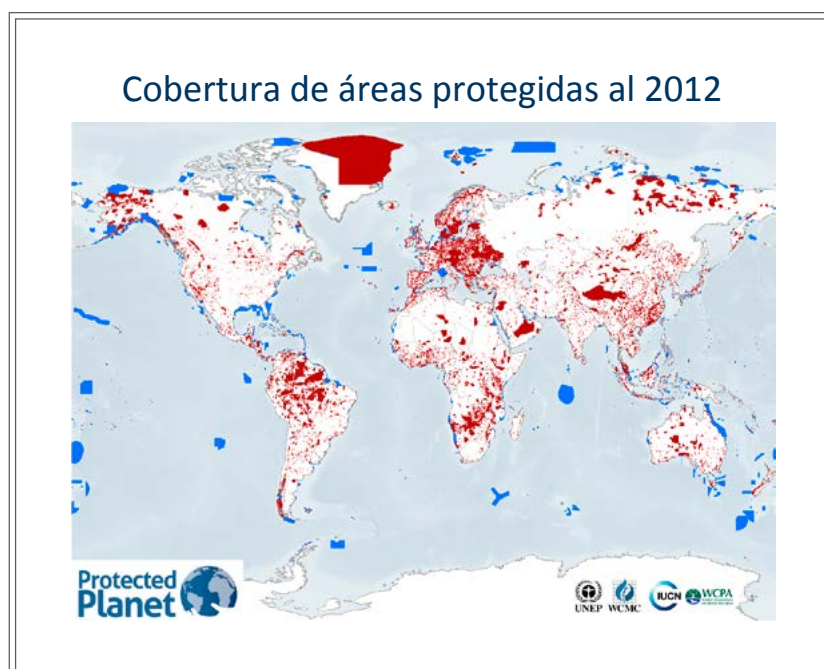
los conservacionistas– es que el planeta es su recurso, lo que sostiene a la sociedad, es el ambiente el que sostiene a todos y que la economía es una forma de lograr las aspiraciones y las necesidades humanas.

Entonces lo que se piensa y se está tratando de vender para lograr más recursos económicos para la causa de la conservación en las áreas protegidas es que la sostenibilidad no puede ser alcanzada sin estas áreas, aunque tampoco es suficiente. Lo mismo se hace con el concepto de la ética intergeneracional. Cuando se habla de conservación, muchos todavía ubican a los

conservacionistas como los enamorados, como abrazadores de los árboles, amantes de las mariposas, cuando en realidad de lo que se habla es que se necesita espacio para todos. Espacio para los seres humanos, pero también espacio para el resto de las especies, pero más importante que eso, espacio para todas las generaciones, porque las generaciones presentes están de paso.

El concepto de sostenibilidad es que el planeta alcance para todos y ahí es donde entran las áreas protegidas y la necesidad de financiarlas. Las áreas protegidas han crecido enormemente (ver plano). Se recomienda la plataforma Protected Planet, que tiene entre 3 y 4 años, en esta se puede encontrar prácticamente cualquier área protegida del mundo, con datos algunas veces más completos y otras veces menos completos. La realidad es que las áreas protegidas representan la decisión de recursos más importantes que ha hecho la civilización humana en su historia, entonces las áreas protegidas representan la decisión más importante en materia de designación de uso del territorio en la historia de la humanidad y esto va a crecer porque las áreas protegidas necesitan, se quiere y se espera que sigan creciendo en los siguientes años.

El Mapa 1 muestra las áreas protegidas del mundo y su crecimiento, que ha sido relativamente expansivo en los últimos años. Los conservacionistas son muy criticados porque dicen que cada vez se tienen más áreas protegidas y cada vez hay más problemas. La respuesta es que los problemas no suceden en las áreas protegidas, las áreas protegidas son una solución parcial a algunos de los problemas que ocurren y se deben defender también. Visualizar un mundo sin áreas protegidas tal vez es un escenario un poco extremo, pero si se piensa en el mundo, si se piensa en Colombia sin sus áreas protegidas, ¿qué sería de Colombia sin sus áreas protegidas?, ¿qué sería cualquier país del mundo sin sus áreas protegidas?, porque las hay en todos los países del mundo.



Mapa 1. Cobertura de áreas protegidas al 2012.

Hay otra concepción según la cual las áreas protegidas se inventaron en los países desarrollados que tenían dinero y tiempo para pensar en otras cosas. No, las áreas protegidas han surgido en todas partes, en comunidades indígenas, autóctonas, que tal vez no se llaman áreas protegidas, sino que tienen un nombre de acuerdo a la cosmovisión y a las creencias y formas de gobernarse, que son diferentes, pero al final de cuentas son territorios que están cumpliendo exactamente las mismas funciones.

Se incluyen en la conservación áreas en territorios indígenas, territorios pesqueros y las áreas privadas, que son el 20% del planeta que hoy en día está protegido de alguna forma, es una cifra considerable, pero esa protección requiere inversión. La conservación no es solamente una cuestión sentimental o romántica, la conservación requiere unas acciones y requiere esfuerzos. Hace apenas un par de años, los países del mundo se pusieron de acuerdo en alcanzar una meta que para algunos puede ser ambiciosa, mientras que para otros ya está rebasada. En la Amazonia hoy en día está protegido casi el 50%, es una pregunta muy delicada, alguien puede cuestionar que ya se

tiene protegido gran parte de la Amazonia, hay que tener todo lo que se pueda conservado y, cada vez que se pueda, hay que tomar medidas.

Sin embargo, los países del mundo se pusieron de acuerdo para al menos tener una aspiración del 17% en el territorio continental y 10% protegido en el mar, pero la idea también es que sea representativo y es en la representatividad donde existen una serie de problemas, pero centrándose en la gestión eficaz. Cuando se habla de eficacia, a veces se derrotan los conservacionistas, porque dicen que las áreas no son bien gestionadas, cuando se dice que las áreas no están bien gestionadas, se quiere decir que las áreas no están bien apoyadas. Esto no se refiere a que los directivos, los responsables, los guardaparques no están haciendo su trabajo, claro que los están haciendo, incluso ellos a veces dan hasta la vida por la conservación, pero si no están realmente gestionadas quiere decir que les falta apoyo. Entonces hay que entender muy bien la eficacia, no se habla de que la gente no sirva, lo que se quiere decir es que el personal no está suficientemente apoyado y que los países no están invirtiendo suficientes recursos en las áreas protegidas.

1. ¿Cuánto del mundo está protegido?

Número total de áreas protegidas: 206.500 *sites* a la actualización 2012 del reporte de Planeta Protegido:

- 12% promedio (se estima en 20% con las ICCAT).
- 12,7% terrestre (sin incluir Antártida).
- 7,2% aguas costeras (hasta 12 millas náuticas).
- 2,3% marino.

En estos datos se incluyen solo las áreas que son decretadas por los países sin contar con los territorios indígenas, campesinos y áreas privadas.

Una de las buenas noticias es que las áreas protegidas funcionan, son una inversión muy sabia porque dan mucho más de lo que se invierte en ellas. Hace cinco años, en un foro en Norteamérica se hizo un análisis de lo que serían las áreas en el 2020, en aquel entonces no existían las metas de Aichi. La visión 2020 desde hace muchos años se tiene en cuenta porque es la visión ideal, ha sido una fecha que suena mucho en los procesos de planeación y en ejercicios de visualización del futuro. En aquel entonces estaba referido a las áreas protegidas de México, ahora en la UICN sirve mucho este ejercicio porque los países de Centro y Suramérica se parecen mucho en las cosas que tienen que hacer.

En el 2009, los 10 elementos de la visión 2020 eran:

1. Relevancia: Ser relevantes dentro de las políticas públicas de la sociedad, porque quienes toman las decisiones políticas actúan y asignan presupuesto de acuerdo a la relevancia de los temas que tratan; se tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que la conservación se vuelva un tema relevante en el discurso de todas las naciones.
2. Conectividad.
3. Especies Invasivas.
4. Cambio climático (global): Es la discusión más grande del cambio global. Existen otros temas, como la tecnología y todos los cambios que está generando, son cambios que no impactan la biodiversidad de manera directa, pero podrían tener la oportunidad de impactarla positivamente. Hay otros aspectos del cambio global que deben tenerse en cuenta y trabajarse.
5. Nueva demografía: Entre el 75 y 80% de los humanos viven en las ciudades, la forma en que se consumen los recursos está cambiando totalmente y esa demografía es también una oportunidad de

concientización. También se está perdiendo la base de apoyo, además de que muchos pobladores que estaban en el campo o están en la ciudad salían al medio rural a esparcimiento.

6. Representación: Representatividad.
7. Reducción de la pobreza: Algunos acusan que las áreas protegidas generan pobreza, lo cual es totalmente falso; sin embargo, sí se podrían acusar si no se contribuye a mitigar esa pobreza, porque hay formas de hacerlo sin comprometer esas áreas de conservación.
8. Valoración y valores: Asignarles un valor a las áreas protegidas no para venderlas, no para volverse materialistas en la conservación, sino sencillamente por el valor que tienen. Así se podrá conversar con otros sectores y saber cuáles son los valores que la sociedad asume respecto a la necesidad de conservar o no las áreas protegidas.
9. Prioridades cambiantes: Cuando se empezó a hablar de cambio climático, una gran parte del dinero que estaba para la conservación de la biodiversidad se fue para este fin y ahora se está luchando para regresarlo diciendo que las áreas protegidas contribuyen al bienestar de la humanidad y que se necesitan para enfrentar el cambio climático. Por no estar atentos a las prioridades cambiantes, eso puede no depender de los conservacionistas y por eso se pueden perder muchos recursos.
10. Marino, aguas internacionales/transfronteriza: Las aguas internacionales pertenecen a toda la humanidad, tengan o no mar en sus países, todos tienen derecho a que los beneficios que da el mar lleguen a cualquier mar. Y la conservación transfronteriza es una oportunidad muy interesante.

Al final de cuentas, la respuesta para las preguntas planteadas hace cinco años es construir resiliencia y esperar que funcionen las medidas de adaptación. Esta es una medida necesaria, es

un poco egoísta porque la adaptación beneficia principalmente a quien la ejecuta, mientras que la mitigación generalmente beneficia a la colectividad. En el antropoceno se van a perder muchas cosas, hay que acostumbrarse a esto, entonces hay que tomar la decisión en un triage de lo que no se va a poder salvar, mejor invertir los recursos en lo que se puede salvar. Se invierte el poco recurso que se tiene en lo que se pueda conservar y no malgastarlo en una cosa que la intervención, el dinero y los esfuerzos no van a cambiar el destino.

Estas son cinco áreas donde se tiene que estar invirtiendo los recursos en los siguientes años:

1. Pago de servicios ecosistémicos a diversas escalas: Se habla de diferentes escalas porque algunas áreas benefician a poblados más grandes, entonces hay servicios de carácter regional y local, mientras otros servicios son de carácter nacional. Así se deben manejar estos últimos y se les debe asignar recursos a estos servicios ecosistémicos así como dar incentivos a la conservación, para que las comunidades, propietarios privados o áreas del estado puedan seguir haciendo su trabajo.
2. Ciudadanización de la conservación y orgullo nacional: Crear identidad, involucrando un poco más a diferentes comunidades. Colombia es un país que ha logrado mucho en conservación, incluso más que otros países del mundo que son desarrollados. Hay que seguir trabajando en la concientización respecto a la conservación, no lo deben hacer solamente los guardaparques, ecólogos o quienes trabajan en el tema, sino toda la sociedad, necesitamos que el resto de la sociedad se involucre.
3. Áreas/territorios bajo conservación indígena y comunitaria.

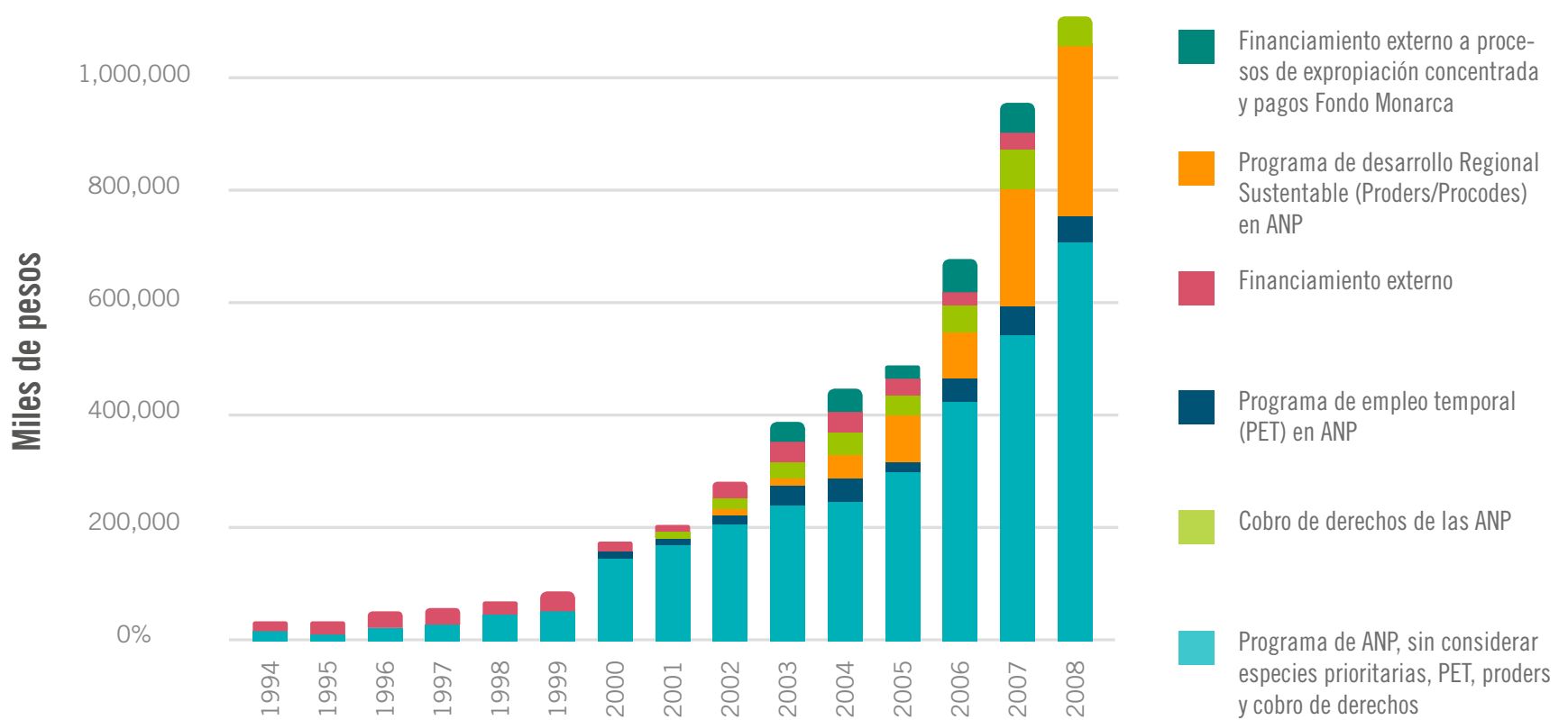


Figura 1. Financiamiento según el año.

4. Ecología del paisaje (escalas espacial, temporal y de políticas): El nivel de paisaje es un nivel de intención política. Es mucho más fácil hacer conservación de un área protegida en un espacio discreto, que puede hacer cualquier persona, pero es más difícil a nivel de paisaje, se necesita acercarse al resto de los sectores.
5. Integración de la conservación como activo en la planeación del desarrollo: Las áreas protegidas se ven como un gasto y no como una estrategia para asegurar recursos para el futuro, se ven básicamente como un paradigma, porque se firman convenios de biodiversidad o está un grupo que se mueve mucho y habla con el presidente del país, y si este tiene intención se tienen en cuenta estos temas, de resto no. Se necesita incorporar las áreas protegidas en la planeación del

desarrollo y es aquí donde está el dinero, el dinero está en que las políticas de planeación del desarrollo asignen recursos para que no se siga sufriendo en las áreas protegidas cada vez que tenemos una necesidad.

¿Por qué las áreas protegidas? En un estudio que se hizo en México hace ocho años, se observa que cualquier tipo de inversión te rinde el 52 a 1, las áreas protegidas en México rinden 52 a 1, respecto a los servicios que se puedan valorizar; es una valorización conservadora para cuantificar los servicios que fluyen de las áreas protegidas valen 52 veces más de lo que cuesta mantenerlas, tan solo en turismo recibimos siete veces más de lo que invertimos en la conservación, lo que percibe el turismo o visitación a áreas protegidas es siete veces más que el gasto total del sistemas de áreas protegidas. Necesitamos diversificar el portafolio de



recursos que dedicamos a las áreas protegidas. En Colombia están en ese proceso, se ve muy positivo y van a ir mejorando; en diferentes países se deben crear mecanismos para la sostenibilidad. En México se tuvo un periodo muy favorable, ya que el incremento de recursos está en una asíntota, hasta el 2010 creció y en el 2014 no hubo crecimiento.

Esto se resalta porque hay elementos importantes. Como se puede observar en la Figura 1, en los 90 el 50% del financiamiento de las áreas protegidas de México venía del gobierno y el otro 50% venía del exterior. Esta financiación puede ser muy positiva y tener un efecto catalítico, bien instrumentada es perfectamente compatible con las prioridades nacionales, con la soberanía y con las decisiones de cada país y lo que tiene que hacer. No obstante, al final de cuentas solo puede ser por algún tiempo, cada país tiene que asumir la responsabilidad de financiar su patrimonio natural a través de las áreas protegidas o instrumentos similares y eventualmente de todos los países se espera que lleguen a ese proceso donde el estado asuma su responsabilidad institucional de tutelar el patrimonio natural. A partir del año 2000, en el Estado mexicano

son los recursos federales los que se invierten en la conservación y crecieron considerablemente, pero al mismo tiempo se tuvieron otras fuentes de financiamiento que fueron igual de importantes. Se empezó a tener financiamiento para programas sociales en las inmediaciones de las áreas protegidas. Para comunidades que viven dentro de estas áreas, se pueden llevar programas en aras de mejorar su calidad de vida haciendo proyectos para el desarrollo sostenible. A través de esto, se logra el propósito de conservación y se tienen aliados fundamentales con las poblaciones asentadas dentro de las áreas.

El color amarillo en la gráfica muestra que hay otros programas de ayuda temporal donde se dan recursos en labores de restauración, el color café muestra que hay programas de conservación para el desarrollo sostenible, y el color rosa en la gráfica muestra los ingresos por cobro de visita a las áreas protegidas. El sistema de áreas protegidas de México tenía recursos deficientes en el año 97, el total de recursos que tenía el sistema era igual el presupuesto lo que se recibía por el ingreso de personas a las áreas, alrededor de seis millones de visitantes por año, entonces se tiene un ingreso súper importante donde las personas que tienen el privilegio de visitar las áreas protegidas tienen que pagar por esa visita. Fue una revolución el sistema de áreas protegidas de México porque los directores de las áreas se oponían a cobrar, pero se logró que los prestadores de servicios turísticos sean quienes realicen el cobro, de asegurarse que quienes visitan el área paguen por esa cuota de acceso, y ellos son quienes entregan a la federación estos ingresos y estos se van a una fuente especial de áreas protegidas, una cuenta nacional que solo puede ser usada para conservación.

Esa cantidad puede ser pequeña, pero es una cantidad significativa porque también es la manera de sensibilizar al público sobre la importancia y el valor de las áreas protegidas.

Una persona que paga exige que se conserve y eso es lo que se quiere. A los conservacionistas no les da miedo que les exijan, sino que no se den los medios para poder llevar a cabo su trabajo, así se fue diversificando el portafolio.

En el 2008, los países del mundo no dejaron solo a México, se recibió ayuda externa, pero al momento de esta evaluación todavía no se tenían las cifras, hoy en día el apoyo externo para las áreas protegidas en México representa aproximadamente el 10% del presupuesto, cuando representó durante los años 90 aproximadamente el 50%. Una relación de 80:20 es buena, pero el país debe asumir como mínimo el 80% de los recursos para las áreas protegidas como su responsabilidad.

En el panorama global, las áreas protegidas necesitan recursos para operar. Se hizo una evaluación por el PNUD y se identificó que se necesita diversificar el portafolio de recursos de las áreas protegidas, que estas se conviertan

en eje central de la planeación del desarrollo y parte de las políticas de la reducción de la pobreza. Se necesita que dentro de cada organismo operador de áreas protegidas tengan la capacidad de la planificación financiera. Se necesita personal capacitado para identificar las fuentes de financiamiento. Finalmente, en resumen, este estudio global estimó que se necesita multiplicar por cuatro los recursos a nivel global para que las áreas protegidas queden bien atendidas. La mitad de ese dinero puede venir de asignaciones presupuestales para las áreas protegidas, pero este es el tope máximo que se va a lograr. El otro 50% debe venir del sector agrícola, social y todos los sectores ayuden a mantener una cosa que los beneficia a ellos y que hasta ahora se ha visto como si fuera en contra de los intereses de la nación; sea del país que sea, las áreas protegidas son de interés nacional.



 Parque Nacional Natural Sumapáz.

Presentación de los avances y retos de los subsistemas de áreas protegidas en Colombia



Edna María Carolina Jarro Fajardo, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Antecedentes

Se plantea un contexto general de las áreas protegidas desde los atributos y elementos mínimos que requiere un sistema de áreas protegidas para su consolidación. A partir de los acuerdos internacionales ratificados por Colombia mediante el Convenio de Diversidad Biológica, desde donde se avanzó cronológicamente en diferentes procesos regionales que han orientado el ejercicio de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), respondiendo a los compromisos del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas.

A partir de lo anterior se plantean los elementos que conforman el SINAP: Las áreas protegidas con sus diferentes categorías, las estrategias complementarias, las autoridades ambientales en los diferentes niveles de gestión (local, regional y nacional), los actores sociales y las formas de gobierno, los instrumentos de desarrollo de política, resaltando la importancia de afianzar y generar políticas claras y definidas, así como los mecanismos de acción para su ejecución. En tal sentido, no se puede hablar de sistema si este no está funcionando articuladamente, si esos actores no se unen unos con otros para conformar el sistema como un todo y lograr así la operación de los subsistemas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia (SINAP), en el marco del cumplimiento del convenio de diversidad biológica, debe cumplir con tres atributos: 1) que sea completo, deben estar todos los actores, las políticas, los instrumentos, el relacionamiento intersectorial y cada uno de los ejercicios que se lleven a cabo, los cuales deben articularse; 2) que sea representativo, es decir que esté representado al menos el 10% de los ecosistemas marinos y el 17% de los ecosistemas continentales del país conservados; 3) que sea efectivamente gestionado, que estas áreas se mantengan integra, que cumplan su finalidad y que tengan las estrategias de manejo suficientes para asegurar que perduren en el tiempo y lograr sus objetivos de conservación.

Colombia cuenta con seis subsistemas regionales, que están localizados en las seis principales regiones geográficas del país: Orinoquia, Amazonía, Caribe, Pacífico, Andes Occidentales y Andes Nororientales; de igual manera, se han conformado 84 subsistemas temáticos, 4 subregionales: SIRAP Macizo, SIRAP Eje Cafetero, SIDAP Antioquia y el Sistema de Áreas Protegidas Marinas (SAMP). Se cuenta además con 23 Sistemas Departamentales y 61 subsistemas municipales.

Proceso de crecimiento y fortalecimiento de los subsistemas responde a los desarrollos normativos, políticos y sociales en los cuales Colombia ha adquirido retos y compromisos importantes. En la línea de tiempo, se puede observar que con el Decreto 2811 se adopta el Código de los Recursos Naturales de 1974 y allí inicia el Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Decreto 622 de 1977 reglamenta el funcionamiento de Parques, posteriormente se adopta el Convenio de Diversidad Biológica mediante la Ley 65 de 1994 y en 1993 se promulga la Ley 99 y finalmente se reglamenta el SINAP con el Decreto 2372 de 2010.

De manera paralela al desarrollo de la normatividad nacional e internacional a nivel local, se avanza en la consolidación de sistemas de áreas protegidas (Figura 1), siendo el SIRAP

Eje Cafetero el primero en conformarse en el año 1983, con importantes avances que han orientado su consolidación. Por su parte, el SIDAP Risaralda se empieza a consolidar en el año 1999 y posteriormente en el año 2000 inicia el SIDAP Quindío. Se continúa con el crecimiento y fortalecimiento de los subsistemas y en el 2005 se crean el SIRAP Caribe, el SIRAP Macizo y el SIDAP Valle del Cauca. En el 2007, se conforman cuatro sistemas departamentales en la región caribe; posteriormente en el año 2010 se aprueba el documento CONPES 3680, se expide el Decreto 2372 y se crean el SIRAP Pacífico y el SIDAP Tolima. Durante el año 2011, se crea el CORAP, proceso que lidera Corpoboyacá para las áreas protegidas de su jurisdicción, el SIRAP Orinoquia, el SIRAP Andes Occidentales (constituido sobre la base de los ejercicios de consolidación del SIDAP Antioquia, SIRAP Macizo y SIRAP Eje Cafetero), SIRAP Andes Nororientales retomando parte de los principios orientadores de la alianza GENOR-ENOR y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP).

En el 2011 ya se cuenta con quince SIDAP y se adelantan trabajos de consolidación del SIRAP Amazonia con algunos convenios que se establecen desde Parques Nacionales Naturales de Colombia con las Autoridades Ambientales Regionales y diferentes actores de la región.

Participación

Para que el SINAP se encuentre completo, es necesario que haya representación de todos los actores estratégicos para la conservación en las instancias operativas del SINAP, por ello, de acuerdo con los diferentes contextos y avances de los subsistemas, los actores están distribuidos de formas diferentes, hoy se puede señalar que los actores por SIRAP son los mostrados en la Tabla 1.

Antecedentes

Sistema Nacional
de Áreas protegidas



Figura 1. Antecedentes de la consolidación de sistemas de áreas protegidas.

Sirap	Públicos	Privados/civiles	Comunitarios/étnicos	Academia/ institutos de investigación
Pacífico	Las CAR, MADS, PNN			IIAP, Invemar
Caribe	Las CAR, PNN			
Andes Occidentales	Las CAR, PNN en representación de Sirap EC, Macizo y Antioquia			
Andes Nororientales	Las CAR, PNN			
Amazonia	Las CAR, PNN			
Orinoquia	Las CAR, PNN, Gobernación de Casanare, Meta y Vichada	Resnatur		Universidad de Los Llanos, Unitropico, IAvH

 **Tabla 1.** Tipos de actores.

Es importante resaltar los avances del SIRAP Pacífico en la construcción de una ruta para la implementación de la estrategia de participación dadas las delicadas características de la zona, la diversidad de actores con la que funciona el SIRAP Orinoquia, el avance multinivel de SIRAP Caribe que cuenta con SIDAP adoptados por ordenanza departamental y gran cantidad de SIMAP, solo superados por los conformados en la jurisdicción del SIRAP Andes Occidentales que cuenta con los SIDAP y SIMAP más antiguos y de mayor número.

De acuerdo con la información reportada a Parques Nacionales sobre los SIRAP, SIDAP y SIMAP, el porcentaje de participación por

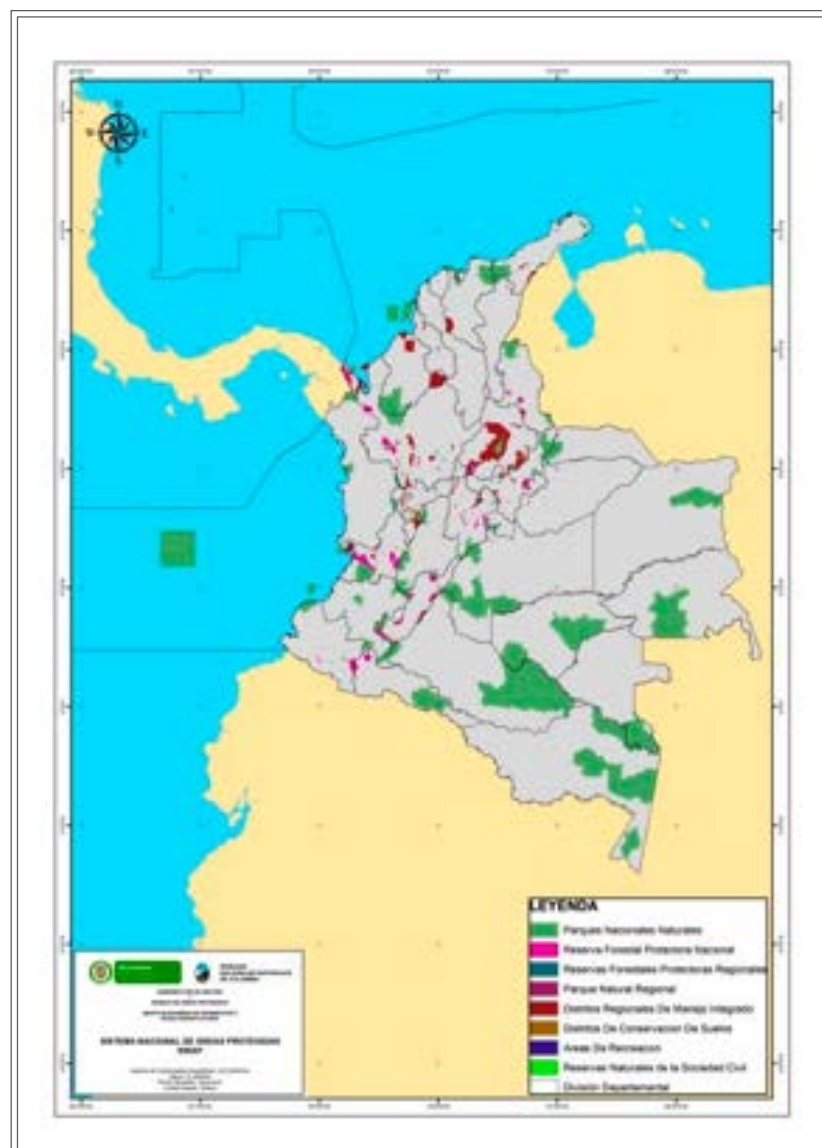
tipo de actores es de 86% aproximadamente; sin embargo, es necesario avanzar en la precisión de los datos en las escalas locales y en la valoración de las características de esta participación y cómo fortalecer los procesos en todo el territorio nacional.

Instrumentos de planificación

En el proceso de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se elaboró el Plan de Acción del SINAP. Fue un proceso que se llevó a cabo entre el año 2005 y 2006. Este documento de planeación tiene cinco ejes:

- Eje 1: Planificación, selección, creación, fortalecimiento y gestión de sistemas y sitios de áreas protegidas.
- Eje 2. Gobernanza, participación, equidad y participación en los beneficios.
- Eje 3. Actividades favorables-Intersectorial.
- Eje 4. Marco normativo.
- Eje 5. Manejo de la información y seguimiento.

Los diferentes subsistemas han orientado en buena medida sus ejercicios de planificación a partir de los ejes, objetivos, metas y actividades definidos en el plan de acción para el Sinap. Todos los subsistemas han presentado importantes avances en su gestión que responden al Eje 1. Adicionalmente, los instrumentos de planificación que se han generado desde los diferentes subsistemas han permitido generar la gestión de diferentes recursos a partir de la formulación de proyectos que responden a las metas y los retos planteados; algunas de estas apuestas de trabajo conjunto pueden verse hoy consolidados en proyectos GEF, como el de “Conectividades para la región Caribe”, el Proyecto GEF Minero, que está ubicado hacia la región Pacífico y Andes Occidentales, el Proyecto GEF Sinap, que se ha aprobado recientemente como puesta de país para la consolidación del Sinap con especial énfasis en las regiones Orinoquia y Andes Nororientales, el proyecto “Mosaicos de conservación”, el GEF “Magdalena, ecosistemas Secos” y el G5, que es un proyecto que se viene ejecutando en la región de la Orinoquia y que busca incrementar la conservación y producción sostenible en tierras privadas de la Orinoquia Colombiana, el GEF Palmero. Adicionalmente, Colombia viene jalonando fuertemente el proyecto Corazón de la Amazonía, que se desarrolla alrededor del Parque Nacional Natural Chiribiquete y que busca reducir la deforestación en esta región, generando alternativas que pueden ser los mercados verdes.



Mapa 1. Distribución de las 679 áreas protegidas en Colombia.

De igual forma, actualmente los Sirap acceden a recursos del Fondo de Compensación Ambiental, Recursos FCA, Conserva Colombia y Visión Amazónica entre otras fuentes complementarias de origen local y departamental.

Áreas protegidas integrantes del SINAP

El SINAP cuenta con el Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP), este registro permite saber dónde están ubicadas las áreas, pero también se cuenta con información como los actos administrativos de la creación de las áreas,

Ámbito	Categoría	Nº de AP por Categoría	Hectáreas
Áreas protegidas nacionales	Reservas Forestales Protectoras Nacionales	56	599.589,43
	Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	58	14.254.144,29
	Total Áreas Protegidas Nacionales	114	14.853.733,72
Áreas protegidas regionales	Áreas de recreación	10	792,92
	Distritos de conservación de suelos	10	51.778,7
	Distritos Regionales de Manejo Integrado	51	1.345.557
	Parque Natural Regional	33	422.401,7
	Reservas Forestales Protectoras regionales	84	108.640,3
	Total Áreas Protegidas Regionales	188	1.929.171,0
Áreas protegidas privadas	Reservas Naturales de la Sociedad Civil	377	68.990,77
Total SINAP		679	16.851.895,50

 **Tabla 2.** Áreas Protegidas Integrantes del SINAP según categoría de manejo y ámbito de gestión. Fuente: RUNAP corte septiembre de 2014.

objetivos de conservación y el régimen de usos. Esto permite un dialogo entre los sectores a fin de armonizar los procesos de conservación con la planificación que estos desarrollan, y tener análisis de como avanza el país en términos de representatividad ecosistémica entre otros.

Si se ve por área el mayor porcentaje está concentrado en el sistema de Parques Nacionales Naturales, y si se ve por número de áreas, la mayor concentración está en las reservas naturales de la sociedad civil. En cuanto a las regiones el mayor número de hectáreas en áreas protegidas se encuentra ubicado en la región amazónica, seguido por la región Orinoquia, andes nororientales, pacifico, andes occidentales y caribe.

Procesos de declaratoria

Los procesos de declaratoria de nuevas áreas actualmente avanza en el país en diferentes ámbitos de gestión (nacional, regional) por parte de diferentes Autoridades Ambientales. De acuerdo con el ejercicio de consolidación que ha venido adelantando Parques Nacionales Naturales de Colombia como Coordinador del SINAP y sobre información reciente, que se consolidó en el marco del ejercicio que se hizo con el ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible frente al avance de las zonas de reserva en el país, se adelantan actualmente los siguientes procesos de declaratoria que suman aproximadamente 3.237.307,3 ha (Tabla 3).

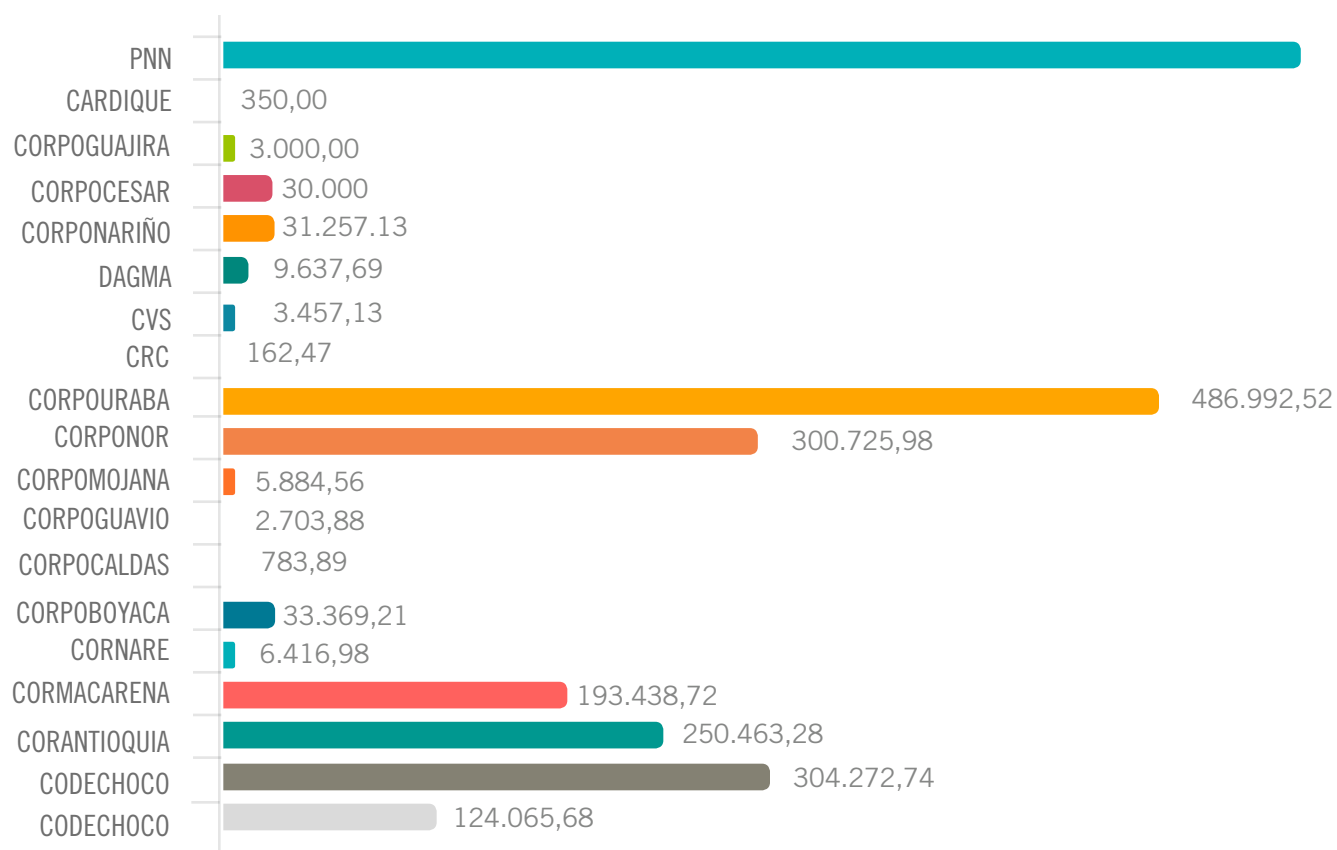


Figura 2. Procesos de declaratoria en hectáreas.

Representatividad

Teniendo como base el Mapa de Unidades Biogeográficas realizado desde Parques Nacionales Naturales de Colombia y sobre las unidades de análisis generadas, se tiene un 56% aproximadamente de las unidades de análisis representadas, sobre la base de las áreas protegidas integrantes del SINAP, según información aportada desde el RUNAP. Lo que implica que uno de los retos del SINAP se enmarca en el aumento de la representatividad ecosistémica mediante la declaratoria de nuevas áreas protegidas nacionales y regionales

Efectividad del manejo

De acuerdo con datos aproximados según información consolidada sobre los reportes RUNAP y los Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas, a continuación se relacionan los

avances con respecto a la gestión y el manejo de las áreas protegidas integrantes del SINAP: El 65% de las áreas del SINAP cuentan con acciones de manejo, incluyendo el 100% de los PNN y el 53% de las áreas protegidas regionales.

Para el caso de las reservas privadas de la sociedad civil, estas se registran ante Parques Nacionales Naturales y muchas hacen parte de Organizaciones Articuladoras de Redes de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Por otro lado, se avanzará en la implementación de ejercicios de planificación, así como se realizará el seguimiento a estos instrumentos.

Por otro lado, se ha implementado la herramienta de efectividad del manejo para mirar qué tan efectiva y eficiente es la gestión de las áreas protegidas que integran los subsistemas y el SINAP. El proceso de análisis de efectividad es un proceso que se ha llevado a cabo desde hace un buen tiempo para el SIRAP Eje Cafetero y el Sistema de Parques Nacionales, el cual ha sido un proceso que ha venido evolucionando y se está implementando el tema de áreas marinas protegidas y algunas reservas privadas del sector cafetero.



Sostenibilidad financiera

En el marco del cumplimiento del memorando de entendimiento, se conformó la mesa de sostenibilidad, se encuentra con una estrategia de sostenibilidad financiera que ha hecho el cálculo y la estimación de la brecha financiera y también esa implementación se hizo para el Sistema de Parques. Adicionalmente, para áreas de carácter regional se tiene la aplicación de estimación de la brecha financiera para el DRMI Cispata y acuerdo para Corpoboyacá y Copoguavio, al igual que con el diseño y/o implementación de estrategias de sostenibilidad financiera en subsistemas temáticos. Por otro lado, se avanza en la valoración del aporte del recurso hídrico que brindan las áreas del SPNN al desarrollo económico del país, esto resalta la importancia del potencial de las áreas protegidas, las cuales protegen el 62% del total de los acuíferos del país y protege 4 de las 6 estrellas hidrográficas

de Colombia. Por último, se ha hecho una revisión y ajuste de instrumentos económicos que se implementan al interior de Parques y una gestión para la generación de recursos, buscando que, cuando se hable con los sectores, efectivamente se tenga claro en qué se quiere y en qué se debe hacer la inversión y tener todas las prioridades financiadas.

Balance de las acciones priorizadas por cada uno de los subsistemas de acuerdo con su planificación

Para avanzar en su consolidación, los SIRAP han decidido focalizar sus acciones en los siguientes ejes

Subsistema Andes Occidentales

- Prioridades de conservación.
- Evaluación de efectividad.
- Estrategias complementarias de conservación.
- Esquema de participación.

Subsistema Orinoquia

- Prioridades de conservación.
- Articulación sectorial.
- Sistemas sostenibles.
- Alianzas estratégicas interinstitucionales.
- Procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas nacionales y regionales.

Subsistema Amazonía

- Acuerdos institucionales.
- Armonización de ejercicios de OT.
- Prioridades de conservación.
- Estrategias complementarias.

Subsistema Andes Nororientales

- Participación estratégica de otros actores.
- Vacíos y prioridades de conservación.
- Planes de manejo de AP.

Subsistema Pacífico

- Prioridades de conservación.
- Formación y fortalecimiento de capacidades.
- Construcción conjunta estrategia de participación.
- Posicionamiento del SIRAP Pacífico con sectores.
- Estrategias complementarias de conservación.

Subsistema Caribe

- Prioridades ecosistémicas de conservación.
- Estrategia de Conectividades (Proyecto GEF).
- Alianza con los entes territoriales para la gestión.
- Estrategia de Comunicaciones.
- Estrategia de Control y Vigilancia (convenio con la policía).
- Red de Ecoturismo y Biocomercio.
- Red de Educación y Comunicaciones.
- Red de Gobernaciones.
- Banco de Proyectos.

Retos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Se reconocen los siguientes retos para la consolidación de los subsistemas de áreas protegidas de acuerdo a los tres atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP):

Completo

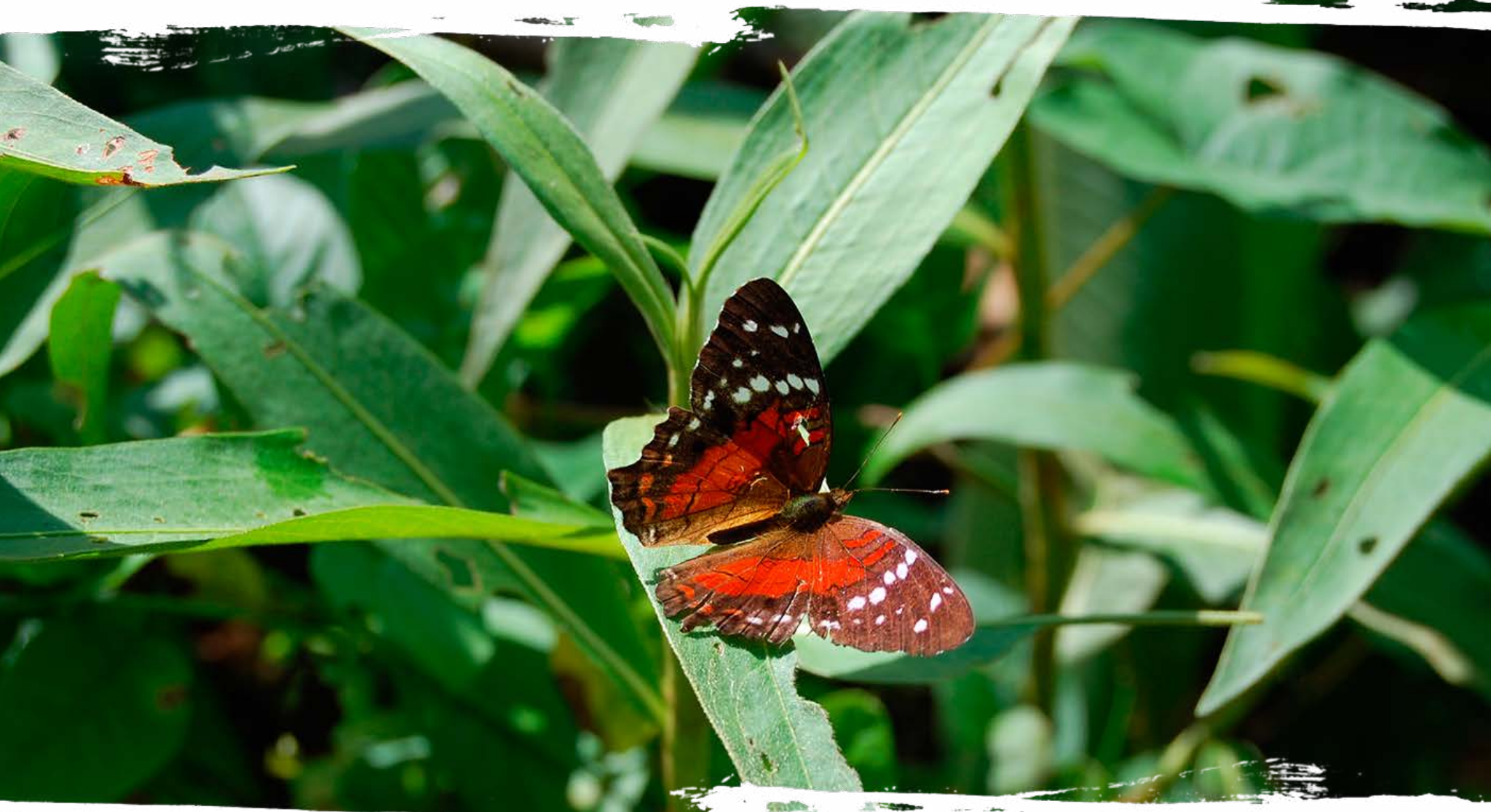
- Fortalecer y ampliar la participación en los subsistemas regionales y temáticos de áreas protegidas y demás instancias para la consolidación del SINAP.
- Gestión coordinada entre autoridades ambientales y los sectores económicos del país para el posicionamiento y reconocimiento del SINAP, a partir de un ejercicio de planificación intersectorial efectiva y el ordenamiento territorial.
- Es necesario avanzar en proceso de reglamentación de categorías de áreas protegidas que incluyan el nivel local y respondan a procesos de gobernanza que tengan en cuenta las necesidades de conservación municipales y de los grupos étnicos.

Ecológicamente representativo

- Mantener el proceso de definición de prioridades y declaración de áreas protegidas a escalas regionales y locales en ecosistemas priorizados (ecosistemas secos, marinos y costeros y de la Orinoquia), incorporando criterios complementarios a los ecológicos como servicios ecosistémicos, especies, elementos culturales, cambio climático, entre otros, que respondan a los tres objetivos generales de conservación.
- Avanzar en la integración de portafolios de prioridades de conservación realizados a diferentes escalas que permitan orientar una articulación efectiva con los diferentes procesos (planificación intersectorial).
- Generar acciones complementarias de ordenamiento territorial que aporten a la conectividad del SINAP.

Efectivamente gestionado

- Implementar efectivamente la estrategia de sostenibilidad con instrumentos y mecanismos económicos para su formalización.
- Fortalecer el trabajo regional para la sostenibilidad financiera de las diferentes categorías de áreas protegidas.
- Implementar mecanismos operativos con recursos financieros de asignaciones presupuestales y otras herramientas fiscales.
- Articular y fortalecer distintas estrategias de sostenibilidad de departamentos, corporaciones autónomas regionales y municipios a través de los SIRAP, SIDAP y Sistemas locales/municipales de áreas protegidas.
- Avanzar en la homologación y consolidación de la información para la estimación de las brechas financieras y los beneficios generados por las áreas protegidas.
- Promover ejercicios regionales de análisis de efectividad de manejo, a nivel de sitio y a nivel de sistema.
- Fortalecer la evaluación de efectividad de manejo para el SINAP a nivel de área y sistema que permita fortalecer la gestión de las áreas en los aspectos más estratégicos para el logro de los objetivos de conservación.
- Retroalimentación de experiencias internacionales de consolidación de sistemas de áreas protegidas.



 Parque Nacional Natural Katios. *Melisa Valenzuela.*

02

Los subsistemas de áreas protegidas, su
planeación y sostenibilidad financiera

Avances en la consolidación de sistemas completos y ecológicamente representativos

Contenidos



Sostenibilidad del sistema departamental
de áreas protegidas del Valle del Cauca
pág. 141



Asociatividad regional alrededor del
Parque Nacional Natural Tatamá
pág. 147



Las áreas protegidas locales y los sistemas
municipales de áreas protegidas
pág. 164



El Sistema Departamental de Áreas
Protegidas del Caquetá
pág. 145



El SIRAP Pacífico, una minga por la conservación
y consolidación de un modelo ...
pág. 153



Sostenibilidad del sistema departamental de áreas protegidas del Valle del Cauca: vinculación social de esfuerzos



Natalia Gómez, Bióloga

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Introducción

El Valle del Cauca es un departamento pionero en la constitución de áreas protegidas nacionales y regionales; sin embargo, solo hasta principios de la década pasada se pensó en las áreas protegidas como un sistema. El Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP Valle del Cauca) se concibe como el conjunto de principios, normas, estrategias, acciones, procedimientos, recursos, actores sociales y las

áreas naturales protegidas en el Valle del Cauca.

Se fundamenta en cuatro principios: respeto a la vida, corresponsabilidad, participación y equidad, a través de un principio metodológico fundamental que es la *participación cualificada de los actores*.

La participación se concibe como “un proceso democrático y dinámico de conocimiento y construcción colectiva a partir de las diferencias y los intereses comunes, en donde los actores sociales aportan a un proceso que tiende hacia un mismo fin de manera consciente, cualificada y proactiva”.

Por otra parte, por actor social se entiende “al ser humano en un contexto de legitimidad, expresado tanto individual como colectivamente, como persona natural o jurídica, a través de las instituciones y organizaciones que crea, bien sea Estado o sociedad civil; que interactúa entre sí y con la naturaleza estableciendo diferentes tipos de relación”. En ese sentido, los procesos tienen sentido en el SIDAP Valle en tanto los actores sociales participen en la construcción del proceso.

Por otra parte, metodológicamente el proceso de consolidación del SIDAP Valle se ha fundamentado en la identificación de procesos locales de conservación, la declaratoria de nuevas áreas protegidas, la formulación de planes de manejo de las áreas y la implementación de acciones prioritarias. Se conjugan de esta manera dos elementos dentro de los procesos SIDAP Valle: la construcción participativa y la planificación en doble vía (escalas local, regional, nacional y viceversa). Siempre la mirada local (municipio, predio en el caso de las RNSC) y regional (departamento, ecosistemas) está puesta en los procesos regionales, con una visión sistémica y ecosistémica y la mirada hacia el Sistema Nacional.

Estos procesos han logrado avanzar con claridad en la identificación de las áreas estratégicas de conservación, pero surge un interrogante relacionado con la sostenibilidad de las áreas. Para encontrar una respuesta en el SIDAP Valle se han realizado estudios para establecer la ruta de sostenibilidad del sistema. La pregunta ha sido: **¿Cómo lograr la sostenibilidad de las áreas? Sin embargo, aunque no hay un único camino y la búsqueda continúa**, empezamos a encontrar en los procesos que adelantan los actores algunas respuestas que queremos presentar.

Planteamiento

La sostenibilidad de las áreas protegidas y del Sistema es un proceso continuo y complejo que resulta de la combinación de diferentes aspectos.

El objetivo de esta presentación es mostrar cómo el proceso de fortalecimiento y articulación de los actores sociales del SIDAP Valle se convierte en eje fundamental para la sostenibilidad tanto del Sistema como de las áreas que lo conforman. Esto se hará describiendo el proceso de consolidación del SIDAP y como ha sido el aporte de todos los actores en diferentes formas para el funcionamiento y sostenibilidad del Sistema.

Resultados

La consolidación del SIDAP Valle del Cauca es un proceso de construcción colectiva que, en diferentes niveles, ha vinculado cerca de 2000 actores que se han cualificado en diferentes aspectos fortaleciéndose para enfrentar los retos de la gestión de las áreas protegidas en el Valle.

El SIDAP Valle del Cauca cuenta con una estrategia diseñada de sostenibilidad financiera que establece cuatro pilares: gestión de la información, coordinación interinstitucional, la estrategia financiera en sí y la construcción de capacidades. Siendo esta última fundamental para que las demás operen. También, a nivel de las áreas se ha diseñado una metodología de valoración ambiental que permitirá determinar qué requieren las áreas, dónde, a qué actores vincular y cuánto cuesta la gestión de cada área protegida.

Hoy en día, la sostenibilidad del SIDAP Valle obedece a la sumatoria de una serie de apuestas relacionadas principalmente con la articulación de los actores y su fortalecimiento, evidenciado en aspectos como los que se citan a continuación:

- Conformación de comités interinstitucionales para el manejo de las áreas protegidas, donde tienen asiento las administraciones municipales, la CVC, ONG de base, universidades y otras entidades con injerencia o interés en las áreas. A través de estos comités se logra sinergia, veeduría cogestión de los actores en beneficios del manejo de las áreas.
- Capacidad de gestión de recursos de las organizaciones que integran el SIDAP Valle. Se han gestionado desde el SIDAP por lo menos 10 proyectos de cooperación internacional en 4 años.
- Vinculación de universidades a los procesos de investigación necesarios en las áreas protegidas.
- Articulación con sectores productivos que generan presión a los recursos naturales como Asocaña y Comité de Cafeteros.
- Visibilización y posicionamiento del SIDAP Valle en el ordenamiento territorial municipal a través de la conformación de varios SIMAP.
- Inclusión continua desde 1999 de proyectos directamente relacionados con la declaratoria y manejo de áreas protegidas en los planes de acción de la CVC.
- Inclusión en el plan de desarrollo del departamento de recursos destinados a apoyar los procesos de áreas protegidas.
- Inclusión en los presupuestos de los planes de desarrollo del 68% de los municipios del Valle de la creación de áreas protegidas, creación de sistemas de áreas protegidas, formulación de planes de manejo de áreas protegidas o estrategias complementarias, protección de ecosistemas estratégicos como los secos y humedales, entre otras acciones del SIDAP Valle. Además, el 90% de los

municipios tienen incluidos en sus planes de desarrollo la adquisición de predios para conservación del recurso hídrico y estrategias para la conservación de estos.

- Construcción conjunta del plan de acción.

De esta forma, el SIDAP Valle, si bien no cuenta con una herramienta económica de financiación operando en la actualidad, ha logrado a través de la vinculación de esfuerzos de diferentes actores, la sostenibilidad de procesos.

Conclusiones (lecciones y aprendizaje)

- La cualificación de los actores ha sido fundamental para lograr la sostenibilidad del SIDAP Valle, de modo que este se visibilice en los diferentes instrumentos de planificación local y regional.
- Los procesos cualificados y con mayor compromiso de los actores son más atractivos para el sector privado, con potencial para invertir en las áreas y mejor manejados por las comunidades.
- Es necesario que haya articulación de lo público y lo privado.
- Los instrumentos económicos no son el punto de partida en una estrategia de sostenibilidad, constituyen a apenas uno de sus componentes.
- Se debe valorar el aporte de todos los actores.
- A pesar de que todos los ejes de la estrategia de sostenibilidad deben ser abordados, la experiencia del SIDAP Valle del Cauca nos ha enseñado que la construcción de capacidades es la base fundamental sobre la cual se fundamentan los otros ejes del sistema.



El Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Caquetá



Marco Aurelio Correa Múnera, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas
Jardín Botánico Universidad de la Amazonía

Los procesos acelerados de transformación de los ecosistemas han generado pérdida de servicios ambientales. La Amazonía colombiana no está ajena al fenómeno de transformación, siendo más dramática la situación en el departamento del Caquetá. Una reacción desde la academia surgió a partir del Jardín Botánico Uniamazonía, ente que, además de hacer investigación y educación ambiental, se ocupa desde su misión de promover la conservación de los recursos naturales.

Como es difícil hacer grandes contribuciones en un jardín botánico, se planteó la creación de

una serie de colecciones satélite que involucraban a instituciones y a propietarios privados. Lo anterior derivó en una red de áreas naturales que se estaban conservando en el Caquetá. Al realizar contactos con el Ministerio de Ambiente y concretamente con funcionarios de Parques Naturales Nacionales de Colombia, se coincidió en que el camino más expedito era crear un Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP). Un paso previo para su construcción se consideran los sistemas locales de conservación y uno de ellos puede tener carácter municipal o departamental.

Es así como se decide iniciar la construcción de un SIDAP para el departamento del Caquetá que articule los diferentes esfuerzos que hacen las instituciones privadas, gubernamentales y de la sociedad civil. Se inició en el año 2012 con la inclusión y diagnóstico para 15 reservas, en la actualidad llegamos a 25, incluidos los parques naturales nacionales Indiwasi y Chiribiquete, reservas municipales como el caso de Belén de los Andaquies, privadas y comunitarias.

Instituciones como la universidad contribuyen con áreas pertenecientes a las granjas, al Jardín Botánico y al centro de

investigación Macagual, estamos hablando de un poco más de 2 millones de hectáreas conservándose en el departamento. Algunas de las reservas realizan actividades de desarrollo sostenible, como el turismo de naturaleza y el turismo de aventura. Actualmente, se continúa con el proceso de diagnósticos y se trabaja en la institucionalización del Sidap, aunque recientemente se aprobó en reunión amplia la conformación de un comité técnico y la secretaria técnica. Desde el Caquetá estamos contribuyendo con la conservación de la Amazonia, como patrimonio natural de la humanidad.



 Archivos Parques Nacionales Naturales. *Cristian García.*

Asociatividad regional alrededor del Parque Nacional Natural Tatamá



Héctor Mauricio Angee Villanueva, Director Ejecutivo
Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá

Presentación

El Parque Nacional Natural Tatamá fue declarado como tal desde el año 1987, a través de la Resolución 190 de fecha 19 de octubre, que aprobó en todo su contenido el acuerdo 045 emitido por el entonces Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales). Se encuentra ubicado sobre la cordillera occidental de Colombia, con territorio en los municipios de La Celia, Santuario, Apia y Pueblo Rico, departamento de Risaralda, El Águila, en el departamento del Valle del Cauca, Tadó y San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Esta área protegida de carácter nacional presenta a su interior un estado de conservación deseable, con algunas intervenciones antrópicas puntuales en el municipio de El Águila, Valle

del Cauca y Pueblo Rico, Risaralda, con sistemas productivos relacionados con pastoreo y pancoger. Por el contrario, en el contexto regional el Parque se encuentra inmerso en un territorio con múltiples presiones antrópicas que afectan la base natural y ponen en riesgo sus valores objeto de conservación, estas presiones están relacionadas principalmente con la minería, la expansión de la frontera agropecuaria y turismo no regulado.

Considerando que el Parque Nacional Natural Tatamá es de especial importancia ambiental por la diversidad biológica que contiene y los servicios ecosistémicos que presta al bienestar humano como soporte para el desarrollo social, económico y cultural de esta región, la gestión ambiental del área protegida ha estado enmarcado en construir alianzas con actores estratégicos en el contexto regional que permitan la viabilidad del área

protegida en el largo plazo y el posicionamiento de esta como un núcleo de referencia para el ordenamiento ambiental del territorio con una visión regional y articuladora en la confluencia de las regiones Pacífico y Andes.

Los municipios en jurisdicción del Parque Nacional Natural Tatamá ven en el área protegida una figura de gestión para el desarrollo regional y la planificación territorial, así como una oportunidad para la articulación con los diferentes entes territoriales en un contexto de región, con el objetivo de promover, esencialmente, un ordenamiento territorial que contribuya principalmente al mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada alrededor de ésta área protegida con propuestas para un desarrollo local con incidencia en la conservación de la base natural.

Los municipios aquí referenciados son de sexta categoría de acuerdo con la Ley 1551 de 2012 (por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios) con un presupuesto muy inferior al requerido para el logro de los retos de desarrollo sociales, económicos y ambientales, convirtiéndose estas dos razones; tener área dentro del Parque Nacional Natural Tatamá y sus limitaciones presupuestales, en motivos de encuentro para pensarse como región y no como municipio únicamente.

De esta forma, es como a través de espacios de gestión y encuentro propiciados por el Parque, “Encuentro de municipios del Tatamá”, durante los años 2008, 2009, 2010 se visualiza la posibilidad de retomar lo que en otros tiempos fue la Asociación de Municipios de Tatamá (Asomuta). Esta organización fue creada como una exigencia de la Asamblea Departamental de Risaralda para la ejecución del 2,5% del impuesto de timbre que se destinó para la conservación del Parque Nacional Natural Tatamá a través de la ordenanza 005 de

1990 y que fue derogada en 1995, este esfuerzo de asociatividad regional estuvo conformada en su momento por los municipios de Balboa, La Celia, Santuario, Apia y Pueblo Rico y para su funcionamiento cada uno de los municipios debía aportar la suma de \$2.000.000 anuales, terminar el aporte del departamento con derogatoria de la ordenanza 005. Los municipios dejaron también de aportar sus recursos propios y empezó el proceso de liquidación de Asomuta, el cual se culminó en el año 2006. Con todas las características que esto encierra como ser un hito geográfico y ambiental muy importante integrado al territorio con perspectivas de desarrollo, se retoma nuevamente la conformación de este escenario de gestión para el ordenamiento ambiental del territorio que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos municipios y se avance de manera conjunta hacia el logro de cumplimiento de objetivos del milenio como disponibilidad y calidad de recurso hídrico, disminución de índices de necesidades básicas insatisfechas, en el marco, además, de un verdadero desarrollo sostenible y sustentable para la región.

Con la iniciativa de los alcaldes de San José del Palmar en ese entonces, Juan Manuel Cuellar, y de Pueblo, Jaime Mena Buenaños, y encontrando en el Plan de Desarrollo de Risaralda 2008-2011 una meta de promover la asociatividad regional, se llevaron a cabo los primeros encuentros de los equipos de Trabajo del Parque Nacional Natural Tatamá y de la Oficina de Planeación Departamental de Risaralda, conformando el equipo técnico promotor de esta iniciativa, lo que dio cumplimiento, entre otros aspectos, a la ruta definida en la Ley 136 de 1994 de la Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá (Amitatamá), que puede entenderse como la asociación de municipios influenciados por el Parque Nacional Natural Tatamá, pero que también tiene el doble sentido de la apropiación

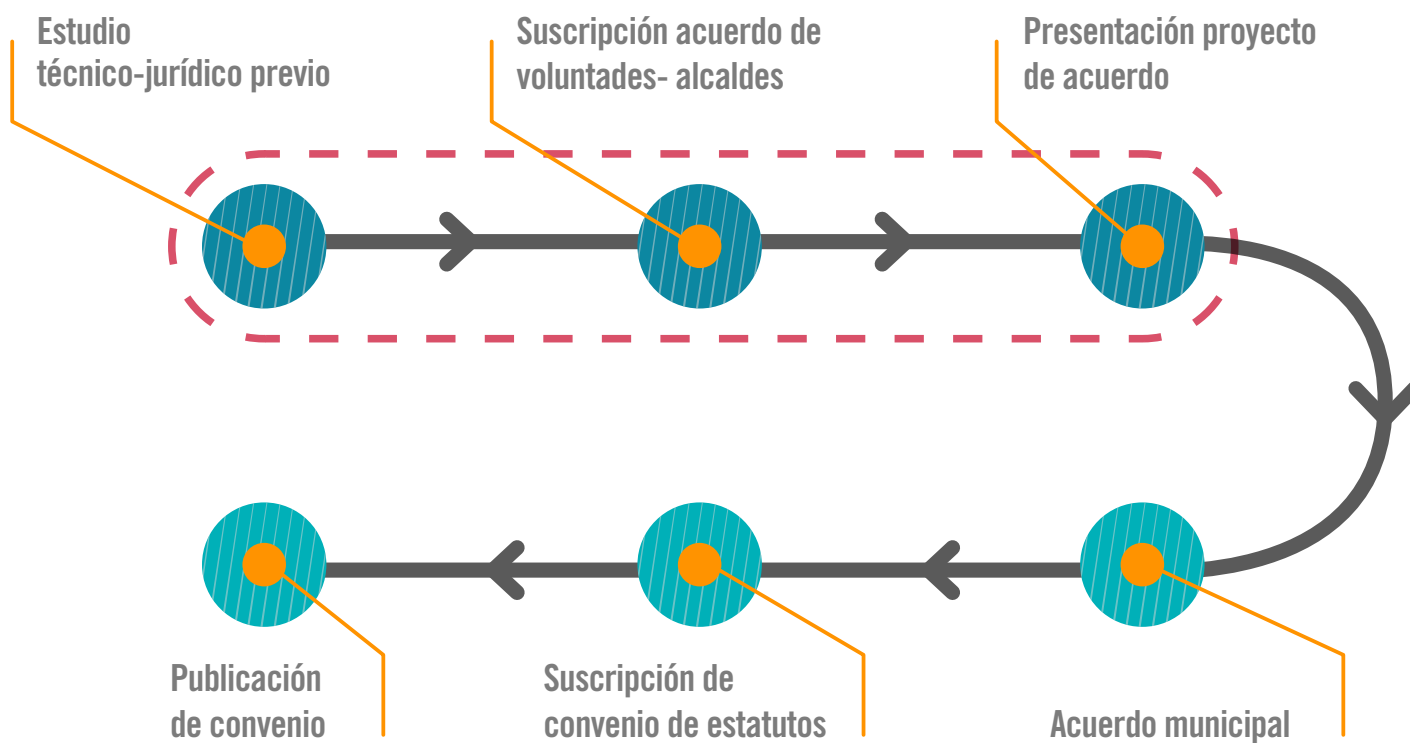


Figura 1. Proceso de conformación de la Asociación de Municipios.

por este territorio “a mi Tatamá”, por cada uno de los municipios que la conforman. En ambos casos es darle a realce al escenario natural la relevancia que tiene en el territorio y un reconocimiento a los bienes y servicios ecosistémicos y ambientales que allí se generan y se desprenden.

- **Municipios asociados:** La Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá (Amitatamá) se integra inicialmente con los municipios de La Celia, Santuario, Pueblo Rico y Apia, pertenecientes al departamento de Risaralda; El Águila, Valle del Cauca; y San José del Palmar, Chocó, todos con área al interior del parque y facultados por el Concejo Municipal de cada municipio para que sus respectivos alcaldes suscribieran el acuerdo de creación de la Asociación, el cual fue suscrito el 23 de noviembre de 2011, de acuerdo a lo estipulado por la ley.

- **Objetivo General:** La Asociación tendrá como objeto general la promoción del desarrollo integral de los habitantes de los municipios asociados, ubicados en el área de influencia del Parque Nacional Natural Tatamá, a través de la gestión de proyectos ambientalmente sostenibles, garantizando la participación social, la planificación integral del manejo del territorio y el aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos, propendiendo por la mitigación de amenazas para la conservación de Parque Nacional Natural Tatamá como determinante ambiental de la región y referente de asociatividad y cooperación territorial.

Metodología

Para la conformación de esta asociación de municipios, se procedió de acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994:



- **Estudio técnico jurídico previo:** Este fue realizado por el equipo de trabajo conformado para tal fin entre funcionarios del Parque Nacional Natural Tatamá y funcionarios de la Secretaria de Planeación de Risaralda, el cual fue presentado a los alcaldes de los seis municipios propuestos inicialmente.
- **Suscripción de acuerdo de voluntades:** Etapa que se cumplió a principios del año 2011 y fue la base para la presentación ante los respectivos concejos Municipales del proyecto de acuerdo a la participación de cada uno de los municipios en la Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá.
- **Presentación y aprobación del acuerdo municipal:** Diligencia que se realizó entre los meses de mayo y agosto del año 2011, con la sustentación del proyecto de acuerdo y la justificación de la importancia de la asociatividad regional por parte del comité técnico (Parque Tatamá-Secretaria de Planeación de Risaralda) ante cada uno de los concejos municipales.

- **Suscripción de convenio y estatutos:** Con la aprobación del Acuerdo Municipal donde se autorizaba a los señores alcaldes a pertenecer, a nombre del municipio, en la Asociación de Municipios de Risaralda, se procede a convocar a la firma del Convenio Interadministrativo No. 001, el cual fue suscrito el 23 de noviembre de 2011, en el Auditorio Eucario Corrales de la Contraloría Departamental de Risaralda, acuerdo que fue publicado en cada una de la páginas web de los municipios, dándose así por entendida la conformación de la Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá.

La firma y publicación de este convenio se dio en un momento crucial donde se estaba dando cambio en la administración de cada uno de los municipios por terminación del periodo de Alcaldía e inicio de uno nuevo, lo que conllevó a la necesidad de socialización nuevamente del proceso y volver a firmar un nuevo acuerdo de voluntades donde los nuevos alcaldes manifiestan estar dispuestos a continuar con el proceso, acuerdo de voluntades que se firma el 5 de diciembre de 2012 y que conlleva a la realización de la Asamblea General el 5 de junio de 2013, fecha en la cual se posesiona la Junta Directiva y el municipio de Balboa solicita ser incluido en la Asociación, dado que, aunque no tiene área dentro del parque Nacional Natural Tatamá, es beneficiario directo de sus bienes y servicios ambientales, solicitud que es aprobada pasando de seis a siete municipios conformantes de la Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá.

La Junta Directiva se reúne nuevamente el 28 de junio de 2013 y hace el nombramiento del Director Ejecutivo, responsabilidad que recae en el señor Mauricio Angee, quien desde entonces se ha dado a la tarea de obtener Personería Jurídica de la Asociación, para facilitar tramites de contratación y gestión de recursos.

Resultados

- Firma de convenio interadministrativo N° 001 de noviembre 23 de 2011.
- Realización de Asamblea General y nombramiento Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá, junio 5 de 2013.
- Nombramiento de Director Ejecutivo, junio 28 de 2013.
- Definición de programas y líneas de acción para el trabajo regional:
- Programa Agua y Saneamiento Básico.
 - » Fortalecimiento administrativo y social de acueductos rurales.
 - » Saneamiento básico.
 - » Recuperación ambiental.
 - » Infraestructura.
- Programa de ordenamiento ambiental del territorio
 - » Con empoderamiento del escenario local con esquemas básicos de ordenamiento territorial enfocado al uso adecuado del suelo e identificación de la estructura ecológica principal como garantía de bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible de la región. En este sentido, la Gobernación está haciendo un acompañamiento para avanzar en la revisión del EOT en cumplimiento de la ley, pero la Asociación debe trascender para que el ordenamiento sea efectivo en la región y no aislado para cada municipio.
- Programa de producción sostenible:
 - » Buenas prácticas agropecuarias.
 - » Diversificación como alternativa económica, organizativa, alimentaria y generadora de empleo.
 - » Ecoturismo.

Un logro importante tiene que ver con haber participado en Foro Nacional de Asociatividad Regional organizado por el Departamento Nacional de Planeación, agosto 15 de 2013, donde surge como propuesta acompañar y fortalecer a los esquemas asociativos por parte de esta institución, atendiendo la política nacional de promover instrumentos para la integración y el desarrollo regional. Asimismo, el proceso regional ha sido reconocido por parte del DNP, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Cooperación Internacional, Gobernación de Risaralda y administraciones locales.

Conclusiones

Aunque la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o Ley 1454 de 2011, en su capítulo II, y el mismo Plan Nacional de Desarrollo abren un gran abanico de posibilidades para la asociatividad regional, este no es un mecanismo suficientemente explorado por las regiones para avanzar en sus procesos de desarrollo y no es un camino fácil avanzar en este tipo de propuestas de trabajo, ya que se tienen pocas experiencias en el país.

La propuesta de la asociatividad regional alrededor del Parque Nacional Natural Tatamá se ve soportada en lo planteado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011, ya que resalta como objetivo esencial el ordenamiento territorial y se establecen ventajas comparativas de la asociatividad, tales como generar economías de escala, la unión de esfuerzos tanto técnicos como financieros, aprovechar las potencialidades o enfrentar los problemas de manera conjunta entre entes territoriales, integralidad de acciones en torno a una visión de desarrollo compartida, en este caso el área protegida de carácter nacional, y fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la capacidad

de negociación con otros actores del desarrollo. Por otro lado, la Ley 388 de 1997, en su artículo 10 plantea que las áreas del Sistema de Parques son determinantes de ordenamiento territorial.

Para avanzar en el proceso expuesto, ha sido clave la alianza laboral conformada por el equipo de trabajo del Parque Nacional Natural Tatamá y la Secretaria de Planeación de Risaralda como comité técnico promotor e impulsor de este proyecto regional.

El reconocimiento por estatutos del Comité Técnico Asesor de la Asociación, integrado por representantes de las autoridades ambientales de la región, CARDER, CVC, Codechoco y Parques Nacionales Naturales de Colombia, los secretarios de planeación de cada uno de los municipios y un delegado de las Secretarías de planeación de los tres departamentos, garantizan la sostenibilidad de los proyectos que en el

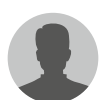
marco de esta Asociación se lleguen a gestionar y ejecutar en la región del Parque Nacional Natural Tatamá.

Para el área protegida, la asociatividad regional alrededor del Parque Nacional Natural Tatamá es una oportunidad de gestión para la conservación y viabilidad del área protegida en un contexto regional desarrollada en conjunto con los entes territoriales para promover el desarrollo sostenible. De igual manera, brinda la posibilidad de integrar el área protegida al territorio, articular la gestión sectorial y aplicar de manera sincronizada los diferentes instrumentos de planeación en el territorio, con el fin de disminuir presiones hacia el área protegida, disminuir la pérdida de diversidad biológica y mantener la oferta de servicios ecosistémicos para el beneficio de la región, por ende al mejoramiento de la calidad de vida y los sistemas productivos locales y regionales.



 **Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga.** *Hernán Lopera.*

El SIRAP Pacífico, una minga por la conservación y consolidación de un modelo de desarrollo alternativo para el pacifico



Jaime Vásquez Ruiz

SINAP Dirección Territorial Pacífico

Resumen

Al occidente de nuestro país, se encuentra un escenario donde confluyen la diversidad cultural expresada en conocimientos tradicionales propios de comunidades negras y de pueblos indígenas que se organizan en procesos políticos locales para la administración del 80% de un territorio en el que confluyen ambientes terrestres, costeros y oceánicos, los cuales albergan una altísima diversidad de ecosistemas y especies que han postulado al pacifico como uno de los *hot spots* de la diversidad biológica en el planeta. Diversidad es la mejor manera de describir

el territorio-región del Pacífico colombiano conocido internacionalmente como el Chocó Biogeográfico. De esta manera, una estrategia de conservación integral y efectiva para esta área biodiversa debe propender por consolidar un sistema que articule los diversos mecanismos y visiones de la conservación que los diferentes actores sociales e institucionales relacionados con la región han venido implementando.

En este sentido, desde el año 2007, se vienen realizando acciones que buscan conferir un carácter sistémico a los diferentes esfuerzos que se encuentran en el Pacífico Colombiano impulsados por varios actores institucionales y comunitarios desde diferentes perspectivas de la conservación. De esta

manera, el subsistema está conformado a la fecha por las áreas protegidas declaradas en la región, por los actores que lideran la gestión orientada a su manejo y por los diferentes instrumentos de gestión diseñados para este propósito, escenario al cual se espera se articulen de manera sistémica, respetando su mirada y perspectivas de la conservación y el territorio todas aquellas iniciativas, áreas de conservación y mecanismos establecidas por las comunidades étnicas y demás actores estratégicos asentados en la región para garantizar la conservación, manejo sostenible y consolidación de la perspectiva de territorio.

El propósito entonces es armonizar los instrumentos de gestión orientados hacia el manejo y protección desde una visión sistémica con los mecanismos de ordenamiento, manejo y conservación de las comunidades étnicas y otros actores relevantes locales y a su vez articular la conservación con las actividades del desarrollo que actores externos vienen realizando en el territorio. En este sentido, como subsistema de áreas protegidas, el SIRAP Pacífico reconoce las acciones de conservación de los actores locales e insta a los sectores productivos a considerar el uso racional de la naturaleza.

El reto actual para el SIRAP Pacífico es construir conjuntamente una estrategia de participación, por medio de acciones conjuntas que incluyan las diferentes visiones, miradas y perspectivas (modelos) de desarrollo acordes al contexto del Pacífico, que permitan a futuro conservar una base natural donde se mantengan dinámicas naturales y esté representada la diversidad biocultural de la región. El reconocimiento de la participación abre entonces un desafío para la gobernanza en la conservación, hace necesario un modelo alternativo de coordinación entre los niveles gubernamental y comunitario para el manejo equilibrado del territorio región del Pacífico colombiano.

Antecedentes

Desde el 2005, a partir de la conformación de las mesas SINAP, se insistió en la necesidad de conformar un Sistema Regional de Áreas Protegidas para el Pacífico Colombiano, el cual integre los esfuerzos que en la materia hacen las diferentes autoridades ambientales, entidades públicas, comunidades negras e indígenas y organizaciones no gubernamentales de la región. En este sentido, a partir del año 2007, se registran acciones institucionales encaminadas a la conformación de un escenario de trabajo que respondiera a la realidad ambiental del pacífico, considerando las diferentes perspectivas sociales para consolidar la conservación del territorio-región del Pacífico. En este propósito, se conformó la Mesa de Trabajo para Áreas Protegidas en el Pacífico, cuya gestión se concretó en la discusión y definición preliminar del ámbito geográfico del Subsistema y la concertación preliminar de una propuesta de plan de acción para el SIRAP.

De esta manera, ocho instituciones con competencia en la planificación, investigación y regulación ambiental (las corporaciones autónomas regionales de Nariño –Corponariño–, Cauca –CRC–, Valle del Cauca –CVC–, Risaralda –CARDER–, la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible del Chocó –Codechocó–, el IIAP, el INVEMAR y Parques Nacionales Naturales de Colombia –PNNC–) vienen avanzando formalmente bajo un convenio de cooperación desde el 2010 con este propósito, al cual se articuló el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde el 2013.

El convenio “Marco de cooperación institucional” cuenta con tres instancias para su coordinación y manejo, un Comité Directivo, conformado por los directores generales de las partes; un Comité Técnico, conformado por delegados de los grupos técnicos de cada una de

las partes, y una instancia operativa, que hace las veces de secretaria técnica del proceso y es liderada por la Dirección Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En el marco de la gestión realizada una vez se formalizó el convenio en el 2010, una de las primeras acciones y acuerdos consolidados fue el ajuste del Plan de Acción del Subsistema, el cual se ajustó tomando como referente el plan de acción del SINAP, cuyo horizonte de ejecución fue definido al 2019.

Por su parte, las comunidades étnicas asentadas en la región, en el marco del derecho propio y considerando el artículo 25 de la Ley 70 de 1993, vienen avanzando en el establecimiento de tipos de áreas de conservación desde su visión territorial, áreas de respaldo natural al interior de los territorios colectivos de comunidades negras, sitios sagrados indígenas en el marco de la Ley 21 de 1991, áreas de conservación comunitarias de pueblos indígenas y comunidades locales (ACC), corredores de conservación, entre otros. Estas iniciativas y esfuerzos aportan de manera significativa a la conservación de la diversidad biocultural de la región.

Avances del proceso de consolidación del SIRAP Pacífico

Uno de los primeros logros del proceso de consolidación del SIRAP Pacífico fue la concertación del ámbito de gestión para el subsistema, el cual se encuentra determinado por los procesos que cada una de las instituciones desarrollan en el Pacífico colombiano y que configuran el ámbito de gestión de su jurisdicción, ámbito que igualmente corresponde a unas características sociales, culturales y ecosistémicas particulares que construyen y le dan identidad al pacífico colombiano como región.

El ámbito de gestión del SIRAP Pacífico tiene un área total de 43.684.777 ha, de las cuales 9.339.693 ha corresponden al componente continental para un 21,3% con relación al área total. 34.343.784 ha (78,61%) corresponden al área costera y oceánica y 1.300 ha (0,9%) corresponden al componente insular. En el ámbito continental, a la fecha se registran un total de 164 territorios titulados colectivamente a comunidades negras y 186 resguardos indígenas. Con respecto al área titulada colectivamente a consejos comunitarios de comunidades negras y pueblos indígenas, se tiene un área total de 7.126.651 ha, las cuales corresponden al 76,30% del ámbito continental del SIRAP Pacífico. En el ámbito marino-costero, la gestión del SIRAP Pacífico se da en articulación con el proceso de consolidación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP Pacífico).

Caracterización del contexto regional

En el marco de la gestión que lidera el Comité Técnico del Convenio, el documento referente de información de las características y particularidades del contexto regional se titula *Caracterización del contexto de la región Pacífico*, el cual fue construido y es actualizado permanentemente a partir de la revisión de información secundaria generada en diferentes momentos por actores institucionales, varias ONG, investigadores independientes, universidades, etc. del contexto biofísico y sociocultural de la región, así como la identificación y caracterización de las propuestas de desarrollo sectorial para el pacífico, proyectos y megaproyectos de desarrollo de infraestructura y las estrategias de conservación de la diversidad biocultural de la región a partir de las áreas protegidas y las estrategias complementarias de conservación.

Inventario y caracterización de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación in situ en la región

En el marco de esta actividad, se cuenta a la fecha con dos productos, el primero de ellos es una base de datos, en la cual se encuentra sistematizado el inventario y caracterización detallada de las áreas protegidas de gobernanza pública y privada declaradas en la región, en los niveles nacional, regional y local. El segundo de ellos es una base de datos en la cual se encuentra sistematizado el inventario y caracterización detallada de las iniciativas y estrategias de conservación complementaria identificadas en la región Pacífico.

En relación a las estrategias complementarias de conservación, a la fecha en el ámbito de gestión del SIRAP Pacífico se han identificado 153 áreas bajo cuatro tipos de gobernanza, comunitaria, privada, institucional y compartida (instituciones-comunidad local), las cuales presentan en total 15 diferentes denominaciones y una extensión total estimada de 1.400.225 ha. Las estrategias complementarias de gobernanza comunitaria responden a los recientes avances internacionales sobre el concepto de la conservación, que desde el 2008 intenta reconciliar los vínculos entre los derechos humanos y la protección ambiental (enfoque basado en derechos UICN, 2008), y lograr un vínculo efectivo entre las metas globales de conservación de la diversidad y las metas del milenio, específicamente la reducción de la pobreza y la generación del bienestar humano.

Con la información recopilada y sistematizada se preparó un documento que recoge la síntesis y el análisis realizado por el Comité Técnico, el cual presenta los desarrollos en función de la conceptualización de las estrategias complementarias de conservación, de acuerdo al contexto del Pacífico colombiano.



Estrategia de participación para la consolidación del SIRAP Pacífico

La construcción conjunta de la estrategia de participación para la consolidación del SIRAP Pacífico es una de las acciones estructurales del proceso. Esta estrategia busca avanzar la articulación de los actores de comunidades negras e indígenas y demás actores estratégicos de la región al proceso de consolidación del Subsistema.

Esta propuesta inició su construcción durante el segundo semestre del 2012, tomando como base la propuesta puesta en consideración durante el último trimestre del 2011 por el IIAP y Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de la Dirección Territorial Pacífico, la Subdirección Técnica y el Área de Participación. Este ejercicio finalmente condujo, en el mes de marzo de 2012, a la adopción de los “Lineamientos para la construcción de una estrategia de participación para la consolidación del SIRAP Pacífico”, que recogen la ruta acordada como instrumento orientador de la construcción de la estrategia.

La ruta considera un primer momento que corresponde al diagnóstico de la participación en la región (actores e instancias de participación establecidas en el marco de procesos relacionados con la conservación de la diversidad biocultural del Pacífico), para avanzar, con base en los resultados consolidados en el diagnóstico, en la selección de los representantes por parte de las comunidades negras e indígenas de los departamentos de la región y demás actores estratégicos a la Mesa Regional del SIRAP Pacífico.

De la ruta acordada para este propósito, se ha avanzado en el desarrollo del primer momento, el cual corresponde al diagnóstico de la participación en la región (identificación y caracterización de actores, instancias, momentos y mecanismos de participación en la región), momento que básicamente es institucional. De este momento se espera como resultado conformar una instancia de participación ampliada en la cual, además de las instituciones, hagan parte los actores comunitarios y aquellos actores que el ejercicio califique como estratégicos.

De este ejercicio, a la fecha se cuenta con un documento que recoge los resultados de la sistematización y el análisis de la información recopilada mediante instrumentos diseñados para identificar y caracterizar los actores e instancias de participación en cada departamento de la región. Adicionalmente, se cuenta con una propuesta preliminar de estructura orgánica para el Subsistema, la cual fue acordada como base de un ejercicio que buscaba tener claridad acerca de la operatividad del Subsistema y de las diferentes instancias que potencialmente conformaran su estructura.

La estructura propuesta considera, en la escala departamental, los procesos en desarrollo que en cada departamento avanzan la consolidación de sus respectivos sistemas departamentales de áreas protegidas. La estructura orgánica acordada

sirvió de base al estímulo de la representación en la instancia regional, ya que de este ejercicio depende la operatividad y viabilidad del proceso a futuro, la cuales se encuentran en función de la garantía de los recursos económicos necesarios para financiar la logística de la gestión que liderará la Mesa Regional del SIRAP Pacífico. La estructura orgánica y operativa acordada preliminarmente para el SIRAP Pacífico será sometida a revisión y ajuste en el taller conjunto. Esto se realizará durante el segundo semestre del presente año, con los actores comunitarios y demás actores estratégicos priorizados que se espera se articulen al proceso.

De otro lado, tomando como base la estructura orgánica preliminar concertada como mecanismo orientador de las decisiones a tomar para pasar al momento conjunto con actores estratégicos, se concertó una propuesta preliminar de conformación para la instancia regional (Mesa Regional del SIRAP Pacífico). Esta fue pensada intentando garantizar la representación de todos los actores en este espacio, así como la viabilidad de asumir los costos de la logística para su implementación.

La selección de los representantes por comunidades negras e indígenas se ha realizado durante el primer semestre del 2014, en el marco de los talleres previstos en la implementación de la segunda fase del proyecto “Rutas de mejoramiento de la participación y la gestión de conocimientos tradicionales asociados a manejo de recursos marinos, costeros e insulares en el Pacífico Colombiano”, Convenio IIAP-DAMCRA-MADS, inicialmente en el Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Este ejercicio está pendiente en el departamento del Cauca y será realizado durante la tercera semana del mes de julio.

El evento conjunto con actores está previsto para finales del segundo semestre del 2014, evento entre cuyos resultados esperados se encuentra revisar y concertar la propuesta de

estructura orgánica y operativa para el Subsistema. Otro de los resultados esperados es avanzar en el esclarecimiento de la viabilidad de llevar a cabo un ejercicio conjunto orientado a consolidar el Subsistema como escenario de encuentro y gestión conjunta de los diferentes actores y procesos para la conservación de la diversidad biocultural de la región, conservación que se encuentra determinada por la discusión e incidencia en el modelo de desarrollo para la región.

Estrategia de formación y fortalecimiento de capacidades de actores sociales e institucionales para la consolidación del SIRAP Pacífico

Tomando como base la ruta puesta en consideración en la *Propuesta interinstitucional de formación de actores sociales e institucionales en el manejo y consolidación de los sistemas de áreas protegidas (SIAP)*, construida por WWF Colombia, CVC y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales en el 2003 –proceso en el cual participaron cerca de quince universidades y centros de formación del país–, se generó un documento con una serie de observaciones y propuestas de ajuste del equipo de la CARDER que sirvieron de base a la retroalimentación y ajuste de la propuesta inicial de estrategia que preparó la secretaria técnica del SIRAP.

En el marco de la estrategia, se ha avanzado en la cualificación de los integrantes del Comité Técnico del convenio, en temáticas relacionadas con aspectos jurídicos (legislación étnica y consulta previa con comunidades) y con Biología de la Conservación (análisis de estado de conservación para la selección de categorías de áreas protegidas), espacios que son avances en la implementación de la estrategia de formación y fortalecimiento de capacidades de los actores del SIRAP Pacífico.



Estrategia de posicionamiento del SIRAP Pacífico con los sectores económicos y de desarrollo de la región

El objetivo del relacionamiento con los sectores es armonizar los intereses y oportunidades de la conservación de la biodiversidad *in situ* del SIRAP Pacífico y el desarrollo económico sectorial, lo que aporta al ordenamiento territorial en la región. Los avances en el posicionamiento permitirán al SIRAP Pacífico:

- Evitar y mitigar los conflictos sectoriales al interior del Subsistema.
- Prevenir impactos sectoriales en nuevas áreas protegidas, ampliaciones y prioridades de conservación.
- Generar lineamientos ambientales para proyectos sectoriales en zonas de influencia del SIRAP Pacífico.

- Mitigar y prevenir conflictos sectoriales con las áreas protegidas y las estrategias de conservación complementaria del SIRAP.

Para el segundo semestre del presente año, se tiene prevista la realización de un taller al cual serán convocados representantes de los sectores minero (ANM) y de hidrocarburos (ANH), el MADS, ANLA y los profesionales de áreas protegidas, licenciamiento y planeación de las CAR de la región, con el propósito de avanzar en el posicionamiento del Subsistema frente a dichos sectores. Adicionalmente, y en función de la disponibilidad de recursos, será realizado otro taller de cualificación y posicionamiento del SIRAP con el sector de infraestructura vial y con el sector puertos.

Articulación con el proyecto “Establecimiento del subsistema de áreas marinas protegidas en Colombia” (Proyecto GEF-SAMP)

De otro lado, mediante un otrosí al convenio marco, las partes se comprometieron a contribuir al desarrollo del proyecto “*Diseño e implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas para Colombia (SAMP)*”, mediante la articulación de las acciones priorizadas en el proyecto con los planes de acción y trabajo del SIRAP Pacífico y en los instrumentos de planificación y gestión de las partes. De esta manera, a la fecha, al Plan de Acción del SIRAP Pacífico se articulan las principales acciones del proyecto GEF-SAMP.

En este sentido, con recursos del proyecto GEF-SAMP, se financió la realización del *Análisis de vacíos de conservación* con la contratación de la bióloga Paula Castillo y la determinación de las prioridades de conservación para los ámbitos costero y oceánico del SIRAP Pacífico, mediante una alianza de trabajo con el WWF Colombia.

Determinación de prioridades de conservación para el SIRAP Pacífico

Los resultados consolidados para los ámbitos costero y oceánico del SIRAP Pacífico – ejercicio realizado en el marco de una alianza de trabajo con el WWF Colombia– muestran, para el ámbito costero, un portafolio con 76 sitios prioritarios de conservación distribuidos a lo largo del área de estudio en los diferentes sistemas costeros. El área cubierta es de 501.433 ha, correspondientes a 1.930 unidades de planificación seleccionadas. 1.055 UP¹(274.100 ha) corresponden a las áreas protegidas o semilla de carácter (internacional, nacional, regional y local). También considera las áreas excluidas son de 30 UP (7.794 ha), que corresponden a las zonas pobladas de Buenaventura y Tumaco.

Para el ámbito oceánico, el portafolio está conformado por 61 áreas significativas para la biodiversidad (ASB) distribuidas a lo ancho y alto del sistema costero MAL y sistema oceánico SOP. Estas ASB son entendidas como áreas de interés principalmente para la investigación, puede ser, si así se justifica, consideradas y gestionadas como áreas de conservación. El área cubierta es de 2.526.368 ha, correspondientes a 2431 UP seleccionadas, y 1.021 UP (1.061.054 ha) que corresponden a las áreas protegidas existentes en el ámbito oceánico. Con el portafolio seleccionado, se cumple el 100% de las metas de los objetos de conservación oceánicos.

De otro lado, para el componente continental del SIRAP Pacífico, se viene avanzando desde el último trimestre del 2013 en colaboración con el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), quienes en el marco del proyecto “Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de

1 Unidades de planeación.

Ecopetrol, región Pacífico” han recopilado y generado información del Pacífico colombiano clave para este ejercicio, que se suma a la información y portafolios generados en estudios previos.

Para el 2015, se tiene prevista la articulación de los resultados consolidados para los ámbitos costero, oceánico y continental, cruzándolos con criterios de orden cultural de las comunidades negras e indígenas, con las cuales se espera iniciar un ejercicio conjunto, ejercicio que se encuentra en función de los resultados que se concreten como resultado de la implementación de la estrategia de participación para la consolidación del Subsistema.

Desafíos del SIRAP Pacífico

El territorio que conforma el SIRAP Pacífico presenta características importantes en riqueza de diversidad biológica y cultural, una posición estratégica para los objetivos de desarrollo económico del país, pero también unos altos índices de pobreza, baja calidad de vida de sus poblaciones, necesidades básicas insatisfechas y bajos niveles de alfabetismo². Esto indudablemente influye en el desarrollo de la economía local y se suma la carencia de un modelo productivo en lo local y a la falta de oportunidades para la generación de ingresos, lo que impulsa al desarrollo de actividades extractivas ilegales insostenibles que generan presiones sobre la biodiversidad de la región e incluso actividades ilegales, violencia y desplazamiento.

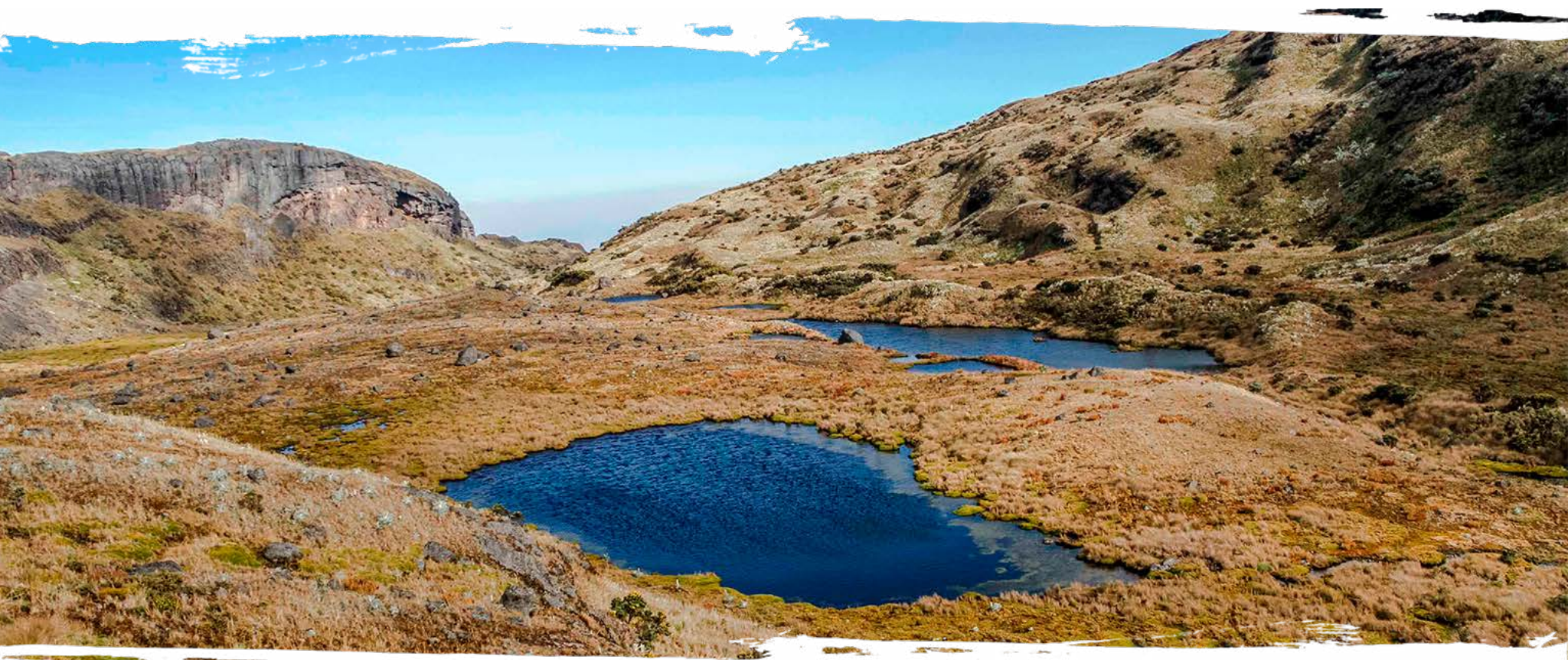
Desde el momento en el que, en el contexto nacional, el Pacífico se reconoce como polo de desarrollo que permite la inserción del país a la economía global, se formulan políticas públicas para la región que responden a la perspectiva que

orienta el avance del proceso de globalización, y con esto al auge de la economía neoliberal. En este sentido, los planes que se formulan y ejecutan pretenden reconfigurar la región ajustándola a un proyecto de modernidad capitalista que, a través de la extracción y explotación de los recursos naturales en lo local, pretende fortalecer la acumulación de grandes capitales. La intervención en la región se ubica así desde cuatro perspectivas: como productora de materias primas, como plataforma para acceder a los mercados internacionales, como corredor de tráfico intenso de bienes y servicios, y como potencial extractivo de recursos biológicos, dada su significativa biodiversidad.

Desde la década de los años ochenta, comenzaron a formarse proyectos tendientes a aprovechar la gran riqueza del Pacífico colombiano y así dinamizar el capital nacional e internacional, mediante la inversión en el diseño y construcción de lo que se ha conocido como los megaproyectos del Pacífico. Con la implantación de este enfoque del desarrollo para la región, empieza a cobrar cada vez más fuerza la idea de que las formas de apropiación particulares del territorio por parte de las comunidades tradicionales, reconocida a través de los resguardos y titulaciones colectivas, son un impedimento para el desarrollo económico del país.

Los diversos planes para la región proponen, por un lado, una perspectiva de desarrollo sostenible de respeto a la diversidad biológica y cultural, que busca fortalecer la autonomía de las comunidades y sus organizaciones de base para definir los principios valores, fines y lineamientos metodológicos del desarrollo al que aspiran (por ejemplo, Plan Pacífico y Agenda Pacífico XXI). Por otro lado, proponen proyectos de integración a los procesos de implementación del libre comercio internacional y el fortalecimiento de la competitividad, apoyando la oportunidad que, para la inversión extranjera, representa la

2 Tasa de Analfabetismo 2010 (DANE, Censo 2005): Chocó (24,2%), Cauca (12,19%), Nariño (13,9%) y Valle (5,4%).



📷 **Parque Nacional Natural Sumapaz.** *Ángela Echeverry.*

oferta de la biodiversidad, el mejoramiento de la infraestructura para la extracción de hidrocarburos y recursos naturales renovables y no-renovables. Desde este punto de vista, el apoyo que se ofrece a los proyectos productivos locales conducen a la exportación directa o se presenta a través de la vinculación con la empresa privada nacional o extranjera, privilegiando así las expectativas de crecimiento del capital económico y productivo multinacional sobre las del capital social local (por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo, Tratado de Libre Comercio, Iniciativa de Integración Regional Suramericana (IIRSA), Plan Puebla-Panamá, Plan Región Pacífico de Colombia: Tierra de Paz, Mar de Prosperidad, entre otros).

Entre los megaproyectos ubicados en el marco de estos planes, se encuentran el Canal Atrato Truando, el proyecto de acuapista pensado como un sistema de comunicación y transporte que une las Bahías de Buenaventura y Tumaco en la costa Sur del Pacífico colombiano. El proyecto

de navegabilidad del río Atrato y su conexión con el eje terrestre Quibdó-Itส์mina-Condoto-Chiquichoque, así como la del río San Juan hacia Buenaventura y en dirección a Quibdó-Pereira-centro del país, el Proyecto de Agua Dulce en el Puerto de Buenaventura, la vía al mar por el Chocó, la modernización y expansión del sector portuario (proyecto “Puerto de aguas profundas” en Tribuga y proyecto “Puerto de aguas profundas” en Bahía Málaga), la carretera del tapón del Darién (carretera Panamericana), la carretera Las Animas-Nuquí, proyecto Canal Seco (ferrocarril de 220 km entre el golfo de Urabá y bahía Cupica), canales interoceánicos, proyectos de infraestructura energética, etc.

De otro lado, en el área correspondiente al ámbito de gestión del SIRAP Pacífico, se registraron en el 2013 un total de 358 títulos mineros con un área total de 789.354 ha y 977 solicitudes de títulos mineros con una extensión de 1.728.943,23 hectáreas, lo cual agrava la situación ambiental, dado

el impacto directo sobre la biodiversidad, en especial sobre el recurso hídrico, muchas veces impactando directamente a la población al alcanzar las fuentes de donde se abastecen los acueductos. A la fecha no se ha calculado el verdadero impacto de la minería legal y no se cuenta con un seguimiento riguroso de las actividades que permitan identificar y cuantificar las afectaciones para exigir programas de recuperación. A esto se suma el incalculable daño que hacen las actividades mineras ilegales a lo largo del territorio e incluso al interior de las áreas protegidas. Aun cuando se estima que el sistema minero en el Pacífico es artesanal, la extracción de metales como oro y platino en los ríos que desembocan en el Pacífico descargan aguas contaminadas con residuos de metales pesados, lo que constituye un riesgo para la biota marina (Majluf, 2002).

Adicionalmente, prácticamente todo el Pacífico ha sido definido como zona de interés de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se identifica un total de 31 bloques en el Pacífico Colombiano (componentes continental, y costero). En el caso de la ronda 2014, la ANH ofertó 95 bloques, de los cuales en el Pacífico se ofertaron 9 bloques. Aunque actualmente las costas del océano Pacífico no son áreas llamativas para los inversionistas, el gobierno espera que, a mediano plazo, las cuencas Chocó y Tumaco offshore, sean una de las grandes apuestas del sector energético en el país.

De esta manera, la mirada sobre el Pacífico, y en particular sobre la situación que viven las comunidades negras e indígenas en la región, pasa necesariamente por poner en evidencia cómo una región ampliamente reconocida por su riqueza biológica y cultural, que cuenta con la existencia de proyectos de desarrollo que la ubican como epicentro de grandes obras de infraestructura, de extracción de recursos naturales y de agroindustria, presente tan alta incidencia de exclusión y de inequidad social. Y cómo, en medio de un contexto jurídico de reconocimiento de la propiedad colectiva

de estas poblaciones sobre su territorio, se presentan a la vez dinámicas violentas de expulsión, desarraigo y pérdida del control de las comunidades sobre el destino de sus territorios.

El desarrollo regional está influenciado por las características particulares en diversidad natural, ambiental y cultural, étnica, geográfica, geológica y climática que determinan la ocurrencia de diferentes eventos naturales y escenarios que influyen en el funcionamiento de la economía y el desarrollo regional. Sin embargo, la desarticulación entre estas características de la región frente a los intereses de sector privado ocasionan un incipiente desarrollo social y económico que influye en la materialización de los intereses gubernamentales por convertir a la región Pacífico en un polo de desarrollo nacional al visionar el comercio con los otros países de la Cuenca del Pacífico. Este objetivo ha sido tenido en cuenta por gobiernos anteriores, sin lograr llegar a concretarse. Esto ha sido producto de la confluencia de factores sociales, ambientales y económicos que denotan la necesidad de una planificación minuciosa donde coincidan los diversos intereses y donde el desarrollo nacional no esté de espaldas a las condiciones sociales, naturales y a las necesidades de desarrollo sostenible de esta región, a razón de ser una de las zonas ambientalmente más importantes para Colombia y el planeta.

Fortalezas y debilidades del proceso

Entre las fortalezas del proceso, se destaca a la fecha la articulación entre autoridades ambientales regionales, los institutos de investigación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para consolidar un

escenario de trabajo que aporte a la conservación de la diversidad biocultural de la región y a su uso sostenible. Esta conservación es determinada por la definición y adopción de un modelo de desarrollo que privilegie esta perspectiva, así como el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, sin afectar el patrimonio natural y cultural de la región, con lo que, por el contrario, se logrará posicionarlo como elemento vertebral del modelo. De otro lado, es clara y evidente la urgencia de desarrollar una gestión articulada con los actores de comunidades negras e indígenas y demás actores estratégicos de la región, gestión que permitirá garantizar el carácter sistémico del SIRAP, y que en su momento se consolidara como la fortaleza más importante del proceso.

El proceso ha encontrado como limitante la disponibilidad de recursos económicos para financiar su implementación. Esta dificultad en el momento se está gestionado formulando y gestionando un proyecto de alcance regional para financiar el desarrollo de las acciones que conforman el plan de acción del Subsistema.

Bibliografía

- Comité Técnico del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico. 2011. *Ámbito de Gestión Institucional del SIRAP Pacífico*. Santiago de Cali, Colombia. 52 pp.
- Comité Técnico del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico. *Base de datos Identificación, Caracterización y Espacialización de Estrategias Complementarias de Conservación en el SIRAP Pacífico*.
- Comité Técnico del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico. (2014). *Las Estrategias Complementarias de Conservación en el SIRAP*

Pacífico, Síntesis y Análisis. Santiago de Cali, Colombia. 38 pp.

Comité Técnico del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico. *Lineamientos para la construcción de una estrategia de participación para la consolidación del SIRAP Pacífico*. Santiago de Cali, Colombia. 12 pp.

Comité Técnico del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico. (2014). *Caracterización de la Participación en el SIRAP Pacífico, Síntesis y Análisis*. Santiago de Cali, Colombia. 28 pp.

Vásquez Ruiz, J. (2013). *Contexto Regional, El Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico, SIRAP Pacífico*. Santiago de Cali, Colombia. 102 pp.



Las áreas protegidas locales y los sistemas municipales de áreas protegidas: ejes de la sostenibilidad del SINAP



Ana Elvia Arana

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resumen

Los municipios tienen como responsabilidad garantizar la sostenibilidad de sus territorios, para lo cual deben diseñar, en el marco del ordenamiento ambiental, estrategias que permitan asegurar a corto, mediano y largo plazo la estructura ecológica principal. Esta es una decisión política que se debe ver reflejada en cada uno de los instrumentos de planificación, siendo el Plan de Desarrollo el más importante a esa escala. Este es la base sobre la cual los municipios gestionan y apalancan recursos de inversión provenientes de diferentes sectores, tanto públicos como privados, con el fin

de cumplir sus metas de gobierno, que a su vez se enmarcan en las metas nacionales. Entre sus fuentes están el Fondo de Regalías, el Pacto Agrario, el situado fiscal, los planes de acción de las CAR, los recursos departamentales, por solo mencionar algunas. Desde el momento mismo en que el candidato a la alcaldía inicia su proceso, vincula a los actores locales copartidarios y realiza alianzas, no solamente políticas sino técnicas. El alcalde municipal, en su programa de gobierno, siguiendo el ordenamiento jurídico, impulsa diferentes escenarios de participación, entre los cuales se encuentran los CMDR y los CIDEA. En esos espacios se congregan gran parte de los actores que tienen que ver con la conservación del territorio.



El SIDAP empieza a nacer como tal casi paralelamente a los POT y en ese aprendizaje se empieza a impulsar la conservación de la biodiversidad y sus servicios, fortaleciendo esas decisiones locales. Se retoma la gestión para la adquisición de predios por artículo 111 de la Ley 99 y su vinculación al SIDAP y se empieza a orientar hacia una visión más ecosistémica. También se ve la posibilidad de proteger, mediante la creación de áreas protegidas locales, ecosistemas muy amenazados y escasos, como los secos, y sitios importantes para la conservación de especies. Muchos de estos espacios, por su tamaño, no alcanzan a tener una prioridad regional, pero aportan notablemente a la consolidación del SIDAP porque pasan por todo el proceso de planificación como sistema.

En el Valle del Cauca, en ese ejercicio de ordenamiento y planificación los municipios empiezan a decidir cuáles son sus áreas estratégicas de conservación, no solo por servicios ecosistémicos, como el hídrico, sino por el paisaje y por la biodiversidad que albergan. Allí toman la decisión de declarar áreas protegidas y conformar sus sistemas de áreas protegidas, basándose –al principio tímidamente– en las políticas de ordenamiento

territorial del Ministerio de Medio Ambiente en 1997 y en la Estrategia Nacional hacia la construcción del SINAP (1997). También retoman los lineamientos que –igual de tímidos– desde la CVC se les entrega como orientación hacia la protección de los llamados, en ese momento, ecosistemas estratégicos.

En este escenario, en el Valle del Cauca se tienen más de 20.000 hectáreas en predios dedicados a la conservación, adquiridos con recursos de los municipios y, en algunos casos, en alianzas con otros actores. También se encuentran municipios que ofrecen incentivos tributarios para la conservación, o que impulsan procesos de reservas de la sociedad civil, sistemas productivos ecológicos, control, vigilancia y mejoramiento ambiental a las áreas estratégicas. Esos aportes económicos a la conservación se reflejan en los planes de desarrollo, donde más del 50% tienen líneas claras destinadas a acciones de conservación, que además se constituyen en la base de apalancamiento de recursos con otras instancias.

Un problema para muchos municipios surge cuando pretenden que esos ejercicios de planeación y ordenamiento local se vean reflejados en las metas de gobierno, pero esto no es posible porque no se encuentran reconocidos como áreas protegidas del SINAP. En ese momento surge incertidumbre y se debilita la voluntad política, aunque a pesar de ello muchos otros municipios le continúen apostando a la estrategia, mas como compromiso individual y ciudadano con su tierra. Es por ello que, desde el SIDAP Valle del Cauca, se ha venido planteando la necesidad de generar los mecanismos normativos que recojan con claridad la importancia de la conservación local y su aporte a la construcción de un SINAP completo, representativo y eficazmente gestionado, lo cual no se puede hacer solo desde el orden regional y menos nacional. Es necesaria la gestión articulada y complementaria de los diferentes niveles, aun tratándose de las áreas protegidas nacionales y regionales, pues el territorio de éstas, finalmente, son los municipios.

03

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

**Los subsistemas de áreas protegidas, su
planeación y sostenibilidad financiera**

Sostenibilidad financiera: construcción de sistemas efectivamente gestionados

Contenidos

- ➔ Sostenibilidad financiera (PSF) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-Ecuador
pág. 167
- ➔ Alianzas público-privadas una estrategia para la sostenibilidad financiera...
pág. 173
- ➔ BanCo2 servicios ambientales comunitarios, estrategia de conservación en áreas protegidas
pág. 178
- ➔ Sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia
pág. 181
- ➔ Experiencias de los subsistemas en el manejo efectivo de las áreas protegidas...
pág. 188



Índice

Sostenibilidad Financiera (PSF) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-Ecuador

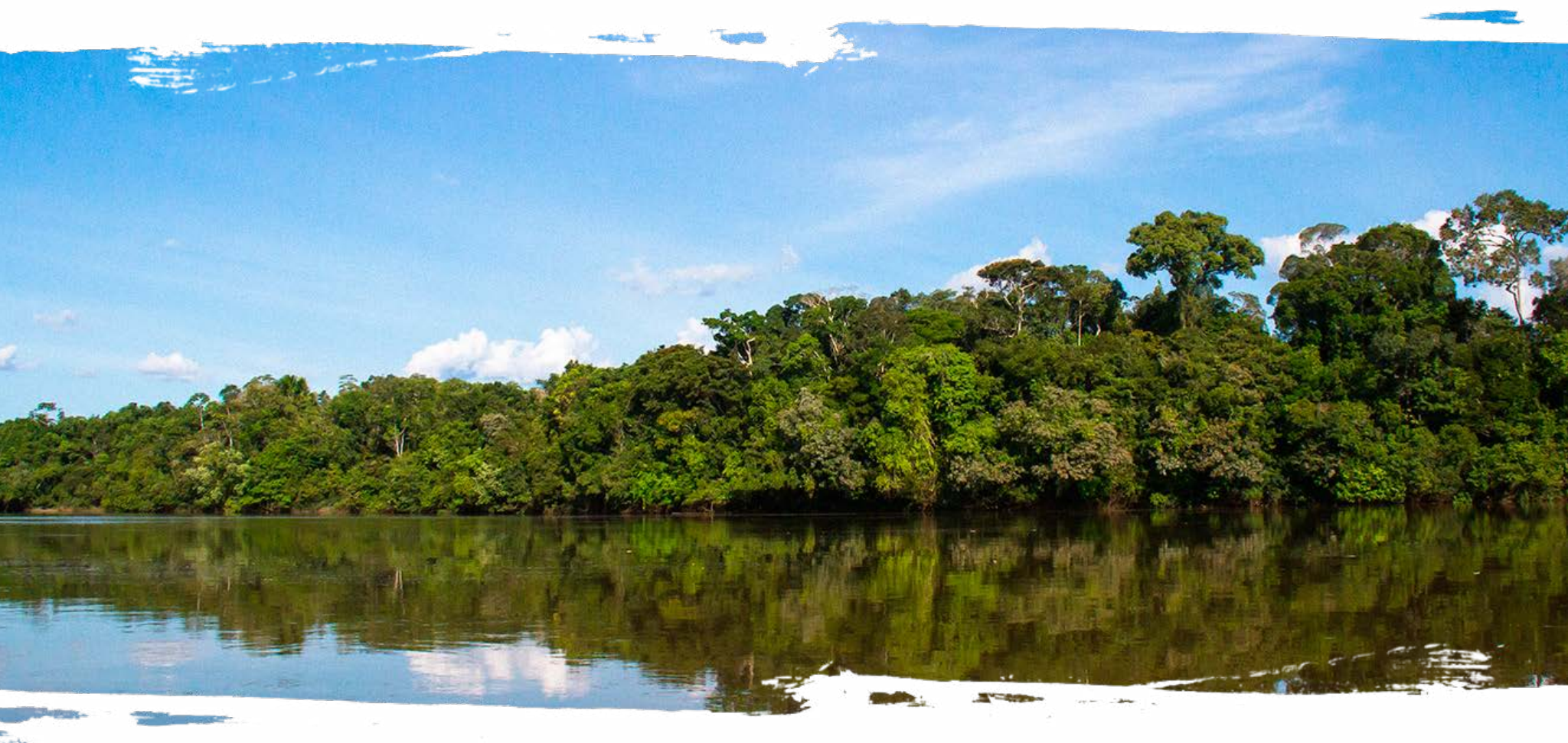


Juan Carlos Rivera, Especialista en negocios
Ministerio del Ambiente de Ecuador

Problemática actual

A partir del 2008, en el Ecuador se adopta un nuevo marco constitucional y político caracterizado por un régimen de desarrollo contemplado en la Constitución y desarrollado en mayor detalle en el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017(PNBV).

En este, resaltan elementos de este nuevo régimen caracterizado por el cambio de las matrices energética y productiva del país, orientadas a diversificar la estructura productiva del país, la agregación de valor a la materia prima, la disminución de las importaciones y la promoción de las exportaciones, con el fin de mejorar la balanza comercial del país y la industrialización del Ecuador.



📷 Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. *Durán Bahamón.*

Sin embargo, a pesar de que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) representa una alta importancia estratégica, todavía no se la han generado los instrumentos y políticas públicas orientadas a garantizar el financiamiento de su conservación. Por lo tanto, el MAE debe priorizar el manejo adecuado y la sostenibilidad financiera del SNAP como parte central de su política sectorial, fortaleciendo su papel en la administración pública central como un actor clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país.

En este sentido y en un lapso de 3 años aproximadamente, el MAE ha actualizado y desarrollado los 3 macro procesos más importantes dentro de un proceso de sostenibilidad financiera: 1) Actualización de la brecha financiera, 2) Estrategia de


sostenibilidad financiera y 3) Actualización de la valoración Económica del SNAP.

El tercer estudio mencionado en el párrafo anterior cierra de manera exitosa un proceso de sostenibilidad financiera, ya que su metodología se enfoca en visibilizar el aporte del SNAP en la nueva matriz productiva y energética del país, a través de la metodología TSA.

Objetivos

- Evaluar los componentes del tablero financiero, a través de la Ficha de Puntaje de Sostenibilidad Financiera del PNUD (2008-2012).
- Analizar la evolución del gasto/inversión del SNAP (2003-2012).
- Mostrar el avance del SNAP ecuatoriano en relación a la nueva matriz productiva del país.

Componente 1: marco legal, regulatorio e institucional	Componente 2: planificación del negocio y herramientas para el manejo costo- efectivo	Componente 3: herramientas para la generación de ingresos de las AP
Elemento 1. Apoyo legal, de políticas y regulatorio para la generación de ingresos por AP.	Elemento 1. Planificación del negocio a nivel de AP individual.	Elemento 1. Número y variedad de fuentes de ingreso utilizadas en el sistema de AP.
Elemento 2. Apoyo legal, de políticas y regulatorio para la distribución y retención de ingresos dentro del sistema AP.	Elemento 2. Sistemas de contabilidad y auditoría operativos, transparentes y prácticos.	Elemento 2. Establecimiento de tarifas al usuario del sistema de AP.
Elemento 3. Condiciones legales y regulatorias para el establecimiento de fondos (fondos de beneficencia, fondos de amortización o fondos rotativos)[1]	Elemento 3. Sistemas para el monitoreo y presentación de informes sobre el rendimiento del manejo financiero.	Elemento 3. Sistemas efectivos de recaudación de tarifas.
Elemento 4. Apoyo legal, de políticas y regulatorio para arreglos institucionales alternativos para el manejo del AP para reducir la carga de costos al gobierno.	Elemento 4. Métodos para la asignación de fondos a las AP individuales.	Elemento 4. Estrategias de mercadeo y comunicación para mecanismos de generación de ingresos.
Elemento 5. Estrategias y políticas nacionales de financiamiento de AP.	Elemento 5. Redes de entrenamiento y apoyo que permitan a los administradores de AP operar de manera costo-efectiva.	Elemento 5. Mecanismos de pagos por servicios de ecosistemas (PSE) en operación para las AP. [8]
Elemento 6. Valoración económica de los sistemas de áreas protegidas (servicios de ecosistemas, empleos provenientes del turismo, etc.).		Elemento 6. Concesiones operando dentro de AP [9]
Elemento 7. Planificación presupuestaria gubernamental mejorada para el sistema AP.		Elemento 7. Programas de capacitación de mecanismos de generación de ingresos en AP.
Elemento 8. Responsabilidades institucionales claramente definidas para el manejo y financiamiento de las AP.		
Elemento 9. Los requisitos de personal, perfiles e incentivos, están bien definidos a nivel del AP individual y del sistema.		

 **Tabla 1.** Parte II (cualitativa) - Ficha puntaje.

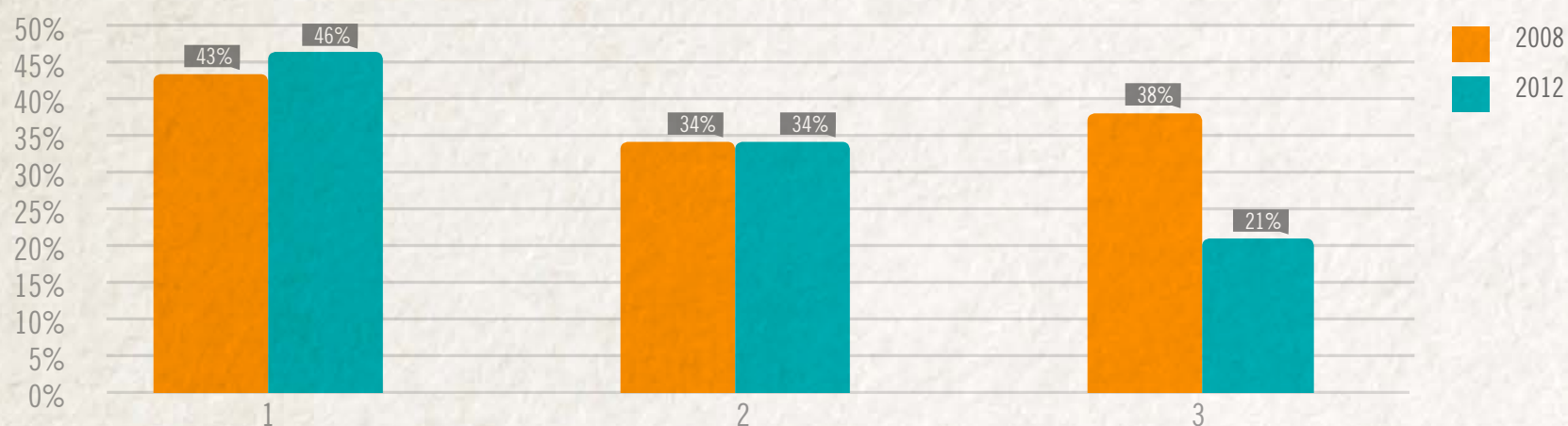


Figura 1. Elaboración y fuente: Actualización de necesidades financieras SNAP (MAE, 2013).



Figura 2. Evolución del gasto total del SNAP. Elaboración y fuente: Actualización de necesidades financieras SNAP (MAE, 2013).

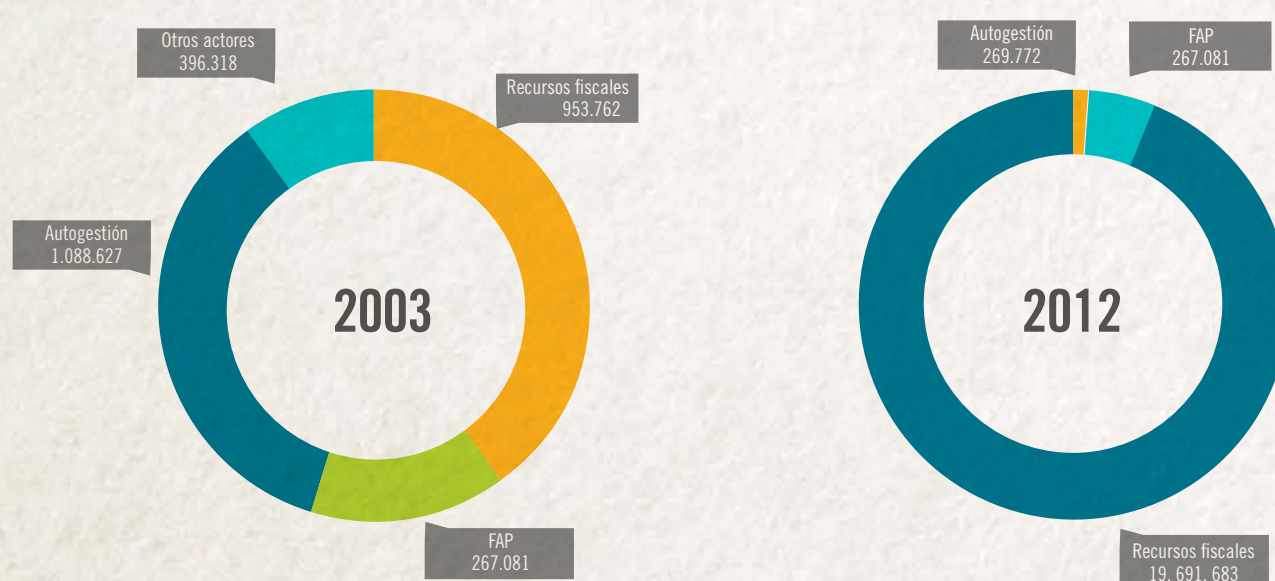


Figura 3. Actores Financieros. Elaboración y fuente: Actualización de necesidades financieras del SNAP (MAE, 2013).

Resultados

Con respecto a la actualización de la brecha financiera del SNAP, los gráficos anteriores muestran que en el período 2008-2012 los componentes 1, 2 y 3 de la parte cualitativa de la Ficha de Puntaje experimentaron una leve mejoría en el componente 1, ya que el SNAP ha demostrado mejores sistemas presupuestarios y de ejecución del gasto, por ejemplo. Sin embargo, medidas como la determinación de una tarifa de entrada “cero” provocaron una disminución de la eficiencia con respecto a la generación de ingresos en las AP. Además, el portafolio de ingresos del SNAP es mucho menos diversificado que en el 2008, ya que, al momento, el 94% de los recursos de financiamiento provienen de una sola fuente que es el estado.

Es importante mencionar que esta disminución de la diversificación del portafolio de ingresos del SNAP, ha sido compensada con un empoderamiento casi total del estado ecuatoriano, ya que prácticamente en 1 año se ejecutaron recursos equivalentes a 8 años anteriores, lo que nos coloca como el 5to país que más invierte en sus AP después de México y Brasil¹.

Con respecto al diseño de la estrategia de sostenibilidad financiera, el MAE priorizó su actualización como instrumento de planificación política, se debe enmarcar y desarrollar en tres niveles: uno normativo, uno de política pública y uno institucional. Uno de los escenarios de la ESF se basa justamente en la nueva matriz productiva del país, el cual propone una institucionalidad más atractiva, tal vez ideal en términos de potenciar la contribución del SNAP, con una administración que garantice su sostenibilidad financiera a largo plazo, precisamente en virtud de sus particularidades administrativas y financieras.

Con respecto a la actualización de la valoración económica del SNAP, este estudio está en desarrollo. De manera general, la economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser tradicionalmente exportadora de materia prima y productos agrícolas con poco valor agregado (USD 20,7 mil millones en el 2013) e importar servicios y productos con alto valor agregado (USD 21,5 mil millones en el 2013). Esta condición no solo ha expuesto a la economía nacional a las múltiples fluctuaciones mundiales de precios, sino también a impactos climáticos (el fenómeno de El Niño) que limitan la capacidad de producción en el país, generando de esta manera un déficit de alrededor de USD 1,06 mil millones para finales del 2013 (El Comercio, 2013).

Principales conclusiones

- El SNAP ecuatoriano ha dado un giro impresionante en la disponibilidad de recursos durante los últimos años, lo cual le ha permitido incorporar nuevas unidades de conservación a la par de incrementar y mejorar su infraestructura.
- Se hace imprescindible que el SNAP diversifique su portafolio de ingresos a través del **Diseño de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP**.
- Inserción del SNAP en la nueva matriz productiva del país. **Actualización de la valoración económica del SNAP (TSA)**.
- Esta ESF del SNAP demuestra iniciativa política y se convierte en una herramienta de articulación multisectorial, que deja claramente sentado el liderazgo del MAE. Generación de beneficios económicos basados en el aprovechamiento inteligente de la biodiversidad como la principal ventaja comparativa del Ecuador.

1 Ministerio de Ambiente Ecuador (2013). Actualización del estudio de necesidades y el análisis de la brecha de financiamiento del SNAP. 1a edición.

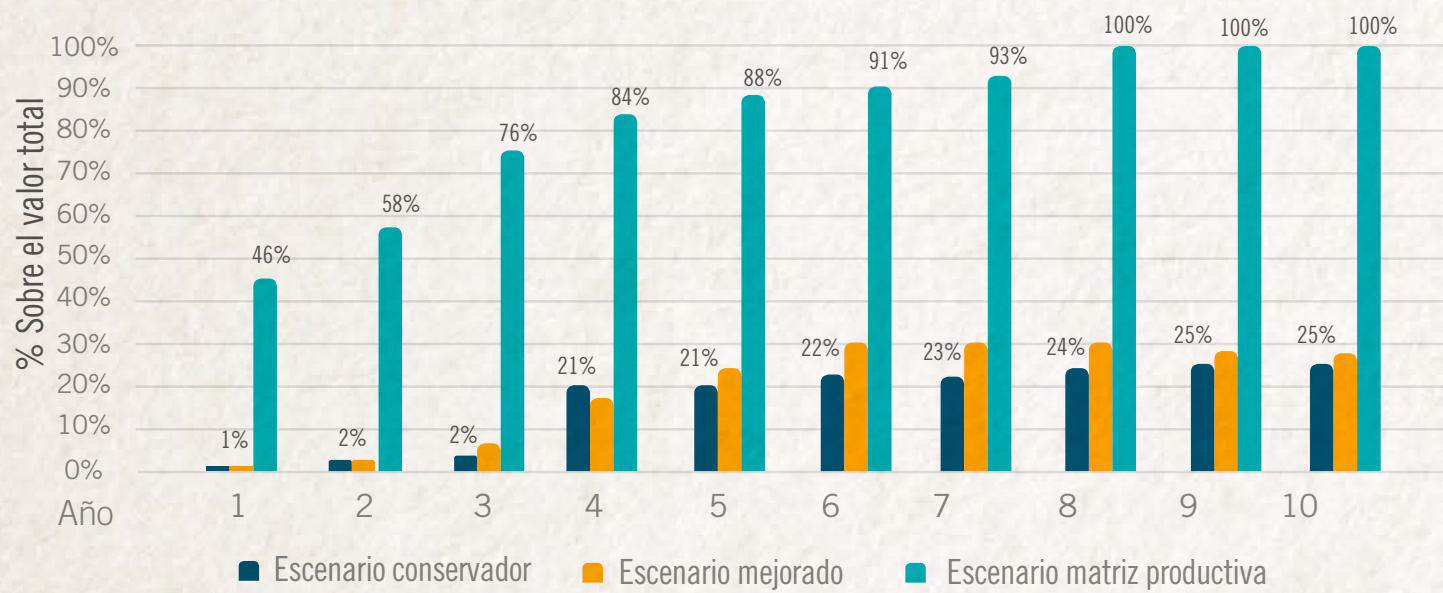
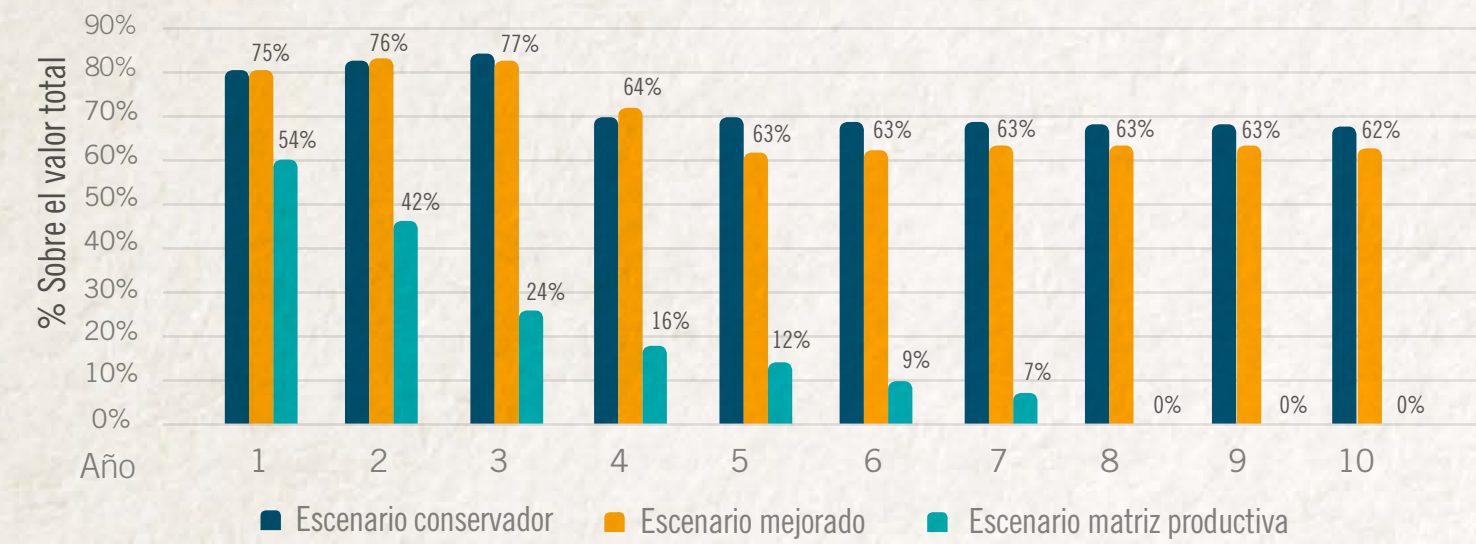


Figura 4. Fuente: MCPEC 2013.

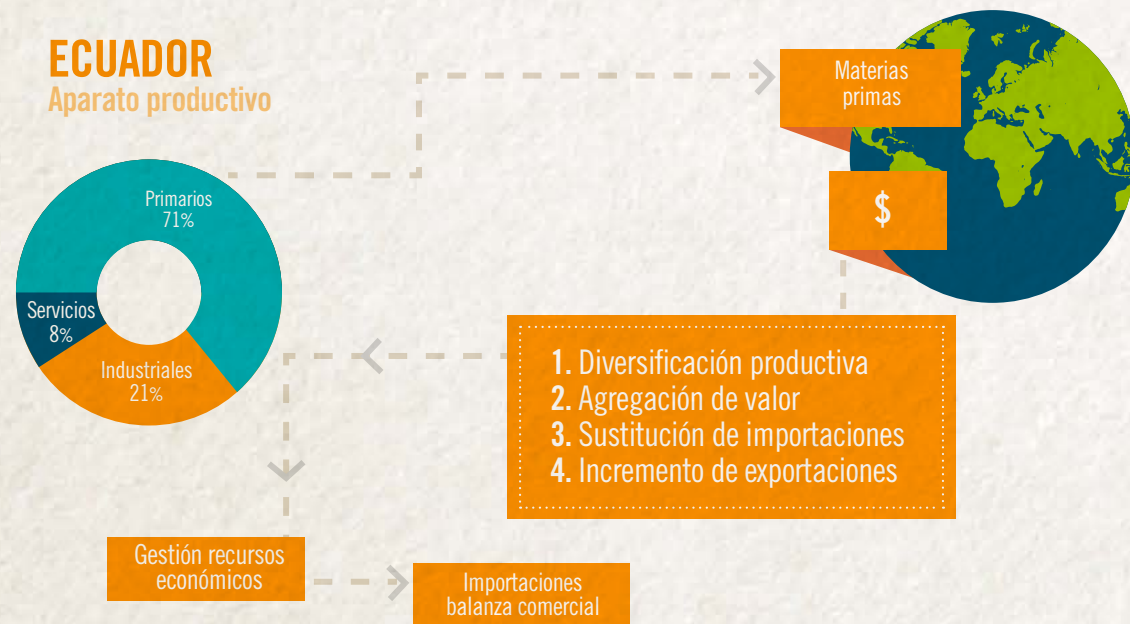


Figura 5. Elaboración y fuente: Diseño de la ESF del SNAP.

Alianzas público-privadas una estrategia para la sostenibilidad financiera de los subsistemas de las áreas protegidas



María Nancy Tobón Ospina
Alcaldía de Guadalajara de Buga

Resumen

La fragmentación de los bosques, la deforestación, las inadecuadas prácticas agropecuarias y los usos del suelo, son una amenaza para las áreas protegidas, generando deterioro ambiental y altos costos de tratamiento, así como cortes frecuentes del servicio a los usuarios del acueducto municipal en épocas de aumento del caudal de la fuente abastecedora en épocas de lluvia. Esto hace que sea necesario tomar medidas que eviten estas situaciones a partir de la implementación de estrategias de conservación de las cuencas y áreas protegidas que ofertan los servicios ecosistémicos que, como el agua y específicamente el agua potable, son vitales para el desarrollo de las poblaciones humanas.

Definición del problema

La empresa Aguas de Buga S.A. ESP es la empresa prestadora de servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad e impulsa la protección de la cuenca del río Guadalajara, fuente abastecedora del acueducto municipal, pero además de una gran parte de los acueductos veredales del municipio. Para ello, han establecido alianzas estratégicas entre la empresa con la Alcaldía Municipal, la Corporación Autónoma (CVC), el sector industrial y agroindustrial, el INCIVA, el consejo municipal, las ONG, las organizaciones de base y los propietarios de predios asentados en el territorio. La dirección ambiental de la empresa, como líder del proceso en la presentación de la propuesta, desde hace un año viene haciendo caracterización del territorio y de los

usuarios sujeto de compensación de la cuenca que cuentan con relictos boscosos en todo el proceso, así como con los usuarios que voluntariamente aceptan el acuerdo de conservación. Esta se orienta a implantar nuevas prácticas de manejo que disminuyan los impactos nocivos y deterioran fuentes del recurso hídrico y el medio ambiente, como una consecuencia del uso del suelo, con altas pendientes y con prácticas agropecuarias para la producción y vertimientos domiciliarios.

En el proceso de selección se tienen estudios técnicos y un grupo multidisciplinario, los cuales permitieron la caracterización y la priorización del territorio, de los bosques y los predios que mayor impacto está generando al recurso hídrico, para la formulación de propuestas de intervención y de compensación.

La Alcaldía de Guadalajara de Buga, por su parte, con el ánimo de seguir el compromiso de conservación de los bosques y de las áreas protegidas sin afectar el desarrollo económico equitativo y sostenible de los dueños de predios asentados en el territorio, se planteó diseñar e implementar una política pública de conservación como herramienta base para la planificación predial y la orientación de la ejecución de los recursos públicos y privados. Es así como en conjunto se construye una propuesta de trabajo liderada desde las dos entidades, con el fin de generar alianzas que permitan disminuir los costos de operación del acueducto, conservando la cuenca y especialmente las áreas abastecedoras y, además, buscando la sostenibilidad a los propietarios.

Características

Objetivo general

Se pretende tener un mayor conocimiento de la cuenca e identificación de las áreas más críticas. Lo anterior con el fin de realizar una alianza público-

privada (APP) como herramienta que contenga lineamientos para permitir preparar y desarrollar entrega de incentivos en un tiempo determinado para los aspectos técnicos, económicos y financieros, mediante esquemas de trabajo en alianzas público-privadas, con la concientización en los dueños de predios y los usuarios. Así mismo, se busca generar movilización comunitaria para generar sentido de pertenencia, orgullo y reconocimiento social por las áreas protegidas y aumentar la cobertura boscosa en las zonas de producción hídrica, para bajar los altos índices de sedimentaciones en la planta que hace que se generen los cortes del servicio a los usuarios.

Objetivos específicos

- Establecer de manera indicada, basándose en estudios técnicos, la priorización del programa que se pretende ejecutar mediante la modalidad público-privada; generar las bases, los lineamientos y las pautas de actuación generales que puedan seguir las diferentes entidades aportantes y ejecutoras en la estructuración del seguimiento y su correspondiente evaluación en el cumplimiento del objetivo misional.
- Establecer criterios técnicos y financieros que permitan la identificación, caracterización y priorización del área objeto del programa bajo el esquema APP y los análisis previos que deberían realizar las entidades aportantes antes de la vinculación con los dueños de los predios que reciben el incentivo.
- Establecer, mediante documento, los criterios básicos que se deben considerar y cumplir en la estructuración del acuerdo (APP), para generar seguimiento y evaluación de orden legal.
- Recomendar mejores prácticas integrales de producción y ambiental en la planificación del territorio que le apuesten a la

inversión, al mejoramiento, seguimiento y control en la ejecución de los APP (Alianza público privadas) por parte de la entidad ejecutora, en el contexto de logro del objetivo propuesto.

Metodología

Una investigación cuantitativa (aplicando una encuesta): Buscar información relevante de la cuenca del río Guadalajara, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos más relevantes de los usuarios del acueducto municipal de la planta en el sector urbano, por estrato, por género, por edades, actividad económica, nivel de educación, orientación religiosa, tenencia de la tierra, actitud frente a la alianza-publico privada para la conservación de los bosques y las áreas protegidas, la comunicación entre las instituciones y los que ayudan a proteger los bosques, cambio de comportamiento en el último semestre. (¿Qué ha hecho?).


Pregunta planteada para los usuarios: ¿Qué tanto saben de la cuenca del río Guadalajara y de dónde proviene el agua de consumo?

Resultados: Frente al cambio de actitud, un 42% de las encuestas muestran que cuidar los bosques tiene beneficios. En la pregunta por si están dispuestos a apoyar la protección de los bosques económicamente, el mayor porcentaje está en los \$1.000, con un 43%. Con esta información se pasó a implementar la metodología.

Resultados

Acuerdos institucionales que generen equidad, viabilidad y sostenibilidad en desarrollo de las actividades que se establecieron en el plan de desarrollo 2012-2015 de la Alcaldía y otros con la apropiación de recursos, estudios y logística,

Ruta de implementación y actores involucrados		
Fase I	Fase II	Fase III
Preinversión	Construcción	Operación
Estudios técnicos	Planificación de la operación	Firma de acuerdos, entrega de insumos y aportes
Aval y convenios		
Definiciones.		

 **Tabla 1.** Ruta de implementación.

conjuntamente con la EPS prestadora del acueducto y alcantarillado, para incentivar la conservación de los bosques en cumplimiento del objetivo propuesto.

Aporte al proceso de sostenibilidad financiera de los subsistemas de áreas protegidas y el Sistema de Parques en la construcción del SINAP

Desde esta experiencia, los elementos que deben guiar la construcción de una estrategia de sostenibilidad financiera para el Sistema y articular esos elementos con los demás actores de la sociedad son los siguientes:

- Con alianzas público-privadas, donde hay aportes voluntarios de recursos financieros, técnicos y logísticos apoyando todos un mismo fin.
- Con coordinación interinstitucional, que hace presencia en el territorio encaminado a la protección y al cumplimiento de los objetivos de la campaña por la protección.
- Planificación predial de acuerdo con las expectativas del propietario del predio, del uso actual y del uso potencial, encaminadas a las buenas prácticas de manejo (BPM) y a la protección de los relictos boscosos y manchas

de bosque que puedan ser sujetos de manejos que generen conectividad y cobertura al suelo. Esto con el fin de que sean protegidos a través de acuerdos de conservación firmados con los propietarios de predios.

Oportunidades

- Focalizar los recursos de las diferentes instituciones encaminadas a la protección ambiental y aumento de coberturas en zonas de conflicto por el uso y la presión antrópica, en cumplimiento de la misión institucional.
- Cambio de comportamiento de los dueños de los predios frente a la forma de planificar y de producción amigable con la conservación.
- Vinculación del entorno en la protección ambiental: la familia, las escuelas, colegios y organizaciones de base comunitaria, mayor movilidad social en torno al tema de la protección de los bosques.
- Los bosques y las áreas protegidas se hacen más visibles a nivel urbano, en la toma de conciencia y de la importancia de la conservación de los mismos en el aporte hídrico y biodiverso.

Dificultades

- Prevención por parte de los propietarios frente a la pérdida del dominio del predio, al cumplimiento de los compromisos y continuidad del proceso de gestión y aplicación de incentivos.
- Falta reglamentación legal para la aplicación e inversión de recursos del Estado en estos programas de conservación bajo el esquema Compensación por Pago por Servicios Ambientales (PSA).
- Ampliación de la expectativa territorial en otras cuencas no por no ser priorizados primera etapa.

- La tenencia de la tierra (falta titularidad) para ser tomador del incentivo y de las decisiones frente al predio.
- La adopción del programa de Pago por Servicios Ambientales, que es un acuerdo recíproco de voluntades con obligaciones y responsabilidades mutuas del público y del privado, en los cambios político-administrativos, puede dejar en el camino la continuidad del proceso.

Sistema de incentivos y acuerdos de cofinanciación para la conservación cuenta el subsistema (tributarios, PSA u otros)

- Cuenta con estudios técnicos de modelación que permite la priorización del territorio a intervenir.
- Análisis económico para medir el impacto que puede generar a mediano y largo plazo la no intervención del área que beneficien al territorio y los usuarios urbanos del recurso hídrico.
- El pago por servicios ambientales que se realiza a través de asistencia en (capacitaciones, giras, AT predial a los propietarios) entrega de insumos, materiales y herramientas. Con un respectivo seguimiento y evaluación por parte de los aportantes, para verificar el cumplimiento del acuerdo voluntario y las restricciones establecidas en la firma del acuerdo.

Conclusiones

La valoración de los servicios ecosistémicos de las áreas prioritarias son una importante herramienta para garantizar la sostenibilidad de las áreas porque permiten conocer qué inversión real hacer en ellas y en qué lugar.

La planificación predial genera un mayor impacto porque involucra a los propietarios, permite articular la planificación predial (escala micro) a la escala de la cuenca y el sistema de áreas protegidas, focaliza la intervención en las zonas más degradadas. Por esto, con la aplicación de mejores prácticas y herramientas de manejo del paisaje se logran impactos más grandes en la conservación. Además, el conjunto de la conservación de las pequeñas zonas boscosas suman a la conformación de corredores de conservación de flora y fauna. Finalmente, el efecto en el manejo predial se refleja en la disminución de los aportes de sedimentos al plan de tratamiento de aguas y genera aumento en los caudales hidrológicos de la cuenca.

Las alianzas públicas-privadas se convierten en una herramienta valiosa que permite contribuir a alcanzar los objetivos propuestos en las instituciones, encontrar fuentes de recursos complementarios, dentro de un marco de

cooperación entre el estado y el sector privado, modernizando los modelos de asistencia técnica y desarrollando acciones para que las entidades públicas funcionen eficientemente y mejoren la prestación de servicios a los ciudadanos.

La propuesta metodológica promovida a través de la alianza público-privada busca que los dueños de predios empiecen a pensar que son tan responsables como las instituciones y la administración municipal, en cuanto a la creación de proyectos sostenibles y sustentables que mejoren la calidad de vida sin comprometer las áreas protegidas. Es así como, por el hecho de estar asentados en una zona priorizada, deben estar dispuestos al seguimiento y evolución del programa de acuerdos de compensación por conservación ambiental, cuyo fin es aumentar la cobertura boscosa, tener practicas agropecuarias amigables con el medio ambiente y proteger el recurso hídrico para bajar los altos niveles de sedimentación en la planta que hace que se generen los cortes del servicio a los usuarios.



 Archivos Parques Nacionales Naturales. David Páez.

BanCo2 servicios ambientales comunitarios, estrategia de conservación en áreas protegidas



María Altagracia Berrío Ruíz, Coordinadora

Corporación Autónoma Regional de las cuencas del Río Negro y Nare

El posconflicto en el oriente antioqueño requiere de acciones que permitan el asentamiento de la población retornada, en condiciones dignas y en equilibrio con el medio ambiente. Cornare, consciente de que la problemática de cambio climático a nivel mundial es responsabilidad de todos y que las reservas de carbono que nos quedan están en manos de una población campesina de muy baja calidad de vida, propone el proyecto BanCO2 Servicios Ambientales Comunitarios. En este, la población en general reconoce su responsabilidad con el medio ambiente y con las comunidades asentadas en zonas que requieren de conservación y preservación, a través de una plataforma virtual, que es el eje de enlace y divulgación entre los compradores y los propietarios de los bosques generadores de servicios ambientales.

La Convención de Diversidad Biológica y la de Cambio Climático confieren a los bosques valores sociales no reconocidos por el mercado ni por el Estado. Reconoce explícitamente que estos ecosistemas ofrecen servicios ambientales que deben ser compensados económicamente por parte de los beneficiarios y redistribuidos a los poseedores de tales servicios. Con este mecanismo, se promueve una distribución más equitativa de los costos y beneficios asociados a la conservación y a la preservación de las áreas protegidas.

BanCO2 es una estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que permite a las empresas, instituciones y ciudadanos, a través del portal web www.banco2.com, compensar su

huella de carbono y la pérdida de biodiversidad, con lo que promueve la conservación de las áreas protegidas y los bosques naturales de la región y mejora la calidad de vida de los campesinos que allí viven.

El valor de PSA corresponde a un salario mínimo mensual por 3 hectáreas de bosque conservado, con el compromiso de conservar todo el bosque localizado en el predio objeto de la compensación.

Objetivos

Objetivo general

- Desarrollar un sistema de Pago por Servicios Ambientales para la conservación del Sistema de Áreas Protegidas, los bosques naturales y su restauración.

Objetivos específicos

- Implementar una plataforma web que permita la interacción entre los propietarios de los bosques reservorios de CO₂ y la comunidad cooperante.
- Crear un Fondo de Compensación Ambiental que permita la administración del proyecto Banco2.

Metodología

- **Plataforma WEB:** Plataforma soportada en un portal de mapas que contiene los predios, la información de la familia campesina socia de BanCO₂ y de sus bosques, lo que permite interactuar con los campesinos habitantes de los bosques, los ecosistemas boscosos, la ciudadanía, las empresas, las instituciones.



- **Operador de BanCO₂: MASBOSQUES**
» **Fondo BanCO₂:** Cuenta especial que permite recaudar y distribuir los recursos que ingresan para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y su administración. Estos recursos de financiación son producto de la compensación de empresas, instituciones, ciudadanía, por las emisiones generadas por la actividad diaria, (huella de carbono). Son aportes obligatorios del plan de inversiones del 1% de proyectos que involucran el recurso hídrico en áreas protectoras y en acuerdo con los responsables del proyecto. Es la implementación de la estrategia de compensación por pérdida de biodiversidad y recursos propios de Cornare provenientes de las multas por daños ambientales.

Resultados

- 106 familias campesinas están conservando 1781,28 ha en bosques.

Gramalote Colombia Limited	\$113.400.000
Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P (para 3 años)	\$201.600.000
SUMICOL S.A	\$7.200.000
Airplan S.A	\$12.000.000
EPM E.S.P	\$94.406.610
ATECSA	\$10.000.000.
HMV Ingenieros	\$15.000.000.
Organización Corona	\$10.000.000.
Arquitectura y Concreto	\$24.000.000
Agrogreen	\$6.000.000.
CEO	\$ 7.200.000
EPM (para 3 años	\$1.200.000.000
ISAGEN	\$ 50.000.000
Total de recursos con convenios firmados:	\$2.154.006.610

 **Tabla 1.** Recursos con convenios.

- El 75% de los predios con el 62% de áreas en bosques en conservación hacen parte del SIRAP de la región, 244 ha en embalses, 373,82 ha en nodos y corredores de Valles de San Nicolás, 47 ha en páramo humedales y 447,87 en la Reserva Forestal Central de Ley 2ª.
- Tres desembolsos de Pago por Servicios Ambientales a las primeros 106 familias campesinas.
- Con las familias iniciales, que son propietarias de 1781,28 ha en bosque, se está pagando 531.210 t de CO₂ en el primer año.

- Con el proyecto BanCO2, se están beneficiando un total de 491 personas, de las cuales aproximadamente el 14,5% son niños.
- 17 municipios vinculados: Sonsón, Argelia, El Carmen de Viboral, Granada, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, Alejandría, Concepción, La Unión, La Ceja, San Roque, Santo Domingo, El Santuario, Marinilla.
- El costo mensual de compensación de los primeros 116 usuarios del proyecto es de \$44.000.000 mensual, con una inversión anual de \$528.000.000.
- Gestión realizada mediante firma de convenio de apoyo y donación con diferentes empresas.

Otras empresas e instituciones vinculadas: Arquitectura y Concreto, La Fundación Jardín Botánico de Medellín, El Parque Temático Hacienda Nápoles, Agrogreen S.A., ARclad S.A., Tann Colombiana S.A., Industrias CADI S.A.

Conclusiones

- La Estrategia de PSA BanCO2 ha demostrado ser efectiva en su corto tiempo, la oportunidad de conservación de 1.781 ha, en seis meses, bajo las estrategias tradicionales de conservación, sería imposible.
- Se encuentra en construcción la implementación del Sistema de Monitoreo, que permita obtener indicadores de sostenibilidad, tanto ambiental como social.
- La respuesta por parte de las familias campesinas ha sido positiva y, aunque tienen historias individuales, las necesidades les son comunes, es por ello que los recursos se destinan en su mayoría a mejorar el estado de sus viviendas, pagar servicios públicos atrasados, invertir en salud y en una mejor alimentación.

Sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia



Carlos Mario Tamayo Saldarriaga, Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Estrategia de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Lograr un efectivo manejo de las áreas protegidas (AP) y una estrategia de financiación que garantice la sostenibilidad financiera de estas en el tiempo constituye una política a nivel gubernamental tan importante como la propia declaratoria de las AP o la ampliación de las mismas. Un efectivo manejo de las AP y su sostenibilidad financiera no solo es relevante para la conservación de recursos naturales únicos al interior de las áreas, sino también para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos asociados a las AP. Para Parques Nacionales Naturales

de Colombia (PNNC) el logro de la sostenibilidad financiera de las áreas parte de una estrategia que empieza por el reconocimiento de los servicios ecosistémicos que las AP proveen para el bienestar humano y un efectivo análisis de los costos asociados al mantenimiento de estos servicios.

Colombia, en el marco de la Política Nacional de Biodiversidad, se planteó, en el documento CONPES 3680 de 2010, la meta de definir un sistema nacional de áreas protegidas efectivamente gestionado, lo que requiere de la estructuración e implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera. De esta forma, PNNC, como coordinador del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP), por medio de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios ambientales (SSNA), ha propuesto una estrategia para el logro de la sostenibilidad financiera del

SINAP, que parte del reconocimiento de los servicios ecosistémicos que las AP proveen, el reconocimiento de la brecha financiera en el manejo de estas y el planteamiento de planes de negocio que hagan uso de los servicios ecosistémicos para asegurar recursos que permitan el cierre de la brecha financiera, lo que permitirá una adecuada gestión de las AP.

Para PNN, manejar efectivamente las AP y asegurar los recursos financieros suficientes para la gestión de estas son acciones vitales para garantizar la sostenibilidad no solo financiera, sino también ecológica de las áreas. Asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas permitirá contribuir al logro de la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos presentes en las áreas del SINAP.

La sostenibilidad financiera es reconocida como la capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en el tiempo de forma apropiada, para cubrir los costos totales, tanto directos como indirectos, del SINAP. Emerton *et al.* (2006) señalan que el objetivo de la sostenibilidad financiera es asegurar que las AP sean manejadas efectiva y eficientemente según sus objetivos de conservación y otros pertinentes. Así, el foco debería ser, entonces, el fortalecimiento de la efectividad de manejo financiero de las AP.

Para lograr la efectividad en el manejo financiero de las AP, es preciso considerar un rango variado de elementos necesarios. Entre estos se encuentran la obtención de mayores ingresos, así como el tiempo y duración de estos, su destino y origen. Si bien el aumento de los ingresos para las AP debe partir del aumento del presupuesto o fondos nacionales asignados al manejo de estas, también debe incluir la generación de mecanismos financieros propios que permitan generar ingresos para las áreas de forma sostenida. Así mismo, para la sostenibilidad financiera de las AP, Emerton *et al.* (2006) proponen considerar la creación de una cartera de

financiamiento que sea diversa, estable y segura para minimizar los riesgos financieros y las fluctuaciones características del mercado. Esa cartera puede estar compuesta por fondos gubernamentales; fondos del sector privado, tales como pago para acceso y uso de las áreas; contribuciones no monetarias de comunidades locales; aportes de ONG y agencias de desarrollo; cambios de deuda por naturaleza y fondos fiduciarios, entre otros. Además de los anteriores, es necesario hacer una mención del papel de las empresas privadas en la generación de ingresos de las AP, puesto que estas tienen el potencial de generar flujos de ingresos más estables, empleos y otros beneficios para actores claves de la conservación de las AP.

Si bien aumentar los ingresos es un elemento necesario para la sostenibilidad financiera de las AP, mejorar la administración y efectividad financiera en el manejo de las áreas lo es en igual medida. Esto ya que la sostenibilidad financiera de las AP también depende en gran medida de que los recursos sean manejados y administrados, de tal forma que se genere eficiencia en el manejo, lo que permite a los administradores planificar a largo plazo, con incentivos y oportunidades de generar y retener recursos para las AP.

Además del aumento de los ingresos y de una eficiente administración de estos, una revisión de los costos y beneficios de las AP es clave para lograr conocer las necesidades financieras de las áreas. Un análisis de los costos debe cubrir un rango completo, desde los costos directos y de oportunidad, como también los beneficios del desarrollo local, estos últimos son elementos claves de las necesidades de financiamiento de las AP. Por último, para fortalecer la efectividad del manejo financiero, es necesario contar con un marco habilitante financiero y económico para sobrellevar las distorsiones institucionales, políticas y de precios que en el tiempo puedan afectar negativamente los ingresos o costos de las AP.



Los anteriores elementos pueden resumirse en la hoja de ruta propuesta por Flores *et al.* (2008), donde indica que los pasos necesarios parten de: 1) Análisis financiero y de brechas financieras, para determinar la situación actual y las necesidades puntuales que tiene el Sistema; 2) Definición de mecanismos de financiamiento y condiciones legales e institucionales que son necesarias que habiliten estos nuevos mecanismos; y 3) Definición de una estrategia financiera utilizando principios de negocios y planes de negocios para llevar a cabo las iniciativas analizadas.

El análisis de la brecha financiera consiste en la cuantificación de las necesidades de financiamiento de un área protegida individual o de un sistema de áreas. Para este análisis, Flores (2008) propone que es necesario comparar los recursos disponibles actuales, los cuales se toman como línea de base, con las necesidades de recursos, tanto

en un escenario básico (programas de manejo esenciales que se enfocan en prevenir el deterioro de la biodiversidad) como en un escenario óptimo (compuesto por programas de manejo que se orientan a optimizar las iniciativas de conservación).

Así mismo, para Flores (2008), la identificación y la selección de mecanismos financieros representan un aspecto crucial para mantener e incrementar los ingresos provenientes de fuentes existentes o establecer nuevas alternativas de recursos, con el fin de hacer frente a la brecha financiera existente y contribuir a la sostenibilidad financiera de las AP. Es importante indicar que la identificación y la selección de mecanismos financieros no solo se deben enfocar en opciones convencionales, como aumentos del presupuesto de mantenimiento de las áreas, generalmente poco diversificadas y sujetas a presiones políticas, sino también en alternativas innovadoras que pueden aportar a la mejora de la situación financiera de las áreas protegidas.

Además de la identificación de nuevos mecanismos financieros, ya sea de fuentes existentes o nuevas, es necesario resaltar la consolidación de un marco legal-institucional representado por leyes, regulaciones y entidades que garanticen el financiamiento de las áreas protegidas. Así, Flores (2008) señala que, más allá del discurso habitual sobre la importancia de la naturaleza, se requieren eficientes marcos normativos a nivel nacional, regional y global, orientados hacia el fortalecimiento técnico y financiero.

Por último, Flores (2008) señala que un plan financiero a nivel de sistema es una herramienta de carácter macro que establece las líneas de acción estratégica para el conjunto de áreas protegidas. En este sentido, el plan permite evaluar financieramente las operaciones, entrega información sobre las necesidades actuales y futuras y define opciones de apalancamiento

de recursos, tanto desde el sector público como del privado. Parques Nacionales Naturales de Colombia recoge los anteriores elementos planteados por Flores para el planteamiento de la estrategia de sostenibilidad financiera del SINAP. De esta forma, el primer paso de la estrategia de sostenibilidad financiera parte del análisis de brecha financiera de las áreas del SINAP realizado en 2013, con la metodología homologada para el cálculo de esta. Esta metodología fue aprobada en la Mesa de Sostenibilidad Financiera de julio de 2013. Cabe señalar que esta metodología permite su réplica a nivel regional, por lo que será posible conocer las necesidades reales de ingresos, tanto en el escenario básico como en el escenario mejorado, descritos por Flores, para la totalidad de las áreas que integran el SINAP.

El cálculo de la brecha financiera se realizó para las 56 áreas que integraban el Sistema Nacional de Parques Nacionales en el año 2013, las cuales representan el 82% del área del SINAP. Durante el ejercicio, se realizó el cálculo de las necesidades bajo los escenarios Inicial Estimado, Básico y Básico Mejorado. Los ingresos estimados para las 56 áreas protegidas que conformaban el Sistema de Parques Nacionales se estimaron en \$16.419 millones de pesos corrientes de 2012. Por su parte, los ingresos para el Sistema son de \$56.787,2 millones. El cálculo de la brecha financiera del sistema evidenció un déficit para las 56 áreas protegidas en el escenario Inicial Estimado de \$89.340,3 millones anuales; en el escenario Básico, de \$332.587 millones anuales; y en el escenario Básico Mejorado, de \$479.942,6 millones al año. Es importante señalar que la brecha financiera en el escenario básico y en el escenario Básico Mejorado representan el 0,05% y el 0,07% del PIB, respectivamente.

Así como se desarrolló este ejercicio para el sistema de Parques Nacionales, se debe aplicar a nivel regional de cada una de las áreas que integran el SINAP, con el fin de conocer el valor total de la brecha financiera. Es importante conocer el déficit agregado y por área protegida, tanto para el escenario óptimo como para el básico. Así es posible identificar la cantidad de recursos necesarios a conseguir para la gestión operativa y de inversión de las AP.

Conocer las necesidades financieras reales permitirá la correcta identificación y la selección de mecanismos financieros, este punto representa un aspecto determinante en la estrategia financiera y es crucial para mantener e incrementar los ingresos provenientes de fuentes existentes o lograr la consecución de nuevas fuentes de recursos. En este paso se integran diferentes ejercicios que buscan resaltar la importancia de las áreas protegidas para la consecución de los recursos. Así, un primer ejercicio está relacionado con la creación de conciencia de la importancia de la sostenibilidad financiera de las AP en las entidades relacionadas al SINAP. Esta es una actividad de gran impacto debido a que en Colombia el sector ambiente no es una prioridad para el plan de desarrollo del país, lo que genera poca figuración de los problemas ambientales en el marco nacional. En este sentido, la estrategia de sostenibilidad financiera de PNNC incluye una estrategia de publicidad y de concientización, donde se espera generar conocimiento acerca de los beneficios que generan los servicios ecosistémicos que prestan las áreas protegidas y cuánto puede costar mantenerlas, con el fin de incentivar la generación de recursos para la sostenibilidad.

Estos ejercicios de toma de conciencia son complementados con los ejercicios de valoración económica de los servicios ecosistémicos prestados por las AP, ejemplo de esto es la



📷 **Parque Nacional Natural Cocuy, Pico Sierra.** *Luis Alfonso Cano.*

valoración económica del servicio ecosistémico de regulación hídrica elaborado en 2013, en el cual se revela que cada año los PNNC aportan por provisión y regulación hídrica cerca de un 1% del PIB adicional al país; esto sin estimar el efecto multiplicador que para la economía tendría el hecho de no existir dicha disponibilidad de agua adicional para los sectores productivos.

Cabe señalar que, a pesar de las limitaciones existentes en los estudios de valoración económica, especialmente la limitación de subestimar el verdadero valor de los servicios ecosistémicos y su dificultad para abarcar la complejidad de las funciones ecosistémicas, los ejercicios de valoración buscan resaltar la importancia de los servicios ecosistémicos provistos por las AP del Sistema Nacional de Parques Naturales a los sectores económicos y la sociedad civil. De esta forma, se espera poner en evidencia los beneficios directos e indirectos, que obtiene la población colombiana de las AP, para

incentivar a ciudadanos, sectores económicos y políticos a su reconocimiento, entre otros, que la inversión pública destinada para la conservación de las áreas protegidas se incremente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Una vez conocida la brecha financiera, se procederá a decidir la manera de reducir esta brecha. Los métodos compilados por otras estrategias optan por utilizar mecanismos económicos, en Colombia se conocen como instrumentos. Sin embargo, antes de proponer un instrumento se debe realizar un estudio jurídico y técnico que viabilice la implementación de este. Gracias a las valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos provistos por las AP es posible gestionar con los sectores que se benefician directamente de la provisión de los servicios ecosistémicos la consecución de nuevos recaudos, así como el desarrollo de nuevos mecanismos económicos para el aumento de los recursos destinados para la operación del SINAP.

En este punto es necesario señalar que, para poder desarrollar nuevos instrumentos económicos o reforzar los instrumentos existentes, es necesario reforzar el marco legal e institucional, lo que permitirá que los instrumentos económicos propuestos o mejorados tengan un mejor desempeño. Además, el fortalecimiento jurídico y técnico de los instrumentos existentes para la mejora en la consecución de recursos para las AP es necesario la formulación de un plan financiero a nivel del sistema como una herramienta macro que permita la definición de líneas de acción estratégica basadas en el reconocimiento de los servicios ecosistémicos provistos por las áreas. Es necesario señalar que, gracias a las valoraciones económicas de estos servicios y a los ejercicios de toma de conciencia realizados como parte de la estrategia, es posible construir las líneas de acción estratégica incluyendo la totalidad de sectores que reciben beneficios de la existencia de las áreas protegidas.

Por último, PNNC, fortaleciendo los instrumentos económicos y partiendo desde una perspectiva integral, reconoce que la sostenibilidad financiera no solo implica la suficiencia económica para el manejo del área, sino que también permita a las comunidades ligadas al área desarrollar alternativas productivas que no afecten la conservación y al mismo tiempo pueda maximizar su bienestar.

PNNC se encuentra implementando el programa “Ecoturismo comunitario”, el cual se realiza a través de alianzas con organizaciones comunitarias locales para la prestación de los servicios y actividades ecoturísticas, lo que genera beneficios económicos y sociales para sus habitantes, contribuyendo con la conservación del medio natural y las culturas de la zona y mejorando la sostenibilidad financiera de PNNC.

Conclusiones

La estrategia propuesta por PNNC de búsqueda de la sostenibilidad financiera del SINAP se basa en tres pasos. El primero consiste en el cálculo exacto de la brecha financiera del sistema. El segundo es una estrategia de creación de conciencia de la importancia de la sostenibilidad financiera de las AP en las entidades relacionadas al SINAP. Esta es complementada con ejercicios de valoración económica de los servicios ecosistémicos prestados por las AP que resaltan la importancia de estos a los sectores económicos y a la sociedad civil.

Por último, la estrategia busca que, para el desarrollo de nuevos instrumentos económicos o el reforzamiento de los instrumentos existentes, sea fortalecido con un marco legal e institucional específico para estos, así fortalecer la búsqueda de sostenibilidad ecológica y financiera de las AP, lo que permitirá que los instrumentos económicos propuestos o mejorados tengan un mejor desempeño.

Para lograr que esta estrategia sea exitosa, Parques Nacionales Naturales de Colombia espera contar con el apoyo de los diferentes estamentos que integran el SINAP, con el fin de poder calcular la brecha financiera total del sistema, realizar valoraciones de los servicios ecosistémicos provistos por las AP, la propuesta de nuevos instrumentos económicos para la generación de ingresos para las AP. Con los anteriores elementos expresados en la estrategia se espera lograr un manejo efectivo las AP y así lograr la sostenibilidad financiera de las áreas, permitiendo contribuir al logro de la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos presentes en las áreas del SINAP.

Bibliografía

CIVICUS. (s.f). Desarrollo de una estrategia financiera. *CIVICUS World Alliance for Citizen Participation*. Recuperado el 23 de julio de 2014 de: <http://www.civicus.org/new/media/Desarrollo%20de%20una%20estrategia%20financiera.pdf>

Emerton, L., Bishop, J. & Lee, T. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. *Technical Series*, (13), 97.

Goyeneche, A. (2007). *Estrategia para la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional Ambiental (SINAP): Propuesta de líneas estratégicas*. Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. and Courrau, J. (2006). *Evaluating Effectiveness: A*

framework for assessing management effectiveness of protected areas. 2nd edition. UK: IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, chapter xiv, 105.

Programa FAO/OAPN. (2010). *Fortalecimiento del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas de América Latina*. Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (Redparques).

Suárez, I., Jiménez, S., Vargas, K., & Chan, G. (2008). *Estrategia financiera para sistemas de áreas protegidas: La experiencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica*.

Vergara, A., Egüez, T. & Galindo, J. *Guía metodológica para el desarrollo de planes de sostenibilidad financiera a largo plazo para sistemas nacionales de áreas protegidas (Snap's)*. Quito.



Experiencias de los subsistemas en el manejo efectivo de las áreas protegidas, reflexiones sobre los incentivos para el logro de objetivos de conservación



Erika Nadachowski Chavarro
Corporación Autónoma Regional de Risaralda

SIRAP Eje Cafetero

Es un espacio de encuentro entre autoridades ambientales y otros actores de los sistemas departamentales de áreas protegidas de la región del Eje Cafetero para:

- Compartir avances de la gestión en áreas protegidas.
- Conocer y discutir temas de interés común.
- Definir acuerdos regionales que sirvan para la orientación de diferentes temas, aplicados a nivel departamental o local.

- Canalizar aportes y negociar posiciones de la región, en la construcción del SINAP.

Propósito

Contar con un conjunto de AP, de sistemas locales e iniciativas complementarias a los objetivos de estas áreas, trabajando armónicamente para contrubuir a la conservación de la biodiversidad, a la generación de bienes y servicios ambientales y al bienestar de las comunidades de la ecorregión del Eje Cafetero, en coherencia con los objetivos del SINAP.

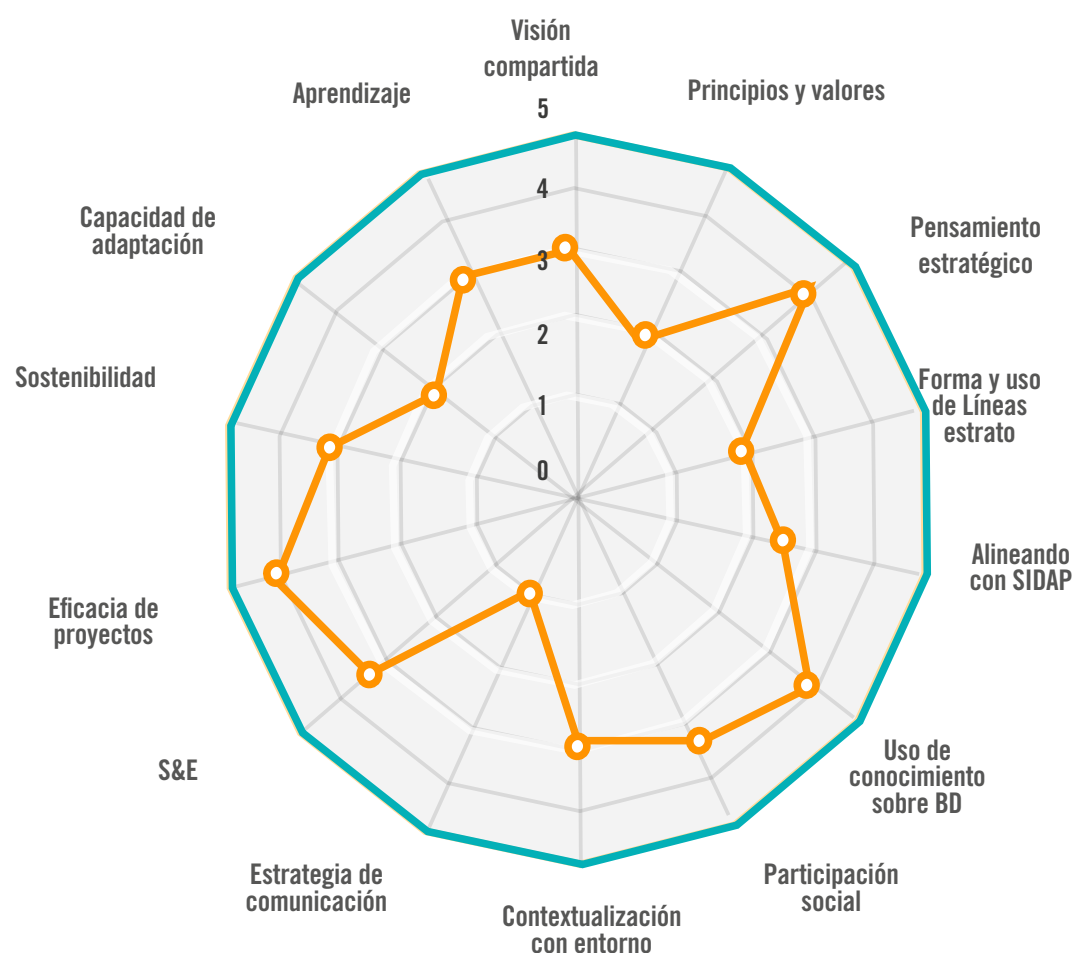


Figura 1. Antecedentes.

Antecedentes

Los municipios que conforman el Eje Cafetero contaban con 220 categorías de áreas protegidas, lo que obligó a entender, definir y llegar a acuerdos comunes para la planificación de estas áreas. Aproximadamente en el 2007, se definió hacer un alto en el camino para empezar a evaluar lo que se había propuesto el Sistema. Se habían construido planes muy ambiciosos y se hizo una evaluación pensando principalmente que el tema de la participación era un eje central a mejorar. Ya en el 2009, se aplica la metodología de efectividad del manejo RAPPAM, que fue modificada por WWF, a los sistemas departamentales del SIRAP Eje Cafetero y de los SIDAP que conforman el Sistema.

Esta metodología parte de entender cómo son los planes de trabajo que se tienen y cómo se han puesto a funcionar. Se hace un análisis usando

aplicativos de preevaluación que se desarrolla con las personas que trabajan en el SIRAP y esos resultados permiten analizar los avances y retrocesos, lo que no se ha hecho, lo que se debe mejorar y qué cosas han funcionado muy bien.

Se tienen resultados como la Figura 1.

En cuanto a la eficacia de los proyectos, estaba muy bien el sistema, siendo 0 la calificación más baja y 5 la más alta. En varios aspectos el puntaje fue bajo, como en la estrategia de comunicación. No se contaba con una, era una cuestión de las personas o las instituciones, pero hacia afuera no se hacía mucho trabajo. En cuanto al uso en conocimiento de biodiversidad, estaba muy bien el sistema, apoyado por organizaciones internacionales como WCS y WWF, que son unos socios excelentes para generar información primaria. En cuanto al intercambio con los diferentes SIRAPs, en ese momento el SIRAP

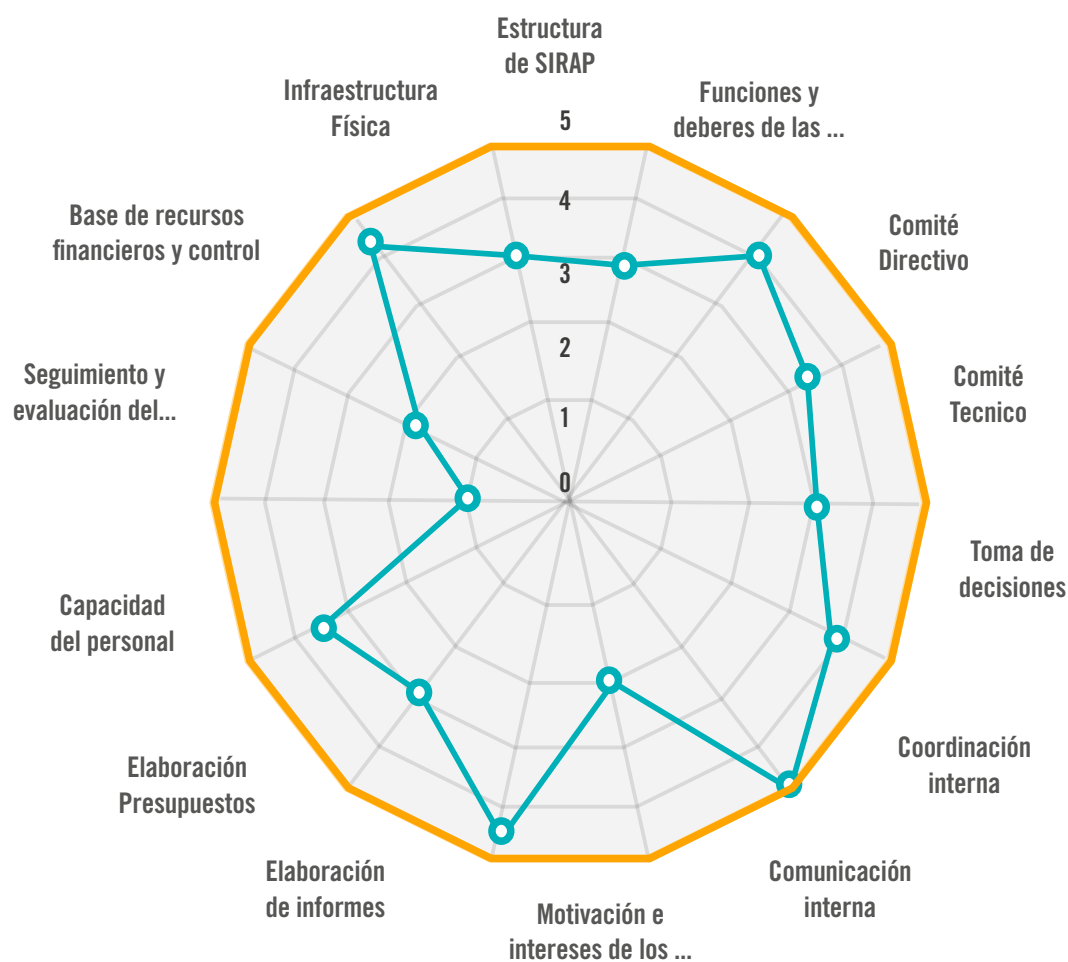


Figura 2. Estructura interna del SIRAP.

EC estaba en etapa de consolidación y por eso el resultado no fue muy alto. El sistema estaba muy bien en la mesa de Comité Técnico donde va un representante, pero faltaba bajar a los sistemas departamentales.

En cuanto a la estructura interna del SIRAP, los resultados son los de la Figura 2.

El sistema estaba muy bien porque contaban con cinco corporaciones, todas con profesionales de diferentes disciplinas, y se tenía también el apoyo institucional de todos los socios. Se cuenta con un Comité Directivo que garantiza la participación de los directores o tomadores de decisiones de todas las instituciones. En cuanto a comunicación interna, el puntaje fue alto.

Se seleccionaron algunos grupos según la metodología propuesta y con estos criterios, por medio de los cuales básicamente trabajarán con áreas protegidas o tuvieran relación con estas. En

la aplicación del instrumento, se observó que la mayoría de los SIDAP son reconocidos por:

- Alto valor socioeconómico por la generación de empleos locales.
- Identificados como principales proveedores de servicios ambientales (p.ej., agua para consumo humano).
- Tienen sitios de valor paisajístico, cultural y científico.
- Los sistemas departamentales de Caldas, Risaralda y Valle son reconocidos por la contribución al fortalecimiento de grupos comunitarios.

Y se identificaron vulnerabilidades como:

- Facilidad de acceso para el desarrollo de actividades ilegales.

- En algunos SIDAP existen actividades de control y vigilancia permanente en la mayoría de las áreas, pero las actividades de monitoreo no se sistematizan.
- Deficiencia en la aplicación de multas y sanciones.
- El alto valor de los recursos maderables.
- En el SIDAP Risaralda existe un proceso de monitoreo continuo y sistematizado, pero es baja la aplicación de multas y sanciones a las actividades críticas identificadas.

En la evaluación de efectividad se identificó:

- Que la mayoría de los sistemas presentan un alto valor en las preguntas relacionadas con los objetivos del sistema.
- Todas las áreas protegidas de los SIDAP tienen dentro de sus objetivos la conservación de la biodiversidad, de los bienes y servicios ambientales y la protección de los valores culturales, además del reconocimiento de estos objetivos por parte de comunidades e instituciones locales.
- Todas las áreas protegidas se encuentran reconocidas en los POT de los municipios; además, las áreas protegidas del Valle se encuentran registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos con afectación ambiental.
- Los aspectos críticos de este grupo de preguntas están relacionados con algunas presiones que actualmente tienen las áreas, como invasiones, extracción minera y parcelaciones del INCODER en áreas de protección.
- Aunque la mayoría de las áreas se han declarado obedeciendo a las oportunidades, en su gran mayoría se encuentran vinculadas a figuras de conservación y su área es mayor a 100 ha.

Mediante la metodología se reconoce que:

- Existen planes de manejo formulados y en proceso de implementación para la mayoría de las áreas protegidas declaradas.
- Todos los SIDAP Tolima tienen información base de sus áreas protegidas.
- En los SIDAP de Risaralda, Caldas y Valle existen diferentes esquemas para la administración de las áreas, pero todos con participación institucional y comunitaria.

Los puntos críticos de la planificación están relacionados con que:

- En la mayoría de las áreas no se realizan procesos de monitoreo y seguimiento (sistemáticos).
- Un tema crítico en los SIDAP es la investigación, esta no se adecúa a las necesidades y no existe en los sistemas departamentales prioridades para la investigación, con excepción de Valle, que cuenta con una agenda de investigación.

Resultados

- Se ajustaron las metas del SIRAP EC.
- Se amplió la participación en el Comité Técnico a los representantes de los diferentes SIDAP.
- Se identificaron temas a desarrollar de manera prioritaria: estrategia de comunicaciones; estrategia de investigación y capacitación; generación de espacios de intercambio de experiencias inter-SIDAP e inter-SIRAP.
- Gobernanza en áreas protegidas, identificación de prioridades de conservación regional.

- Las CAR involucraron al SIRAP en sus planes de acción.
- Ampliación de 5 áreas protegidas.
- Se logró la participación en instancias nacionales (mesas de memorando de entendimiento y CONAP).

A partir de estos resultados, se decide trabajar en estos cuatro ejes temáticos del Plan de Acción SIRAP EC:

1. Conservación y manejo sostenible.
2. Fortalecimiento de capacidades.
3. Participación y comunicación.
4. Relacionamiento y gestión.

Conclusiones y retos

Hacer una evaluación es fundamental, se identifica la necesidad de establecer estas evaluaciones periódicamente. Además, no es fácil la construcción de planes de acción que involucren diferentes autoridades ambientales, es diferente cuando se tiene un área protegida, como un parque nacional, a tener cinco departamentos en la gestión de las áreas protegidas. La mirada regional es necesaria para el logro de los objetivos de conservación de la biodiversidad y finalmente se identifica la necesidad de construir una estrategia financiera para el SIRAP EC.



 Santuario Fauna y Flora Otún Quimbaya.



04

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Los subsistemas de áreas protegidas, su
planeación y sostenibilidad financiera

Plenaria



Índice



Natalia Gómez; *SIDAP Valle*; Marco Aurelio Correa Múnera; *SIDAP Caquetá*; Ana Elvia Arana; *SIDAP Valle*; Jaime Vásquez; *SIRAP Pacífico*; Mauricio Angeé; *Asociación de Municipios del Parque Nacional Natural Tatamá*

De acuerdo a los objetivos del Simposio 6, se hicieron dos preguntas a los primeros ponentes:

1. ¿Qué retos se tienen para fortalecer la integración de los subsistemas a los procesos de desarrollo a nivel local, regional y nacional?
2. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones al interior del subsistema?

Respuestas de los ponentes

Natalia Gómez. Para fortalecer la integración de los subsistemas a los procesos de desarrollo a nivel local, regional y nacional, básicamente hay que posicionar las áreas protegidas como lo plantea la política actual de gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y es que la biodiversidad es fundamental para el ordenamiento y es fundamental que la gente entienda que la estructura ecológica, principalmente las áreas protegidas, es esencial para el desarrollo de las actividades productivas. Esto se logra a través de los municipios, son ellos quienes tienen esa labor en el tema de ordenamiento territorial, en los procesos de planificación y en los planes de desarrollo.

Marco Aurelio Correa. Respecto a cómo se integra el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Caquetá (SIDAP Caquetá), ha sido un reto lograr la participación de los entes territoriales. En el ejercicio que hicimos, los particulares y la universidad logramos incorporar a la Corporación Autónoma Regional y a Parques Nacionales Naturales de Colombia y, por último, a la Gobernación del departamento. Lo primero que se hizo fue involucramos en la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental y, con mucho esfuerzo, se hicieron todas las gestiones para que el sistema departamental quedara considerado en el Plan cuando lo estaban formulando. El sistema se debe integrar con los otros sistemas, con el subsistema, darse a conocer y compartir experiencias y aprendizajes.

Ana Elvia Arana. Para fortalecer la integración de los subsistemas a los procesos de desarrollo a nivel local, regional y nacional, se tiene que tener en cuenta que las áreas protegidas son una estrategia de ordenamiento territorial. En esa medida, mientras estén en los procesos de ordenamiento, necesariamente

tiene que haber una relación con los procesos de planificación. Ahora están avanzando los planes de ordenamiento departamentales, en esa medida el SIDAP Valle, a través del proceso de cualificación de actores, se está integrando al sistema y está presente en más de 80% de los planes de desarrollo del departamento. Creemos que la fórmula es lograr que las áreas, sus sistemas y los actores participen en los ejercicios de ordenamiento.

Jaime Vásquez. Para fortalecer la integración de los subsistemas a los procesos de desarrollo a nivel local, regional y nacional, en el caso del SIRAP Pacífico, uno de los retos grandes tiene que ver con el modelo de desarrollo para la región y la estrategia de participación. Se señalaba que, a la fecha, el ejercicio se da en el ámbito institucional, pero está previsto en el segundo semestre del año ya poder realizar la integración con otros actores, tales como comunidades indígenas y afrodescendientes, alcaldías, departamentos, ONG, universidades, y todos los actores que tienen que ver con la región. Ese es uno de los retos. El otro reto está marcado por la implementación de la estrategia de posicionamiento del SIRAP por sectores económicos y de desarrollo de la región. Se tiene planteado unos ejercicios de posicionamiento con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sector infraestructura y sector portuario. Lo importante es que los sectores reconozcan el papel que las áreas protegidas y las estrategias complementarias de conservación están jugando en el pacífico y en la consolidación del modelo de desarrollo. El Pacífico, en este momento, tiene las expectativas de desarrollo de generar proyectos de adelanto de los sectores y estos se ven en contravía de la propuesta de conservación y de un desarrollo más sustentable. Entonces, el reto es poner a conversar estas dos propuestas en un ejercicio articulado con todos los actores que tienen que ver con la región.



Mauricio Angeé. Para fortalecer la integración de los subsistemas a los procesos de desarrollo a nivel local, regional y nacional, en la asociación afortunadamente tenemos vinculados a los municipios y esto nos permite tener en cuenta los intereses de ellos alrededor del Parque Nacional Natural Tatamá. Esto nos permite, a través del Parque, tener una figura de desarrollo local y regional, lo que nos permite estar involucrados con la planeación territorial. Además, nos permite lograr una articulación de todos los entes que forman parte de ese sistema, la asociación está articulada con la gobernación, la alcaldía, las corporaciones autónomas. Todos están trabajando en torno a los procesos de desarrollo que se puedan realizar y que sean sostenibles alrededor del Parque Nacional Natural Tatamá. Esto es una fortaleza: que haya voluntad política de apoyo para el Parque y para todos los procesos que se dan en torno a su desarrollo.

[Se pasa a responder preguntas de los asistentes dejando de lado la segunda pregunta que se había formulado para el panel].

¿Cómo ha sido el tema con comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes?

Natalia Gómez. Para el caso del SIDAP Valle, se ha trabajado desde procesos de cualificación y la homologación de saberes de las dos partes. Con ambas comunidades hay un gran avance frente a la definición de objetivos de conservación de áreas de conservación y de estrategias naturales de manejo para comunidades negras. También se ha conformado el Comité de Comanejo o manejo de articulación interinstitucional para el manejo de las áreas, todavía falta seguir trabajando a pesar de los avances que se han tenido. Se habló en el Simposio 8 de la experiencia de la Reserva Natural Bazán-Bocana, que muestra cómo una comunidad empoderada de su territorio le saca partido a lo ambiental y al tema de la sostenibilidad del proceso y su vida como comunidad.

La pregunta es respecto a comunidades indígenas y en torno a cómo incentivar si alguien quiere conservar.

Marco Aurelio Correa. Para el SIDAP Caquetá lo más importante es la voluntad de conservar, es fundamental que haya mecanismos y recursos que permitan incentivar y premiar a quien está conservando. Hasta el momento, los recursos han sido limitados, pero es importante que, tanto el campesino como el indígena o el afro, les sean reconocidos los esfuerzos. Como universidad y como grupo de trabajo institucional, estamos generando un espacio institucional, académico y científico a quienes ofrecen servicios de turismo de naturaleza. También se ofrece ese acompañamiento en la formulación de los planes de manejo y en estudios de impacto ambiental.

Siempre ha existido la idea que debe haber un incentivo a la conservación, lo cual debe partir de políticas nacionales, no solo del contexto local, como pasa en el sistema departamental.

¿Los municipios tienen competencia para declarar áreas protegidas?

Ana Elvia Arana. Se tiene un concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible de este año que lo dice. La Constitución y la Ley 388 ordenan a tomar todas las decisiones necesarias para proteger todo el patrimonio ambiental y ecológico de la nación. Lo que confiere la ley 388, que dice que se puede ordenar el territorio y tomar esas medidas para poder declarar, puede que no se haga, pero sí se puede declarar.

¿Cómo incorporar el tema de educación ambiental a la conservación de las áreas protegidas? Realmente en el caso nuestro hemos tratado de hacerlo a través de los comités interinstitucionales de educación ambiental en los procesos locales, pero uno de los grandes vacíos que se tiene ha sido en el plan de acción ha sido lograr incidir en los procesos de la Secretaría de Educación Departamental para que se incorpore al pensum educativo del departamento.

¿Hay algún interés en generar un área protegida binacional Colombia-Ecuador?

Jaime Vásquez. PNNC se encuentra considerando la zona de Cabo Manglares. En el año 2013, con el ejercicio de Reserva Temporal, se identificó la importancia de esa zona, ya que Cabo Manglares es un área bien conservada y estamos arrancando con el proceso de la ruta de declaratoria de nuevas áreas. Estamos en una etapa muy temprana, se debe hacer todo el proceso de concertación con las comunidades que están allí asentadas y se cree que el área corresponde a los intereses de conservación también correspondan a los de Ecuador.



Mauricio Angeé. Conformación del Comité Técnico, el cual hace parte los municipios y las corporaciones autónomas regionales, Parques Nacionales y la Asociación. A través de ese comité, se hace acompañamiento y asesoría técnica, administrativa y pedagógica a los planes de ordenamiento territorial, a diferentes proyectos para el crecimiento y fortalecimiento de la Asociación y de Parques, tenemos varios proyectos planeados a nivel local, regional y a nacional. También tenemos el apalancamiento con el Departamento Nacional de Planeación. Ese comité se reúne una vez al mes o más de acuerdo a las necesidades de toma de decisiones de los proyectos.

Preguntas de los asistentes a los ponentes

1. ¿Si el estado invierte y mantiene el SNAP ecuatoriano, por qué se abrió Yasuní para la explotación petrolera?

Juan Carlos Rivera. Efectivamente, durante los últimos 10 años el estado ecuatoriano ha asumido con gran responsabilidad la dotación de recursos disponibles para la conservación y

mantenimiento del sistema de AP. Sin embargo, Ecuador tiene también otras prioridades de inversión social que han estado desatendidas durante mucho tiempo, como la educación y la salud, por ejemplo. En este sentido, los recursos provenientes de Yasuní contribuirán a este tipo de inversión social que actualmente carece de presupuesto suficiente.

2. ¿En qué se invirtió específicamente el presupuesto estatal?

Juan Carlos Rivera. Durante los últimos años, la inversión del estado se ha enfocado principalmente en mejorar la infraestructura de todas las AP del sistema y a incrementar significativamente su personal. Sin embargo, en paralelo ha atendido también cada uno los programas de manejo estandarizados a nivel del sistema.

3. ¿Dentro de los recursos hídricos, cómo se maneja la cobertura de acueductos para las comunidades que habitan las áreas protegidas?

Carlos Mario Tamayo. Esta pregunta escapa de la competencia específica de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. Sin embargo, se consultó con el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, quienes amablemente y de acuerdo a una respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión y Manejo respecto a la misma inquietud, brindaron una respuesta.

Para realizar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, es necesario que la persona o personas interesadas soliciten una concesión de aguas a la autoridad ambiental competente, en este caso Parques Nacionales Naturales. De esta forma, un habitante de un área protegida que acredita propiedad privada conforme a las leyes agrarias dentro de un área protegida puede ser sujeto de

otorgamiento de concesión de aguas al demostrar que tiene necesidad de uso del agua. Dado que las áreas del SINAP son de especial protección y tienen un régimen de usos restrictivo, el trámite contempla un estudio riguroso acorde con las actividades permitidas en el Sistema de Parques y la zonificación del Área Protegida.

4.¿Cuál ha sido el impacto financiero para el sistema de Parques Nacionales Naturales, los recursos provenientes de los prestadores ecoturísticos privados que tienen concesiones y cuál ha sido el impacto social y económico frente a las comunidades locales que no hacen parte de la concesión?

Carlos Mario Tamayo. El impacto financiero de los recursos provenientes de los prestadores ecoturísticos privados es significativo para los ingresos propios de la entidad, ejemplo de esto es que estos recursos representaron durante el año 2013 el 24% del total los ingresos propios de Parques Nacionales, este porcentaje del total de ingresos propios, ha sido relativamente constante desde el año 2010.

Además de los ingresos financieros para la entidad, las concesiones generan externalidades positivas para las áreas protegidas y los habitantes vecinos de estas. Así, para la concesión Tayrona, el número promedio de empleados fijos en el año 2013 fue de 123 personas, adicionando 35 en las temporadas altas. El número de empleos ha crecido un 17% al comparar el año 2010 con el 2013, incremento que en parte obedece al aumento en el número de visitantes que ingresan al PNN Tayrona. Para el caso del Vía Parque Isla de Salamanca, el promedio de empleados al mes durante 2013 es de 4 personas; los salarios y prestaciones pagadas suman \$64 millones de pesos, cifra que beneficia a las comunidades aledañas al Vía Parque, principalmente de las comunidades de Palermo y Caño Clarín. En el PNN Gorgona, el número promedio de empleados de la concesión ha sido 24 personas para la vigencia 2013. Sin embargo, este número se

ha reducido en un 60%, debido a la disminución de visitantes al Parque y la difícil situación financiera que atraviesa la concesión, lo que ha conllevado a la disminución de gastos operacionales.

Para finalizar, en los contratos de concesión se especifica que se debe dar prioridad a la compra de productos agrícolas, pecuarios, artesanías y la contratación de servicios con miembros de las comunidades cercanas a los parques, lo que garantiza la generación de recursos para los habitantes de las zonas aledañas a los parques.

En el PNN Tayrona, las compras de productos como café orgánico, carne, coco, limón, plátano y flores generaron, durante el año 2013, ingresos a las comunidades cercanas al Parque por valor de \$59 millones de pesos. Cada año estas compras han aumentado constantemente desde el 2010 hasta el 2013. Así mismo, con las comunidades se contrataron servicios para la concesión como alquiler de caballos, evacuación de basuras, acarreo, alimentación, lavandería, transporte y mantenimientos, los cuales representaron aproximadamente \$392 millones de pesos para los prestadores de estos servicios durante 2013. En el PNN Gorgona, las comunidades cercanas al Parque se vieron beneficiadas con la compra de víveres, abarrotes y carnes, siendo estas aproximadamente \$99 millones de pesos. Adicionalmente, se contrataron servicios como transporte, cargo y descargo de mercancías, alimentación y mantenimientos durante el año 2013 por valor de \$164 millones de pesos. Para el caso del Vía Parque Isla de Salamanca, las principales comunidades beneficiadas son las de Palermo y Caño Clarín, con quienes se han contratado servicios como la guianza por senderos terrestres, bogas para recorridos en canoa, preparación de almuerzos, mantenimientos generales y el suministro de pescados, cocos y plátanos por un valor durante el año 2013 aproximadamente de cuatro millones de pesos.

04

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas

Contenidos



Experiencias en reservas
naturales de la sociedad...
pág. 202



Plenarias
pág. 230



Pósteres
pág. 242



Índice

En Colombia, como en el resto del mundo, la mayor proporción del territorio está en manos privadas. Por tal motivo, en términos de superficie, las iniciativas de conservación de la sociedad civil constituyen una alternativa de la mayor importancia para completar los esfuerzos del Estado por proteger la biodiversidad del país. La legislación colombiana reconoce estos esfuerzos por medio de la figura de reservas naturales de la sociedad civil (RNSC), que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, las RNSC implican un reto adicional al de las áreas públicas, ya que dentro de ellas se dan procesos productivos que deben ser compatibles con la conservación de los ecosistemas que encierran.

Más allá de resaltar los procesos de conservación que se dan hacia y dentro de las RNSC, los objetivos del Simposio 7: Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas fueron:

1. Mostrar ejemplos de cómo las RNSC trascienden sus límites y contribuyen a la conservación de los territorios donde están establecidas.

2. Difundir experiencias de alianzas institucionales en pro de la conservación.
3. Presentar herramientas jurídicas necesarias para que las RNSC puedan perdurar y por tanto cumplir con sus objetivos de conservación.

Tradicionalmente, las RNSC han mostrado procesos que se dan en el interior de las mismas. Este Simposio se encuentra enfocado en difundir experiencias donde las RNSC han contribuido a la conservación de territorios, ecosistemas y procesos que se dan por fuera de sus límites; por lo tanto los principales temas abordados fueron:

- El papel de las RNSC en el ordenamiento territorial.
- Herramientas jurídicas para la consolidación de las funciones de las RNSC.
- Establecimiento de alianzas institucionales en pro de la conservación.
- Sistemas productivos y conservación.
- Conectividad con otras áreas protegidas.

01

**Las reservas naturales de la sociedad
civil en los subsistemas**

Experiencias en reservas naturales de la sociedad en Colombia

Contenidos

- ➔ Reservas de la sociedad civil: análisis preliminar de su marco legal
pág. 203
- ➔ Reserva Natural de la Sociedad Civil, una propuesta de Bienvivir local en el sur-occidente colombiano
pág. 221
- ➔ Aplicación de herramientas jurídicas de conservación en la RNSC La Nevera, Jardín, Antioquia
pág. 215
- ➔ Comanejo y compensación por servicios hidrológicos para conservación de ecosistemas...
pág. 224



Reservas de la sociedad civil: análisis preliminar de su marco legal



Natalia Gómez Peña & Astrid Milena Bernal, *Asociación Ambiente y Sociedad*; **Jorge Iván Orozco**, *Reserva Natural Santa María de La Loma*

La Constitución colombiana de 1991 es definida como una constitución ecológica, donde hay una explícita consagración del derecho al disfrute de un medio ambiente sano, con un enfoque participativo, que establece la obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica del país.

La acción conjunta del Estado y de la sociedad civil en el marco de la conservación ambiental, se convierte en una herramienta fundamental para la protección de los ecosistemas, los recursos naturales y las especies. Bajo estos parámetros, se crearon las reservas naturales de la sociedad civil (RNSC) como zonas protegidas donde

convergen estas prácticas de conservación-producción sostenible. Se calcula que en el país hay entre 500 y 800 RNSC, muchas de ellas constituidas *de facto* pues no cuentan con el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y el marco legal existente las hace sentir más amenazados que incentivadas, por lo que adelantan una labor silenciosa basada en la decisión personal de consagrar sus predios al objetivo de la conservación, sin una mayor formalización de su actividad.

La Asociación Ambiente y Sociedad y la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur) están llevando a cabo un trabajo que dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es el

marco jurídico existente en Colombia suficiente y efectivo para incentivar la vinculación de la sociedad civil a los procesos de conservación de la biodiversidad en el país? Se busca identificar tanto las oportunidades e incentivos como los retos y vacíos existentes para las RNSC, así como los derechos de participación que se les conceden a estas en los procesos de planificación y toma de decisiones en torno al territorio donde se encuentran, y los programas y proyectos de desarrollo que las afectan.

A partir de éste análisis normativo, y con base en las experiencias locales de los asociados de Resnatur, se busca generar propuestas de políticas que efectivamente faciliten la participación de la sociedad civil en estos procesos e incentiven la constitución y la continuidad de RNSC en el país. Este documento preliminar hace parte de esta investigación y busca poner en la mesa de discusión algunos de los puntos que han sido considerados como esenciales en torno al tema de las RNSC.

La estructura de esta ponencia se divide en cuatro partes principales. En la primera se hará referencia al marco constitucional y legal bajo el cual se instituyeron las RNSC, teniendo en cuenta los principios que permitieron su desarrollo y los principales instrumentos normativos que las regulan. En segundo lugar, se hará referencia al proceso de constitución de las RNSC. En tercer lugar, se tratará el tema de los derechos e incentivos que se desprenden del registro formal de un área como RNSC y que buscan promover el compromiso de los privados con las actividades de conservación. En la última sección, se hará referencia a algunas oportunidades en materia de conservación que pueden convertirse en soluciones valiosas para asegurar que las RNSC cumplan su labor de conservación y mantengan su trabajo en el tiempo. Finalmente, se plantearán algunas conclusiones.

Marco constitucional y normativo de las RNSC en Colombia

La Constitución colombiana contiene casi 40 artículos relacionados con la defensa y protección del medio ambiente que han sido la base para que el Estado implemente una serie de políticas destinadas a promover la conservación y el desarrollo sostenible. Gracias a este articulado, hoy Colombia cuenta con un sustento legal para proteger las riquezas naturales de la nación, para exigir el derecho a gozar de un ambiente sano como derecho fundamental, internacionalizar las relaciones ecológicas, e incluso darle a la propiedad una función ecológica. Especialmente se debe destacar artículo 79, que consagra el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines.

Así mismo, la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, incluyó una serie de principios que deben regir la política ambiental en Colombia, entre los cuales se destacan los siguientes:

- a. Los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, especialmente el principio 10 que garantiza el derecho a la participación, y el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental.
- b. El principio de protección prioritaria y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del país como patrimonio nacional.
- c. El principio de acción conjunta entre el Estado, la comunidad, las ONG y el sector privado en materia de protección y recuperación ambiental de manera que puedan integrarse esfuerzos individuales en la búsqueda de un propósito común.



En materia legislativa, el artículo 31 numeral 15 de la Ley 99 de 1993 establece como una de las funciones que cumplen las corporaciones autónomas regionales (CAR) la de administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese ministerio les delegue, teniendo en cuenta que la administración de esas áreas puede hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

El artículo 109 introdujo el concepto de la Reserva natural de la sociedad civil, (RNSC), estableciendo como tal:

La parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental.

Con la expedición del Decreto 1996 de 1999, reglamentario de la Ley 99 de 1993, se estableció que las RNSC tienen como objetivo el manejo integrado, bajo criterios de sustentabilidad, que garanticen la conservación, preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales que estas contienen y que permitan la generación de bienes o servicios ambientales.

Por otra parte, el artículo 110 de la Ley 99 de 1993 contempla el deber de registrar o matricular ante el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible las RNSC, deber que recae en cabeza del propietario de la reserva. Dicha solicitud de registro puede ser elevada directamente o por intermedio de organizaciones sin ánimo de lucro. Es gracias a este registro que los propietarios adquieren los derechos que la legislación contempla para las RNSC. Este artículo incluye también una disposición que consagra la obligación del Estado de promover y facilitar la adquisición, establecimiento y libre desarrollo de áreas de reserva natural, por parte de la sociedad civil, en ecosistemas o zonas estratégicas.

Mediante el Decreto 2372 de 2010 se estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y se instituyeron dos categorías principales de áreas protegidas las públicas (que incluyen el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las reservas forestales, entre otros), y las privadas, a las que pertenecen las RNSC. Posteriormente el documento CONPES 3680 de 2010, que establece lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), planteó una acción estratégica orientada hacia el diseño e implementación del RUNAP, el cual incluye tanto áreas protegidas de gobernanza pública como privada, del orden nacional y regional.

El artículo 17 del Decreto 2372 recalca el elemento de la voluntariedad como una condición para la conformación de las RNSC. De esta manera, es el propietario del predio quien debe destinar de manera voluntaria y autónoma la totalidad o parte de su inmueble como área de reserva para darle un uso sostenible, y preservarla o restaurarla.

Constitución y registro de las RNSC

Las reservas naturales de la sociedad civil se constituyen a partir de la decisión voluntaria y libre, de quien detenta un predio, en calidad de poseedor, tenedor o propietario, de destinar una parte o la totalidad del territorio a la conservación. Sin embargo, la legislación nacional ha previsto un procedimiento de registro formal para que dicha constitución pueda derivar en el ejercicio de los derechos e incentivos que formalmente buscan promover dentro de la población civil la conservación, objetivo que no se ha logrado completamente debido a la precariedad en ciertos aspectos de la normatividad.

La declaración de un predio como RNSC, como arriba se anotó, es un acto voluntario del propietario quien tiene la facultad de registrar su predio como RNSC, por cuanto de este acto se deriva una declaración constitutiva de una restricción sobre el dominio del predio. De lo anterior, se deduce que, si se trata de un poseedor, ocupante o mero tenedor de un predio, no podría solicitar su registro ante el RUNAP, hasta tanto no sea reconocido como propietario del mismo.

Se plantea así, una problemática en torno a la labor de conservación que ejercen muchos poseedores o tenedores de predios en el país, que no pueden registrarse como RNSC y quedan desprotegidos, y sin poder acceder a

las prerrogativas que la legislación consagra en favor de los propietarios registrados de las RNSC. Sería importante el planteamiento de alternativas desde el gobierno que permitan formalizar esta labor de conservación.

El artículo 5° de la Ley 1996 de 1999 señala que toda persona propietaria de un área denominada como RNSC debe obtener registro único a través de la UAEPNN (Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales ahora PNNC). La solicitud del registro la realiza el interesado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien tendrá un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de recibo para inscribir la RNSC. Es a partir de la ejecutoria del acto administrativo por el cual se registra el predio que el titular de la reserva podrá ejercer los derechos que la ley le confiere.

El Decreto 2372 de 2010, artículo 18, estableció que los *propietarios privados* que deseen que los predios destinados como RNSC se incluyan como áreas integrantes del SINAP *deberán registrarlos ante la UAEPNN* (ahora PNNC). Así mismo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, podrán solicitar la cancelación del registro, cuando así lo deseen.

El registro de una RNSC cumple varias funciones, ya que pone en conocimiento de terceros la existencia de un ecosistema natural en conservación en un lugar específico, y establece una restricción al derecho de propiedad, por cuanto a partir de su registro, el predio se encontrará sujeto a cumplir la función ecológica que le es inherente, limitando su destinación solamente a aquellas actividades y usos permitidos.

La limitación al uso y desarrollo de actividades en bienes inmuebles registrados como RNSC es un punto controversial pero que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, debe ser tratado como una restricción al dominio. De esta manera lo ha

entendido el Consejo de Estado, que en concepto del 16 de diciembre de 1997¹ expresó que la declaración de un predio como RNSC constituye una limitación al dominio de los propietarios de los bienes inmuebles, ya que representa una restricción al uso que se le puede dar al predio y las actividades que se pueden realizar en este, con el fin de cumplir el objetivo de conservación que tienen las reservas.

Entonces, al constituirse como una limitación al dominio habría una obligación legal (Ley 1579 de 2012, art. 4 sobre los actos, títulos y documentos sujetos a registro) de realizar el respectivo registro inmobiliario ante la oficina de instrumentos públicos, con el fin de darle a este acto la publicidad necesaria ante los terceros interesados, de modo que sea posible conocer tanto las limitaciones al dominio como los derechos que se conceden a los propietarios de las RNSC derivados del registro como reserva. En todo caso, estos trámites deberán consultarse con las oficinas de planeación del municipio correspondiente, ya que la norma no especifica de manera clara en quién recae dicha obligación.

Derechos e incentivos a favor de las RNSC y la labor de conservación ambiental

Las RNSC plantean una situación en la cual un ciudadano expresa su voluntad de realizar unas labores específicas de conservación de un medio natural, limitando su propiedad en beneficio de un interés mayor y reportando beneficios para la comunidad en su conjunto, ya que el derecho al goce de un medio ambiente sano

es reconocido por la Constitución como un derecho colectivo, del cual todos somos titulares. Al establecer una limitación a la propiedad privada, la legislación nacional busca de alguna manera recompensar al ciudadano otorgándole ciertos derechos e incentivos, los cuales son herramientas importantes, pero que al no tener un desarrollo uniforme en este momento no son atractivos ni han resultado realmente útiles para los propietarios de las RNSC.

La constitución de una RNSC y su respectivo registro formal, ante la UAEPNN (ahora PNNC) permiten que el propietario acceda a ciertos derechos e incentivos que ha previsto el legislador, con el fin de promover la labor de conservación privada de los entornos y los recursos naturales. Pero se debe tener en cuenta que, si un predio se dedica a las labores de conservación, pero nunca se registra como tal, el titular de ese predio no podría acceder a los derechos que contempla la ley.

Los derechos de participación derivados del registro como RNSC

De acuerdo con el Decreto 1996 de 1999, los propietarios de las RNSC gozan de dos derechos principales de participación: el primero, el derecho a ser consultados en los planes de desarrollo, y segundo, el derecho a que se les pida el consentimiento previo cuando se quiera llevar a cabo algún proyecto que impacte su predio.

Establece la legislación que los titulares de una RNSC pueden ser llamados por sí mismos o por intermedio de una organización sin ánimo de lucro, para hacer parte de los procesos de planeación, a nivel nacional, o de las entidades territoriales, y que se vayan a ejecutar en el área de influencia directa en donde se encuentre ubicado el predio.

1 Consulta 1043. 16 de diciembre de 1997. CP: Luis Camilo Osorio. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil.

El artículo 12 del Decreto 1996 de 1999 específicamente prevé que las entidades de planeación del país –Departamento Nacional de Planeación (DNP), secretarías departamentales u oficinas municipales– deben enviar invitaciones por correo certificado a los titulares de las reservas e invitarlos a hacer parte de los consejos de planeación. Esta disposición convierte a los propietarios de RNSC en actores importantes dentro de la construcción de los planes y proyectos de desarrollo, y puede ser una vía para que el tema de la conservación de los recursos y ecosistemas naturales sea un parámetro que guíe la labor de las entidades de planeación en el país.

Así mismo, el artículo 13 del Decreto 1996 establece que los titulares de una RNSC deben otorgar su consentimiento para la ejecución de inversiones que afecten sus predios y que requieran la obtención de una licencia ambiental. La norma establece un procedimiento por medio del cual quien pretenda adelantar el proyecto debe previamente enviar una notificación al propietario o propietarios de las reservas que se puedan ver afectadas, donde se incluyan los datos del proyecto y se solicite la manifestación del consentimiento previo del titular de la reserva ante la respectiva autoridad ambiental. El titular puede, con base en esta información, manifestar o no su consentimiento, teniendo que justificar las razones de su negativa.

A pesar de que la norma establece que, en últimas, será la autoridad ambiental quien tendrá la potestad de tomar la decisión, es importante el derecho que se le otorga a los titulares de las RNSC de manifestar un consentimiento previo, por cuanto permite tener información de antemano sobre cualquier tipo de proyecto que amenace con afectar los terrenos de una reserva, vincula como actores valiosos dentro del proceso de otorgamiento de la licencia ambiental a los titulares de las RNSC y permite que se expresen



las reticencias o problemáticas que se encuentren frente al desarrollo de un proyecto, al tiempo que hace que estas sean tenidas en cuenta de manera oficial por la autoridad ambiental en el proceso de toma de la decisión.

Estos derechos consagrados a favor de los propietarios de las RNSC desarrollan el principio de participación ciudadana que es uno de los ejes fundamentales de nuestro sistema constitucional y además otorgan a las RNSC un papel primordial en las políticas de planeación del país. Teniendo en cuenta el contexto de promoción de las industrias extractivas que los gobiernos han promovido en Colombia desde hace ya varios años, las RNSC no solo cumplen un papel como promotoras de la conservación de entornos naturales, sino que también pasan a jugar un rol importante como actores directos en la adopción de decisiones con respecto a los planes de desarrollo y la ejecución de proyectos que causen impactos sobre el medio natural.

Incentivos en favor de la conservación y protección de los recursos naturales

En materia de incentivos han sido varios los avances en el desarrollo de preceptos que buscan promover la conservación. La Cumbre de Río '92 reconoció al mercado de los bienes y servicios ambientales como una de las estrategias más adecuadas para alcanzar objetivos de conservación y desarrollo sostenible². A partir de estos conceptos, el artículo 11 de la Ley 99 de 1993 calificó y declaró como de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y distritales, reconociendo su administración al municipio o al distrito, junto con las CAR, y la opcional participación de la sociedad civil.

Los artículos 11 y 14 del Decreto 1996 de 1999 establecieron la obligación del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales de crear incentivos dirigidos a promover la labor de conservación que ejercen los propietarios de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas ante el Ministerio del Medio Ambiente. Algunos de estos incentivos se refieren directamente a las RNSC mientras que otros se enfocan de manera genérica en la promoción de las actividades de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Los *incentivos a la conservación* son quizás una de las herramientas que de ser operativas pueden incentivar la constitución de RNSC. Estos incentivos operan en situaciones en las que la tierra está en manos de privados, con el

fin de reconocer la voluntad de conservación de los titulares de zonas de especial importancia natural. Los acuerdos que posibilitan el funcionamiento de este tipo de instrumentos, se realizan entre el propietario del predio y los usuarios del servicio o el Estado. Dentro de los incentivos, encontramos los *esquemas de Pago por Servicios Ambientales* (PSA), la *fijación de tasas*, los *incentivos fiscales* propiamente dichos y los *incentivos indirectos o no económicos*.

Los *esquemas de Pago por Servicios Ambientales* (PSA) fueron reconocidos de manera general por el código de recursos naturales cuando se estableció el deber del Estado de ejecutar las medidas necesarias para la administración y conservación de los recursos naturales. Se trata de una clase de incentivo económico que gira en torno al funcionamiento típico del mercado (oferta vs. demanda), en el cual los propietarios y poseedores regulares de predios donde se encuentran ubicados los ecosistemas naturales que suministran este tipo de servicios reciben voluntariamente y en forma periódica un reconocimiento (dinero, especie, mixto), por parte de algunos usuarios finales (particulares o Estado), en razón al beneficio individual o colectivo que les causa contar con su permanente provisión³.

Formalmente, el PSA se constituye por medio de un contrato que incluye un instrumento económico sujeto a cláusulas de cumplimiento. El objeto del mismo es la prestación de un servicio ambiental.

2 Declaración de Río de Janeiro (Red justicia Ambiental), tomada de <https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracion-de-rio-1992.pdf>.

3 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía Metodológica para el diseño e implementación del incentivo económico de Pago Por Servicios Ambientales (PSA) 2012. Tomado de http://www.crc.gov.co/files/GestionAmbiental/RHidrico/Guia_Met_PSA_ONVS_2012_Talleres_Cars.pdf.

El PSA asociado al recurso hídrico es

...el incentivo, en dinero o en especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico.

El Decreto 0953 de 2013, desincentivando la conservación privada y privilegiando la compra de tierras por parte de los entes territoriales,

...ha suscitado algunas controversias al implicar la eventual expropiación de tierras, lo que podría generar un desvío en la figura propia de los PSA, llevando incluso a que los propietarios de terrenos destinados a la conservación cambien los usos del suelo con el fin de conservar sus terrenos.

Es claro que los propietarios de RNSC han Registrado sus predios con el fin de conservar la riqueza natural y generar actividades de producción sostenible razón por la cual querrán en la mayoría de los casos permanecer en ellos. Si bien con esta nueva disposición por primera vez se reglamenta la figura de PSA, se corre el riesgo de desestimular la conservación privada, por lo que es necesario establecer de manera clara y oportuna, cuáles pueden ser las alternativas adicionales a la compra de los predios, a la vez que requiere diseñar e implementar verdaderos incentivos para quienes conserven.

Por otra parte, las *tasas* han sido establecidas como un instrumento económico, que encuentra fundamento en el principio internacional de “quien contamina paga”, como una forma de internalizar los daños causados al medio



ambiente. Estas encuentran su regulación en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. Así, tenemos por ejemplo la tasa por utilización de aguas, cuyos ingresos se destinan para el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos que han sido afectados, ingresos que son entregados a las CAR, que deben ser gestionados para los objetivos de conservación y que pueden a su vez facilitar la implementación de esquemas de PSA. Para que este instrumento sea efectivo, se requieren controles estrictos en el manejo de los fondos y tarifas diferenciales atendiendo al valor ecológico e hídrico de cada área.

Ahora bien, los *incentivos fiscales* propiamente dichos han sido definidos como aquellos que generan unas deducciones o rebajas en el recaudo tributario a los propietarios de predios destinados a la conservación. El más conocido e implementado de estos incentivos es la exención del impuesto predial para fomentar la creación de las RNSC. La Ley 299 de 1996, en su artículo 14 preceptuó que se podrán exonerar del impuesto

predial terrenos de propiedad privada en tres casos: 1) cuando sean reductos que conserven adecuadamente vegetación natural y que tengan una extensión unitaria no inferior a 5 hectáreas, 2) cuando se haya formulado y se esté ejecutando un plan de manejo debidamente aprobado por la respectiva autoridad ambiental, o 3) cuando hayan establecido un proyecto específico de conservación *in situ* o *ex situ* con un jardín botánico legalmente establecido. Esta exención solo operará para el terreno dedicado a los planes de conservación dentro del predio, para lo cual se realizará el respectivo desglose catastral.

Si bien este tipo de incentivos son una medida potestativa de los concejos municipales, entidades que definen el porcentaje de aplicación en cada municipio, se ha convertido en uno de los incentivos más aplicados por quienes adelantan acciones de conservación en sus predios y para los municipios del país que presentan problemas con la conservación de sus fuentes de agua.

También cabe señalar al incentivo a los servicios de ecoturismo, consagrado en el artículo 18 de la Ley 788 de 2002 y el Decreto 2755 de 2003, que consiste en la exención del impuesto a la renta por un término de 20 años al servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la autoridad ambiental competente de acuerdo con el reglamento.

Por último, encontramos los *incentivos indirectos* o *no económicos*, que son aquellos que no se refieren directamente a una cifra económica sino que tienen que ver más con una serie de procesos que permiten desarrollar sistemas de producción sostenible mediante la prestación de asistencia técnica, la creación de redes, las relaciones públicas, el mantenimiento de riquezas naturales, etc. Mediante este tipo de incentivos, se busca reducir la pobreza e incentivar la conservación ecosistémica

estimulando el desarrollo de conocimientos y la prestación de asesorías necesarias para iniciar proyectos de ecoturismo o de comercialización de productos, entre otros, que constituyan un ingreso adicional para los propietarios.

Los incentivos son una herramienta útil para promover las actividades de conservación ambiental en el país. Sin embargo, se observa que falta un desarrollo mucho mayor de la legislación y conceder más información a los esfuerzos ciudadanos para conservar y utilizar sosteniblemente los recursos, de manera que puedan conocerlos y utilizarlos. Además, el amplio manejo discrecional que la legislación otorga a la administración en incentivos como el referido a la exención del impuesto predial hace que cada entidad territorial decida de qué manera implementa este incentivo, lo que puede resultar poco o nada atractivo para los titulares de los predios.

Herramientas alternas en torno a la conservación

Una de las problemáticas que se han evidenciado con respecto a las RNSC es la referida como incentivar su mantenimiento, de manera que puedan cumplir efectivamente sus objetivos de conservación y no se queden en simples intentos que no permanezcan en el tiempo. El estudio que se ha venido desarrollando nos ha permitido encontrar varias alternativas que, junto con un sistema de incentivos fuerte y claramente regulado, podrían constituir herramientas valiosas para cumplir este propósito.

Una de estas propuestas es la relacionada con el sistema de compensaciones ambientales y el papel que pueden cumplir las RNSC en este proceso. La Ley 99 de 1993 introdujo el concepto de medidas compensatorias en relación al tema de las licencias ambientales. Las medidas



 **Reserva Natural Palmarito.** Wilfredo Garzón.

de compensación son definidas por el Decreto 2820 de 2010 como “las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”. Estas medidas deben ser incluidas en los planes de manejo ambiental de cualquier proyecto que provoque impactos sobre el medio ambiente, y que no puedan ser evitados o corregidos.

De acuerdo con el *Manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad* expedido por el MADS y TNC (2012), las compensaciones deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, que cumplan las siguientes condiciones: 1) se encuentren localizadas dentro del Portafolio de Áreas Prioritarias para la Conservación, 2) ubicadas dentro del área de influencia del proyecto o dentro de la subzonas hidrográficas donde se encuentra ubicado el proyecto o, en ultimas, 3) en las subzonas hidrográficas circundantes.

Se establece que las medidas de compensación pueden aplicarse de diferentes maneras: 1) la creación y ampliación de RNSC o 2) el establecimiento de acuerdos voluntarios, de incentivos de mantenimiento y conservación de las áreas, o servidumbres ecológicas, entre el titular de la obra y los propietarios, poseedores o tenedores de los predios. Sobre la segunda de estas medidas, el manual establece que los dueños de la obra deben reconocer un incentivo económico a los propietarios, poseedores regulares o tenedores que se comprometan con la labor de conservación.

Consideramos que el establecimiento de una política de compensación ambiental integral en el país puede llegar a favorecer e incentivar la labor de conservación de las RNSC que se posicionan como escenarios ideales para permitir el desarrollo de las medidas de compensación. Se debe tener en cuenta que el *Manual* también reconoce la labor de los poseedores regulares y los tenedores de predios, quienes legalmente no pueden registrar una RNSC, pero sí pueden

realizar este tipo de acuerdos voluntarios de conservación, por lo que es importante que se haga un mayor análisis del tema, sobre todo viendo los efectos prácticos que tenga la implementación futura del manual.

Actualmente, se desarrollan esfuerzos por parte de diversas organizaciones para implementar mecanismos que permitan el desarrollo de los esquemas de compensación ambiental en Colombia y que reporten beneficios para quienes se comprometen con la labor de conservación. Uno de estos mecanismos son los bancos de hábitat, un sistema mediante el cual organizaciones y empresas pueden restaurar, crear o conservar hábitats, y vender esos servicios ambientales en forma de créditos a quien requiera cumplir con una obligación legal de compensación⁴. Este es un tema que plantea muchas posibilidades y que podría convertirse en una alternativa viable para las RNSC.

Otro punto que vale la pena analizar es el referente a la permanencia de una RNSC en el tiempo. Al ser la constitución de la reserva un acto puramente de la voluntad del propietario, es difícil asegurar que esta se mantendrá por determinado tiempo si el dueño fallece y se debe iniciar un proceso de sucesión, por lo que la alternativa de la constitución de un testamento ambiental puede ser una alternativa para asegurar la voluntad de conservación del predio de quien constituye la RNSC.

El testamento ambiental, a pesar de que no es una categoría formalmente definida por la legislación ambiental colombiana, se regula de acuerdo a la normatividad general del Código Civil y se define como aquel testamento en el que se especifica un uso determinado que debe darse al predio enfocado a diferentes actividades de conservación definidas por quien otorga el

testamento⁵. Esta condición puede pactarse a un tiempo determinado o a perpetuidad y permite que, más allá de la vida del propietario, el predio siga cumpliendo una labor de conservación previamente determinada.

Otra herramienta valiosa pueden ser las servidumbres ecológicas⁶, las cuales se definen como un tipo de servidumbre voluntaria por medio de la cual se constituye un gravamen sobre una parte o la totalidad de un predio sirviente en beneficio de otro dominante, y con el objetivo de promover la conservación, promoción y manejo adecuado de los recursos naturales o de un ecosistema en específico. Este tipo de servidumbres pueden ser constituidas con un plazo determinado o a perpetuidad, lo que las convierte en una herramienta que permite de alguna manera asegurar que se cumplan los objetivos de conservación definidos en la servidumbre, aunque por diferentes razones no se mantenga la declaración del predio como RNSC.

Conclusiones

Como se ha querido mostrar en esta ponencia, la labor de conservación que ejercen las RNSC es fundamental para complementar los esfuerzos del sector público en la protección y mantenimiento de los recursos y las áreas naturales del país. La sociedad civil, por medio de las Reservas Naturales, se involucra directamente en el cuidado y mantenimiento del medio ambiente y, por lo tanto, debería contar con un mayor apoyo gubernamental y una mejor promoción a partir del marco normativo. Sin embargo, consideramos que existen muchas deficiencias y vacíos normativos

4 COLOMBIA. FUNDEPÚBLICO. Hacia los bancos de hábitat como herramientas de compensación ambiental en Colombia. 2014

5 COLOMBIA. GRUPO COLOMBIANO INTERINSTITUCIONAL DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA. Mecanismos de Conservación privada: una opción viable en Colombia. 2010

6 Ibidem.

que no permiten que la legislación sea suficiente y efectiva para estimular la vinculación de la sociedad en los procesos de conservación, pues los derechos e incentivos establecidos son pocos y muchas veces no compensan los esfuerzos que deben hacer los propietarios de los predios, que al declararlos como RNSC limitan el uso que le pueden dar a su propiedad. También el hecho de que en algunos casos sea necesario desenglobar el área destinada a la conservación conlleva a desestimular la producción sostenible, contrariando los propósitos de las RNSC.

Se hacen necesarias dos acciones, la primera de ellas es establecer alternativas claras y adicionales a la compra de los predios en el caso del Decreto 0953 de 2013, pues se corre el riesgo de generar como reacción un *cambio en los usos del suelo para evitar* la compra de tierras por parte de los entes territoriales. Lo segunda es la necesidad de debatir el papel de los poseedores y los tenedores que realizan labores de conservación, pero que formalmente no pueden constituir reservas. Se debe reconocer la labor silenciosa que realizan y plantear alternativas que les permitan continuar con su trabajo otorgándoles algún tipo de formalización

y reconocimiento y establecer de manera clara las alternativas para conservación. Es importante plantear alternativas desde el gobierno que permitan formalizar esta labor de conservación.

Es necesario recalcar el papel que las RNSC juegan en el objetivo internacional de desarrollo sostenible. A través de estrategias que permitan conjugar la conservación con programas de ecoturismo o sistemas de bancos de hábitats, por ejemplo, es posible que los propietarios obtengan beneficios económicos directos comprometiéndose con la conservación del medio ambiente.

Finalmente, es de anotar que este documento es apenas un avance del trabajo que adelantan Ambiente y Sociedad y Resnatur, que esperamos conduzca a la elaboración de una Guía para la Actuación Local por parte de los propietarios de RNSC en Colombia, que incluirá, además de los temas tratados, aspectos asociados con la participación de estos en los procesos ligados a los planes de ordenación y manejo de cuencas, planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y otras herramientas de planificación gestión donde la sociedad civil está llamada a jugar un papel más activo.



 Parque Nacional Natural Katios. *Melissa Valenzuela.*

Aplicación de herramientas jurídicas de conservación en la RNSC La Nevera, Jardín, Antioquia



Élver A. Ledesma C., Tecnólogo en Manejo y Aprovechamiento de Bosques Naturales y estudiante de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, *SENA, Universidad Santo Tomás*; **José H. Jaramillo Á.**, Agricultor y propietario de la Reserva Natural La Nevera, *Asociación Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil*

Palabras clave: Reserva Natural de la Sociedad Civil, servidumbre ecológica, testamento ambiental, acuerdo recíproco por agua, loro orejiamarillo, bosque altoandino, mecanismo de conservación privada.

Generalidades de la RNSC La Nevera

La RNSC La Nevera está ubicada en el flanco oriental de la cordillera occidental, en la parte alta de la vereda La Herrera, en el km 16 de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Jardín

(suroeste de Antioquia) con Riosucio, Caldas, en una zona de regulación hídrica que, junto con otros predios privados, constituyen un corredor de conservación que integra el bosque altoandino con el ecosistema paramuno del sector conocido como Alto de San Rafael (3.200 msnm).

Las 33 hectáreas de la Reserva están destinadas en su totalidad a la conservación de bosque altoandino o bosque de niebla, en un rango altitudinal entre 2.300 y 2.800 msnm, hace parte del área de conservación regional DMI Cuchilla Jardín-Támesis y el corredor de conservación de la cordillera occidental entre el PNN Tatamá y el PNN Las Orquídeas.

En la reserva hay presencia de especies objeto de conservación para la región. En el grupo de mamíferos se destaca: oso andino (*Tremarctos ornatus*), venado (*Mazama americana*) y puma (*Puma concolor*); en aves, esta es una zona de forrajeo del loro orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*), es hábitat de la cotinga alirrufa (*Ampelion rufaxilla*), gorrión tangarino (*Oreothraupis arremonops*) y otras especies de tángaras, colibríes, atrapamoscas, cotingas, arrendajos, semilleros, entre otras familias características de este ecosistema, lo que la hace además un AICA (área de importancia para la conservación de las aves).

La flora está representada principalmente por una diversidad de especies de importancia ecológica y económica como orquídeas, bromelias, helechos y musgos, hay poblaciones de palma macana (*Wettinia kalbreyeri*), individuos de palma de cera (*Ceroxylon quindiuensis*), magnolios de monte (*Magnolia spp*), pasiflora de jardín (*Passiflora jardinensis*). Se destaca la identificación y marcaje de fuentes semilleras de la especie conocida como quimulá (*Cytharexylum subflavescens*) dentro de los programas de conservación de Corantioquia.

Antecedentes

En el año 1990, se toma la decisión de cambiar el uso del suelo de ganadería doble propósito a conservación, en el predio conocido anteriormente como La Cinfuentes, ubicado en la vereda La Herrera en parte alta del municipio de Jardín. Luego de 24 años de resurgimiento de rastrojos y bosques, se genera conectividad natural con los relictos de los predios colindantes cuya actividad económica es la ganadería.

En el año 1999 y con una notable ausencia del Estado frente al tema de conservación, un grupo de propietarios de predios del municipio de Jardín se muestran preocupados por los

procesos de deforestación de bosques naturales, con la consecuente afectación de las poblaciones de las especies palma de cera (*Ceroxylon quindiuensis*), utilizada en las celebraciones del domingo de ramos de cada semana santa y hábitat del loro orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*). De esta manera, se empieza a buscar alternativas para frenar tal situación.

Luego, se inicia la adquisición de predios destinados luego a la conservación y así asegurar la regulación hídrica de acueductos veredales, acciones desarrolladas por parte del municipio de Jardín y Corantioquia, teniendo en cuenta que esta última entidad registró una bandada de loro orejiamarillo en la parte alta de la microcuenca La Linda y que sus dormideros se ubicaron luego en el Alto de Ventanas, cerca de la RNSC La Nevera.

Entre los años 2001 y 2002, el orden público desmejoró en algunos sectores del municipio incluyendo la zona donde está ubicada la Reserva, por lo que fue imposible ejercer labores de conservación en el predio. Al ser recuperada el área por parte del Estado y mediante el apoyo del biólogo Pablo Flórez (quien en ese mismo año trabajaba para la Fundación ProAves), se inscribe la reserva ante Resnatur el día 10 de febrero de 2002. Esta iniciativa integró además otros propietarios que de manera voluntaria ya venían cuidando las áreas de bosque, especialmente en las veredas Quebrada Bonita y La Herrera.

Así nació el Nodo Jardín de reservas naturales de la sociedad civil con aproximadamente 13 predios de propietarios entre los municipios de Jardín, Támesis y Riosucio, Caldas, con el acompañamiento técnico, económico y jurídico de Resnatur y Fundación ProAves.

Posteriormente, en el año 2006, la Fundación ProAves adquiere predios en la parte alta del municipio y constituye la Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo. Dicha fundación ya venía realizando actividades de monitoreo,



investigación, conservación y educación ambiental resaltando las labores de José Fernando Castaño, Gustavo Suárez, Johanna Villa Díaz y Ana Cristina Velásquez, incluyendo también la Reserva Natural La Nevera.

Gracias al Acuerdo Municipal No. 04 de mayo 18 de 2006 del Concejo de Jardín, “se incentiva la conservación y protección de los recursos naturales renovables, mediante la exención proporcional del impuesto predial unificado”. En la actualidad, la RNSC La Nevera está exenta del pago de impuesto predial en la totalidad de su área.

Se publica un artículo en la revista de conservación *Nature Conservancy* titulado “Colombian inks it’s first easement”¹ que resalta los esfuerzos de conservación privada no sólo en el predio La Nevera, sino también en otras veredas

1 THE NATURE CONSERVACY. Nature Conservancy: Saving the last grate places on Earth. Volume 55, 2005, pág. 72.

del municipio donde se realizan actividades productivas más amigables con el ambiente como ganadería sostenible, manejo y aprovechamiento eficiente de residuos orgánicos, sistemas agroforestales, ecoturismo, entre otras.

Como resultado de los procesos de formación, acompañamiento y asesoría se han implementado de manera efectiva varias herramientas de conservación privada, que han contado con la participación de varias organizaciones y personas del municipio y del orden regional y nacional. Igualmente, se participa desde 2013 en la consolidación y proyección del SILAP (Sistema Local de Áreas Protegidas) con apoyo de PNNC (sede Andes Occidentales); se participa en la mesa ambiental municipal, en encuentros regionales e investigaciones sobre biodiversidad en el territorio.

Aplicación de herramientas de conservación

Un mecanismo de conservación privada es aquel que fortalece los esfuerzos de conservación que se hacen en tierras privadas, permiten al o los propietarios trascender los límites físicos de su tierra e incidir en procesos de mayor escala e importancia para la preservación de los recursos naturales².

Se reconocen 9 mecanismos de conservación privada en Colombia: a) *Servidumbre Ecológica*; b) *El arrendamiento*³; c) *El testamento o sucesión*; d)

2 OCAMPO, PEÑUELA, N. (Editora). Mecanismos de Conservación Privada: Una opción viable en Colombia. Bogotá, Colombia: Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada, 2010.

3 Es un contrato en que una parte se obliga a conceder el goce de una cosa, a ejecutar una obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar por este un precio determinado.

*La Copropiedad*⁴; e) *El fideicomiso*⁵, f) *Acuerdo de Conservación*, g) *El Comodato*⁶; h). *El usufructo*⁷; i) *Reserva Natural de la Sociedad Civil*.

Servidumbre ecológica⁸

Esta herramienta se estableció entre dos predios particulares, uno de ellos perteneciente a la Red de Reservas de la Sociedad civil (Reserva Natural La Nevera), con el fin de conservar el hábitat y área de forrajeo del loro orejiamarillo.

El objetivo de la servidumbre es permitir que los propietarios privados cuenten con un instrumento jurídico para conservar y realizar

un manejo adecuado de los recursos naturales existentes en sus terrenos; con la debida protección legal (contrato y registro de los mismos), a través de cláusulas obligatorias que deberán ser respetadas por los propietarios actuales y los futuros hasta el cumplimiento del plazo del contrato.⁹

Una servidumbre ecológica es un acuerdo entre dos o más propietarios en el cual al menos uno de ellos acepta de manera voluntaria limitar el uso de una parte o la totalidad de su predio llamado predio sirviente, a favor de cualquier persona natural o jurídica, para los fines de conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad.¹⁰

Cabe resaltar que fue la primera promulgada en el país y suscrita el 29 de noviembre de 2004 entre el predio dominante (RNSC La Nevera en la vereda La Herrera) ubicado a 2.500 msnm y el predio sirviente (Finca Sibaté, vereda El Tapado) a una altura de 1550 msnm en el municipio de Jardín. En Sibaté, el principal uso del suelo es la caficultura con sombrío con algunos parches de vegetación nativa que conforman un pequeño corredor a filo de montaña que conecta con la vereda Morro Amarillo, lugar de forrajeo de diversidad de especies de aves y pequeños mamíferos.

Testamento ambiental

Se firmó el Testamento Ambiental con Escritura Pública N° 072 de febrero 28 de 2008 como herramienta que permite que el predio se conserve con bosques naturales a perpetuidad y donde consta: “Testamento abierto con imposición de asignación modal de conservación a la perpetuidad, como Reserva Natural de la Sociedad Civil a los asignatarios del Señor José Humberto Jaramillo Ángel”.

4 Se define como el derecho que existe entre dos o más personas sobre una cosa universal o singular, sin que exista una convención relativa a la cosa o se haya pactado una sociedad. Hace posible la adquisición de predios por varias personas y/o organizaciones que persiguen objetivos de conservación similares.

5 Es un contrato por virtud del cual una persona o grupo de personas aportan bienes (dinero, terrenos, automóviles, etc.) para el cumplimiento de un fin determinado encargado a un tercero. Los bienes que se aportan deberán ser administrados por un organismo especializado, el cual los pondrá a disposición del responsable del cumplimiento de los fines.

6 Es conocido como el préstamo de usos y consiste en un contrato en virtud del cual una parte (llamada comodante) entrega en préstamo gratuito un bien mueble o inmueble a otra parte (llamada comodatario) con la finalidad de ser utilizado y posteriormente restituido a quien lo facilitó. Durante el tiempo del comodato, que puede ser con una persona natural o jurídica que desee invertir en la conservación del predio, se pueden restaurar ecosistemas naturales, permitir la regeneración natural y conservar las porciones existentes.

7 Es el derecho real que consiste en la facultad de gozar una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. Puede acordarse por un tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario, en caso de ser personas jurídicas los usufructuarios el contrato puede ser a máximo 30 años. En el usufructo para la conservación, el propietario otorga el derecho a una persona de disfrutar de un predio, con el objeto de que esta conserve, proteja o restaure los recursos naturales allí existentes.

8 Según Ponce de León (2002): “Una servidumbre ecológica es el gravamen o limitación de uso que un particular de manera voluntaria, impone sobre una parte o la totalidad de su predio, en beneficio de otro predio de distinto dueño, con el fin de contribuir a la conservación, protección, restauración, mejoramiento y manejo adecuado de los recursos naturales y de los valores ambientales existentes en éste”.

9 Disponible en <http://www.proaves.org/servidumbres-ecologicas/>, tomado el 20 de junio de 2014.

10 Op. cit. pág. 23

El testamento encuentra su sustento legal en la sucesión por causa de muerte que se define como la transmisión de un conjunto de relaciones patrimoniales que una persona realiza a favor de otra, la cual lo sustituye en la titularidad de la relación recibida. Quien escribe el testamento puede especificar el uso que debe darse al predio, ya sea en un tiempo determinado o a perpetuidad. Uno de los usos puede ser el mantenimiento de los fragmentos de ecosistemas naturales o el enriquecimiento de las comunidades vegetales del predio, entre otros usos para conservación.¹¹

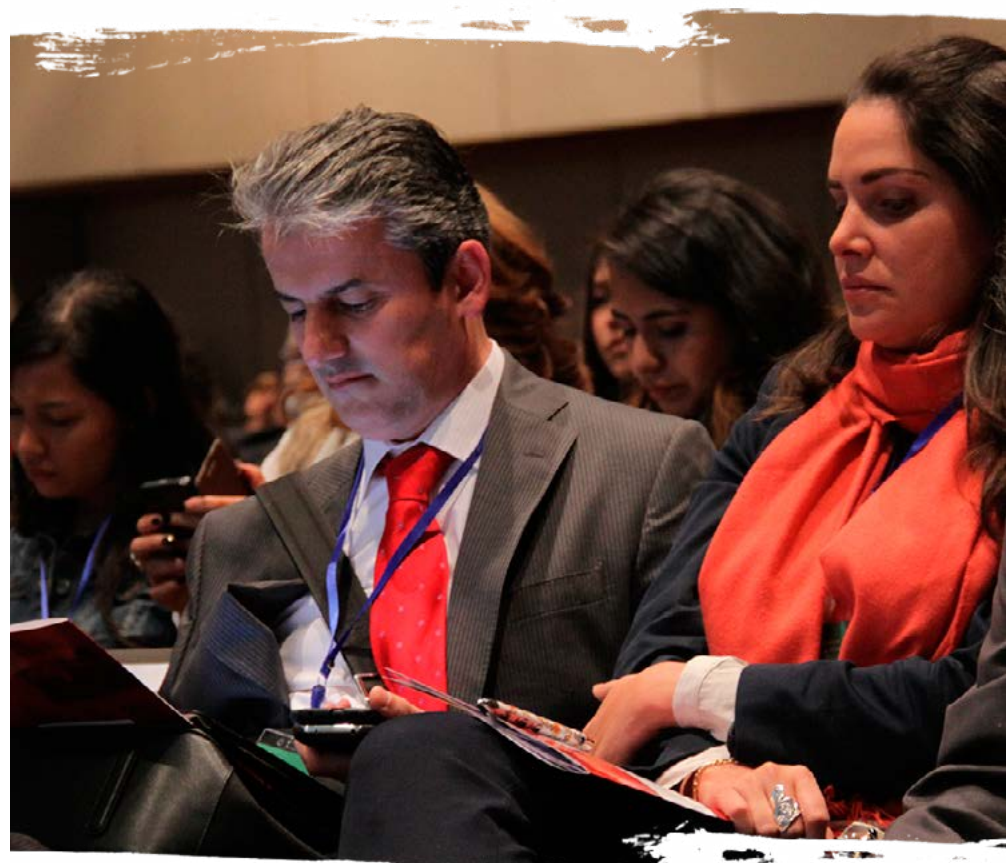
Inscripción como Reserva Natural de la Sociedad Civil

Según el Decreto 1996 de 1999, una reserva de la sociedad civil se define como la parte o un todo de un área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y que sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental.

Por medio de la Resolución N° 036 del 18 de septiembre de 2012 del MADS, se hace el registro de la reserva en el SINAP. Junto con la Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo, son las únicas inscritas ante el Ministerio en la región del suroeste antioqueño.

Firma de acuerdo de conservación

También conocido como pacto ambiental, es una herramienta de negociación entre dos o más actores alrededor del ordenamiento de actividades relacionadas con la conservación (preservación,



uso y manejo) de determinados recursos. Se firma de manera voluntaria entre propietarios de predios y/o con una organización comunitaria y/o con una entidad externa. A menudo se usan en el desarrollo de proyectos de conservación y son liderados por alguna o varias ONG y otras entidades que garantizan el cumplimiento de criterios básicos para la protección de la biodiversidad.

Con el desarrollo del proyecto “Acuerdos recíprocos por agua” (ARAS) que ejecuta Fundación ProAves desde 2012 con recursos del Fondo Patrimonio, se firmó el Acuerdo Recíproco por Agua No. 001 del 08 de mayo de 2014, *“el cual se constituye como un instrumento de mercado mediante el cual se establece una especie de comercio entre Usuarios (comprador) de los servicios y Proveedores de los mismos, de tal manera que los costos en los cuales se incurre para la conservación del bosque y el agua puedan ser debidamente compensados¹²”*.

11 Op cit. pág 24.

12 MINAE-FONAFIFO, 1998; Rosa et al. 1999; INBio, 2006

En pocas palabras, es un acuerdo que incentiva la conservación de los bosques en las cuencas abastecedoras de agua para el casco urbano y las veredas del municipio, a través del aislamiento de fuentes hídricas, el establecimiento de corredores de conservación entre potreros y áreas productivas y la recuperación de rastrojos, a cambio de la entrega al propietario de fogones eficientes, huertos leñeros, parcelas agroecológicas, capacitaciones sobre ganadería sostenible y sensibilización ambiental por medio de la denominada “Campaña del orgullo”. Adicionalmente, se acompaña a los propietarios para que accedan a la exoneración del impuesto predial en las áreas con bosques naturales.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, la RNSC La Nevera es un laboratorio de vida y ejemplo para conservación privada en Colombia, ya que en sus apenas 33 hectáreas se asegura a perpetuidad el refugio y supervivencia a una muestra de animales y plantas del bosque altoandino, gracias al apoyo familiar y la comunidad jardineña.

La RNSC La Nevera ha sido fundamental para la consolidación del Nodo Jardín de reservas naturales de la sociedad civil. Sin embargo, es urgente la reactivación de este esfuerzo conjunto de conservación mediante la aplicación efectiva de incentivos económicos y en especie, no solo en Jardín, sino también en los demás municipios que conforman el corredor biológico Cuchilla Jardín Támesis-Farallones del Citará.

La servidumbre ecológica implementada en la Reserva, sumada a otras constituidas en varios predios del municipio de Jardín, ha

contribuido al incremento de las poblaciones de loro orejiamarillo residentes en el sector Alto de Ventanas y Riosucio, ya que asegura la disponibilidad de alimento y refugio.

Se requiere desarrollar un plan de manejo más actualizado a partir de inventarios rigurosos de manera que se conozca mucho más la riqueza biótica de la reserva La Nevera.

Es urgente la promoción de nuevas reservas naturales de la sociedad civil en los municipios del suroeste, teniendo en cuenta que además del ecosistema bosque altoandino hay otros como el páramo, el bosque seco, humedales de media y alta montaña y unas áreas importantes de bosque subandino en la zona cafetera. Las diferentes alternativas de conservación aquí presentadas permiten la integración de estos ecosistemas abarcando varios predios en diferentes municipios y rangos altitudinales.

El municipio de Jardín es un referente de conservación a nivel de Antioquia con más de 5.000 ha de bosque altoandino y paramuno, donde han confluído propietarios, organizaciones no gubernamentales como Fundación Colibrí, Fundación ProAves, Fundación Jardín Botánico de Medellín, la Administración municipal, Corantioquia, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Mesa Ambiental de Jardín, universidades y algunas ONG internacionales. Todo esto producto de una labor incansable de técnicos, campesinos y profesionales de la región.

Todos los esfuerzos personales y sinérgicos invertidos en la RNSC La Nevera ponen en evidencia la indispensable necesidad de poner en marcha el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), que debe estar articulado a otros municipios y regiones vecinas, como el Eje Cafetero, Chocó y otras iniciativas locales, como el SIMAP Urrao.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, una propuesta de Bienvivir local en el sur-occidente colombiano



José Vicente Revelo Salazar, *Asociación para el Desarrollo Campesino*;
Patricia Jojoa Salazar, *Asociación Minga Asoyarcocha*

En el departamento de Nariño, en el punto de confluencia de la región amazónica y andina, se localiza la laguna de La Cocha, accidente geográfico que hace parte de la cuenca alta del río Guamués y se ubica, al suroriente de la ciudad capital de san Juan de Pasto, en el sistema oriental del sistema orográfico de los andes, desde la llegada de los primeros pobladores, el entorno natural ha sido afectado mediante procesos de deforestación, causados por la extracción de productos maderables del bosque, madera para aserraderos, leña, carbón,

potrerización, siembra de monocultivos y obras de infraestructura, que amenazan el normal desarrollo de la vida en todas sus formas en ecosistemas de alta fragilidad, característica predominante en esta región. Asoyarcocha y ADC, organizaciones compuestas por campesinos e indígenas Quillasingas, gracias al rol protagónico de las mujeres, desde sus inicios hace más de 34 años, nos preocupamos por buscar alternativas que conjuguen la producción y la conservación de la biodiversidad, partiendo del reconocimiento y valoración de sí mismos, los demás y



los entornos natural, social, económico, político, cultural, espiritual y tecnológico. Así, dimos origen en el país a la primera iniciativa desarrollada en tierras privadas y de carácter voluntario, conocida como la *Reserva Natural de la Sociedad Civil*, en 1991. Esta experiencia, fundamentada en el Desarrollo a Escala Humana como filosofía que permite la satisfacción gradual de las necesidades humanas fundamentales y en la agroecología como ciencia, práctica y movimiento social, ha demostrado que la integración de los diferentes componentes y elementos de sostenibilidad, dinamizados por la familia, garantizan una incidencia permanente en la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad, que a nivel local la constituyen en una experiencia a replicar en procesos de agricultura familiar. Somos, además, cofundadores de la Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur).

El *bienvivir local* es nuestra apuesta. Ha permitido redefinir el concepto de Desarrollo. Es la utopía realizable, aquel espacio que construimos día a día, donde nuestros sueños son posibles, donde generamos colectivamente las satisfacciones para todas nuestras necesidades humanas fundamentales. En la Reserva es posible cultivar los alimentos para el cuerpo y el espíritu, allí criamos los animales nativos y criollos, conservamos el paisaje para que reverdezca el entorno natural, la esperanza y la paz, además de convertirse en despensa alimenticia, favorecemos el crecimiento del afecto, la ternura, la solidaridad, la amistad. Es aquí donde buscamos ser felices con nuestra manera particular de ser y de hacer de acuerdo con lo que tenemos, en el lugar donde nos encontramos, con nuestra forma organizativa propia buscamos participar e incidir en los espacios de decisión a nivel local y regional.

Nos autoreconocemos también, como *diseñadores*. Un *diseñador* es un ser común que en su cotidianidad se atreve a privilegiar la posibilidad creativa de la vida y el mundo. *Diseñador* es un hacedor de sueños, es decir, quien despliega capacidades dirigidas a hacer lo que soñamos. Somos todos aquellos que en cada uno de nuestros espacios tenemos la certeza de que otros mundos son posibles y estamos empeñados en construirlo juntos.

Ahora, el proceso de reservas naturales está articulado con el trabajo organizativo de las mingas Asoyarcocha, Asounificados, Asorquídea, Gualmatán y grupos de trabajo que salvaguardan el agua, el suelo, la biodiversidad y el tejido social en ecosistemas estratégicos, en 13 municipios en el departamento de Nariño. Las mingas asociativas vienen desarrollando acciones de caracterización predial, zonificación ambiental, planificación familiar, diseño de planes de manejo, mingas investigativas, herramientas de evaluación y seguimiento; monitoreos participativos de la

biodiversidad tales como: censos de aves acuáticas, conteo navideño binacional de aves, celebración del día mundial de las aves migratorias, Festival de aves del sitio Ramsar; recuperación de semillas nativas; diseño de políticas locales de recuperación y mantenimiento del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad. Adelantamos procesos de formación integral en: agroecología, herederos del planeta, derecho social, interculturalidad, los que cuentan con la certificación de prestigiosas universidades del país; las reservas naturales organizadas prestan servicios de turismo rural como una forma de hacer educación ambiental permanente desde la cotidianidad de los propietarios, donde se involucra a toda la familia, en particular a niñas, niños y jóvenes herederos del planeta, quienes se han convertido en el relevo generacional de estos procesos locales.

El trabajo conjunto con familias campesinas e indígenas ha logrado afianzar las alianzas con instituciones gubernamentales, privadas y académicas para fortalecer estrategias como

el Sistema Local de Áreas Protegidas en el municipio de Pasto y el posicionamiento de la figura de Reserva Natural en los instrumentos de planificación del orden local y regional con las autoridades ambientales, es así como hacemos parte de la iniciativa de constitución del Sistema Regional de Áreas Protegidas, participamos en la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional (PeGAR), apoyamos la formulación del Plan de Acción en Biodiversidad del Departamento de Nariño y nos encontramos participando en el Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático (PTACC), hacemos parte del Comité de Impulso del AIAF, MAELA, la Sociedad Científica de Agroecología, participamos en la formulación del CONPES para el desarrollo agropecuario de Nariño etc. Nuestro reto es continuar demostrando que las Reservas naturales representan una opción real y permanente de conservación-producción participativa en Nariño y Colombia.



 **Parque Nacional Natural Old Providence.** *Carolina Torres.*

Comanejo y compensación por servicios hidrológicos para conservación de ecosistemas de alta montaña, caso Tolima



Jorge A. Rubiano, *Corporación Semillas de Agua*; **Betsua Carvajal**,
WWF Colombia; **Carmen Candelo**, *WWF Colombia*

Palabras claves: conversatorio, comanejo, Pago por Servicios Hidrológicos, regulación hidrológica, reservas naturales de la sociedad civil.

Resumen

La cuenca mayor del río Coello es uno de los sistemas hidrológicos y socioeconómicos de mayor relevancia en el centro del país. Esta cuenca provee el 60% del agua de consumo humano y agroindustrial en el Tolima, por lo cual ha sido priorizada y planificada por parte de Cortolima. Los ecosistemas de alta

montaña (bosques subandinos, altoandinos y páramos) ubicados en un rango entre 2.800 a 3.900 msnm presentes en la parte alta de Coello son los principales responsables de aportar el 85% de los caudales medios anuales al sistema Coello, tienen una capacidad de almacenamiento de carbono en suelos estimada en (800 a 1400 ton/CO/ha), son hábitat de una diversidad importante de especies biológicas de interés nacional y mundial para su conservación y ofertan bienes y servicios ambientales decisivos para el desarrollo de las comunidades del páramo, así como de toda la cuenca Coello (Corporación Semillas de Agua, 2010).

En jurisdicción de los municipios de Cajamarca, Rovira y Roncesvalles, en límites entre la cuenca del Coello y Cucuana, se encuentra el páramo de Anaime, ámbito natural donde hace 15 años existe una red de áreas protegidas y naturales de propiedad de Cortolima, Usocoello y la corporación Semillas de Agua, las cuales colindan y protegen aproximadamente 5.600 ha de páramos y bosques altoandinos. Estas aportan a la subcuenca del río Anaime 74 millones de metros cúbicos de agua al año, que alimenta al río Coello, cuyo caudal abastece a 7 acueductos y 1 millón de personas, y surten al distrito de riego más grande del país, Usocoello, en el plan del Espinal. (Corporación Semillas de Agua, 2003).

A pesar de estos atributos ambientales, socioeconómicos y de colindancias entre áreas naturales de propiedad estatal, gremial y privadas, se ha propuesto diseñar y establecer mecanismos de cooperación y financiación de áreas de conservación en el páramo de Anaime que superen dificultades de gestión y planificación integrada y enfrente procesos de colonización, como el que existe desde hace 10 años de parte de pobladores locales en las áreas de conservación de Usocoello y Cortolima, donde se desarrollan actividades ganaderas de tipo extensivo (1 res/2.7 ha), con prácticas asociadas, como las quemas del pajonal, tala del bosque altoandino, y destrucción de humedales.

Además de lo anterior, se suma el impacto de fenómenos naturales, como el cambio climático. Recientemente, se ha medio el incremento de la temperatura en el páramo de Anaime registrándose un aumento de 1.3 grados centígrados en un periodo de tiempo del año 1970 al año 2012, circunstancia que viene favoreciendo los incendios del bosque y el pajonal, así como la disminución progresiva de los balances hídricos en el páramo en un escenario al año 2030, caracterizados por una mayor demanda de agua que oferta y sobre todo



en periodos secos, afectaciones que se constituyen en amenazas concretas y retos para garantizar la viabilidad de una de las estrellas hídricas y centro de biodiversidad de mayor relevancia en el departamento del Tolima.

La Corporación Semillas de Agua, desde 1992, ha propuesto un objetivo misional en lograr concretar un esquema de corresponsabilidad entre los grandes usuarios el agua, entes estatales, RNSC y comunidades del páramo de Anaime, que contribuya en fortalecer medidas de conservación de la alta montaña en la cuenca del Coello. Es en este contexto de antecedentes que en el marco del Challenge Program on Water and Food (CPWF) se llevó a cabo el proyecto “Mecanismos para compartir benéficos” (Compandes), iniciativa de investigación-acción implementada en la cuenca del río Coello entre 2005 a 2013 por parte de CGIAR, CIAT, SEI, KCL, WWF, UNAL (sede Palmira), ASDES y Corporación Semillas de Agua.

Esta alianza se hizo bajo un proceso de fortalecimiento de capacidades para la acción colectiva, que incluyó: análisis hidroclimáticos, formación política y ciudadana, gestión de comunicaciones, desarrollo de una plataforma de diálogo-negociación (“Conversatorio de acción ciudadana”), para enfrentar conflictos y búsqueda de consensos entre actores sociales de alta montaña y grandes usuarios del agua cuenca abajo, con el fin identificar e implementar mecanismos técnicos y legales a favor de una gestión y conservación integrada del agua y demás recursos naturales que redunden en beneficios ecológicos, sociales y económicos tangibles en la cuenca del río Coello, asociados al manejo compartido de áreas de conservación privada.

La iniciativa Comandes contribuyó para que Usocoello implementará inicialmente un programa de uso y ahorro eficiente de agua y posteriormente estableciera, a partir de un soporte técnico en modelación hidrológica y de análisis legal, la adquisición de 400 ha de páramo y avanzar en el diseño conjunto con Corporación Semillas de Agua de un convenio de comanejo de 3.400 ha de páramo y bosques Altoandinos.

Actualmente, en un esfuerzo conjunto entre las dos organizaciones con el apoyo de la Fundación Patrimonio Natural han iniciado la implementación de un proyecto de Pago por Servicios Hidrológicos (PSAH) en el páramo de Anaime, que cuenta con la participación de arroceros del Espinal (Usocoello), ganaderos del páramo, alcaldías, Cortolima, Gobernación del Tolima y concejos municipales, que pretende avanzar en un instrumento financiero con el propósito de aportar a la sostenibilidad económica del mecanismo de comanejo de áreas de protección de la sociedad civil y gremios productivos, incluidas áreas de conectividad boscosa y de páramo de propiedad de pequeños y medianos ganaderos, y reservas forestales de Cortolima.

Esta estrategia de incentivos y de Comanejo permitirá ampliar el área de conservación de 3.400 a 7.000 ha de páramo y bosques altoandinos, contribuyendo en prevenir y mitigar los impactos de los sistemas de producción ganaderos que se desarrollan hace más de 50 años en la zona. Como meta de conservación a largo plazo, favorecerá la recuperación y restauración de suelos y coberturas naturales de alta montaña para mantener la capacidad de regulación del agua y, por ende, la protección de la biodiversidad paramuna. La estrategia financiera parte de un estudio económico y legal para la conformación de un fondo fiduciario de conservación a partir de recursos provenientes de la liquidación de tasa de uso de agua que 1.880 usuarios del distrito de riego de Usocoello cancelan por ciclo productivo para sistemas de producción en un área de 65 mil hectáreas que conforman el distrito de riego.

Conceptualmente, el comanejo de áreas protegidas se refiere al proceso en el cual dos o más actores sociales negocian, definen y formalizan roles y responsabilidades compartidas para el manejo de estas áreas, lo que supone un acuerdo entre el sector público (gobierno) y el sector privado (organizaciones de la sociedad civil). Es decir, dicho arreglo institucional contempla la definición de un territorio y la asignación de derechos y responsabilidades a los usuarios e interesados, representado una política gubernamental en la gestión de los espacios naturales protegidos. El comanejo representa, pues, una alternativa ante dos grandes posiciones tradicionales, que son: a) la consolidación del dominio estatal de las áreas protegidas y b) la privatización de estas.

La cogestión de áreas protegidas surge ante el hecho de que, en muchos países, a pesar de cada día ocurre un aumento tanto en el número de áreas como en la extensión territorial declaradas como tales, los organismos gubernamentales encargados de su gestión cuentan con presupuestos limitados o estancados y con capacidad técnica-operativa insuficiente.



El comanejo no significa adjudicar o regalar áreas protegidas al sector privado, sino una nueva relación en cuanto a quien puede manejar mejor tal cosa o quien puede aportar a uno o varios componentes específicos de su manejo (Miller, 1997, citado en Ministerio de Medio Ambiente de Colombia /FAO/UICN,1997).

El comanejo podría ser considerado, entonces, como una herramienta en sí misma, pero debido a que en su implementación pueden tener cabida diversos actos o mecanismos particulares, se puede pensar que es el cúmulo que abarca todo un proceso de negociación concertada. Se puede definir como “una alianza establecida de común acuerdo entre los interesados de un territorio o conjunto de recursos amparados bajo el estado de protección para compartir entre ellos las funciones de manejo, derechos y responsabilidades”¹.

1 El comanejo de áreas protegidas en Latinoamérica: aproximación al marco conceptual y a algunas experiencias. 2003.

El manejo compartido, participativo o de coadministración, entre otros, de áreas naturales puede entenderse como la creación de un sistema de protección de los recursos naturales existentes que parte de la iniciativa local de manera concertada y participativa, en aras de buscar los medios y mecanismos que posibiliten la creación de la mejor forma de administrar el objeto ambiental que se busca proteger.

El mundo está experimentando cambios sociales, tecnológicos, culturales, demográficos y ambientales rápidos y profundos; quizás algunos mecanismos de gobernanza desde el siglo pasado hayan dejado de ser adecuados o sostenibles debido a las tendencias y los retos que los países y la sociedad civil van a tener que afrontar en el presente siglo. Además, existe en el mundo entero una tendencia hacia la descentralización de las competencias y responsabilidades en materia de gestión de áreas protegidas; entre otras cosas, se despliegan esfuerzos cada vez mayores para establecer lazos de asociación entre diferentes sectores de la sociedad y promover una mayor participación de la sociedad civil en la adopción de decisiones relacionadas con las áreas protegidas.

Siempre que se habla de participación y de diversas modalidades de comanejo se habla de la existencia de un marco jurídico que reglamente el tema. Sin embargo, en Colombia el tema de comanejo no ha sido reglamentado, por lo cual no existe ninguna ley o decreto que establezca la posibilidad, no sin quitarle mérito a la posibilidad de su existencia.

La única referencia posible la encontramos en una iniciativa de Proyecto de Ley del SINAP que aún no ha sido discutido y no existe una agenda legislativa para discutir su trámite.

La UICN ha señalado en reiteradas ocasiones los beneficios que conlleva promover y fortalecer asociaciones en pro

de la conservación, desde la adopción de la resolución 22 del Consejo en 1952, hasta la adopción de la Resolución 1.42 de la Asamblea General, celebrada en Montreal (1996) y la Resolución 2.15 de la segunda reunión del Congreso Mundial de la Conservación, celebrada en Amman (2000). En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los objetivos de desarrollo del milenio y en el plan de acción de la CMDS también se ha hecho hincapié en esta cuestión.

Finalmente, el enfoque de ecosistemas propugnado como marco básico por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Decisión V/6) respalda la diversidad de tipos de gobernanza, pues reconoce el carácter central de los factores sociales, culturales, económicos e institucionales para promover la conservación y recomienda encarecidamente la descentralización de la gestión en el nivel apropiado más bajo y la participación de los interesados directos en las iniciativas de conservación.

Así pues, los sistemas de áreas protegidas que combinan diferentes modelos de gobernanza tenderán a ser más flexibles, receptivos y adaptables ante diversas amenazas que se ciernen sobre la conservación; por lo tanto, más sostenibles y eficaces a largo plazo.

Como conclusión fundamental, en esta iniciativa de incentivos y manejo para mejorar en la capacidad del páramo de Anaime en aras de favorecer la regulación del agua en suelos y la mejora de su integridad ecológica, se logró identificar y avanzar en el diseño para el desarrollo de mecanismos de cogestión y de sostenibilidad financiera de potencial implementación para la gestión y conservación integrada de áreas de alto valor hidrológico y biológico entre actores de la sociedad civil, gremios productivos, entes estatales locales, y regionales en el departamento del Tolima, quienes han decidido avanzar en procesos innovadores de desarrollo sostenible en la alta montaña en el centro del país y donde el principio fundamental ha sido: “Todos ponen, todos ganan”.



 **Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis.** *Rodrigo Durán Bahamón.*



02

**Las reservas naturales de la sociedad
civil en los subsistemas**

Plenaria



Javier Castroviejo; Natalia Gómez, *SIDAP Valle*; Milena Bernal, *Asociación Ambiente y Sociedad*; Elver Ledesma; José Revelo; Patricia Jojoa; Jorge Rubiano; Alejandro Olaya; María Elfi Chávez, *Resnatur*

Palabras de la Maria Elfi Chávez, moderadora de la sesión

Hoy ha sido una jornada larga y con una riqueza de temas, de presentaciones, de puntos de vista, diferentes perspectivas y unos retos, amenazas y oportunidades muy grandes. Hemos visto que el papel de la sociedad civil y de las reservas naturales, tanto públicas como privadas, está jugando un papel bien importante a nivel mundial, cada vez más importante.

En Colombia, en muchas partes del país, en especial en la Orinoquia, como se mencionó, no existen figuras de conservación públicas y por lo tanto las reservas naturales de la sociedad civil son uno de los elementos y son los únicos existentes para representar al SINAP y representar las medidas de conservación que se llevan a cabo en un territorio.

Hemos hablado y han mencionado el bienvivir dentro de las reservas naturales de la sociedad civil como una de los objetivos y las metas. Hemos hablado de herramientas como participación, concertación, establecimiento de acuerdos, hemos hablado en este congreso

en general sobre territorios para la paz y para la vida. Entonces, en ese contexto de territorios para la vida y para la paz, quisiera preguntarle a todos los ponentes una sola pregunta:

1. Desde sus perspectivas, ¿cuáles consideran que son los tres temas prioritarios que las reservas naturales de la sociedad civil, las organizaciones articuladoras y sus organizaciones deben plantear ante un plan de desarrollo del nuevo gobierno y que permita una mayor articulación de esas reservas y una participación mucho más efectiva para esas reservas, tanto en el SINAP como en planteamientos de producción sostenible en el país?

Por otro lado, tenemos 3 preguntas planteadas por las personas asistentes:

2. (Esto es más que una pregunta). Desde la montaña mágica nuestro ser vibra de alegría al ver cómo estas iniciativas desde la sociedad civil y el renacer de la sabiduría ancestral son la verdadera esencia para acompañar al planeta en evitar que su

deterioro siga avanzando. El verdadero compromiso para sentir la paz que se siente al estar con la madre naturaleza, es ir más allá de lo que nos dice una constitución y es poniéndole a esto ciencia, alma y corazón.

3. De acuerdo al marco normativo existente para reservas naturales de la sociedad civil, está permitido hacer actividades extractivas como la minería en la zona definida como de uso sostenible. ¿Qué peso legal juega el plan de manejo que tenga la reserva natural de la sociedad civil?
4. *La articulación para la construcción conjunta de políticas públicas es una necesidad. ¿Cómo podemos lograrlo para aportar a este congreso y al país, en todos los municipios? ¿Cómo podemos tener una mayor articulación para la construcción conjunta de políticas públicas, lo cual es una necesidad?* (La persona que hace esta pregunta, cuenta el caso de la reserva natural de la sociedad civil Villa María, Tuluá Valle, que en el 2007, después de un largo proceso, es declarada reserva municipal por una resolución del consejo del Tuluá. En el 2012, es declarada reserva ante PNNC y, en el 2014, para recibir el incentivo del 80% predial y después de completar todos los requisitos, se encuentra que aparece como un embargo del mismo municipio por no haber pagado impuestos.

José Vicente Revelo. Muchísimas gracias, con relación a la pregunta número 1, de cuáles serían los temas, creo que esta mañana en la presentación del congreso yo hacía una invitación: realmente, para hablar de temas de conservación y de defensa del territorio, necesitamos juntarnos y necesitamos articularnos a partir del reconocimiento de esa diferencia. Necesariamente tenemos que poner de acuerdo comunidades campesinas, indígenas, afro, palenqueras, etc.

en nuestro país, las instituciones públicas, las instituciones privadas, los gremios y las empresas en procura de adelantar acciones concretas. Más allá de un retorno romántico a la conservación, es precisamente plantear acciones concretas por la sencilla razón de que el territorio colombiano es el mismo para todos y mundo solo tenemos uno y, en cuanto a las amenazas, hay suficiente ilustración al respecto.

Para poder orientar un poco las acciones, y me uno a la inquietud de María Elfi en la pregunta, considero que es necesario definir ya unos temas prioritarios para poder centrar los análisis de discusión, el reconocimiento de la existencia de esos tres temas, que serían la biodiversidad, el agua y el conocimiento tradicional. Tres elementos importantes donde las comunidades de manera directa pueden participar, pueden interlocutar por su gran experiencia y porque nos han demostrado durante todos estos años que ha sido posible la construcción colectiva de estas propuestas.

Creo que tenemos que abordar elementos de las preguntas que nos hizo Maria Elfi. Con relación al tema normativo, la pregunta que tenía que ver con la extracción minera, considero que sea extracción causa-efectos y para poder entrar a responder y a responderse, cada quien que quiera adelantar este tipo de acciones, debe también preguntarse: ¿cuál es su responsabilidad con la conservación antes de mediar y de poner el falso satisfactor de las necesidades humanas fundamentales, el dinero, de por medio en la toma de decisiones? Razón por la cual no es que el artesanal cause menos daño o más daño que el industrial. Indudablemente hay afectaciones, pero la conciencia tiene que partir de quien vaya a tomar esa decisión, quien tiene que preguntarse y cuestionarse realmente cuáles son los alcances y hasta dónde quiere llegar con el tema de la minería.



El plan de manejo es una orientación, es una guía que permite adelantar acciones concertadas dentro de un territorio porque es importante reconocer que la reserva natural de la sociedad civil no es una isla. Entonces, necesita también articularse con el territorio y con otras instancias de conservación ya sea del orden privado o público.

La construcción de políticas públicas, de la siguiente pregunta, es que esta construcción, definitivamente no podemos dejar o encargar la responsabilidad directa de su construcción a quienes hoy nos representan para ellos, para la construcción, ya que no nos han representado y entonces los mecanismo para acceder a los espacios de decisión a nivel local han sido difíciles por el alto nivel de analfabetismo jurídico que viven las comunidades en nuestro territorio que impide que exista una participación directa; más bien, nos vemos afrontados a un nivel de “participación”. Entonces, pocos toman la decisión y se deja que otros tomen la decisión. Por esto yo creo que lo que primero tenemos que atacar, a través de procesos formativos serios, es precisamente la posibilidad de acceder a esos espacios de decisión a través de procesos formativos en derecho social.

Con respecto al tema de la exención del impuesto predial, desde la ADC definitivamente ha sido un proceso muy tortuoso, muy largo, porque nosotros iniciamos la solicitud y mientras programan las visitas desde la corporación a que se hagan realmente las visitas en campo, facilitamos la realización. Pero obviamente las condiciones que tiene la corporación –no le estoy echando culpas a la corporación– sino que realmente los funcionarios tienen muchas actividades que hacer y entonces el proceso se retrasa y la exención del impuesto predial está saliendo por allá en el mes de noviembre y en el mes de enero toca volver a hacerla para el próximo año. Entonces nos pasamos todo un año haciendo estos procesos. Por eso es necesario, y es lo que hemos planteado a la corporación regional del departamento de Nariño, Corponariño, que –y hay voluntad afortunadamente, que también eso quiero manifestarlo públicamente– queremos sentarnos a analizar conjuntamente con la Alcaldía quién va a ser el afectado del pago de ese impuesto para poder definir claramente cuáles serían los mecanismos para las visitas técnicas de exoneración del impuesto predial y el tiempo, porque una reserva cuando se declara como tal y va a un proceso serio, responsable, tiene el respaldo de una organización que permitiría mantener esta propuesta en el tiempo –podemos hablar al menos de un tiempo de 2 o 3 años por lo menos– para que no estemos año tras año desgastándonos física y financieramente en este proceso. Entonces esos elementos son los que hay que ajustar.

Alejandro Olaya. Respecto a la pregunta acerca de tres planteamientos que podríamos hacer en este simposio al gobierno nacional como apoyo al tema de la conservación. Yo sugeriría, desde la Fundación Palmarito, que se recomiende que se incremente notoriamente el tema de la educación ambiental. Definitivamente cuando uno va a

territorios alejados de las zonas urbanas encuentra una gran voluntad de la gente que quiere participar en estos procesos, pero igualmente tiene un profundo desconocimiento de lo que estos procesos de conservación implican.

El fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en la Zona de la Primavera en el departamento del Vichada y en el municipio de Orocué, participando en un evento de liberación de tortugas, y encontramos que el interés de la comunidad es enorme. Los niños, los profesores, las autoridades, todas se hicieron presentes en el evento, pero uno lo que siente es una gran avidez de conocimientos y un profundo abismo que no se llena por parte del Estado y que este no está en la obligación de llenar. El tema de la educación es básico para que la gente conozca los ecosistemas, conozca su territorio, su biodiversidad, aprenda a amarla y aprenda a protegerla. Solo se protege y se ama lo que se conoce, por eso es muy importante esta recomendación.

Una segunda recomendación que yo creo que es pertinente entregar al gobierno nacional es el apoyo definitivo de las reservas naturales de la sociedad civil. Está visto en el caso concreto de los llanos orientales que el espacio que el Estado no puede ocupar es ocupado por los particulares, por las reservas de la sociedad civil, por la conservación privada. Por eso es necesario que este decreto que rige las reservas de la sociedad civil sea complementado con otras normas que ayuden para conocer las bondades de la figura y que incentiven en los propietarios su deseo de conservar y de inscribir sus predios como reservas de la sociedad civil.

Otra sugerencia que pensamos que se debe hacer es el tema de la transferencia de tecnología. Las corporaciones que son las encargadas en los territorios de velar por el medio ambiente, no cuentan con las suficientes herramientas y personal para cubrir las enormes áreas que son su

responsabilidad. Existen hoy mecanismos muy útiles que pueden –si se aplican– contribuir a esta vigilancia, a este control de las áreas protegidas.

Básicamente, hablaba yo el fin de semana con la Directora de Corporinoquia, la Doctora Marta Plazas, y veíamos la utilidad que representan los ultralivianos para el control territorial y para la gobernanza, para gobernabilidad. Son aparatos muy prácticos con un costo relativamente bajo para el servicio que prestan y permiten abarcar grandes áreas de terreno y controlar que las empresas, sobre todo las grandes empresas agroindustriales y petroleras, estén cumpliendo con los compromisos y las obligaciones que les entregó la corporación cuando iniciaron sus actividades.

Una cuarta sugerencia sería hacer urgentemente un censo de los ecosistemas de estas zonas tan desprotegidas y desconocidas, porque no puede seguir haciendo carrera en el país la teoría de que los llanos de Colombia son un lienzo en blanco al cual puede llegar cualquier persona a pintar su cuadro, eso no es cierto. Es una desafortunada afirmación que hizo el pasado gobierno y que no puede seguir adelante, no es un lienzo en blanco, son ecosistemas que vienen funcionando de hace milenios y tienen que ser respetados, pero primero tiene que investigarse cuál es su alcance y ser respetados como tales. No se puede llegar allá como está pasando en muchos casos por empresas agroindustriales que sencillamente desecan miles de hectáreas partiendo de la base del concepto de que son llanuras mal drenadas, hay que combatir, que el gobierno y que todas las entidades utilicen este término de llanura mal drenada, porque todo el mundo se siente con la autoridad de drenarlas bien. Entonces, esos son los consejos que yo creo que se deberían plantear al gobierno nacional para que en esta nueva etapa apliquen los conceptos de conservación y preservación de los recursos naturales.



📷 **Parque Nacional Natural Los Nevados.** *Cristian García.*

Respecto a las preguntas que el público ha hecho llegar, la primera es: ¿qué acciones ha tomado la fundación para prevenir el descalabro, o mejor, para que no se vuelva a repetir el descalabro ecológico de los meses pasados en el Casanare? Respecto a esto, yo tengo algo que decir, el manejo del clima, o sea, la presencia de etapas de gran invierno y gran sequía son parte del funcionamiento de estos ecosistemas en los llanos. Las sequías que la gente normal en la zona andina de otras zonas del país conoce no es la sequía que se presenta allá. Son sequías extremas, son 8 meses de inundación en los cuales el llano está totalmente bajo el agua, seguido de 4 meses de absoluta sequía. O sea que estas muertes de chigüiros que tanto impresionaron al país, pues hacen parte de un proceso normal, natural que se vio incrementado porque la sequía de este año fue especialmente fuerte y así seguirá siendo. Allá hay que entrar a analizar todo el tema del manejo de las cuencas de los ríos, el por qué el agua no está llegando en la cantidad que debería llegar, el tema de los usos de las arroceras, de las petroleras, de las palmeras que están haciendo un uso indiscriminado del agua, pero hace parte del proceso natural estas sequías en los Llanos Orientales.

Cuando se presentó hace 3 meses el tema de la sequía, la Fundación fue consultada al respecto y yo simplemente les decía algo muy sencillo, vaya a Ariporo, el mismo municipio donde se está presentando esta sequía tan grave. En el mismo municipio de Paz de Ariporo existe un sitio que se llama La Aurora. Es la reserva de la sociedad civil que ustedes acaban de ver en el video, todos los temas de trabajo de campo que ustedes vieron se desarrollan allí y. mientras a pocos kilómetros se estaba llevando a cabo esta catástrofe que todos calificaron como tal en el país, en la Aurora yo tuve la oportunidad de visitarla por esos mismos días; todo funcionaba normalmente. La solución es muy sencilla, es la construcción de grandes jagüeyes en el invierno y de tapas en los cauces para el que agua que viene en el invierno, se conserve hasta el verano.

En la reserva Palmarito, tenemos aproximadamente unos 32 jagüeyes distribuidos a lo largo de la sabana y en los bordes de los bosques que permiten conservar el agua del invierno durante el verano y, si bien hay muchas muertes de chigüiros, que son normales lo

repito, de babillas, de venados, de la fauna que allí vive, el efecto es mínimo por la conservación del agua. El tema es jagüeyes y tapas para que el agua del invierno llegue hasta el verano. Así lo recomendamos en este momento y así lo conversamos este fin de semana con la Directora de Corporinoquia y ella coindice plenamente en este planteamiento y el gobierno parece que va a invertir grandes recursos para incentivar la construcción de estos jagüeyes, de estas tapas.

La otra pregunta es: ¿qué opina del nuevo principio de colaboración que la agencia nacional de minería quiere aplicar, que para declarar áreas protegidas se debe tener en cuenta la opinión de la agencia nacional de minería? Yo no conozco muy bien el tema, sé que hay una gran pugnacidad en este momento por los organismos que se encargan de la vigilancia medioambiental y las entidades que tiene que ver con la concesión de permisos tanto de minería como de petróleo, pero lo que yo opino es que definitivamente se debe poner en una balanza que es lo que queremos nosotros para el futuro de nuestro país y de nuestros hijos. El profesor Castroviejo dijo algo muy cierto, ¿qué va a quedar después cuando ellos se vayan, el petróleo, la palma, el arroz? ¿Qué va a quedar de los terrenos que ellos utilizaron, de todos esos recursos sin gente que emplearon para su producción? Creemos que el balance debe ser: ¿qué es más importante, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra biodiversidad o la explotación momentánea de unos recursos que a la final poco le dejan a la zona donde se desarrollan estos proyectos? Al contrario, encontramos que acaban con todo el tema de la conservación, con el tema de los ecosistemas que allí funcionan y ese es el balance que deben hacer tanto los colombianos, como el gobierno, el estado de qué es más importante.

Javier Castroviejo. ¿Qué sugeriría yo al gobierno? Ya bastantes disparates han sido solo para aconsejar nada ¿no? Bueno, inmediatamente, yo diría que sin precipitación, pero con urgencia. Uno, medidas que llamaría jurídico-administrativas; una policía y una fiscalía ambiental urgentemente y bien dotados. por supuesto; el aumento sustancial de los presupuestos a las corporaciones y a los departamentos de medio ambiente de las gobernaciones; que incremente la participación ciudadana por mecanismos, de tal forma que se discuta seriamente, aparte del parlamento, las medidas ambientales y unos impuestos ambientales finalistas que no vayan al tesoro y no vayan a parar a hacer carreteras; no finalistas. Que se constituya o se forme un fideicomiso o instrumento que se encargue básicamente de los grandes sectores que causan impactos: minería, agricultura industrial, hidrocarburos básicamente. Eso en lo jurídico administrativo.

Desde un punto de vista administrativa-privado, en cuanto a las reservas, que aquí de alguna forma se canalizan como sociedad civil, sencillamente que se lo tomen muy en serio y se reconozca el papel que juegan y se apoyen con disposiciones normativas, las que hiciese falta y económicas para que cumpla su labor y se amplié. Los controles que hagan falta, prevenciones, pero no más. Que los controles que tiene el estado, son todos personas y no porque uno esté en una oficina pública va a ser mejor ni peor que una corporación privada; o sea, atención básica, apoyo, y estímulos económicos a la sociedad civil como complemento esencial, yo diría que la insustituible a la función pública.

Y la tercera es un plan de desarrollo sostenible urgente del llano. En base a los recursos naturales que tiene, en base a su potencial económico, en base a su importancia cultural, no debemos olvidar que esta ganadería tradicional traída a la

península ibérica constituye el meollo identitario de muchos países de América y en base a las amenazas que sufre. Bueno, hay muchas medidas pero no es el momento de desarrollarlas.

Elver Ledesma. Bueno, yo solamente voy a hacer dos pequeños aportes, porque lo que haya pensado ya ha coincidido con lo que se ha dicho acá en este instante. Principalmente, quiero decir que, así como existen unas figuras de orden nacional en el país que son excluibles de la minería, que también se piense y se evalúe la posibilidad de que las reservas de la sociedad civil también están excluidas de ese tema, porque hay una ambigüedad cuando le dicen a uno: “¿ahí se puede o no se puede hacer?”. Pues yo creo que hay todavía vacíos jurídicos que no dan claridad en ese sentido y siguen siendo una amenaza para muchas zonas del país que están en la mira de todas las empresas que están haciendo exploración o que van a empezar la fase de explotación.

Y también hay una cosa importante y es que en el caso del municipio Jardín, Antioquia, donde se hizo una declaratoria de un área regional y resulta que no se hizo la socialización ante los propietarios, entonces eso también genera unos conflictos muy delicados porque, por ejemplo, hasta hace poco salió una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro donde ya se hace una claridad en los códigos en cuanto a los usos del suelo en muchos de los predios, entonces para el caso de Jardín, que hace parte de (...) regional que es la Cuchilla de Rin, Tamesis, inclusive sale en los folios de matrícula que hay una limitación en el dominio, pero entonces esto a los propietarios no les gusta mucho porque, aunque haya un esfuerzo de conservación, estoy hablando por ejemplo del predio La Nevera y otros predios que hace 30 años, más o menos, vienen conservando. Ellos sienten que el Estado, cada vez más, en vez de incentivar esa conservación, llegan a hacer ese tipo



de delimitaciones con su propiedad sabiendo que en una Reserva de la Sociedad Civil se pueden hacer unos usos más compatibles. Entonces esa codificación que hay en este momento debe acabarse de clarificar.

También es importante reforzar el tema de los incentivos, como ya se ha dicho, porque también en una región como la nuestra, que es una región cafetera, que la gente solo piensa en los palos de café o en las pocas vacas que hay en esos potreros que tampoco es económicamente viable, a ellos hay que llegarles con unos incentivos claros, contundentes y tratar de motivarlos más, porque de esa manera es que uno jala más personas, con ese tipo de iniciativas.

Natalia Gómez. Respecto a la primera pregunta, creo que un punto esencial del que debe partir todo plan de gobierno es el acceso a la información. Si las personas desde un principio no tienen el acceso al tipo de proyectos que se van a desarrollar, por ejemplo, en el área donde

habitan, ¿cómo van a poder participar? Si las personas no conocen los tipos de impacto que les pueden generar, tampoco habrá participación y en eso concuerdo mucho con Alejandro, cuando nos dice que la educación es muy importante dentro de los planes de gobierno.

La participación de la sociedad civil debe estar presente desde el primer momento, no desde el momento en que en los proyectos de desarrollo se dice: “vamos a realizar determinado proyecto, determinada inversión, entonces vamos a llamarlos a ellos”. ¡No! La sociedad civil debe intervenir desde el momento en que ellos son administradores a la vez de la tierra, ellos viven en estos terrenos, por ende, ellos son quienes mayor autoridad tienen al decidir qué hacer con sus predios y con sus tierras.

Otro punto que me parece importante es establecer estrategias que permitan el mantenimiento de creación y reservas, atendiendo a las condiciones especiales de cada propietario. Porque no es lo mismo para una persona que tiene una reserva natural de una menor área de extensión recibir un incentivo que le proporciona una exención al impuesto de la renta, puede que, por lo pequeña que pueda ser el área que tiene protegida, la exención sea menor, por ende la manera en la que se da ese incentivo va a ser menor. Entonces, es necesario apoyar iniciativas de producción que vengan desde la propia sociedad civil que habita los predios.

Y por último, tener unos criterios de conservación biodiversa, más que a criterio de desarrollo económico, porque esto no está siendo consultado con las comunidades, por ejemplo, con muchas de las comunidades indígenas o afro. Si les ponemos a decidir van a optar por la opción de conservación más que por la opción de un desarrollo económico, entonces es muy importante tener en cuenta la participación de la sociedad civil desde el mismo momento en que empiezan a desarrollarse los planes de desarrollo.

En cuanto a la pregunta de las actividades mineras, la legislación efectivamente tiene un gran vacío en este punto, pero a grandes rasgos podríamos decir que, siempre y cuando con esta actividad no se llegue a afectar el objetivo de conservación, las actividades pueden que sean viables, siempre y cuando se establezca un plan de compensación que no afecte las otras zonas de conservación.

Y por último, ¿cómo articular las políticas públicas? Como lo dije desde un principio, la participación social e incluso la participación de los privados es esencial en este proceso porque incluso hay entidades privadas que también están interesadas en general o iniciar labores de conservación. Entonces, tanto la sociedad civil como los privados vienen a jugar un papel importante a nivel de desarrollo de políticas públicas, pero ¿qué es lo que se ve acordar? Que todos apunten a un mismo objetivo, porque creo yo que no se logra articular porque precisamente porque cada uno está buscando un interés distinto.

Milena Bernal. Yo creo que en cuanto a temas prioritarios es muy importante lo que han hablado los demás ponentes en cuanto al enfoque diferencial que se le va a dar a los incentivos. Es muy diferente si se quiere incentivar la conservación en personas que aún no la están realizando a incentivar la conservación en personas que ya han establecido una reserva natural de la sociedad civil a incentivar la conservación en personas que tienen reservas y que además de esa labor de conservación básica, también realizan actividades complementarias como educación ambiental o investigación. Entonces, se debe establecer un mayor marco de incentivos con unas características diferenciales dependiendo de a quién van dirigidos.

También en este último punto me parece que es importante que se incentiven las reservas que asumen un papel más activo, no son las reservas que realizan labores de conservación, si no las reservas que realizan labores de educación ambiental, de investigación,

porque estas reservas de alguna manera se pueden convertir en articuladoras en sus territorios. Si miramos el Estado colombiano que es un estado que no tiene la capacidad de llegar a todas las regiones del país, sobre todo a las más apartadas, entonces esta labor que realizan estas reservas naturales que asumen un papel más activo y también las actividades articuladoras va a ser muy importante, porque van a permitir que más predios se sumen a esta labor de conservación y que de alguna manera se puedan formar núcleos o nodos de conservación que van a incrementar las labores de los territorios a conservar.

En materia de educación ambiental, además de la educación ambiental dirigida a la sociedad civil, me parece que también es importante una mayor capacitación a los funcionarios públicos, especialmente en las entidades territoriales que es donde hay mayor carencia y que de alguna manera en esos lugares tan apartados del país los funcionarios de las alcaldías van a ser la única autoridad presente. Entonces, si los funcionarios de las alcaldías conocen más acerca de estas herramientas de conservación y se les otorga una mayor publicidad, creo que se va a llegar a un público más amplio y esto va a tener un efecto positivo.

1. ¿Cómo gestionar reservas de la sociedad civil en zonas como la Orinoquia donde gran parte del territorio son baldíos?

Ponente. Este fue uno de los puntos que encontramos problemáticos en el desarrollo de la investigación, como lo dijimos, si no se cuenta con el título de propiedad sobre el territorio, legalmente no se puede registrar la reserva entonces tenemos que ver cómo se logra la adjudicación de esos baldíos. De alguna manera la problemática que vemos acá con las reservas es la problemática permanente de Colombia en cuanto a la tenencia de la tierra. Entonces

estábamos pensando en alternativas y propuestas que se puedan hacer y se nos ocurrió plantear que haya un proceso de adjudicación especial de esos baldíos, donde adjudique esos territorios con una condición de conservación, es decir, que esos nuevos propietarios se comprometan con el gobierno nacional a cumplir ciertas labores de conservación. Son ideas que estamos plateando y que pueden ser importantes.

Ponente. Frente a los tres temas, quisiéramos ser muy concretos. El mensaje no solo sería al Gobierno nacional, sino también a la Corte Constitucional y un llamado sería la coherencia: que nos aclaren a los 47 millones de colombianos qué es eso de la utilidad pública y el bien común. No es posible que en este país se sigan alimentando proyectos de conservación con muchos esfuerzos a diferentes escalas, pero por otro lado alimentándose sectores industriales productivos que están arrasando y nos van a arrasar. Entonces, nos parece importante esta decisión no solamente del gobierno, sino que está comprometida la corte constitucional frente ese tema porque de esos recursos dependemos muchos colombianos y la utilidad pública no puede ser el bienestar de unos pocos inversionistas en contraste realmente al agua, la biodiversidad, al ambiente.

El otro tema es la participación ciudadana. Creemos que se le debe poner bastante atención a la Ley 850, no solamente los mecanismos de participación pueden garantizar que la sociedad civil realmente este en espacios equilibrado de dialogo, de concertación de donde depende la toma de decisiones. La participación en Colombia y básicamente ligada al tema ambiental debe ser una participación cualificada. Debe ser una participación reconocida y debe ser una participación que realmente se asuma dentro de las decisiones de país desde el punto de vista ambiental y de desarrollo rural.

Y el otro tema es frente a las reservas de la sociedad civil. Colombia está en mora realmente de lograr identificar valorar y poner en un contexto de compensación real, no a corto plazo, sino de por vida, a todo el esfuerzo que están haciendo las reservas naturales de la sociedad civil, generando educación, produciendo comida limpia, conservando elementos de la biodiversidad supremamente importantes y alguna manera de retribuirse porque son recursos que no están en la contabilidad nacional. No se ha logrado valorar realmente en su justa dimensión, un mediano-pequeño productor suizo recibe al año en el equivalente a pesos colombianos casi cincuenta millones de pesos en compensación, tiene agricultura, tiene ganadería, pero conserva elementos, unidades de paisaje en su finca y son cuantificadas y son valoradas año a año. Creemos que eso es importante y eso tiene un sentido hoy, porque Colombia, la mayor proporción de área que tiene natural está asociada a la propiedad privada y nos parece que es importante que ese enfoque realmente se fortalezca y la sociedad civil desde su participación en términos de reservas naturales juegan un papel supremamente importante en Colombia.

Ponente. Creo que han sido los aportes bien importantes de los panelistas aquí y simplemente quisiera ya agregar algo más a estas propuestas y es que aprendamos mucho de la naturaleza. La naturaleza es un ser integral, es un ser sistémico y por tanto el gobierno nacional también tiene que tener esa mirada de integralidad. Lo ambiental solamente está llegando a manos del Ministerio y los ambientalistas desde la sociedad civil, pero los otros ministerios no están contribuyendo a esta labor y pienso que esto es interesante y hablar de una educación, no solamente de una educación académica si no tenemos que pensar en una educación para la vida, y en esa educación tiene que haber una mayor inversión para un cambio de cultura. Creo que hay muchas personas que amamos la vida y que no solamente es por romanticismo, sino que hace parte de la cotidianidad y en ese sentido se debe procurar desde el gobierno nacional que haya una educación para ese cambio de cultura donde seamos conscientes de contribuir en todos estos espacios y por garantizar mucha de las propuestas que se han dado aquí. Entonces, en ese sentido, creo que la sociedad civil es un actor bien importante y así como se puede ejercer los derechos también hacer posible desde la cotidianidad y para ello es necesario que haya mayor inversión en los procesos sociales.



 Archivo Parques Nacionales Naturales. Carlos Porras.



03

Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas

Pósteres

Contenidos

- ➔ Las reservas naturales Cerro El Inglés y Galápagos como modelos de conservación
pág. 243
- ➔ El papel de las reservas naturales de la sociedad civil en la conservación marina...
pág. 249
- ➔ La reserva natural de la sociedad civil los chagualos: un modelo de desarrollo sostenible
pág. 254
- ➔ Rogitama: de lo denudado a lo biodiverso
pág. 246
- ➔ Reservas naturales de la sociedad civil: oportunidad de conservación local del orobioma
pág. 251
- ➔ Procesos de conservación liderados por organizaciones de base en los municipios de Bolívar...
pág. 257



Las reservas naturales Cerro El Inglés y Galápagos como modelos de conservación comunitaria en el corazón de la biodiversidad del corredor de conservación PNN Tatamá, Serranía de los Paraguas, Colombia



César A. Franco Laverde, Director Ejecutivo
Corporación Serraniagua

Objetivos

- Reconocer el aporte al SINAP de las iniciativas de conservación comunitaria como complemento de las áreas protegidas de naturaleza pública y privada.
- Divulgar el aporte de dos reservas comunitarias como ejes de una estrategia de conectividad en el corredor de conservación PNN Tatamá, Serranía de los Paraguas.

Introducción

La Serranía de los Paraguas y el PNNC Tatamá son dos importantes ecorregiones priorizadas como sitios claves para la conservación dentro de los ecosistemas críticos de los Andes Tropicales y del Chocó biogeográfico, las cuales han sido el escenario de importantes iniciativas de conservación comunitaria y de alianzas interinstitucionales.

Para la conservación de esta sensible ecorregión, un grupo de líderes, propietarios de reservas naturales, fincas agroecológicas y asociaciones de productores ambientalmente amigables fundó la Corporación Serraniagua en el año 1996.

Desde su fundación, la organización ha contribuido con la elaboración participativa de diferentes ejercicios de ordenamiento ambiental territorial como el Plan de Manejo Ambiental Participativo de la Serranía de los Paraguas, el diagnóstico socioambiental, delimitación y lineamientos de manejo del área de amortiguación del PNN Tatamá, diagnósticos y planes de manejo de cuencas, esquemas de ordenamiento y planes de desarrollo municipal, planes de manejo de las reservas naturales asociadas y plan estratégico ecorregional. Lo anterior ha sido la base para la definición de prioridades, la articulación de lo regional/nacional con lo predial y la formulación participativa de proyectos.

La organización es propietaria de las reservas naturales comunitarias Cerro El Inglés y Galápagos en un área priorizada por ser el corazón biodiverso de la Serranía de los Paraguas y por su papel como eje de conectividad Cerro El Torrá-Cerro El Inglés-Alto Galápagos-PNN Tatamá, dentro de una estrategia ecorregional que involucra al menos 30 reservas naturales adicionales y fincas agroecológicas operando en red, las cuales han generado una dinámica red social regional de organizaciones y un portafolio de productos y servicios ambientalmente amigables con la marca genérica Comam (comunidad ambientalista).

Resultados

- Conformación y consolidación de la Reserva Natural Cerro El Inglés en el corazón biodiverso de la Serranía de los Paraguas. Esta es la reserva natural de

la sociedad civil más antigua, de mayor tamaño (720 ha) y mejor conservada en el corredor de conservación, la cual se ha convertido en un eje de conectividad y de participación social en la conservación.

La reserva tiene algunos records interesantes:

- » Es el sitio del mundo con mayor diversidad de plantas de la familia de las gesneriáceas por unidad de área, con nuevos registros recientes y especies aún por describir¹.
 - » Actualmente hay varios grupos de investigación trabajando con reptiles, mamíferos, moluscos, orquidáceas y melastomataceas con grupos científicos de diferentes universidades, los cuales están en proceso de elaboración nuevas guías con el reporte de los recientes hallazgos.
 - » Según el *Libro rojo de anfibios del Valle del Cauca en Colombia*, la RN Cerro El Inglés es el sitio de la región donde más especies de anfibios endémicos o amenazados están siendo protegidas.
 - » Las especies de aves registradas en la reserva han aumentado significativamente, siendo uno de los sitios identificados en Colombia como de mayor potencial para el aviturismo. Cerca de 300 especies de aves han sido registradas en la reserva, algunas endémicas o con alguna categoría de amenaza.
- Conformación y articulación de una red ecoregional en el corredor Tatamá – Paraguas, integrada a las diferentes iniciativas adelantadas en el SIDAP Valle,

1 Una publicación online de la guía fotográfica de Gesneriaceae del Cerro El Inglés y Galápagos se puede descargar en el siguiente link: <http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/guideimages.asp?ID=635>.

SIDAP Chocó, SIRAP PNN Tatamá, SILAP San José del Palmar y a la Asociación RED Colombiana de Reservas Naturales de la sociedad civil por medio de un grupo de 30 reservas naturales pertenecientes a familias campesinas, en cinco municipios y dos departamentos. Generación de espacios participativos de coordinación con los diferentes actores locales e institucionales comprometidos con la conservación y desarrollo sustentable en el corredor de conservación, con la suscripción de varios convenios y alianzas para articular esfuerzos en alianzas público-privadas y comunitarias.

Conclusiones

- La importancia de las iniciativas de conservación comunitaria en el marco del SINAP.
- Importancia del trabajo en red desde lo local a lo global. Procesos de conservación desde lo predial a escala de paisaje. Se ha fortalecido una red social regional para la conservación y la producción ambientalmente amigable, integrándose a diferentes espacios nacionales como la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur) y la Red Colombia Verde (asociación de organizaciones de productores ambientalmente amigables). A nivel internacional, la organización ha participado en varios espacios como la comisión de expertos de las comunidades locales en la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, como socio del programa del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos en Latinoamérica (CEPF), en la Comunidad Ecuatorial del UNDP, en el programa SPN de la IUCN-NL y de la Alianza Latinoamericana para la conservación en tierras privadas.
- La estrategia de conectividad no solo está planteada para las áreas protegidas y los sistemas productivos, sino también cuenta con un componente social y cultural, con énfasis en una estrategia de educación ambiental y comunicaciones comunitarias, dirigida a empoderar las comunidades locales, generar capacidades y liderazgo en los diferentes grupos y comunidades participantes, promoviendo el intercambio campesino a campesino, la implementación de tecnologías apropiadas y estrategias comunitarias de conservación de la biodiversidad en alianza con la comunidad científica. La Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la UNESCO ha permitido afianzar este componente de la estrategia.
- Para consolidar este proceso se propone crear dos nuevas áreas protegidas públicas de carácter regional y nacional dada la importancia biológica del área y dado el contexto ecorregional con el PNN Tatamá.



Rogitama: de lo denudado a lo biodiverso



Roberto Chavarro Chavarro & Ginette Isabel Chavarro Tulcán

RNSC Rogitama Biodiversidad

Rogitama Biodiversidad es una Reserva Natural incrustada en el Corredor Andino de Roble, que hoy visitan observadores de aves y de naturaleza, integrantes de juntas de acción comunal rurales que quieren conocer la experiencia para replicarla en sus parcelas, por estudiantes de pregrado y de posgrado que van a estudiar mariposas, aves, plantas, algo previsto por funcionarios de The Nature Conservancy, en octubre de 2004 cuando visitaron la Reserva.

Pero tal previsión era imposible de imaginarse hace 28 años cuando a Rogitama la formaban unos potreros con manejo convencional, con laderas que presentaban afloramientos rocosos por severa erosión, con cauces secos, cuando solo ocasionalmente se veían una mariposa o

un copetón, *Zonotrichia capensis*, o un chulo, *Coragyps atratus*, o una guala, *Cathartes aura*, con un bosque de robles “intervenido y deteriorado”, como lo calificó el Inderena.

Ese mismo bosque, 25 años después, fue definido por el biólogo Gustavo Morales, Exsubdirector Científico del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, como “el bosque de roble mejor recuperado que conozco”.

Los programas de recuperación se iniciaron con la asesoría del Inderena, (Instituto de los Recursos Naturales) en 1982, año de compra, que recomendó sembrar especies de las únicas plantas que en esa época se producían en los viveros oficiales y privados: acacias, urapanes, pinos pátula y eucaliptos. En el bosque de robles

iniciamos la recuperación llenando con acacias y pinos los grandes lamparones sin vegetación, porque los robles, *Quercus humboldtii*, los talaban para asar almojábanas. En las zonas de ladera que presentaban afloramientos rocosos sembramos bosques de pinos pátula, urapanes y acacias (*melanoxylum*, *decurrens*, *mearcy*, *mollissima*, etc), en hoyos que hicimos en la roca, que era roca de arcilla primitiva, susceptible de meteorización. A los hoyos les añadíamos tierra llevada del Alto de Zote, hojarasca de bosque para inoculación con hongos y bacterias y las plántulas antes de sembrarlas con abono orgánico, las regamos con tierra diluida de pinares viejos, para inocular las plántulas con micorriza del género frankia.

En 1985, empezamos programas agroforestales y silvopastoriles con alisos *Alnus jorullensis*, en todos los potreros, un poco más de 18 fanegadas. Tuvimos inconvenientes por las heladas, pero persistimos y en 1991, el entonces Director de Prideco y después Director de Corpoboyaca, Alirio Rodríguez, nos propuso que participáramos en el Primer Concurso Nacional de Agroforestería en Colombia, patrocinado por la FAO y el Reino de Holanda, donde Rogitama ganó el primer puesto.

En 1995, se buscó asesoría de la Asociación Bogotana de Ornitología (ABO) para promover la llegada de las aves a Rogitama. Su recomendación fue que observáramos las plantas más visitadas por las aves en la región y que multiplicáramos esas plantas en la reserva. Y entonces comenzamos a sembrar tunos de todas las especies conocidas, mano de osos, guamos, guayabos de tierra fría, abutilones, malvaviscos, iochromas, fucsias, tintos, uvas camaronas, anices, bomareas, borracheros, moras, feijoas, papayuelos, curubos, balsos, yarumos, palicoúreas, y, en general, cuanta mata nativa podíamos sembrar, por semilla o por estaca.

Simultáneamente hicimos protección de cauces y cañadas y cercas vivas, todo con la mayor biodiversidad vegetal posible. En la actualidad hemos venido transformando las cercas vivas en corredores biológicos de un ancho entre 3 y 15 metros, con el objetivo de darle unidad y conectividad a todos los ambientes dentro de la Reserva y a esta con los ambientes externos.

Estos trabajos de reforestación, restauración y conservación de ambientes han dado frutos:

- Hoy hay registradas 155 especies de aves, entre ellas cuatro endémicas y una en peligro de extinción el *Coeligena prunellei*, príncipe de arcabuco. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) hace sin interrupción desde el año 2004 el Censo Navideño de Aves. Hay identificadas 137 especies de mariposas, hay otras que continúan en consulta con expertos para identificarlas y se tiene la certeza de que en Rogitama hay más especies de mariposas pendientes de estudio. También hay coleópteros, ortópteros, mántidos, arañas, odonatos y puede asegurarse que todas las familias de insectos están representadas.
- Desde el año 2005, empezaron a hacer trabajos de investigación sobre mariposas, coleópteros coprófagos y desde entonces son varios los trabajos de investigación que se han realizado o se están realizando.
- Estudiantes de Biología de la UPTC colocaron una red para un muestreo preliminar de murciélagos y en una hora capturaron 11 individuos de 4 especies diferentes. Ninguno insectívoro porque vuelan más alto.
- Hay también puerco espín, borugos, chuchas, ardillas, comadreja, armadillos, tigrillos y otros.

- La *Passiflora hyacinthiflora* descrita en 1873, con un último registro en 1938, la estamos multiplicando en la Reserva, igual que el mordoño (*Quararibea lozanoi*), especies en peligro de extinción. De las 11 especies de palmas de cera que existen en el mundo, 7 están en Colombia, todas en peligro de extinción. Nuestra pretensión es sembrar las 7 especies colombianas en Rogitama. Ya sembramos *Ceroxylum quindiuense*, *C. ventricosum*, *C. alpinum*, *C. ceriferum* y *C. sasaima*. Nos faltan *C. parvifrons* y *C. vogelianum*, pero lo que nos falta es traerlas de Medellín, pues el Jardín Botánico Pablo Tobón Uribe, con la colaboración de Juan Lázaro Toro Murillo, va a donarnos unos ejemplares.
- Se manejan actualmente semilleros que luego trasplantamos a sitios con menor densidad vegetal. Los cercos los hemos ido corriendo y cada vez es mayor el área dedicada a la conservación. Los colibríes, las mariposas, las abejas y los murciélagos polinizan las flores para mejorar la fecundidad de las semillas en toda la región.
- Hace 28 años los cauces de Rogitama estaban sin agua pocas horas después de un aguacero y hoy por tres de ellos corre un hilillo de aguas veraneras.
- La Red de Desarrollo Sostenible (RDS) organizó en el año 2006 un Concurso Interamericano sobre Conservación para celebrar el Día Universal del Medio Ambiente. Rogitama fue el primer ganador, seguido por la Universidad de Yacambú, Venezuela.
- Se publicó la Guía de campo de las mariposas de Rogitama, en edición por la UPTC y Corpoboyaca.
- Se encuentra en estudio un colibrí que inicialmente identificaron como *Heliangelus zusii* y que en este momento está siendo estudiado.



 Santuario de Fauna y Flora El Corchal “El Mono Hernández”.

El papel de las reservas naturales de la sociedad civil en la conservación marina: el caso de la Reserva Natural Sanguare



Luisa Fernanda Ramírez Ochoa, *Departamento de Geografía & Estudios Ambientales Wilfrid Laurier, University*; **Álvaro Roldán Maya**, *Reserva Natural Sanguare*

Las reservas privadas de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la conservación de la diversidad biológica. No solo protegen ecosistemas de alta biodiversidad, sino que contribuyen a conectar áreas protegidas y crean corredores de conservación. Además de su importancia para la conservación, las reservas naturales privadas tienen un gran potencial como instrumento para la integración de las comunidades locales en las actividades de conservación. Dados

sus múltiples objetivos de manejo, que van desde conservación, recuperación, y uso sostenible, son figuras menos restrictivas y excluyentes las cuales ofrecen opciones de autofinanciación. Esto último es determinante, ya que al permitirse algunos usos sostenibles, las comunidades locales pueden beneficiarse reduciendo la presión en el aprovechamiento desmedido de recursos y conflictos relacionados con las restricciones impuestas en áreas de protección estricta.

Sin embargo, las reservas privadas no tienen jurisdicción en áreas costero-marinas. Por lo tanto, no son consideradas dentro de las figuras de protección que aplican para la conservación de ecosistemas marinos. En consecuencia, el aporte de las reservas privadas costeras en la consecución de objetivos de conservación y sostenibilidad de la diversidad marina y como herramienta de manejo no ha sido evaluado.

El propósito de este estudio es examinar el papel de la reserva natural Sanguare en la conservación de la biodiversidad marina y su potencial como herramienta de integración de los actores locales.

La reserva Sanguare fue creada en el año 2002 y hace parte de la red de reservas naturales de la sociedad civil. Está localizada en el departamento de Sucre, en la zona norte del golfo de Morrosquillo, frente al PNN Corales del Rosario y San Bernardo y dentro de su área de influencia se encuentran ecosistemas de bosque seco, sistemas lacustres, lagunas costeras, manglares, y en la porción marina frente a la reserva existen parches de pastos marinos. La población más cercana a la Reserva es Rincón del Mar, ubicada a una distancia de 20 km. Las principales actividades económicas en el área incluyen tala selectiva de manglar, pesca artesanal y comercial, agricultura de pancoger y ganadería.

La información colectada a través de entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis de información secundaria y observaciones directas señala que la reserva desempeña un rol activo en la protección del manglar, lagunas costeras, y pastos marinos ubicados en su zona de influencia. Esto se complementa con programas de educación ambiental, promoción de investigación, y ecoturismo sostenible, actividades que ayudan a promover los valores ecológicos y culturales de la región. A través de las iniciativas de educación ambiental y las oportunidades laborales que ofrece la Reserva y su centro de buceo, la población local se beneficia y al mismo tiempo adopta una actitud receptiva con respecto a la reserva y sus esfuerzos de conservación.

Las reservas privadas localizadas en zonas costeras ofrecen posibilidades de integración de las comunidades costeras que no han sido exploradas y pueden llegar a ser un instrumento importante de manejo que, en coordinación con otras figuras de protección, aporten a la conservación efectiva de la biodiversidad marina en Colombia.



 Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.

Reservas naturales de la sociedad civil: oportunidad de conservación local del orobioma azonal del Amaime (enclave subxerofítico), municipio de El Cerrito, Valle del Cauca



Gómez Barreiro Francisco, *Fundación Ambiente Colombia*; Torres Quijano Sonia Carolina

La parte media y alta de la cuenca del río Amaime es considerada una reserva ambiental del departamento del Valle del Cauca y se constituye en un importante núcleo de conservación que contribuye ampliamente a la construcción del SIDAP Valle del Cauca y al SIRAP Macizo Colombiano. Esta área se destaca por la presencia de ocho de los 35 ecosistemas identificados en el departamento, siendo los más destacados los del orobioma azonal o enclave subxerofítico, con la presencia de los ecosistemas bosque frío seco

en montaña fluviogravitacional (BOFSEMH) y arbustales y matorrales medio muy seco en montaña fluviogravitacional (AMMMSMH), los cuales se encuentran incluidos en su totalidad en la RFNP del Amaime y colindante con el PNN Las Hermosas, este ecosistema se encuentra muy intervenido por la ganadería extensiva y las quemadas indiscriminadas.

No obstante, es una región donde persisten inadecuadas prácticas agropecuarias caracterizadas por el aprovechamiento de los recursos forestales con categoría de

amenaza, ganadería extensiva y uso excesivo de agrotóxicos que inciden en la expansión de la frontera agrícola, la existencia de procesos de erosión, pérdida del recurso hídrico, contaminación del suelo y presencia de conflictos entre la fauna y flora silvestre y los humanos. Para esto, la Fundación Ambiente Colombia (Organización articuladora de reservas naturales de la sociedad civil, Res. 044/12) ha venido generando procesos de concientización para la conservación de estos ecosistemas estratégicos y la protección de este tipo de biodiversidad.

Por tanto, se busca aunar esfuerzos técnicos y económicos que aporten a la conservación, recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del Orobioma Azonal del Amaime (subxerofítico), con las reservas naturales de la sociedad civil, bajo los principios de la sustentabilidad. De esta forma, se han unido esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Fondo Acción de Conserva Colombia, Fundación Ambiente Colombia (organización articuladora de RNSC) y la propuesta de conservación en el marco del SIRAP Macizo Colombiano con el mosaico de conservación Las Hermosas-Amaime, generando de esta forma la conectividad entre el orobioma azonal (bosques enmalezados-enrastrados), Páramo de Las Domínguez, Páramo Valle Bonito, siguiendo un corredor de conservación sobre la subcuenca Coronado, cuenca del río Amaime, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, todo esto unido a la Reserva Forestal Nacional del Amaime.

El proceso de declaración, en su totalidad, veinte predios, ha sido el resultado de acciones de concertación con los diferentes actores involucrados e interesados en la declaratoria de RNSC en sus predios. Para el caso de la parte alta y media de la cuenca del río Amaime, en

concordancia con la búsqueda de conectividad ecosistemas de importancia regional y nacional, los esfuerzos de conservación privadas, mediante la figura de RNSC, se constituyen en una herramienta sustancial porque permite reconocer e interpretar las situaciones ambientales de la zona a partir de una visión holística que maneja la integración de factores económicos, socioculturales, biofísicos y político-normativos, fundamental a la hora identificar limitaciones y oportunidades para la creación de proyectos encaminados al mejoramiento de los sistemas productivos, así como a procesos de conservación y recuperación de los servicios ambientales.

La Fundación Ambiente Colombia ha generado procesos de conocimiento para la conservación y recuperación por medio de las RNSC como una alternativa privada, también con los minifundios productivos para su fortalecimiento, de esta manera la Fundación realiza procesos de reconocimiento de las áreas potenciales a ser RNSC, verificando la existencia de la muestra del ecosistema natural y con base en ello se realizan acciones encaminadas al fortalecimiento de sus propietarios mediante talleres de formación relacionados en esta categoría de área protegida, la importancia de los ecosistemas y de las reservas, entre otros aspectos, fortaleciendo la organización comunitaria que debe responder a las necesidades del desarrollo sostenible con el entorno en la perspectiva de estimular procesos conservacionistas. Este proceso, a su vez, se apoya en las giras de intercambio en donde se enriquece de forma participativa la iniciativa de conservación al confrontar las experiencias similares de otros predios o reservas.

Para identificar la orientación del área de conservación de la Reserva Natural se evalúa el cumplimiento de los criterios de cada objetivo de conservación, mediante la recolección de

información primaria aplicando herramientas que consisten en diagnósticos participativos con los propietarios de los predios interesados, en donde se realizan entrevistas poco estructuradas, recorridos exploratorios con participación de la comunidad y reuniones de socialización permitiendo diferenciar elementos del paisaje y sus complejas interrelaciones. Un proceso de conservación por medio de las RNSC en el marco del SIDAP Valle del Cauca, conlleva a un proceso de reconocimiento del territorio, de contextualización en otros escenarios de planificación, por lo que es necesario conocer el papel de las reservas en el contexto del sistema de áreas protegidas que pueda tener el plan de ordenamiento de la cuenca o del Plan de Ordenamiento Territorial.

Partiendo de la caracterización biofísica y socioeconómica y de los objetos de conservación se analiza la condición actual y deseada del área y se definen objetivos de gestión, estrategias,

programas, actividades, metas, indicadores, costos estimativos, posibles fuentes de financiación para el plan de manejo y definición del sistema de evaluación y seguimiento. Con la información recopilada a partir de los conceptos técnicos, el análisis jurídico de los certificados de tradición, la cartografía y el plan de manejo, se procedió a realizar la radicación de la documentación (formularios) completa de las RNSC ante Parques Nacionales.

Este proceso comunitario ha permitido una gran integración y por tanto un mayor grado de confianza entre los actores locales, lo que fomenta el sentido de pertenencia por el entorno y el interés en participar de manera activa y entusiasta en todo el proceso de conformación de las reservas, el intercambio de conocimientos y generación de nuevas alternativas de vida, como el turismo científico, que ayudaría a la conservación y el conocimiento de estos ecosistemas estratégicos para la cuenca del río Amaime.



 **Parque Nacional Natural Tayrona.** *David Páez.*

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Los Chagualos: un modelo de desarrollo sostenible



María Patricia Mejía Sánchez, *RNSC Los Chagualos*; **Tatiana Martínez Mejía**, *Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca*

Descripción del problema

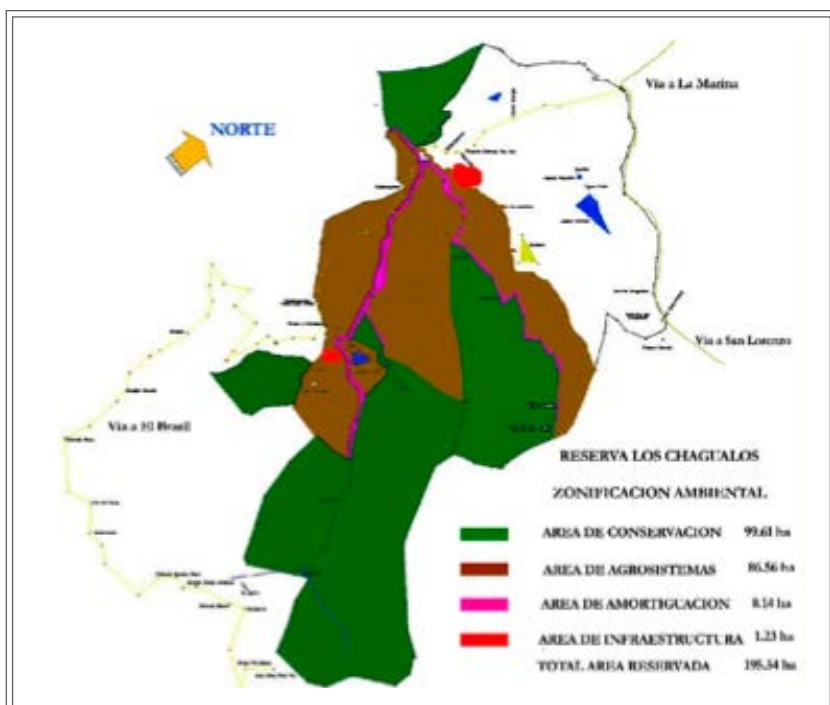
Es conveniente que los procesos productivos estén enmarcados dentro de los criterios de sostenibilidad, equidad y competitividad. Haciendo uso de los recursos naturales sin que afecte el ecosistema y las futuras generaciones, bajo una producción que permanezca en el mercado.

Descripción de la reserva

La Reserva Natural Los Chagualos hace parte de los esfuerzos de la sociedad civil para contribuir en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible regional. Se encuentra ubicada (latitud

Norte: 4° 01' 52.0" – Longitud W 76° 07' 59.8") en el pie de monte de la cordillera central de los Andes colombianos en el corregimiento de la Marina, municipio de Tuluá, Colombia, su área total es de 167.3 ha. Creada ante el SIMAP, resoluciones 0460 y 0462 de 2007 y registrada ante el SINAP mediante resolución N°009 de 2009 de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En la zonificación ambiental el área de Conservación ocupa 109.4 ha que corresponde al 65.39% del área total. Zona caracterizada por colinas de media y alta pendiente, con representación del oribioma bajo de los andes, específicamente del ecosistema Arbustales y matorrales medio seco en lomerío estructural-erosional. Alberga 12 nacimientos de agua y tres quebradas (La Rivera, La Quebradita y las Mariposas).



Mapa 1. Zonificación de la reserva.

Se encuentra en una región de vocación agropecuaria y comercial, influenciada por su cercanía con la zona urbana. La economía regional ha venido transformando el uso del suelo de una caficultora con sombrío a una ganadería extensiva, además de su vulnerabilidad ante el desarrollo de megaproyectos (centrales hidroeléctricas) y minería generando conflictos socio-ambientales. Consciente de esto, ha generado espacios de participación comunitaria promoviendo la conformación de organizaciones productivas, de veeduría ciudadana y control, juntas administradoras del agua en un trabajo articulado y responsable con organizaciones públicas y privadas que propendan por el desarrollo rural aprovechando los recursos naturales de una manera sostenible y amigable con el ambiente

Objetivo general

Contribuir a la conservación, conocimiento, aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y la promoción de los valores socio-culturales en la región del centro del Valle del Cauca.

Objetivo de conservación

- Mantener la oferta (calidad y cantidad) hídrica de la Reserva.
- Albergar una muestra representativa de la flora y fauna nativa de la región del Centro del Valle del Cauca.
- Promover y participar en procesos de conservación y manejo sostenible en la región.
- Promover y acompañar procesos comunitarios que propendan por el desarrollo rural sostenible.

Resultados

La Reserva Natural, para cumplir con los objetivos propuestos, está trabajando con cinco programas que están orientados a generar procesos sociales a través de un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente, articulando las necesidades económicas con la conservación del patrimonio natural, orientado a promover la educación ciudadana, la construcción de tejido social, la seguridad alimentaria, así como el análisis crítico de políticas y proyectos locales y regionales.

- **Programa 1. Conservación:** Se están realizando proyectos para la protección de la red hídrica y en especial el aislamiento de la quebrada La Rivera, además de un vivero para conservación y multiplicación de especies nativas, restauración ecológica, cultivo de especies ornamentales y artesanales. Se viene realizando contactos con actores comunitarios de la zona para la conectividad entre diferentes ecosistemas que van desde el bosque seco, hasta el bosque muy húmedo premontano, conectando áreas cercanas: Jardín Botánico de Tuluá, RNSC Los Chagualos y el bosque de niebla en el corregimiento de San Lorenzo.

- **Programa 2. Educación ambiental y ecoturismo:** Se está adecuando la infraestructura para la prestación de estos servicios: senderos, cabañas, área de camping, etc. Actualmente se encuentra un inventario de mariposas que servirán de base para la construcción y adecuación del mariposario.
- **Programa 3. Modelos productivos sostenibles:** Se está trabajando en un proceso de reconversión agropecuaria, integrando actividades para solucionar problemas ambientales y desarrollando tecnologías para la producción pecuaria basada en recursos alimentarios locales y aplicables a las condiciones de la región. Se destaca el banco de proteína, el manejo integrados de residuos orgánicos, rotación de potreros, aislamiento de áreas de conservación, restauración ecológica y sistemas silvopastoriles. Un apiario en medio del bosque que además de polinizar nos provee de miel para el consumo y comercialización.
- **Programa 4. Investigación:** La reserva se ha convertido en un espacio para realizar diferentes tipos de investigación como estudios de biodiversidad hasta evaluación de modelos de producción agropecuaria. Se han adelantados trabajos con algunas universidades como la Universidad de Caldas, Univalle y la UCEVA.
- **Programa 5. Fortalecimiento institucional:** Se ha ejecutado acciones que ha permitido cumplir con los requisitos legales que exigen las autoridades ambientales. La reserva cuenta con las respectivas aprobaciones y legalizaciones de los entes y autoridades ambientales municipal (SEDAMA), regional (CVC) y nacional (MAVDT-UAESPNN).

Conclusiones

- El Valle del Cauca, a través del SIDAP, ha fortalecido en la última década otros mecanismos de conservación como las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
- La alianza Estado-sociedad civil se ha convertido en una importante estrategia de conservación. Sin embargo, es importante que las instituciones estatales contribuyan a la implementación de los planes de manejo de estas áreas.
- Es posible producir sin afectar al medio ambiente. Existen tecnologías apropiadas para la ejecución de estos procesos.
- La eficiencia de la producción sostenible en el sector pecuario radica en la integración con los otros subsistemas para reducir la dependencia de recursos externos sobre los que el productor no tiene poder para determinar precios, disponibilidad, ni calidad.
- Es de vital importancia integrar en los proceso de conservación a la comunidad ubicada en el área de influencia.



Procesos de conservación liderados por organizaciones de base en los municipios de Bolívar, El Dovio y Versalles en el norte del Valle del Cauca: un ejercicio de escalonamiento desde lo comunitario hacia lo institucional y de lo local a lo regional



Sandra Milena Giraldo Urdinola & Sandra Patricia Madrid Londoño
Corporación Socioecológica para el Futuro de Bolívar Valle

El Norte del Valle del Cauca, donde se ubican Bolívar, El Dovio y Versalles, no ha sido ajeno al progresivo deterioro ambiental. Razón por la cual desde el año 2003 se adelanta en la región la constitución de reservas naturales de la sociedad civil, trabajo liderado por organizaciones de base; aunque desde antes las administraciones municipales hacían esfuerzos por adquirir predios estratégicos para

garantizar la oferta hídrica de sus comunidades. Sin embargo estas acciones se venían realizando desarticuladamente, por lo que no gozaban del reconocimiento local.

Específicamente en Bolívar este proceso se inició en el 2006 de la mano de Ecofuturo, organización con una trayectoria de 18 años conformada por líderes de las diferentes microcuencas que integran el municipio y que



ha venido liderando la promoción, registro y fortalecimiento de las reservas, gracias al apoyo institucional, técnico y económico de CVC. Producto de este proceso en la actualidad la organización cuenta con el registro ante Parques Nacionales como organización articuladora de Reservas y ha logrado mantener y acompañar de manera permanente un grupo de 15 familias propietarias de reservas, quienes además son asociadas a la organización. El compromiso asumido desde la organización con este grupo específico de actores, se ha convertido en un reto frente a la búsqueda constante de oportunidades a través de las cuales se pueda fortalecer esta iniciativa.

Más allá de la necesidad de gestionar recursos para apoyar a las reservas naturales en la implementación de sus planes de manejo, Ecofuturo tiene claro que para seguir consolidándolas como figuras de conservación, hacerlas más visibles y lograr su posicionamiento; se requieren acciones que

trascienden los límites de las reservas y de las microcuencas. Se hace necesario entonces emprender procesos que apunten hacia la construcción de espacios en los que sea posible integrar los esfuerzos que desde diversos sectores se adelantan en aras de la conservación.

Ante este desafío la organización ha asumido con gran responsabilidad el papel como interlocutor entre las familias propietarias y los distintos estamentos de participación y decisión, interviniendo de manera activa y propositiva en todos los ejercicios de planificación que se adelantan en el territorio, no solo como actor social -que puede aportar información, sino como gestor de propuestas e iniciativas que surgen desde las bases que conforman la organización. Este ejercicio del derecho a la participación, ha permitido ir construyendo un camino que plantea un escenario posible de incidencia en las decisiones relacionadas con el destino que se quiere dar al territorio. Entre estos escenarios de participación se destacan el Comité Ambiental Municipal, el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP Valle del Cauca y recientemente, la Agencia de Desarrollo Local ADEL BRUT NOVA.

Como resultado del análisis de las posibilidades, Ecofuturo en el 2011 formuló y gestionó ante la Fundación InterAmericana el proyecto “fortalecimiento de los procesos de conservación liderados por organizaciones de base de los municipios de Bolívar, El Dovio y Versalles” en alianza con las organizaciones que lideran procesos muy similares en cada localidad, Corpoversalles en el municipio de Versalles y Acerg en el municipio de El Dovio, y que en conjunto con Ecofuturo suman un grupo de 50 reservas registradas o en proceso

de registro ante Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicadas en las cuencas del río Garrapatas y el río Pescador y que suman un total aproximado de 1.230 ha. En esa búsqueda de alianzas se logró que las alcaldías de los tres municipios y la CVC se vincularan al proyecto con recursos técnicos y económicos.

Las acciones a implementar tienen como propósito apoyar a las RNSC en la ejecución de sus planes de manejo, propiciar su acercamiento, intercambio y acceso a espacios de planeación y ordenamiento del territorio, integrando diversos actores sociales e institucionales, en aras de construir los sistemas municipales de áreas protegidas y a través de estos empezar a generar políticas locales en torno a la conservación., así como mejorar las prácticas en el uso de la tierra, aumentar los conocimientos sobre conservación ambiental y producción sostenible con estudiantes de escuelas rurales, siendo este un insumo preponderante para la creación de los SIMAP de los tres municipios, con

participación y apoyo de las autoridades locales y la vinculación de importantes actores sociales como las organizaciones de base, algunas de ellas encargadas de la administración de sus acueductos rurales.

La construcción de políticas locales de conservación desde la iniciativa comunitaria implica varios retos y en ese sentido, desde el inicio del proyecto se vio la necesidad de generar un clima de confianza entre los diversos actores involucrados, de generar y fortalecer las alianzas necesarias para afrontar el desafío de construir de manera concertada esa política que por un lado visibilice y reconozca los esfuerzos de conservación que vienen adelantando tanto actores privados como públicos y comunitarios, pero que también impulse la promoción de nuevas reservas, la declaratoria de nuevas áreas protegidas y que en general propenda por la valoración y protección de la estructura ecológica principal de los municipios, como soporte esencial para la sostenibilidad del territorio.



 Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. *Sandra Patricia Urrea.*

05

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Estrategias complementarias de conservación y biodiversidad rural-urbana

Contenidos



Estrategias complementarias
de conservación: conceptos
pág. 264



Biodiversidad urbana:
retos y experiencias
pág. 276



Experiencias locales:
conservación rural
pág. 290



Plenaria
pág. 304



Pósteres
pág. 310



Índice

En Colombia, la necesidad de analizar los mecanismos y acciones relacionadas con estrategias y figuras de ordenamiento ambiental del territorio como aporte a la articulación del SINAP se ve reflejada en la reunión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) del año 2012, en el cual se establecieron una serie de compromisos. Entre otros, se estableció:

- Recopilar, en el marco de los SIRAP respectivos, la información sobre otras estrategias y figuras de ordenamiento ambiental complementarias a la conservación, que no son áreas protegidas.
- Identificar los mecanismos, con el fin de posicionar la información recopilada sobre estrategias y figuras de ordenamiento ambiental complementarias a la conservación que no son áreas protegidas y remitir el inventario realizado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a las diferentes entidades encargadas de planeación a nivel sectorial.

De acuerdo a lo expresado por el SIRAP del Eje Cafetero (2014), en el ejercicio para dar cumplimiento a estos compromisos en el interior de cada Sistema Regional, principalmente en la identificación de estrategias complementarias de conservación (ECC), y de recopilación de información que se viene construyendo desde lo departamental, municipal y local, se ha evidenciado la urgente necesidad de un desarrollo

normativo que abarque la diversidad de estrategias desde su gobernanza, nivel y objetivos.

Con base en los insumos conceptuales, normativos y de identificación generados en los trabajos previos a la realización del Simposio acerca de las estrategias complementarias de conservación (ECC), que son fruto de los esfuerzos interinstitucionales a nivel nacional, regional y local, que se vienen desarrollando en distintos espacios de dialogo al interior de los subsistemas de áreas protegidas en el encuentro inter-SIRAP realizado el 29 y 30 de mayo del 2014, se realizó una aproximación al concepto de ECC así:

Área geográfica definida en la cual se implementa una acción o un grupo de acciones, por parte de un actor social (comunitario e institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, intereses y esquemas de administración y manejo, para asegurar la preservación, remstauración y uso sostenible de la diversidad biológica y cultural representada en un territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen a la complementariedad y la conectividad funcional y estructural de las áreas protegidas.

En este sentido, los SIRAP han avanzado en la recopilación de información, conceptos y normas que fueron insumos para abordar el Simposio, el cual se propuso los siguientes objetivos:

1. Desarrollar conceptualmente el tema de Estrategias Complementarias de Conservación

(ECC), considerando las estrategias continentales (rural-urbano) y marinas.

2. Consolidar información existente sobre estrategias complementarias de conservación en las diferentes regiones de Colombia.
3. Posicionar y dar a conocer las estrategias complementarias de conservación continentales (rurales-urbanas) y marinas.
4. Avanzar en la sistematización de experiencias sobre el diseño, implementación, funcionamiento, seguimiento y evaluación de las estrategias complementarias de conservación.
5. Analizar y discutir diferentes estrategias de conservación de la biodiversidad urbana y su inclusión en instrumentos de ordenamiento.

Los principales temas que se abordaron fueron: conceptualización, reconocimiento y posicionamiento, marco jurídico y político, innovación y participación social como agente dinamizador de las ECC. Teniendo estos en cuenta, se realizaron las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Qué se entiende por ECC?
- ¿Cuáles considera son ECC?
- ¿Qué actores participan en todo el proceso de una estrategia complementaria?
- ¿Qué se requiere para su articulación a los sistemas de áreas protegidas?

Las áreas protegidas urbanas se están declarando en el marco de la función constitucional de los municipios y distritos para ordenar el uso del suelo en su territorio, mediante actos administrativos del Concejo o de las alcaldías. No es claro para las autoridades de grandes centros urbanos la aplicabilidad de lo dicho en la Ley 99 de 1993 en cuanto a la declaratoria de áreas protegidas como una función de las autoridades ambientales, lo cual constituye una prioridad a ser definida.

Frente a la conservación en entornos urbanos, que son uno de los principales retos para la proyección de modelos de ciudades, ya que en los últimos años las presiones de uso y manejo de las áreas naturales, las limitaciones para el establecimiento de espacios de conservación de la biodiversidad urbana y el crecimiento sin precedentes de los centros urbanos han venido impactando los ecosistemas y las poblaciones, es necesario definir mecanismos eficientes de gestión, como por ejemplo la creación de áreas protegidas urbanas y espacios de conservación para la biodiversidad como estrategia de adaptación a este escenario. Es necesario reflexionar y generar cambios profundos sobre el diseño de las ciudades y la apropiación social de la importancia de la biodiversidad en las actividades cotidianas. En este sentido, con el desarrollo del Simposio, se visibilizaron las distintas dinámicas que se vienen desarrollando en diferentes ciudades y contextos en el territorio.





01

**Estrategias complementarias de
conservación y biodiversidad rural-urbana**

Estrategias complementarias de conservación: conceptos

Contenidos



Desde las estrategias complementarias de
conservación: el río Vita como ejemplo...
pág. 265



Estrategias complementarias de conservación
en Colombia: avances y retos
pág. 270



Desde las estrategias complementarias de conservación: el río Vita como ejemplo de estrategia de conservación



Germán Andrade, Subdirector científico
Instituto Alexander von Humboldt

Relatoría con base a la conferencia de Germán Andrade, realizada por Paola Sáenz

Partiendo de las preguntas orientadoras desarrolladas en el marco de la realización del Simposio 8, ¿qué se entiende por ECC? ¿Cuáles considera son ECC? ¿Qué actores participan en todo el proceso de una ECC? ¿Qué se requiere para su articulación a los Sistemas de Áreas Protegidas?. Finalmente, ¿cómo se articulan con estrategias nacionales de conservación de biodiversidad y adaptación territorial?. A continuación, se presenta un análisis que pretende resaltar las ECC.

En este sentido, existe una definición que surgió en el evento inter-SIRAP, llevado a cabo el 29 y 30 de mayo del presente año:

Área geográfica definida en la cual se implementa una acción o un grupo de acciones, por parte de un actor social (comunitario e institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, intereses y esquemas de administración y manejo, para asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica y cultural representada en un territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen a la complementariedad y la conectividad funcional y estructural de las áreas protegidas.

Cabe anotar que se debe trascender el concepto, ya que por sí mismo es complicado y además debe entenderse que no todo lo que no cabe dentro de las áreas protegidas es o debe ser una ECC. Así que se deben reorganizar las ideas, ya que resulta

imposible organizar el sinnúmero de instrumentos que existen en el territorio sin primero estructurar de manera definitiva los conceptos. Debido a esto, surgen nuevamente interrogantes: ¿Qué se quiere organizar? ¿Qué debe ser complementario a qué?

Un punto de vista es que las ECC no son simplemente lo que no está dentro del sistema institucional de las áreas protegidas, se debe romper esta dicotomía, con lo que es o no complementario.

En el mandato del Convenio de Diversidad Biológica se indica que los sistemas de áreas protegidas deben ser completos, representativos y bien gestionados, esto ya es un parlamento que se sabe de memoria. Adicionalmente, para el cumplimiento de lo anterior, existen protocolos. Sin embargo, con el cambio ambiental global, que trae consigo otros mandatos y requerimientos que no están contemplados en el Convenio de Diversidad Biológica, no podemos pensar que tenemos un sistema completo, ya que el mandato está incompleto todavía, por lo tanto se está trabajando en un Sistema de Áreas Protegidas fusionadas y que desde hace tiempo se conoce, que, así sea un área pequeña en extensión, puede ser funcional y a su vez podría mantener su resiliencia a través del tiempo.

Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad, cuando el mundo está atravesando por un momento de cambio global, lo cual resulta una verdad incómoda de expresar, más aún cuando al tiempo los países reportan que ya cuentan con sistemas de áreas protegidas completos? Esto supone una paradoja, ya que si en verdad se cuenta con sistemas representativos, ¿por qué todavía reportamos pérdida de biodiversidad? ¿Qué falló entonces? Pueden plantearse dos observaciones para responder estos interrogantes.

La primera, que lo completo y representativo es insuficiente. La segunda, que el mandato es insuficiente. Esto sobre todo si se habla acerca de áreas protegidas, biodiversidad, servicios ecosistémicos y seguridad ambiental territorial,

ya que no solo se trata de conservar muestras representativas y “suficientes” de biodiversidad.

Ahora, el reto es que desde las ECC se debe trabajar en servicios ecosistémicos y seguridad ambiental en el territorio. Pero también se deben asumir otros retos como el de la gobernanza, el cual concita la participación de la sociedad, no solo desde el punto de vista de un deseo positivo, sino también apunta a la transformación del conflicto, muchos veces ligado a la conservación.

Por lo tanto, es necesario retomar que la aseveración que lo que no está dentro del RUNAP y una cantidad de figuras sueltas que no parecen estar relacionadas son ECC. Se deben ordenar los propósitos, el por qué y hacia qué, principalmente. Esto puesto que no existen todos los instrumentos que se necesitan y en los escenarios de cambio global está la posibilidad de que lo complementario se vuelva suplementario. Es decir, que las áreas protegidas en tensiones climáticas puedan perder su viabilidad, aportando significativamente a la conservación, lo que ya viene sucediendo, sin ser lo suficientemente reconocida.

Las ECC aportan y brindan alternativas a la conservación, por lo cual las experiencias deben duplicarse y reconocerse. Un ejemplo de ECC es el río Bitá: “De aquí en adelante, el Bitá no se escribirá con ‘b’. Ahora será ‘Vita’ con ‘v’, ya que es ‘río que evoca la vida’.

No se trata de organizar el territorio con las figuras ya establecidas, como los POMCA y POT. No es simplemente organizar fichas. En este sentido, debemos repensar el territorio, para contribuir con estrategias que aporten a la conservación.

El río Vita atraviesa gran parte de la altillanura del Meta, donde también se da la agricultura extensiva, y a su vez es uno de los ríos que no nacen en los Andes, sino que nacen en la altillanura. Entre estos, sobresalen los ríos Yucao, Maracacias, Tomo, y el Vita, los cuales drenan de la altillanura y nacen en la sabana.



Mapa 1. Imágenes satelitales que corresponden al año 1969 y 2011, en las cuales se puede ver el notorio cambio, principalmente en los ecosistemas naturales (tomado de la presentación de Germán Andrade).

El río Vita es muy importante. Al ser planteado el panorama de la probabilidad de transformación de la sabana, como se muestra en la Figura 1, se aprecia el cambio drástico generado en el territorio.

El modelo de ocupación de la altillanura viene siendo principalmente regido por la agricultura industrial, tecnológicamente sin límites. Si bien en el llano no se tenía una vocación agrícola, esta se fue estableciendo por los intereses económicos que maneja. Es notoria la ruptura ecosistémica que se da en estos casos, disminuyendo las áreas de las coberturas vegetales (Figura 2), como también la ruptura de las rondas hídricas, ya que son intervenidas, lo que deja franjas mínimas entre el bosque y la agricultura.

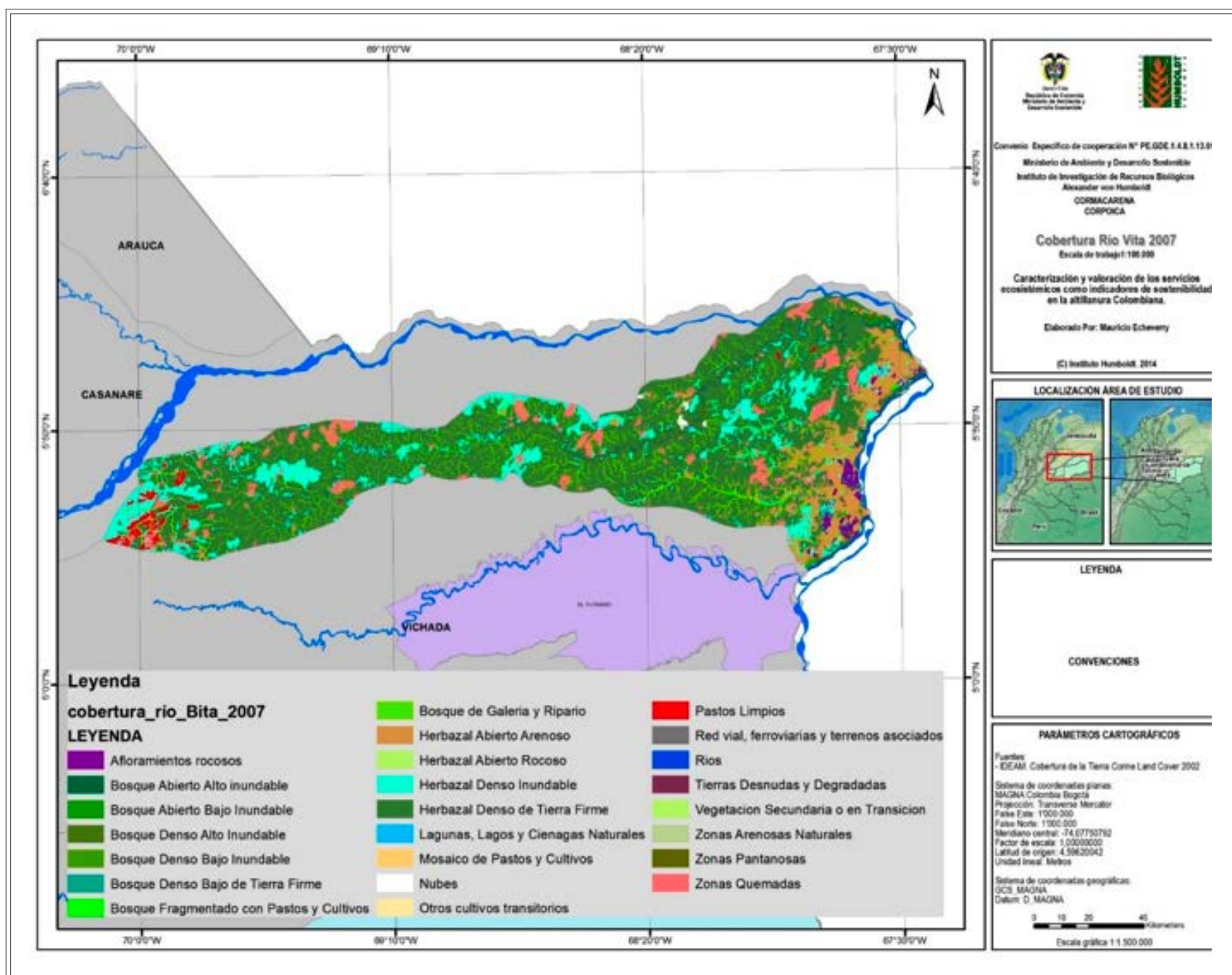
Pero la pregunta crítica es: ¿Qué pasaría si se incluyen miles de hectáreas en los paquetes tecnológicos, para el fortalecimiento de agricultura? La respuesta radica en la amenaza que existiría por la transferencia de nutrientes que contaminarían las fuentes de agua, entre estos el río Vita.

No se está intentando señalar que la agricultura y agroforestería sean indeseables, lo que quiere decirse es que el río Vita, en su territorio de influencia, acoge muchas transformaciones humanas, que son en primera

medida conceptuales, que generarán alguna pérdida de biodiversidad. Para las que den lugar y no sean en detrimento de la estructura ecológica del río, es decir, que no provoquen la pérdida de especies migratorias, grandes depredadores, entre otros, deben contemplarse como una estrategia y una figura que integralmente debe ser protegida.

En este río confluyen grandes depredadores, peces, nutrias y delfines, siendo un río de gran belleza. Debe comenzarse a evaluar también los atributos estéticos, ya que estos pueden sumar puntos en la apropiación social que puede generar y convertirse en atractivo mundial, como por ejemplo la actividad ya establecida de la pesca deportiva de pavón (*Cichla orinocensis*), que genera ganancias de \$2.000 mil millones de pesos, entre otras actividades.

Por otro lado, la forestería también tiene cabida en la sabana, por ejemplo, las acciones de algunas fundaciones como la Pedregosa, ya que en el Vita se están generando sistemas productivos que proyectan a futuro la generación de recursos económicos, respetando la estructura e integralidad del Vita. Un ejemplo son, entre otras, las actividades de la reserva de Bojonawi de la fundación Omacha, en las estribaciones del PNN



Mapa 2. Coberturas vegetales presentes para el año 2007 en el río Vita (Humboldt, 2007).

El Tuparro, donde se están criando y liberando las tortugas de especie *Podocnemis expansa* (charapa), la cual está al borde de la extinción.

En este sentido, se pretende fomentar el desarrollo agrícola manteniendo los atributos de la integridad ecológica como un caso particular de aporte de innovación.

Finalmente, la planificación de la conservación de la biodiversidad se basa en los ecosistemas terrestres y estas no son comprensivas con la biodiversidad de agua dulce, por lo cual se están escapando los ecosistemas ecológicos de agua

dulce. Si bien dentro de las áreas protegidas están los ríos y riachuelos, dentro de las estrategias no se contemplan todos sus atributos. Los sistemas ecológicos de agua dulce son objeto directo de grandes impactos puntuales y receptores de impactos articulados, como por ejemplo las hidroeléctricas, donde muchos ríos del país se van a represar. Por ende, muchos de sus atributos van a perderse, lo que evidencia la necesidad de tener en cuenta que por lo menos un río de segundo orden en todas las cuencas hidrográficas debería declararse como Río Protegido, para

que así se mantenga la integridad ecológica y social. Entonces, esperamos que el Vita sea el primero con este concepto integral y que sirva de ejemplo para las muchas estrategias que deben implementarse en la búsqueda de la conservación de un ecosistema de agua dulce.

Por ahora, el Vita no es una figura legalmente establecida, pero tiene un sustento legal. Es un tipo de paisaje protegido que debe entenderse como un paisaje que se basa en el conocimiento, puesto que no existe una cartilla para el establecimiento de esta figura y sus réplicas, ya

que el equilibrio en el territorio no es una fórmula que se pueda aplicar a todas las estrategias.

Se agradece a todos los involucrados en este proceso de construcción en este nuevo concepto, entre los que se encuentran el Gobierno del Vichada, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fundación Omacha, Fundación la Pedregosa, Fundación Orinoquia, Fundación Palmarito Casanare y WWF. Esta es la propuesta de Estrategia Complementaria, la cual se trata de 900.000 ha que aportarían a la conservación y servicios ecosistémicos.



Parque Nacional Natural Chingaza.

Estrategias complementarias de conservación en Colombia: avances y retos



Iván Gil, Especialista de Estrategias de Conservación
The Nature Conservancy

Relatoría con base a la conferencia realizada por Iván Gil, realizada por Paola Sáenz

El camino hacia la conceptualización de las estrategias complementarias de conservación parte de un recorrido que se viene trabajando hace más de 5 años, articuladamente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, sistema regionales de áreas protegidas y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Estos ejercicios con múltiples discusiones han permitido consolidar cómo lo complementario es complementario y cómo estas estrategias están aportando al país, específicamente a las áreas protegidas. En este sentido, estos espacios y el trabajo conjunto lograron recaudar la información que hoy por hoy se puede exponer.

La intención no es solo acercar a los conceptos per se, sino también se debe entender la génesis de cómo se llegaron a estos. Es precisamente con el desarrollo normativo del país que se empiezan a recorrer las diferentes referencias en torno a las ECC y que se ubica la discusión en un mismo escenario.

Desarrollo normativo

La Ley 2 de 1959, la cual expresa la necesidad del país por adelantar acciones de conservación y contempla la declaración de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otras disposiciones, brinda un panorama de necesidad de adelantar prácticas de conservación y mejoramiento de los suelos tanto en las áreas protegidas como en las áreas circundantes a estas. Así mismo, el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, resalta la importancia de la protección de los recursos y áreas naturales del país, incluyendo los procesos de conservación dentro de las áreas protegidas y fuera de ellas.

La Constitución Política de 1991, la cual en virtud del desarrollo en materia ambiental ha sido denominada “Constitución Ecológica”, estipula en el artículo 79:

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Así como es deber del Estado proteger la diversidad e integralidad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

La Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 1, numeral 1, establece:

(...) que la política ambiental colombiana se regirá por ciertos principios generales que se citan taxativamente, dentro de los cuales se encuentra: El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

La Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el convenio de diversidad biológica, mediante la cual el Estado se compromete a elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación, así como se considera la necesidad de elaborar directrices para la selección, establecimiento y ordenación tanto de las áreas protegidas como de áreas donde se deban tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

El Decreto 3600 de 2007, «por el cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones”. Dando así unas categorías de ordenación, zonas de uso y manejo en la

zonificación ambiental de cuencas hidrográficas y reglamentación de determinantes de ordenamiento del suelo rural; así:

Áreas de protección

- Áreas complementarias para la conservación (se carácter internacional, nacional y local).
- Áreas de Importancia Ambiental (ecosistemas estratégicos y otras subzonas de importancia ambiental).
- Áreas con reglamentación especial (áreas de patrimonio histórico, cultural y arqueológico, territorios étnicos, zonas delimitadas de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, actividad volcánica, e incendios forestales, entre otros).

Áreas de restauración

- Áreas de restauración ecológica.
- Áreas de rehabilitación.

El Decreto 2372 de 2010, “por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”. Aunque el principal objetivo de este Decreto fue reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con los artículos 22 y 28 se evidencia el reconocimiento del aporte a la protección, planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación por parte de las otras figuras de protección ambiental diferentes a las áreas protegidas del SINAP y que este Decreto denomina estrategias de conservación.

El Documento de Política Conpes 3680 de 2010, “Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, definió como



una estrategia a desarrollar la generación de acciones complementarias de ordenamiento territorial que aporten a la conectividad del SINAP, partiendo de tres atributos esenciales: completo, representativo ecológicamente y efectivamente gestionado. Así mismo, definió que las áreas protegidas y los sistemas que conforman deben verse en entornos más amplios que permitan atender a características de funcionalidad y complementariedad.

Decreto 1640 del año 2012, “por el cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones” y la posterior publicación de la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en el 2013, donde se contemplan como ECC a sitios Ramsar, reservas forestales de Ley 2ª, reservas de biosfera, AICA, reservas naturales de la sociedad civil sin registrar, áreas de conservación indígenas y comunitarias (en inglés ICCA) y suelos de protección.

La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012 plantea que las estrategias de conservación responden a la necesidad de un modelo de conservación integral que no esté enfocado únicamente hacia áreas protegidas, sino que responda a diferentes intereses y a las necesidades propias de cada territorio y sus habitantes.

Definición

En todos los ejercicios que se han realizado en el país, las autoridades ambientales están procurando consolidar la información acerca de las estrategias complementarias.

Después de realizar un recorrido en el desarrollo normativo con respecto a las estrategias complementarias de conservación, es de suma importancia recalcar una definición que nace en los espacios de discusión y análisis, de los cuales se debe reflexionar acerca de los aportes significativos que actualmente vienen siendo adelantados al interior de cada uno de las instancias competentes. La definición es la siguiente:

Área geográfica definida en la cual se implementa una acción o un grupo de acciones por parte de un actor social (comunitario e institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, intereses y esquemas de administración y manejo, para asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica y cultural representada en un territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen a la complementariedad y la conectividad funcional y estructural, de las áreas protegida.

Llegar a las reflexiones de cómo se complementa, qué se complementa y el por qué es un ejercicio en el que también se han propuesto las ECC dentro de un tipo de gobernanza para identificar

Pública	Privada	Comunitaria
Límite geográfico definido.	Límite geográfico definido.	Límite geográfico definido.
Designación.	Reconocimiento social.	Reconocimiento y apropiación por la comunidad de prácticas sostenibles y manifestaciones culturales.
Marco legal y/o regulatorio.	Voluntariedad.	Título colectivo y/o resguardo indígena reconocidos por el MinInterior.
Instrumento de planificación y manejo (seguimiento y monitoreo, preferiblemente).	Instrumento de planificación y manejo (preferiblemente).	Instrumento de planificación y manejo (preferiblemente).
Objetivos que apunten a metas de conservación.	Visión/objetivos que se complementan con los objetivos de conservación.	Enfoque, alcances o acciones que se complementan con los objetivos de conservación.

 **Tabla 1.** Criterios mínimos requeridos para las estrategias complementarias de conservación por tipo de gobernanza (SIRAP Pacífico).

verdaderamente qué actores están involucrados y cómo influyen sus acciones en el territorio, que se reconoce desde un ejercicio desarrollado por el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, el SIRAP Pacífico, entre otros. En la Tabla 1, se exponen los criterios mínimos por tipo de gobernanza, que puede ser pública, privada o comunitaria.

Reflexiones finales

Las estrategias complementarias de conservación son fundamentales para mantener el patrimonio natural y cultural de la Nación. Por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre el territorio frente al crecimiento económico,

el desarrollo y bienestar de la población deben apuntar a reconocerlas, respaldarlas jurídicamente, posicionarlas y a evitar su deterioro y degradación.

Las dinámicas sociales y ecológicas en los paisajes urbanos son un reto para la administración de las áreas protegidas, al igual que la articulación con estrategias complementarias de conservación.

Retos y oportunidades

El país ha avanzado en la consolidación del SINAP definiendo categorías de áreas protegidas; creando instancias operativas nacionales, regionales y locales; identificando vacíos y prioridades de conservación

y estructurando mecanismos de sostenibilidad financiera, es hora de avanzar en la misma dirección con las estrategias complementarias de conservación

El reconocimiento y la interacción de las distintas visiones frente al uso y la ocupación de las áreas protegidas y sus estrategias complementarias de conservación son fundamentales para llegar a acuerdos y formular acciones que redunden en el bienestar de las poblaciones en estos territorios y la construcción de paz.

Actualmente existen escenarios de participación incluyentes y coordinados, se espera consolidar estos espacios, ampliarlos a otros sectores y crear otros nuevos, que potencialicen las estrategias existentes, reconociendo las estrategias complementarias como un mecanismo importante para garantizar el bienestar de las poblaciones rurales y urbanas.

Es necesario continuar consolidando una estrategia financiera robusta y diferenciada que permita la consecución, la administración y el

manejo efectivo y eficaz de los recursos para adelantar acciones prioritarias de conservación. Se requiere avanzar en la consolidación de la información sobre otras estrategias y figuras de ordenamiento ambiental complementarias a la conservación, que no son áreas protegidas, para garantizar la administración y gestión efectiva de la información relacionadas con ellas.

Es necesario generar un mayor conocimiento de las estrategias complementarias de conservación para lograr su posicionamiento como figura, desde lo jurídico, institucional, regional y local, así como lograr un entendimiento de estas como una oportunidad de conservación distinta al de las categorías de áreas protegidas establecidas.

Es importante avanzar en la comprensión de los conflictos de uso y ocupación en las áreas protegidas y estrategias complementarias como aporte a la construcción de escenarios de paz.



📷 Archivos Parques Nacionales Naturales. *Giovanny Pulido.*



02

**Estrategias complementarias de
conservación y biodiversidad rural-urbana**

Biodiversidad urbana: retos y experiencias

Contenidos



Retos y oportunidades de la conservación
en entornos urbanos
pág. 277



Proceso de declaratoria de un área urbana-rural
a través de la participación interinstitucional...
pág. 283



Retos y oportunidades de la conservación en entornos urbanos



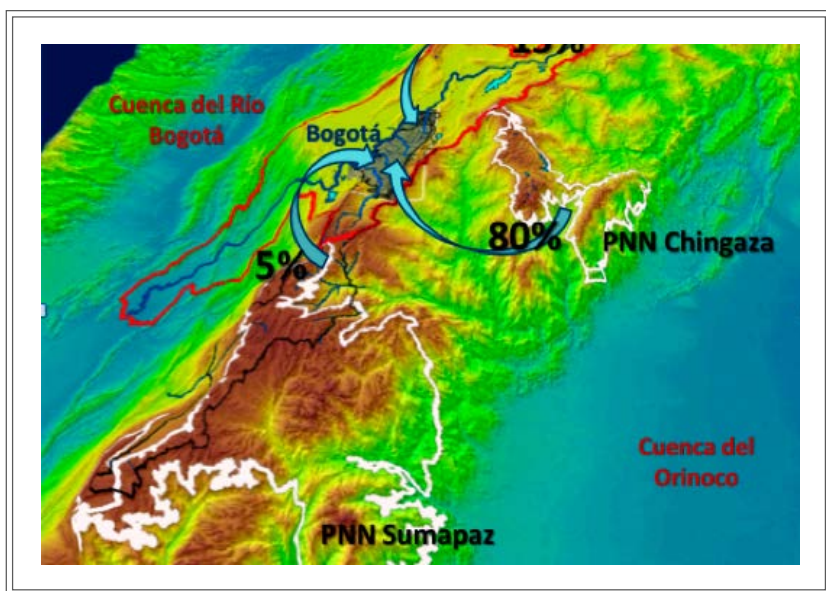
Sandra Sguerra, Directora de Gestión Ambiental
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá

Relatoria realizada por Paola Sáenz con base a la charla de Sandra Sguerra

Esta presentación recoge las experiencias de diversos espacios de diálogo y discusión en el marco de los sistemas regionales de áreas protegidas (SIRAP), alcaldías y municipios interesados en el desarrollo del tema y que han venido trabajando en la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos. La idea central es compilar las principales impresiones que se recolectaron en las reuniones previas y hablar un poco del tema, esto es lo que actualmente se viene trabajando desde la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

Una de las conclusiones de la reunión de alcaldes en Curitiba en el año 2007 nos presenta un panorama en el que, aunque las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie del planeta, sus habitantes usan el 75%

de los recursos naturales totales. Esto nos anticipa algunos aspectos de lo que representa el manejo de los recursos y los modelos de ocupación, ya que a nivel mundial, de manera general, el 70% de la población se concentra en ciudades y en Latinoamérica esta cifra asciende al 80%. Esto lleva a plantearse retos y a realizar los siguientes cuestionamientos: ¿cómo es la dependencia de las ciudades con sus regiones?, ¿cómo son los modelos de ocupación, de uso y tenencia de suelo?, ¿qué sostenibilidad presentan estos territorios, frente a escenarios de variabilidad de cambio climático? y, finalmente, ¿cuáles son los referentes centrales de la sostenibilidad y de la equidad? Estos son temas en los que se ha venido llamando la atención, por ejemplo, en escenarios como el Foro Mundial Urbano WUF7 que se desarrolló en la ciudad de Medellín, 2014.



Mapa 1. Flujo de abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá (Sguerra, 2014).

En este sentido, uno de los primeros interrogantes que surgieron en los escenarios fue acerca de las estrategias complementarias en términos de:

- ¿Estrategias de qué?: Pensando como estrategias complementarias de conservación o solamente pensando en que son complementarias a áreas protegidas ya declaradas o mirando hacia un concepto más amplio de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.
- ¿Para qué se plantean las ECC?: Reflexionando acerca de que si bien una área protegida es principal y es la más efectiva estrategia de conservación de la biodiversidad a nivel mundial, no es la única ni es suficiente. Por lo tanto, se hace necesario complementar con otros modelos que permitan reflexionar sobre el territorio, sobre la oferta de los recursos naturales, sobre la sostenibilidad misma y lo que demandan los habitantes de los centros urbanos.
- ¿Cómo?: Un elemento importante es cómo estas estrategias se desarrollan y se estructuran, al igual de cómo se diseñan y se implementan, lo cual finalmente conlleva al interrogante de con quiénes se realizan estas estrategias.

Una visión actual de lo expuesto anteriormente se constata en las imágenes de un mapa reciente de las áreas protegidas declaradas en el país y que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, contrastándolas con los elementos de biodiversidad asociados a los entornos urbanos y que en el momento no se encuentran lo suficientemente reconocidos en el SINAP.

La primera reflexión direcciona a que las ciudades más allá de sus fronteras, muchas, aunque en la gestión ambiental de los centros urbanos se enfoca solamente dentro de los límites político-administrativos, y desde ese punto se analiza, como si la ciudad por si misma se contuviera, como si en si misma pudiese autoabastecerse. En realidad, las ciudades tienen una serie de conexiones o de vínculos funcionales con el territorio circundante, sin los cuales serían totalmente inviables. No obstante, son las que ofrecen mayor cantidad de servicios educativos, de empleo, industria y otros.

Uno de los elementos más representativos es el energético. Colombia tiene una amplia oferta hidroeléctrica que se ve en el entorno de las ciudades, sin la cual las dinámicas en las ciudades no podrían mantenerse, como es el caso de los alimentos. Por ejemplo, en Bogotá se reciben alimentos de todas las partes del país. También se ve en el caso de Antioquia, que está sustentando la demanda de Medellín, y en el caso del Valle del Cauca, mantiene a la ciudad de Cali.

En el caso del agua, tomando de ejemplo a la ciudad de Bogotá (Mapa 1), la ciudad cuenta a sus alrededores con tres grandes complejos de páramos, de los cuales dos son páramos húmedos: el complejo de páramos de Sumapaz, reconocido como el más grande a nivel mundial, y el complejo de páramos de Chingaza, ambos complejos están constituidos como Parque Nacional Natural. Por último, hacia la zona norte de la ciudad también se encuentran los complejos de páramo de tipo seco el Guerrero y Guacheneque, que



corresponden al nacimiento del río Bogotá. Esta situación muestra que el abastecimiento de agua de Bogotá es totalmente suministrado por la región, principalmente vienen de la cuenca de la Orinoquia y no del Magdalena, debido a un transvase que ocurre principalmente en la cuenca del río Guatiquiva en Chingaza, de donde proviene el 80% del agua que se consume en la ciudad de Bogotá. De la zona norte denominada Tibitó, compuesta por el sistema de lagunas de Tomine, Neusa y Sisga, proviene aproximadamente el 15% del agua de consumo. Finalmente, de la zona sur en la cuenca alta del río Tunjuelo en el Sumapaz proviene el porcentaje restante requerido por la ciudad. Este panorama muestra que abastecer una población de casi 10 millones de habitantes, considerando no solo Bogotá, sino también su entorno regional, significa que si no se mantiene el entorno y sus bosques,

la ciudad no podría pervivir. Esta situación se replica en las demás ciudades: Medellín, Cali y Bucaramanga e incluso pequeños municipios ubicados a lo ancho y largo de Colombia.

Biodiversidad en entornos urbanos

La biodiversidad en entornos urbanos verdaderamente podría reconocerse como la supervivencia del desarrollo, producto de los modelos de crecimiento demográfico que se han venido dando de manera acelerada y supremamente acticos, lo cual ha generado que los ecosistemas que poseían una calidad ambiental importante, por sus buenas condiciones de naturalidad y funcionalidad, se encuentren en la actualidad alterados, no obstante sobreviven todavía.

Por ejemplo, en el análisis realizado para la ciudad de Medellín, en el marco del plan de gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se reflejan unos valores en el número de especies de plantas, aves, mamíferos y anfibios que son relativamente altos en proporción con el departamento y el país, lo que demuestra que todavía queda biodiversidad que proteger y que esta trae beneficios a la ciudadanía. De igual forma, el análisis también muestra que, en el tema de servicios ecosistémicos, hay una oferta muy importante en el territorio, resaltando algunos elementos en términos de servicios de provisión, el tema de la regulación hídrica, y fundamentalmente en condiciones de variabilidad climática. Esto ya que en algunas ciudades las precipitaciones y veranos cada vez se estarán tornando más extremos, por lo cual mantener la funcionalidad de los cuerpos de agua, ríos, quebradas, humedales y complejos de humedales costeros son claves para mitigar los efectos de las lluvias extremas. Dentro de la regulación climática, uno de los retos es mitigar el efecto de isla de calor causado por las construcciones, el pavimento y las urbanizaciones, ya que estos generan un incremento que varía entre 1 y 2 grados centígrados de temperatura. Por lo tanto, generar espacios de conectividad al interior de los centros urbanos constituye una estrategia de mitigación eficaz frente al efecto de isla de calor y, de alguna manera, alivia parte de los efectos del cambio climático. La captación del material particulado del aire y la mitigación del ruido, funcionalidad del arbolado y de las áreas protegidas en los entornos urbanos, también permiten tener espacios para el disfrute de los habitantes, lo cual mejora la calidad de vida. Un factor importante de la calidad de vida en las ciudades está relacionado con la cantidad de espacios verdes por habitante. Este es un tema crítico, ya que ninguna ciudad del país pasa la prueba: los espacios verdes son insuficientes. Tener áreas protegidas y hacer un manejo efectivo de la biodiversidad también contribuye a que las ciudades tengan espacios para el disfrute.

Amenazas

Las actuales amenazas a la biodiversidad urbana:

1. Vertimiento de aguas residuales: Se evidencia el tema de la falta de conexiones cerradas, lo que permite que se mezclen las aguas residuales con los recolectores de agua de lluvia, en vez de llegar a los alcantarillados, situación que termina contaminando todo el sistema hídrico que atraviesa las ciudades, además de generar problemas de salud pública.
2. Residuos sólidos: La disposición inadecuada de basura, residuos de construcción y/o demolición vienen afectando el cauce natural de ríos y limitando las posibilidades de amortiguación de las crecientes de los humedales.
3. Invasiones a los cauces: En su gran mayoría generada por los residuos sólidos y además por procesos de urbanización, restringiendo los territorios naturales que aún prevalecen en el territorio. La situación social vinculada a las situaciones de insalubridad y que están asociadas a las quebradas, ríos, así como bosques remanentes.
4. Inestabilidad del terreno: En casos como el Eje Cafetero, es evidente la problemática por la amenaza de deslizamiento y las condiciones permanentes ante la amenaza por movimientos telúricos.
5. Especies invasoras: Pueden ser vegetales, como el caso del retamo espinoso que aumenta la probabilidad de incendios forestales o acuáticas que limitan la funcionalidad de los ecosistemas como el caso de la tilapia.

Bajo este panorama, considerando que cada municipio, cabecera municipal o ciudad posee unas condiciones particulares, debe darse un tratamiento especial a las ciudades grandes y pequeñas por

el grado de complejidad. Lo evidenciado en los encuentros que se han venido realizando en torno a esta temática indica que también se encuentran muchas alternativas que se han venido desarrollando desde hace más de dos décadas, en algunos casos, desde su concepción hasta su implementación. Una de estas alternativas es la referente a la Estructura Ecológica Principal (EEP) y la definición de los suelos de protección, aunque no existe en el país una única división o cartilla que muestre como se debe construir la EEP y con cuales elementos se debe hacer.

Se pueden encontrar unos elementos en común relacionados con el sistema hídrico, los remanentes de bosques, la posibilidad de establecer corredores ecológicos en entornos urbanos, zonas de riesgo bien sea por inundación, deslizamiento, o incendios forestales; siendo estos algunos de los elementos que, desde la estructuración misma de los planes de ordenamiento territorial de cada ciudad, han servido como referentes para definir la EEP y comenzar a definir acciones específicas para su conservación.

Otra alternativa importante son los sistemas locales de áreas protegidas, los cuales tienen una diversidad de denominaciones. Debido a esto, se pueden encontrar los sistemas municipales de áreas protegidas que se conforman por los acuerdos municipales, sistemas locales de áreas protegidas donde, desde el ejercicio de la ordenación de los suelos, se han conformado distintas categorías particulares para las áreas protegidas locales, siendo definidos los usos permitidos y prohibidos, los lineamientos, la orientación de la declaratoria y el manejo.

En el caso de la delimitación de rondas, en la ciudad de Manizales, más allá de la norma nacional, deben tenerse unos procesos en la recuperación de manera participativa en el ámbito local, que busque rutas específicas que permitan rehabilitar la funcionalidad de estos espacios.

De manera complementaria a esta alternativa, se ha venido trabajando la gestión de riesgos. Aunque anteriormente se manejaba cuando ya detonaba un desastre, no se trabajaba en torno a la prevención, esto ha llevado en ocasiones a que se declaren áreas protegidas locales en las zonas de borde urbano, que ubicadas en estos lugares críticos brindan una oportunidad de prevención y conservación.

Oportunidades

Evidencia de los efectos de la variabilidad y el cambio climático: En el caso de Bogotá, entre el año 2010 y 2011, con las fuertes lluvias que se presentaron y causaron que muchos barrios quedaran anegados y con grandes pérdidas económicas, se desarrolló una sensibilidad social frente al tema, esto es una oportunidad que se debe potenciar.

El manejo integral del riesgo y el reconocimiento del valor social del agua: Vincular agua y biodiversidad es una oportunidad, ya que se entiende como un beneficio en todo sentido y las comunidades se apropian más del concepto y del valor del agua, lo que se dificultaría si solo se hiciera referencia a la biodiversidad.

Desafíos

La tenencia de la tierra, que es mayoritariamente privada y con costos elevados y la relación del precio entre lo urbano y lo rural hace que la adquisición de predios, para eventualmente desarrollar acciones específicas para la conservación sea muy costoso.

Riesgo permanente de invasiones y deterioro por urbanizaciones, desplazamiento y proyectos viales.

Las áreas protegidas locales no están reconocidas en el SINAP. El hecho de poder estar incluidas como categorías brinda una protección de los territorios o blindaje, por lo cual debe ser un mensaje claro en el desarrollo del Simposio.

La declaratoria de áreas protegidas dependen del interés político del momento y los esquemas de ordenamiento (EOT), los planes de ordenamiento territorial (POT) y los planes básicos de ordenamiento territorial (POBT), condicionan la posibilidad de revisar los sistemas de áreas protegidas locales a que se realice cada 10 años, esto bajo la constante degradación de las áreas, las cuales no pueden esperar más.

No existe soporte jurídico desde el nivel nacional para la declaratoria de las áreas protegidas locales y estrategias complementarias de conservación; por esto, sin esta protección legal, es muy difícil que las áreas permanezcan en buenas condiciones en el largo plazo.

Hacer gestión de conservación de entornos urbanos significa una apertura a las áreas que poseen ya un nivel de deterioro o de transformación.

La restauración ecológica debe verse también como renaturalización y arbolado, que si bien no se va a llegar a tener ecosistemas iniciales se debe recuperar en parte la funcionalidad de lo que fueron estos territorios. Lo nativo versus lo exótico, debe darse una prioridad a las especies nativas, las migratorias, y endémicas.

El tema del no uso frente al uso, en entornos urbanos el no uso significa invasión y deterioro, en cambio el buscar un uso apropiado y la generación de espacios para el disfrute como senderos y espacios para la recreación y que brinden seguridad son elementos claves para el éxito de la conservación en entornos urbanos.



Proceso de declaratoria de un área urbana-rural a través de la participación interinstitucional, privada y comunitaria en la cuenca del río Meléndez en el Municipio de Cali



Santiago Sierra-Paz, Andrea Cáceres & Ana María Hoyos
Cooperación Biodiversa

Introducción

En Colombia, los sistemas municipales de áreas protegidas y/o la declaración de nuevas áreas como áreas protegidas locales (APL) o como Estrategias Complementarias de Conservación (ECC) se están convirtiendo en una de las herramientas más importantes para salvaguardar los servicios ecosistémicos que sustentan la vida en la ciudades y que juegan un rol trascendental dentro su estructura

ecológica principal. Por esta razón, el municipio de Santiago de Cali le ha apostado a la estructuración de un Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIDAP Cali), consolidando una política pública reflejada en su plan de desarrollo y en la propuesta de Acuerdo Municipal aprobatorio del POT.

Es en el marco del SIDAP Cali donde se desarrolló el proyecto “Conservación de los relictos de bosque seco de la cuenca media-baja del río Meléndez para la declaratoria de un Área Protegida Pública, Zona Urbana del municipio de Santiago

de Cali” presentado y aprobado por la convocatoria de Conserva Colombia¹ y ejecutado mediante dos Convenios entre la Fundación Danza y Vida, Fondo Acción y el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA).

Por los valores naturales que aún se conservan, por la baja representatividad de los ecosistemas y por las fuertes presiones que tiene, las áreas naturales de la cuenca media-baja del río Meléndez fueron priorizadas dentro de la propuesta de SIDAP-Cali² para iniciar el primer proceso de declaratoria de un APL.

Este proceso entrega un documento de soporte técnico para la declaración de una estrategia complementaria de conservación que incluye un plan de manejo y un plan financiero para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos que deberán ejecutarse después de ser declarada el área.

Antecedentes

El río Meléndez y sus rondas han representado para los caleños no solo una de sus principales fuentes de abastecimiento de agua, sino también un espacio de recreación y descanso con alto valor paisajístico y de importancia social y cultural. Sin embargo, los ecosistemas ribereños en esta cuenca han sido diezmados aceleradamente, quedando, especialmente en la parte media y baja, solo pequeños parches de Bosque seco Tropical (BsT) aislados (DAGMA, 2007).

La sobre extensión urbanística pública y privada y la ocupación subnormal que han caracterizado la cuenca baja del río en su zona periurbana han aumentado la pérdida de la cobertura vegetal, la contaminación hídrica y

del suelo, lo que acentúa la fragilidad de los ecosistemas y aumenta el riesgo de desastres o en su defecto, sequías con periodos de racionamiento.

Como respuesta a esta situación, por lenta acción institucional a las problemáticas de la cuenca, las comunidades organizadas de la Comuna 18 y del corregimiento de La Buitrera que habitan la zona urbana y rural de la cuenca, respectivamente, emprendieron acciones de defensa por la conservación de las zonas naturales y la protección de las fuentes hídricas, que implicaron movilizaciones sociales, acciones populares y demandas ante la municipalidad. Por otra parte, y en el mismo sentido, actores de la cuenca, como el Club Campestre de Cali y el Cantón Militar Pichincha, iniciaron gestiones ante las autoridades ambientales y Planeación Municipal para la conservación de los relictos de bosque seco presentes en sus predios.

Objetivos

Es en este contexto que se inicia el proceso para la declaratoria de un área protegida municipal en la cuenca media-baja del río Meléndez, mediante la ejecución del proyecto en mención. Sus objetivos fueron elaborar la descripción de los recursos naturales y de las condiciones sociales, económicas y de tenencia de la tierra, de cara a identificar y analizar los valores objeto de conservación, aplicando la metodología de Planificación para la Conservación de Áreas³ (PCA. Esto para así proponer un polígono, una categoría y una zonificación del área a declarar y finalmente elaborar un plan de manejo que

1 Convocatoria financiada por The Nature Conservancy y Fondo Acción para la Niñez, con el propósito de declarar áreas protegidas en ecosistemas de bosque seco tropical.

2 Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali.

3 Granizo, Tarsicio *et al.* (2006). Manual de Planificación para la Conservación de Áreas, PCA. Quito: TNC y USAID.

sirviera al ordenamiento ambiental de la cuenca y un Proyecto de Acuerdo Municipal para su declaratoria por parte del Consejo Municipal.

Metodología

El primer momento del proceso consistió en socializar el desarrollo del proyecto con todos los actores locales⁴ y en concertar los mecanismos e instancias de participación. En este sentido, el proyecto propuso la conformación de un grupo de gestores ambientales comunitarios (coinvestigadores) que acompañarían y apoyarían el desarrollo de todas las actividades del proyecto, los cuales fueron elegidos por la misma comunidad teniendo en cuenta criterios de liderazgo y conocimiento del área. Por otra parte, se conformó una Mesa Local para la gestión integral de la declaratoria, integrada por representantes del Club Campestre, el Cantón Militar Pichincha, Comités Ambientales, organizaciones comunitarias, más el concurso de las autoridades ambientales en el municipio (DAGMA y CVC), que consideraría una mesa local ampliada que invitaría, según fuera el caso, a otras entidades del ámbito municipal que tuvieran injerencia en el proceso y permitieran resolver situaciones conflictivas desde sus competencias en la administración municipal (Secretaría de Vivienda, Secretaría de Gobierno, Planeación Municipal, Unidad de Parques Nacionales, entre otros). Estas instancias facilitaron la participación integral de los actores locales y permitieron la retroalimentación y validación de los avances realizados. Hay que resaltar que todo el proceso

implicó un plan formativo de los gestores ambientales y de los actores locales para facilitar y profundizar la estrategia de participación.

El proceso metodológico en los aspectos biofísicos y biológicos se basó en una Evaluación Ecológica Rápida (Sayre *et al.*, 2000). Después de identificar los vacíos de información y de hacer un análisis de las coberturas vegetales a partir de sensores remotos, el equipo técnico del proyecto procedió a adelantar el levantamiento de información de campo aplicando metodologías estandarizadas para la caracterización de la flora y los diferentes grupos faunísticos (aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces), complementado con recorridos de campo y entrevistas con la comunidad.

En los aspectos socioeconómicos, se tomaron elementos de la investigación Acción Participativa (Fals-Borda, 1993)⁵ y de la Cartografía Social (Preciado *et al.*, 1999)⁶. Mediante la revisión de información secundaria, el desarrollo de entrevistas, grupos focales, talleres de cartografía y recorridos de campo con comunidad se hizo una aproximación a la realidad socioambiental del área y se contribuyó con el fortalecimiento de los actores locales.

Para el análisis de integridad ecológica, que combinó instancias técnicas y comunitarias, se aplicó la metodología de Planificación para la Conservación de Áreas (Granizo *et al.*, 2006), con la cual se definieron los valores objeto de conservación, se hizo su respectivo análisis de viabilidad, análisis de amenazas, análisis de situaciones y actores y se propusieron metas y estrategias de conservación.

4 (Juntas de Acción Local, Juntas de Acción Comunal, Comités Ambientales, Comités de Planificación, grupos organizados, Club Campestre, Cantón Pichincha, Acuabuitrera, etc.).

5 Fals Borda, Orlando. (1993). La investigación participativa y la intervención social. *Documentación social: Investigación acción participativa*, No. 92, julio-septiembre, 9-21.

6 Preciado, J.C., Restrepo, G.M., Velasco, A.C. (1999). Cartografía social. Serie *Terra Nostra* No. 5. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Enmarcados en la normatividad vigente sobre áreas protegidas y ordenamiento territorial⁷ y de forma participativa se procedió a proponer un polígono a declarar y una categoría de manejo, además de hacer su zonificación y definición de programas y proyectos con su respectivo plan financiero. Esto se hizo teniendo en cuenta todos los ejercicios metodológicos realizados, el Plan Nacional de Restauración⁸, la Guía metodológica de SIDAP Cali (DAGMA-TNC, 2012), el manual de pautas metodológicas para los planes de manejo del SIDAP Valle (Ocampo et al., 2009), más el análisis de fragmentación y conectividad según lo propuesto por Parques Nacionales Naturales de Colombia (Ciontescu, 2012)⁹.

Resultados

Como productos del proceso, se obtuvo un documento de caracterización y de plan de manejo, un documento de acuerdo para la declaratoria y una estrategia de divulgación implementada.

Entre los principales resultados de la caracterización, se puede resaltar que, a pesar de la drástica transformación de los ecosistemas, asociada a procesos de ocupación rural y urbanización que ha vivido la cuenca, los relictos, fragmentos y zonas riparias de bosque seco y demás coberturas arbóreas, que representan casi el 30% del área y presentan más de 134 especies silvestres y 132 especies cultivadas, están sirviendo como refugio de



fauna, albergando más de 234 especies¹⁰ de aves, veinte (20) de mamíferos¹¹, cinco (5) especies de anfibios (1 VU) y cinco (5) especies de reptiles (1 VU).

Esta vegetación actualmente protege más de 60 nacimientos de agua que vierten sus aguas al Río Meléndez. Este sistema abastece de agua a más de 300.000 personas de la Comuna 18 y del corregimiento de La Buitrera.

Como resultado de la aplicación de la metodología PCA, se definieron cuatro valores objeto de conservación, a saber:

7 Decreto 2372 de 2010, Decreto Ley 2811/74, Decreto 622 de 1977 (Capítulo IX, art. 30), Decreto 877 de 1976, Decreto 1449 de 1977, Ley 388, propuesta de ajuste al POT Cali)
8 Plan Nacional de Restauración: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013).
9 Instructivo metodológico para ejecutar indicadores de estado de conservación ArcGis-Fragstas (Ciontescu, 2012).

10 189 son residentes, 45 son migratorias, 3 amenazadas (2 VU, 1 NT), 6 con distribución restringida (3 endémicas, 3 casi endémicas) y 4 especies introducidas.
11 21 especies de mamíferos agrupados en seis ordenes, 10 familias. El orden más diverso fue Chiroptera con nueve especies, dos familias y seis géneros. Le siguen Rodentia, con cuatro especies, tres familias y cuatro géneros; Carnívora, con dos especies, dos familias y dos géneros.

1. El Sistema Hídrico de la cuenca del Río Meléndez que conforma una “red de conectividad” en toda el área y es responsable de la viabilidad de la biodiversidad en todos sus niveles de organización.
2. Relictos y parches boscosos y de coberturas vegetales de ecosistemas presentes en el área propuesta: AMMSEMH¹²; BOCHUPX¹³; BOMHUMS¹⁴; BOCSEPA¹⁵.
3. Ortalis columbiana (guacharaca): Ecológicamente es una especie de ave endémica, de amplia distribución local y de carácter estratégico por ser una “especie clave” en razón de su comportamiento trófico que le hace dispersora de semillas y “restauradora” de ecosistemas.
4. Mirador El Morro: Es un objeto de conservación de orden cultural, asociado al reconocimiento comunitario de su valor paisajístico y a la defensa de su integridad frente a pretensiones de urbanización.
2. Urbanizaciones ilegales: La ocupación desordenada del territorio tiene que ver con la continua presión que ejercen urbanizadores piratas a través de colonos que se asientan en la cuenca invadiendo terrenos, para lo cual recurren a acciones tales como incendios forestales o desforestación.
3. Las urbanizaciones con licencia: Hacen referencia a las pretensiones y acciones de empresas urbanizadoras que, si bien cuentan con el aval de las autoridades ambientales para la ejecución de sus obras, emplazan sus proyectos en áreas a todas luces estratégicas para el balance ecológico y ambiental del municipio de Cali.
4. La minería como fuente de presión incluye a la minería artesanal e industrial, así como a la minería ilegal y la legal, ya que cualquiera de estas formas de explotación minera está ejerciendo impactos ambientales muy altos sobre los diferentes componentes de los ecosistemas.
5. La cacería es una actividad puntual que ejerce presión sobre algunas especies de fauna, incluida la propuesta como objeto de conservación.
6. El desarrollo de la infraestructura vial se considera una fuente de presión, dada la fragmentación inmediata que ejerce sobre los ecosistemas que atraviesa, los procesos de erosión que genera y la sedimentación y desecación de las fuentes hídricas.
7. Los incendios forestales: Se refieren a las acciones vandálicas que ejercen colonos interesados (o patrocinados por urbanizadores piratas) en la invasión de terrenos, para la construcción de viviendas o la apropiación de predios para su compraventa.
8. Los vertimientos de aguas residuales: Están relacionados directamente con los vertimientos domésticos, agrícolas, pecuarios, mineros y/o industriales.

Las situaciones ambientales que más están afectando a los valores objeto de conservación fueron las siguientes:

1. Debilidad y desorden en la gobernabilidad del territorio: Se refiere a la superposición y/o contradicción entre las autoridades ambientales (municipal, regional y nacional), así como entre estas y las demás autoridades municipales (secretaría de gobierno, UMATA, secretaría de salud, etc.)

12 Arbustales y Matorrales Medio Seco en Montaña Fluvio Gravitacional Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial (AM-MSEMH).

13 Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial (BOCHUPX).

14 Bosque Medio Húmedo en Montaña Estructural Erosional (BOMHUMS).

15 Bosque Cálido Seco en Piedemonte Aluvial (BOCSEPA).

9. La deforestación, como fuente de presión, hace referencia a todas las actividades relacionadas con la extracción de las especies vegetales nativas forestales, ornamentales o de cualquier otra índole.

Teniendo en cuenta los objetos de conservación y el análisis de las situaciones ambientales, se plantearon las metas y estrategias de conservación, para finalmente proponer, como resultado del análisis de fragmentación y estado de la composición, estructura y función del área de estudio, que la categoría de manejo del área protegida propuesta correspondiera a una Reserva Municipal de Uso Sostenible abarcando un área total de 610 hectáreas, que deben ser administradas mediante un comité de comanejo integrado de la misma forma que la mesa local implementada. Esta propuesta fue ajustada en las diferentes instancias de participación y validada por la autoridad ambiental del municipio.

Es de anotar que el proyecto de declaratoria (propuesta de acuerdo y documento soporte) debe ser presentado por parte del DAGMA al Consejo Municipal de la ciudad. Teniendo en cuenta que el Consejo es una instancia política y considerando las presiones que existen sobre el área, es fundamental para viabilizar la declaratoria, no solamente el sustento técnico, sino la presión ciudadana.

La participación ciudadana en el proceso de declaratoria

Uno de los principales logros de este proceso fue la articulación que se dio entre los líderes de la Comuna 18 y el Corregimiento de La Buitrera, quienes, además de encontrar un soporte desde lo biológico y normativo para las defensas que han venido haciendo por el agua y las zonas naturales, lograron constituir una organización de segundo nivel llamada Apromelendez (Asociación para las áreas protegidas del Río

Meléndez), que busca gestionar la declaratoria ante las diferentes instancias y, cuando se declare, contribuir a su administración y manejo.

Además de esta articulación, los mecanismos de participación del proceso y el plan formativo vivido por los gestores ambientales y los actores locales, en el marco de los recorridos de campo, talleres y reuniones, han contribuido de forma trascendental a su empoderamiento en términos conceptuales y normativos. Este empoderamiento se ha evidenciado en las gestiones y acciones que han emprendido los actores comunitarios de manera autónoma, participando de foros, socializando la propuesta con concejales, candidatos al consejo, Personería Municipal, organizaciones comunitarias y la comunidad en general. En el marco de la estrategia de divulgación contemplada por el proyecto los líderes de Apromelendez propusieron y llevaron a cabo el Carnaval por la Vida de la Cuenca Meléndez, el cual mediante comparsas artísticas movilizó a más de 3.000 personas que hicieron entrega del documento borrador de acuerdo para la declaratoria al Alcalde de la ciudad y al Consejo Municipal.

Este evento, en su fase preparatoria y de realización, fue cubierto por diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) que ayudaron a visibilizar el llamado que los habitantes de la Comuna 18 y el Corregimiento de La Buitrera le hacen a toda la ciudadanía caleña para participar, actuar y presionar la conservación del patrimonio natural del municipio.

Además de este evento cultural, con el apoyo de los actores locales se realizó y divulgó por la web un video documental del proceso, se elaboró y distribuyó en las instituciones educativas y grupos organizados un material impreso de divulgación (cartillas, afiches, postales y banner) y se construyó un blog de la organización Apromelendez como estrategia para la promoción y divulgación continua de los avances del área protegida y de las estrategias de conservación implementadas.

Por otra parte, este proceso ha contribuido a posicionar al Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP Cali) en el imaginario de los caleños como la principal estrategia de articulación de las iniciativas de conservación del patrimonio natural del municipio y la mejor ruta de gestión de la estructura ecológica principal de la ciudad.

Conclusiones

Los resultados de las caracterizaciones biológicas soportan la importancia que tienen los relictos, fragmentos y parches de bosque seco en el municipio, además de la vegetación arbórea, como refugios de fauna y como corredores biológicos que ayudan a la conectividad de los ecosistemas. Es necesario fortalecer este rol mediante la declaratoria de nuevas áreas y procesos de restauración ecológica y/o mejoramiento de los corredores ambientales del municipio.

La participación comunitaria desde el proceso de socialización y durante todo el desarrollo del proyecto en el marco de instancias reconocidas (mesa local, reuniones, muestreos de campo, recorridos, etc.) que invitaban a la comunidad a

aprender, a escuchar y plantear sus expectativas, fue el mejor escenario de apropiación del proceso de declaratoria por parte de los actores locales.

La comunidad entendió que, apropiándose de las herramientas y conceptos técnicos y normativos del conocimiento generado durante las caracterizaciones, podían tener el soporte necesario para participar en otras instancias, tener voz en las decisiones de su propio territorio y fuerza en sus reivindicaciones.

Este proceso que ha ido de la mano de la autoridad ambiental y del Departamento de Planeación Municipal y ha permitido demostrar con hechos que es posible y necesario articular la participación comunitaria en el ordenamiento ambiental del municipio, dándoles el lugar a las comunidades como constituyentes primarios.

Frente a todos los intereses inmobiliarios y a las limitaciones que tiene la autoridad ambiental, es fundamental para salvaguardar el patrimonio ambiental del municipio la participación y la presión ciudadana, expresada de forma unitaria, organizada, creativa, ilustrada y firme. Este proceso se convierte así en modelo para la implementación del sistema municipal de áreas protegidas de Cali que aún busca ser validado en el nuevo POT.



 Archivo Parques Nacionales Naturales. *Cristian García.*

03

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

**Estrategias complementarias de
conservación y biodiversidad rural-urbana**

Experiencias locales: conservación rural

Contenidos



Sistema Local de Áreas Protegidas de
Belén de Andaquíes, Caquetá
pág. 291



Reserva Natural Especial Bazán Bocana: ejemplo
exitoso de categoría de conservación étnica
pág. 295



Índice

Sistema Local de Áreas Protegidas de Belén de Andaquíes, Caquetá



Junner Fabian González Ibarra
Fundación Tierra Viva

El municipio de Belén de los Andaquíes tiene una extensión 118.869 ha, ubicado al Suroccidente del departamento de Caquetá. Este territorio comparte el ecosistema Amazónico y Andino-amazónico, ya que cuenta con un gradiente altitudinal desde los 214 msnm hasta los 2.889 msnm.

Actualmente, existen 10 parques naturales, entre los cuales encontramos al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, con una extensión de 77.377 ha, que protege 18.000 ha pertenecientes al Municipio. Los otros nueve parques naturales son del orden municipal, los cuales conforman el Sistema Local de Áreas Protegidas De Belén de los Andaquíes.

Para el año de 1993, comenzó en el Municipio de Belén de los Andaquíes la cultura para la conservación de los recursos naturales, partiendo, como eje articulador, de la necesidad de conservar el agua. Así, se logró crear el Parque Municipal Natural La Resaca (511 ha) en 1995 sobre la cuenca abastecedora de acueducto municipal, área donde se encontraban establecidas dos veredas cuya principal actividad económica fue ganadería extensiva.

En la actualidad, el municipio ha logrado comprar la totalidad de las fincas establecidas, con lo que logró el saneamiento total del Parque llevando a cabo procesos de restauración ecológica, de tal manera que después de 18 años

se encuentra presencia de oso de anteojos y otros mamíferos que han llegado desde del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi, a través del corredor biológico que comunica estas dos áreas.

En junio de 1997, se creó el Parque Municipal Natural Maurita (527 ha), con el fin de conservar un ecosistema de cananguchales o morichales en el valle aluvial a margen izquierda del río Pescado interfluvio con la quebrada Aguas Calientes. La particularidad de este parque natural fue que se creó sobre áreas altamente intervenidas por ganadería en presencia de predios privados.

Seguidamente, se crea el Parque Municipal Natural Las Lajas en septiembre de 1997, protegiendo 15 nacimientos de agua en una zona sobrepastoreada en terrenos del perímetro urbano del municipio, con una extensión de 53.6 ha destinada como aula abierta para la educación ambiental y ecoturismo por su relación estrecha con el casco urbano. Esta ha sido la escuela teórico-práctica en formación política y ciudadana tras los múltiples intereses de conflicto armado entre paramilitares, guerrilla de las FARC y fuerza pública, intereses de poder político para su urbanización, intereses para la conservación, intereses privados, de abastecimiento de agua para dos barrios suburbanos del municipio y otros.

Continuando con los procesos de conservación, se crea en 1999 el Parque Municipal Natural Termal de la Quisaya (370 ha), con el objetivo de proteger el patrimonio natural y ecoturístico de las únicas aguas termales existentes en el departamento del Caquetá, ubicado a margen derecha del río Pescado y el Parque Naturales Alto Fragua Indi Wasi.

Después de 9 años del proceso de conservación y creación de áreas protegidas en el municipio de Belén de Los Andaquíes, fue creado en el 2002 El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, quien comparte su territorio en nuestro municipio.



Producto de la presencia de la ganadería extensiva, causando la deforestación acelerada del territorio y la importancia de mantener los ecosistemas estratégicos del municipio, se consideró la necesidad de crear nuevas áreas protegidas en el año 2009, de las cuales tenemos:

- a. El Parque Municipal Natural La Danta (31 ha), su objetivo principal es mitigar el impacto de las aguas residuales del casco urbano del municipio.
- b. El Parque Municipal Natural Agua Dulce (87 ha).
- c. El parque Municipal Natural La Mono (297 ha).
- d. El Parque Municipal Natural Batana (20 ha).

Estos fueron creados con el objeto de mantener las rondas y complejos de humedales de palmas de Asai más 10 m de extensión a las orillas, para así garantizar el recursos hídrico para la población rural del sector, además de vincular a las comunidades e instituciones educativas en la zona de influencia, en las actividades de educación ambiental para el fortalecimiento de la cultura local. Estas áreas también fueron creadas en medio de predios privados.

- e. El Parque Municipal Natural Andakí (26.754 ha) tiene gran importancia histórico-cultural y ha sido el punto de mayor interés para la conservación de la biodiversidad del municipio y el departamento, tras complementar el corredor interandino entre el macizo colombiano a través de los Parques Nacionales Alto fragua Indi Wasi y Guacharos, que conecta con el norte de la cordillera oriental de los Andes con la Reserva Forestal Ley 2 de 1959 hasta el Parque Nacional Cordillera Los Picachos. Este parque ha sido el de mayor disputa social, económica, militar y de gobernanza territorial. Por otro lado, protege la parte de las cuencas de los ríos Pescado y Bodoquero, importantes para la economía de los municipios de Belén de los Andaquíes, Morelia y Valparaíso, tributando sus aguas a la gran cuenca del Río Amazonas.

El Municipio de Belén de los Andaquíes tomó la decisión de crear el Parque Municipal Natural Andakí sobre la Reserva Forestal Ley 2 de 1959 en jurisdicción del municipio, teniendo en cuenta las siguientes razones:

1. La invasión de 52 familias provenientes del municipio de Acevedo, Huila, quienes talaron 387 ha con fines de explotación ganadera.
2. La cacería indiscriminada, lo que pone en peligro especies en categoría de amenaza como la gallineta negra (*Tinamus osgoodi*) (VU y endémica), la guacamaya (*Ara militaris*) (VU), la danta (*Tapirus terrestris*) (CR), el mico churuco (*Lagothrix lugens*) (VU), el oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*) (VU), el mico volador (*Pithecia monachus milleri*) (VU), la boruga paramuna (*Dinomys branickii*) (VU), la

nutria (*Lontra longicaudis*) (VU), el tigre mariposo (*Panthera onca*) (VU), el tigre poenco (*Leopardus pardalis*) (VU) y el tigrillo (*Leopardus tigrinus*) (VU), entre muchos otros.

3. Extracción indiscriminada de madera.
4. La ausencia de gobernabilidad por parte de la Corporación Autónoma Regional.
5. La presión de la frontera agropecuaria.
6. La amenaza por la sismica 2D realizada durante los años 1997-1998 y 2001 al interior de la Reserva Forestal Ley 2 de 1959.
7. Explotación de la mina de Prasio en medio del Parque.
8. La debilidad jurídica que tenía la Reserva Forestal Ley 2 de 1959 hasta el año 2009, careciendo de una figura jurídica rígida de conservación, como la de Parque Natural, según el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia. Hasta la fecha de creación del Parque Municipal Natural Andakí, la Reserva Forestal Ley 2 de 1959 estaba sujeta a posible sustracciones.
9. La Sentencia C-649 de 1997 estableció que “no existe un listado de criterios que permitan establecer cuándo una zona debe ser declarada como tal y plantea que un criterio para su declaración puede ser de carácter único e insustituible de los recursos de flora, fauna, paisajísticos que abarcan, como también los recursos hídricos y la provisión de aire puro que los convierte en bienes ecológicamente valioso y por tanto necesitados de especial protección”.
10. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 313 establece las funciones de los Concejos Municipales encargándole, entre otros temas, la reglamentación de los usos del suelo y dictar las normas para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico del municipio.

11. El artículo 65 de la Ley 99 de 1993, asignó a los municipios la función de proferir normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico municipal y las normas de ordenamiento territorial y usos del suelo.
12. El artículo 4o de la Ley 99 de 1993 en su Parágrafo considera que por estructura y jerarquía de la Ley el Sistema Nacional Ambiental tiene una jerarquía; esto es, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, corporaciones autónomas regionales, departamentos y distritos o municipios; hecho por el cual el Concejo Municipal de Belén de Los Andaquíes creó el Parque Municipal Natural Andakí, teniendo en cuenta que el hecho de que los municipios se encuentren en el último nivel de jerarquía no significa que carezcan de competencia en materia ambiental, sino que las mismas deben de sujetarse a las disposiciones legales reglamentarias superiores, es el caso de la Ley

2 de 1959, tal como lo prescribe el artículo 65, numeral 2, de la Ley del Medio Ambiente.

13. La importancia histórico-cultural del camino prehispánico Andakí o de la Quina.

Belén de los Andaquíes protege 46.728 ha, de las cuales 18.079,3 ha son administradas por la Unidad del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi. 28.649 ha pertenecen al SILAP (Sistema Local de Áreas Protegidas), donde la Fundación Tierra Viva ejerce la administración de los 9 parques naturales locales de los cuales dos tienen contrato de concesión y 7 parques con contrato de comodato. Todos con sus respectivos planes de ordenación y manejo debidamente aprobados.

Este proceso permitió que la Asamblea Departamental reconociera y declarara a Belén de los Andaquíes como municipio verde protector del agua; siendo el primer municipio verde declarado en Colombia por ordenanza departamental gracias a la estructura ambiental, ordenamiento y nivel cultural alcanzado.



Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. David Páez.

Reserva Natural Especial Bazán Bocana: ejemplo exitoso de categoría de conservación étnica



Luis Alberto Ramírez, Gabriel Quintero, Luz Edith Alegría, Wilfrido Campaz, Clara Inés Tolosa, Marleny Lizalda & Hugo Barona
Consejo Comunitario de Bazán Bocana, Buenaventura

Presentación

El territorio colectivo de las comunidades negras de Bazán Bocana se localiza en el corregimiento de la Bocana, distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Cuenta con una extensión territorial de 15.300 ha, tituladas colectivamente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), mediante Resolución No. 00664 del 07 de abril de 2005. El censo poblacional realizado por CVC-FDRP (2009) reportó un total de 361 familias, las cuales representan 1.616 personas.

El turismo constituye el principal eje articulador de la economía en el territorio y, de hecho, las actividades relacionadas con este sector ocupan al 41,1% de la población en edad de trabajar, lo que hace de esta la principal fuente de ingresos para el grupo familiar; le sigue la pesca, que se constituye en la segunda fuente de recursos con un 33,9%.

El trabajo liderado por el Consejo Comunitario de Bazán Bocana, en el 2009, permite que se adelante el Convenio 220, entre CVC, Consejo Comunitario de Bazán Bocana y Fundación para el Desarrollo Regional del Pacífico (FDRP), a través del cual se alcanza,

entre otros resultados, la designación por parte de la Asamblea Comunitaria del área de conservación del territorio colectivo de Bazán Bocana, como Reserva Natural Especial (RNE), en el marco del artículo 25, de la Ley 70 de 1993. De esta manera, el 88,2% del territorio se constituye en área de reserva, incorporando en esta categoría ecosistemas de manglar y selva pluvial, representativos de los ecosistemas marino-costeros de la región y el país. La designación de la RNE es formalizada por el Consejo Comunitario a través de la Resolución 001 del 22 de septiembre de 2010.

Desde entonces, este proceso de gestión comunitaria para la conservación, ha seguido fortaleciéndose, con el apoyo y participación de CVC Dirección Ambiental Regional Pacífico Oeste, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Marviva, logrando que actualmente, la RNE de Bazán Bocana cuente con dos instrumentos de planificación territorial elaborados y concertados con la comunidad local, el Plan de Manejo de la Reserva formulado y el Plan de Manejo del ecosistema Manglar, formulado y en proceso de implementación.

Antecedentes históricos del proceso

La propiedad colectiva de los territorios del Pacífico, promulgada por la Ley 70 de 1993 y el Decreto No. 1745 de 1995, por medio del cual se reglamenta el capítulo III de la Ley 70 y se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, se constituyen en dos de los acuerdos más importantes entre el estado y las comunidades asentadas en las zonas de los ríos de la Cuenca del Pacífico.

En el Decreto Reglamentario No. 1745 de 1995, en su capítulo 2, artículo 11 literal 9, se le exige a la junta directiva de cada consejo comunitario presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario y a las autoridades ambientales, para su aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales y velar por su cumplimiento.

Enmarcados en esta directriz, la Dirección Ambiental Regional Pacífico Oeste de CVC, consciente de la inexistencia de una línea base técnica estructurada y completa sobre los territorios colectivos de comunidades negras, que permitiera avanzar en lo estipulado en la norma, diseña y apropia una ruta de trabajo para acompañar e involucrar a las comunidades locales en la dinámica de fortalecimiento social para la administración y manejo de los recursos naturales y, al mismo tiempo, elaborar un instrumento técnico sobre los territorios colectivos, que permitiera a los consejos comunitarios y a la CVC tomar decisiones sobre el uso y manejo de los recursos naturales en sus territorios.

Resultado de esta propuesta se formulan e implementan los planes de administración y manejo de los recursos naturales, en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico vallecaucano, los cuales permitieron tener información actualizada sobre componentes biofísicos, socioeconómicos y culturales, realizar la zonificación territorial, actualizar cartografía a escala 1:50.000 y formular reglamentos internos de manejo de los recursos naturales. En la zonificación realizada por cada consejo comunitario, se identifican y definen, entre otras cosas, áreas para restauración, uso sostenible y áreas para la conservación. Estas últimas, son las áreas que, posteriormente, serán designadas por algunos consejos comunitarios locales como reservas naturales especiales, fundamentados en lo establecido en la Ley 70, capítulo IV, artículo 25, que dice:



En áreas adjudicadas colectivamente a las comunidades negras, en las cuales en el futuro la autoridad ambiental considere necesaria la protección de especies, ecosistemas o biomas, por su significación ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya delimitación, conservación y manejo participarán las comunidades y las autoridades locales. Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El Gobierno reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Cada RNE designada es formalizada por cada junta directiva, a través de las respectivas resoluciones declaratorias.

El ejercicio pionero en el Pacífico vallecaucano arrancó en el 2007, en el corregimiento No. 8, bajo Anchicayá, donde 6 consejos comunitarios con territorios colectivos contiguos, acuerdan designar las áreas de conservación, definidas en sus planes de administración y manejo de los recursos naturales (PAMRN) como reservas naturales especiales y establecer esas áreas como

un corredor de conservación, llamado Reserva Natural Especial Néstor Córdoba Camacho.

Posteriormente, en el 2009, el Consejo Comunitario de Puerto España y Miramar, en Bahía Málaga, mediante Resolución No. 001 del 24 de mayo, designa 7.420 ha de su territorio como Reserva Natural Especial de Puerto España y Miramar.

Paralelo a esta iniciativa, el Consejo comunitario de Bazán Bocana cristaliza en el 2010, a través de convenio con CVC, Consejo Comunitario de Bazán Bocana y FDRP, la designación de la Reserva Natural Especial Bazán Bocana.

Los tres procesos han contado con el acompañamiento y apoyo técnico de la CVC y reconocimiento de las áreas de conservación étnicas, como parte de las categorías de conservación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) del Valle del Cauca. Sin embargo, con la expedición del Decreto de 2372 del 2010, que reglamentó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), estas categorías de conservación quedaron excluidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Reserva Natural Especial de Bazán Bocana

Ubicación geográfica

La Reserva Natural Especial Bazán Bocana se emplaza en la zona costera del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción étnico-territorial del consejo comunitario Bazán-Bocana, en el municipio de Buenaventura y bajo la competencia ambiental de la CVC (CVC-MADS-CCBB y FMV, 2012).

El área total de la Reserva Natural Especial corresponde a 8.557,2 hectáreas, que constituyen el 88,2% del total del territorio colectivo. 854,7 hectáreas son ecosistemas de manglares y 7.692,5 hectáreas, están representados en ecosistema de selva pluvial tropical (CVC-FDRP, 2010).

Caracterización socioeconómica y cultural

Algunos habitantes refieren que la comunidad de Bazán Bocana fue fundada en el año 1886 por las familias López (Benito López), Gonzalo Lourido (Punta Cangrejo), Liborio Madú (Piedra Piedra), Quintero (Pianguita), y Mosquera Bravo (Piedra Grande), quienes provenían de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Sin embargo, para Alejandrina Garcés, quien arribó a estas tierras por primera vez en 1951, señalan que el proceso de ocupación podría haber tenido lugar solo hasta 1940 con la llegada de la familia Pacheco, después de ellos y antes de 1951, vivían en el sector de Pianguita José Asunción Mosquera (oriundo del Río San Juan) y Candelaria Bravo (proveniente de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca).

El censo realizado por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, CVC y FDRP (2010) identificó un total de 361 familias en el territorio del consejo, compuestas por 1,616 personas. De estas, 233 (el 14,4%) no se

encontraban viviendo en el territorio al momento del censo, por lo que se constituyen en población flotante, es decir es gente que va y viene o que se encuentra establecida en otros lugares aunque no pierden el vínculo con el territorio. De hecho, en no pocos casos los restaurantes, hoteles y casetas permanecen deshabitados o con una sola persona la mayor parte del año, con excepción de las temporadas de alta afluencia turística, cuando sus propietarios retornan a sus sitios de origen o trabajo (CVC-CCBB, 2006). El 86% de los habitantes de Bazán Bocana se autodefinen como afro colombianos o negros, el 8% como mestizo, el 5% como blancos y solo el 1% como indígenas (CVC y FDRP, 2010).

La distribución de la población es de carácter lineal y disperso, los caseríos La Comba, Santa Delicia, Piedra y estero Bazán son los más dispersos. Por otra parte, el núcleo poblado de La Bocana comprende cinco sectores o barrios conocidos como Shangay, Centro, Monte Adentro (etapa I y II), Vista Hermosa y Pianguita. Cada uno de éstos se caracteriza en función de la principal actividad productiva desarrollada por sus habitantes, es así que Shangay es la zona de los pescadores, el centro el sector del comercio y las actividades turísticas, Monte Adentro el área “administrativa”, y Vista Hermosa y Pianguita, las zonas turísticas (playa, sendero ecológico La Guabina y parque temático La Iguana Verde) (González-A., 2007)

Caracterización biótica

Los estudios realizados por CVC-CCBB (2006), CVC-FDRP (2010) y (CVC-MADS-CCBB y FMV, 2012), identifican siete (7) ecosistemas marino costeros y terrestres presentes en la Reserva Natural Especial de Bazán Bocana, así: playas arenosas, litoral rocoso, manglar (que incluye el natal), sajal y bosque húmedo tropical.

El inventario florístico realizado en la RNE, registró un total de 142 especies vegetales, agrupadas en 46 familias diferentes, lo cual denota una importante diversidad vegetal en la región. La familia que presentó la mayor cantidad de especies fue Arecaceae con 17; aunque, si se agrupan en una sola categoría, las tres representantes de la superfamilia Fabaceae (Caesalpinoideae, Faboideae y Mimosoideae) suman conjuntamente un total de 22 especies. La nutrida presencia de individuos de la familia Arecaceae puede explicarse, entre otros factores, por su gran adaptación al medio circundante, a la salinidad próxima y a la producción de frutos que resultan bastante importantes en la dieta de numerosas especies de aves y de murciélagos, los cuales se convierten de tal manera en dispersores efectivos de semillas (Ríos et al., 2004, citado por CVC-FDRP, 2010).

Florísticamente, los ecosistemas de manglar de la RNE Bazán Bocana se caracterizan por la presencia de especies vegetales como: mangle rojo (*Rhizophora mangle*), mangle blanco (*Rhizophora harrisonii*), mangle piñuelo (*Pelliciera rhizophorae*), mangle negro o comedero (*Avicennia germinans*), mangle iguano (*Laguncularia racemosa*), mangle jelí (*Conocarpus erecta*) y mangle nato (*Mora oleifera*), las que exhiben un hábito arbóreo o arbustivo, de acuerdo con las condiciones en las que se desarrollan (CCCNBB, CVC, MADS y FMV, 2012).

El inventario faunístico, a su vez, registra un total de 185 especies, de las cuales 12 (6,5%) corresponden a invertebrados marinos, 4 (2,1%) a peces de agua dulce, 13 (7%) anfibios, 56 (30,2%) a reptiles; 69 (37,3%) aves y 31 (16,8%) a mamíferos. Es importante señalar que este inventario no incluyó la ictiofauna marina, recurso de gran importancia en la comunidad de Bazán La Bocana. Un 8% de las especies encontradas se encuentran amenazadas a nivel nacional y un 24% se encuentran en alguna categoría de amenaza a nivel departamental (CVC-FDRP, 2010).



De acuerdo a lo reportado por la comunidad de Bazán La Bocana, los usos dados a las especies de fauna silvestre que predominan son, en orden de importancia: alimenticio, medicinal, mascota. En el caso de los reptiles, las especies usadas son pocas, se destacan las tortugas, iguanas, tulisio, petaconas, entre otros, cuyo principal uso es alimenticio y, en segundo grado, medicinal. El resto de especies en su mayoría no tienen uso conocido. Con respecto a las aves y mamíferos, el uso que predomina es el alimenticio, seguido de medicinal y mascota (CVC-FDRP, 2010).

Objetos de conservación

Con base en la metodología definida por el Grupo Biodiversidad de CVC, en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), a través de talleres y/o conversatorios con la comunidad local se identificaron y definieron cuatro (4) objetos de conservación (OdC) de la Reserva Natural Especial Bazán

Bocana: los manglares, los nacimientos de ríos y quebradas, la flora y fauna nativa y medicinal y la cultura. Los cuatro OdC de la Reserva están directamente relacionados con la importancia que cada uno de ellos tiene, en el contexto ecológico, económico y social, para la comunidad local.

El ecosistema manglar es percibido como el lugar donde se reproducen y crían las especies de invertebrados y peces estuarinos y marinos, principalmente. Muchos de ellos asociados a la tradición y prácticas culturales de uso y manejo de las comunidades negras costeras en el Pacífico colombiano. Los nacimientos de ríos y quebradas, desde la mirada comunitaria, son los que ofertan el agua dulce usada por los acueductos comunitarios y proveen el recurso para consumo doméstico, comercial de toda la comunidad. Las especies de flora y fauna nativa y medicinal hacen parte de la riqueza y patrimonio natural presente en la Reserva. Su uso y manejo asocian a la perpetuación de la tradición mágico-religiosa, el conocimiento y prácticas ancestrales de la comunidad negra, que hacen parte de la cultura.

Zonificación y lineamientos de manejo y conservación

La Reserva Natural Especial Bazán Bocana ha sido objeto de dos ejercicios de planificación territorial. El primero de ellos fue realizado en el marco del Convenio 220 del 2010, entre CVC, Consejo Comunitario Local y Fundación para el Desarrollo Regional del Pacífico (FDRP). Este proceso identificó y definió seis (6) zonas de manejo: zona de manglar, zona de conservación, zona de amortiguación, zona de turismo, zona de aprovechamiento forestal y zona de restauración. Se concertaron con la comunidad los usos permitidos y no permitidos para cada una de ellas.

El segundo convenio de asociación, No. 158 de 2013, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Fundación MarViva se firmó con el propósito de “Aunar esfuerzos para impulsar el Programa para el Uso Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar en Colombia” y, en este marco, avanzó en el ajuste a la zonificación de la RNE Bazán Bocana y en la formulación del Plan de Manejo del Ecosistema Manglar. Como resultado del proceso de análisis y concertación comunitaria e institucional, la Reserva pasó de tener seis (6) zonas de manejo, a solo tener cuatro: zona de preservación, zona de restauración (recuperación), zona de uso sostenible y zona general de uso público.

La nueva zonificación de la Reserva Natural de Bazán Bocana, realizada en el 2012, definió las siguientes zonas:

- **Zona de Preservación:** Corresponde a la categoría de manejo denominada como Zona de Conservación y en algunos sectores con la unidad definida como «manglares», de acuerdo con lo referido en el estudio pasado de zonificación (CVC-FDRP, 2010). Por esta razón, se identificaron dos sectores de preservación en la Reserva Natural Especial Bazán Bocana. El primero de estos se caracteriza por constituir las cuencas hidrográficas de los cuerpos de agua que drenan a la quebrada Agua Dulce hasta la altura de la quebrada El Coco, sector caracterizado por la presencia del ecosistema bosque húmedo tropical, acompañado ocasionalmente por el de sajal. En el otro sector, se agrupan bosques de mangles que se caracterizan generalmente por ocupar pequeñas extensiones, que en algunas ocasiones son continuas y en otras aisladas, y que en la mayoría de los casos se encuentran retirados del principal centro poblado, Bazán Bocana.



- **Zona de Recuperación:** En la categoría de recuperación se identificaron dos sectores. El primero corresponde a los manglares más cercanos del principal centro poblado, Bazán-Bocana, y que por esta condición han sido objeto de intervención para la extracción de madera empleada en la cocción de alimentos y/o adecuación o reparación de viviendas y la recolección de recursos hidrobiológicos, acciones que por su magnitud, en relación al número de personas que la ejercen y las prácticas equivocadas implementadas, han ido en detrimento del ecosistema. El otro sector hace parte de las cuencas de las quebrada Los Viejos y otros cuerpos de agua, drenajes que vierten sus aguas a la quebrada Agua Dulce. Se accede a este sector desde la cabecera de los esteros Santa Clara y Bazán, y corresponde a una de las áreas donde los aserradores han ejercido presión con el objeto de extraer madera para la comercialización dentro del consejo comunitario y en épocas pasadas fuera de este. De igual manera allí se desarrollan actividades de cacería por parte de algunos miembros de la comunidad de la Bocana.

- **Zona de uso sostenible:** Esta unidad de manejo corresponde a ecosistemas que exhiben en general una condición aceptable de sus componentes y también de los recursos de los que se beneficia la comunidad. Es así que, en el sector del ecosistema de manglar, se encuentran bosques de los que se puede derivar madera para leña, con fines de uso doméstico, y piangua, para el consumo local y la comercialización. De igual manera, el sector de la zona de uso sostenible en el que predomina el ecosistema de bosque húmedo tropical se define por un estado de conservación conveniente. En cuanto a los elementos florísticos y faunísticos, posiblemente derivado de la poca cercanía con el principal centro poblado del territorio de la comunidad negra de Bazán-Bocana, y en el que se podrían llevar a cabo actividades de extracción de madera para suplir la demanda local de este recurso.

Corresponde a la unidad definida como “zona de amortiguación” por CVC y FDRP (2010) y que, a partir del trabajo de construcción colectiva en el taller de ajuste de la zonificación, se recategoriza la zona de uso sostenible.

En relación con el ecosistema de manglar, abarca los que crecen en el margen oriental del Estero Bazán y que son surcados, entre otros, por los esteros Chiguero y Chiguerito, así como por los bosques de mangles que se emplazan en el margen sur del estero Santa Clara. Se estima ocupan un área de 108 hectáreas y constituyen uno de los manglares continuos más extensos en el territorio del consejo comunitario de la comunidad negra de Bazán Bocana. Este sector de uso sostenible de los manglares, limita al norte con la zona de preservación de los manglares del estero Santa Clara, al occidente con la zona de recuperación de los manglares del sector Estero Corvinerito, al

sur con el océano Pacífico y al oriente con el área de amortiguación de la mencionada figura de conservación. Corresponde a la categoría de manejo denominada como “zona de aprovechamiento forestal” y en algunos sectores a la unidad definida como “zona de restauración” (CVC-FDRP, 2010).

Perspectivas comunitarias en torno a la RNE

Se concibe por parte de la comunidad de Bazán Bocana, que la RNE es una alternativa u oportunidad para impulsar un desarrollo y bienestar económico y social, que gira en torno a la conservación y manejo de la riqueza natural y cultural del territorio (bienes y servicios ambientales). Esta visión comunitaria está íntimamente relacionada con las actividades productivas que predominan a nivel local: turismo y pesca, de las cuales la mayoría de la población en edad de trabajar obtiene su sustento diario.

En esa dirección, para la comunidad local, la conservación y manejo ambiental del territorio es una meta común a alcanzar, ya que permitiría, a través de un turismo rural y ecológico, construir entre todos nuevas alternativas económicas para los pobladores de Bazán Bocana. Esta visión de mejoramiento de calidad de vida asociado a la RNE se refleja en los programas y proyectos definidos por la comunidad local en los tres instrumentos de planificación territorial que se tienen: Plan de Administración y Manejo de los Recursos Naturales del Territorio Colectivo de Bazán Bocana, Plan de Manejo de la RNE Bazán Bocana y Plan de Manejo del Ecosistema Manglar.

La comunidad es consciente que el proceso es lento, complejo, pero posible en el mediano a largo plazo y que, por esta razón, requiere de

apoyo y acompañamiento técnico y financiero por parte de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, del nivel local, regional, nacional e internacional.

Bibliografía

- Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca & Fundación para el Desarrollo Regional del Pacífico. (2010). *Diagnóstico del área definida como de conservación (reserva natural especial en el marco del artículo 25, Capítulo IV de la Ley 70) en el consejo comunitario de la comunidad negra de Bazán Bocana*. Buenaventura, Valle del Cauca.
- Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Fundación Marviva. (2012). Objetivo I. Generación de alianzas interinstitucionales con el sector privado, público y la comunidad para la formulación del plan de manejo de la Reserva Natural Especial Bazán La Bocana, departamento del Valle del Cauca. *Informe Final*. Bogotá, Colombia.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2011). Acta de reunión externa: Matriz DOFA para los grupos del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bazán Bocana. Buenaventura, Valle del Cauca.
- Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca & Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Bazán Bocana. (2006). *Plan de Administración y Manejo de los Recursos Naturales en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán-Bocana*. Buenaventura, Valle del Cauca.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección de planeación. (2012). Un plan para la paz. *Plan de acción 2012-2015*. Santiago de Cali, Valle del Cauca.



04

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Estrategias complementarias de conservación y biodiversidad rural-urbana

Plenaria



Índice



Clara Solano Gutiérrez, *Fundación Natura*; **Alexandra Areiza Tapias**, *SIRAP Eje Cafetero*; **María Fátima Roldán Rosales**, *Alcaldesa, Toro, Valle del Cauca*; **Ricardo Agudelo Salazar**, *SIRAP Macizo*; **Jaime Vásquez Ruiz**, *SIRAP Pacífico*; **Germán Andrés Quimbayo Ruiz**, *Instituto Alexander von Humboldt*; **Oliver Chassot**, *Centro Científico Tropical de Costa Rica*

Desde el punto de vista de conectividad de las áreas protegidas, ¿cómo ve usted que las ECC, contribuyen y aportan a los objetivos de conservación y mencione algún ejemplo que desde el ámbito internacional nos pueda ilustrar su respuesta?

Oliver Chassot. No estoy muy familiarizado con los casos concretos de Colombia. En el contexto internacional existen varios elementos, como por ejemplo el potencial de la comunicación. Un ejemplo internacional es Parques saludables: Gente sana, aquí se intenta conectar por medio de procesos dentro de las áreas urbanas.

¿Cómo, en un territorio con tantas oportunidades y complejidades como el Pacífico colombiano, se están implementando ECC?

Jaime Vásquez. El Pacífico es un territorio complejo y lleno de particularidades, en el caso del SIRAP Pacífico, desde el 2010, se ha avanzado en

la identificación, caracterización y espacialización de áreas protegidas inicialmente y de las ECC consolidando la información y diferenciándola en cuatro grupos desde la gobernanza que las hemos identificado: comunitaria, pública, privada y compartida, este ejercicio que es base para la consolidación del subsistema.

En el Pacífico, las comunidades vienen avanzando en la implementación de áreas de conservación al interior de sus territorios colectivos, un ejemplo es el caso en el Valle del Cauca, donde se tienen identificadas tres reservas especiales y que han sido establecidas al interior de territorios colectivos. Las estrategias están aportando a la conservación y al subsistema, se tiene planteado en el mediano plazo habilitar un espacio de construcción conjunta donde exista el diálogo y la construcción de espacios de forma participativa con los demás actores, ya que es una prioridad abrir espacios para conocer el cómo se están concibiendo las ECC.



En el ejercicio del SIRAP Pacífico, se tiene un tipo de categorización especial por gobernanza de las ECC; por favor cuéntenos un poco acerca de esta identificación.

Jaime Vásquez. Desde el año 2010 hemos venido trabajando en la identificación, caracterización y espacialización de esas otras estrategias de la conservación, desde la diversidad biocultural del Pacífico, ya contamos con un inventario y desde la función de gobernanza las agrupamos en cuatro grandes grupos:

Gobernanza comunitaria: Donde se encuentran todas las iniciativas que, desde las comunidades negras y resguardos indígenas avanzan en la región en pro de la conservación de la diversidad, desde la perspectiva o visión de las mismas comunidades de conservación

Gobernanza privada: Que agrupa el esfuerzo de los propietarios privados que han establecido al interior de sus predios de Reserva Natural de la Sociedad Civil, básicamente.

Gobernanza pública: Agrupa las áreas de conservación, las zonas de conservación y preservación que están contenidas en los instrumentos de planificación territorial de los municipios, como los POT. Las cuales no figuran como áreas protegidas.

Gobernanza compartida: Tenemos como ejemplo dos experiencias en el departamento de Risaralda, que fueron declaradas de manera conjunta entre la CARDER y un consejo comunitario y otra por la corporación y por un resguardo indígena, por lo tanto se hace un manejo compartido de la estrategia.

¿Cuál es el reto desde la gestión pública que afronta un alcalde comprometido con la importancia de implementar ECC?

María Fátima Roldán. Desde la gestión pública, en el caso del municipio del Toro ubicado en el Norte del Valle del Cauca, el gran reto es seguir conservando lo que ya tenemos. El SIDAP ha servido para equilibrar varias cosas, específicamente planificar el territorio en cuanto a medio ambiente y esto redundará en el bienestar de las comunidades, porque es pensado de una manera sostenible, esto debe amarrarse al plan de desarrollo, así como al Plan de Ordenamiento Territorial, para que pueda permanecer por muchos años y que de esta forma así cambie el administrador, el SIDAP tendrá que seguir invirtiendo y prevalecerá. Porque un Sistema Municipal de Áreas Protegidas sin la intervención de las comunidades no es válido, por eso en el eje temático de medio ambiente el reto más grande es que el SIDAP debe continuar.

¿Cuál es la principal recomendación para los demás alcaldes, para que se desarrolle el tema de ECC?

María Fátima Roldán. Nosotros somos un municipio modelo en cuanto áreas protegidas, mi recomendación es que tenemos que empezar a educar a los niños, la consciencia y el amor por el medio ambiente. En nuestro municipio tenemos grupos de niños y jóvenes capacitados y están en el cuento del cuidado del medio ambiente y de las áreas protegidas. Nuestro municipio, desde el año 1992, empezó un trabajo con las comunidades y ahora somos sostenibles en cuanto al sistema hídrico. La recomendación es que los alcaldes tengan sentido de pertenencia por su municipio y que piensen en el agua como recurso del futuro y en el medio ambiente no como un obstáculo, sino como algo que debe ser protegido por el bienestar de las generaciones futuras.

Desde la experiencia de la CARDER y el SIRAP Eje Cafetero, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer para la implementación de las ECC?

Alexandra Areiza. Lo que se ha discutido e identificado en diferentes talleres y espacios regionales desde el SIRAP Eje Cafetero es llevar las ECC a otras escalas, básicamente en el ordenamiento territorial, ya que contribuyen a la conformación de la estructura ecológica principal, que se están viendo solamente en los ámbitos municipales, departamentales y regionales, pero no se pueden ver a escala nacional. Esto con relación a que los sectores productivos, cuando van a desarrollar un proyecto, conocen lo que está relacionado a áreas protegidas, pero desconocen, por ejemplo, los suelos de protección ya que en una escala más allá de lo regional no se visibiliza. Finalmente, cuando los sectores van a desarrollar un proyecto, se dan cuenta de las restricciones y es donde encuentran una limitante. Nosotros vemos en las ECC que se deben llevar a otros

esquemas de licenciamiento que van más allá de lo regional; pero también deben ser una oportunidad de identificación de inversión en compensaciones voluntarias u obligatorias.

En el tema de dificultades, actualmente es la información. Esto debido a que son muchas las figuras que se están identificando como ECC y pueden sumar esfuerzos o duplicar información cuando se sobreponen con áreas protegidas o sobre las mismas áreas de conservación; por lo tanto, es necesario seguir avanzando en la identificación y sistematización de la información.

¿Alguna recomendación para las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible que vienen trabajando este tema?

Alexandra Areiza. Las ECC básicamente, o muchas de ellas han sido identificadas en primera instancia por las comunidades y el acercamiento institucional con las comunidades lo que permite que los procesos de conservación se desarrollen de una forma más eficaz. Así, que una identificación en la que se generen más espacios o instancias de participación comunitaria para la identificación de ECC es clave en el trabajo que vienen desarrollando las corporaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones para promover que los arreglos institucionales sean efectivos y cómo se puede promover la participación social para que emerjan estas ECC en el territorio?

Ricardo Agudelo. Es importante clarificar que en el territorio se están haciendo muchas cosas y, aunque la presentación del ejercicio que se ha venido haciendo en los SIRAP en la consolidación de información todavía es insuficiente, refleja que existen muchos actores, procesos, muchas regiones y áreas que están avanzado en consolidar procesos. Estamos viendo realidades en el territorio y esto es significativo, como los ejercicios expuestos en el desarrollo del Simposio.

Se debe reafirmar el reconocimiento en toda la realidad que está ocurriendo en el territorio, pero el reto es cómo poder incidir en los procesos que se están llevando en el territorio. Esta es una de las preocupaciones del CONAP, de los directores de corporaciones y de quienes han ayudado a impulsar la gestión de espacios locales, cuando perciben que los diálogos sectoriales y muchos de estos esfuerzos se vuelven invisibles.

Es necesario retomar parte de lo que se ha trabajado en colectivo desde los SIRAP y seguir planteando la dirección de esfuerzos hacia acciones estratégicas, tales como:

1. Continuar clarificando el concepto de ECC, siguen existiendo muchos elementos que todavía tienen discusión, qué es complementario, cómo se configuran, cuáles son esas áreas protegidas que deberían ser parte del SINAP y que ahora no lo son.
2. Es necesario avanzar en la consolidación de información, lo que nos permitirá posicionar las ECC y nos dará visibilidad de lo que está pasando en el territorio.
3. El posicionamiento político y normativo, ya que existe una inquietud con la necesidad de ver la normatividad vigente que de soporte de lo que está aconteciendo en el territorio, pero también de brindarle nuevos elementos normativos que permitan incluir mucho de los procesos en el terreno a un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y posicionarlo políticamente, ya que en principio todos los esfuerzos que se están visibilizando son un sistema de áreas protegidas,.
4. Se debe fortalecer los esquemas de administración, manejo y gestión de estas áreas. Es importante ayudar a construir colectivamente en pro de un manejo efectivo de estos territorios.



¿Cuáles son las recomendaciones para que los temas de sostenibilidad urbana se cumplan?

Germán Quimbayo. Básicamente, el tema de conservación urbana trasciende el modelo de ocupación actual del territorio, ¿de qué manera se está ocupando el territorio?, ¿qué tipo de relaciones vitales estamos estableciendo con el espacio y las regiones? La ciudad en su modelo de desarrollo ¿qué implicaciones en términos de oferta y demanda de servicios ecosistémicos está haciendo?, pero a la vez dentro de las ciudades hay una serie de dinámicas que están ligados a una problemática mayor, que debe ser revaluado y que está sobre la mesa.

Se deben resaltar un punto: debe existir una apropiación, pero también una resignificación y aprendizaje de las experiencias que se están dando sobre el territorio, ya que esto es la base para arreglos institucionales adecuados y eficaces porque se tiene toda la normatividad, pero en el momento de implementar acciones aparecen una serie de barreras de todo un esquema político-administrativo y legal que entorpecen acciones y buenas intenciones.

Preguntas del público

¿De qué sirve trabajar en la construcción de las ECC, frente a la fuerza económica y jurídica que vienen desarrollando las locomotoras del desarrollo?

Ricardo Agudelo. Es una reflexión común a todos, así como a nuestro aparataje y gestión ambiental, esto no es solamente dirigido al posicionamiento o no de una ECC, sino de la gestión en conjunto. Es una reflexión para el Congreso de Áreas Protegidas y también sobre lo que se ha venido avanzando. Es que estamos en un punto donde los temas sectoriales son más abanderantes. Esta reflexión le compete al ejercicio general de la gestión de la conservación.

El Decreto 2372 de 2010 definió las distintas categorías y dejó por fuera algunas otras, por ejemplo, los ecosistemas tan importantes como los humedales. ¿Cómo se consideran estos ecosistemas en las ECC?

Alexandra Areiza. Este punto ha sido una de las discusiones más fuertes y es que muchas de las ECC, que se vienen desarrollando en el marco municipal y local no están reconocidas en 2372 y digamos que los humedales pueden caer en este. Los humedales per se tienen algún tipo de restricción, pero un poco el llamado de atención es que en este momento las ECC con el dinamismo que han adquirido pueden pensarse como una oportunidad, pero también pueden ser un arma de doble filo para el tema del posicionamiento de las áreas protegidas de carácter local y comunitario. Esto es un llamado de atención a que estas deben ser desarrolladas normativamente independientemente, pero la idea es que sean áreas protegidas incluidas en el SINAP.

¿Cree que es necesario generar más jurisprudencia en el caso de Colombia para las ECC, en el mundo existe un desarrollo jurídico mayor al que existe en Colombia?

Oliver Chassot. Voy a referirme al caso de la experiencia de Costa Rica, donde existen leyes completas complementarias, pero donde los gobernantes no siempre tienen la capacidad de solucionar las incongruencias y problemas que afectan el desarrollo de las estrategias de conservación complementarias o no y esto es un rasgo latinoamericano: se tiene buenas leyes e instrumentos jurídicos; pero no se respetan o cuesta llevarlos a la práctica por temas de corrupción, presión o falta de capacidad.

Conclusiones del panel

Las ECC contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático, pueden ser urbanas o rurales. Existen avances en la sistematización e identificación de las ECC en los ejercicios de los SIRAP, donde se resalta la importancia de continuar con los procesos participativos del orden local y regional para visibilizarlos en el ordenamiento territorial y en la toma de decisiones.

Aunque la normativa actual en Colombia hace referencia a las ECC, se requiere avanzar en la reglamentación y diferenciación de otras estrategias de conservación de manera específica de estas, con el fin de contar con los elementos necesarios para su viabilidad política, institucional y económica a todas las escalas de gestión: local, regional y nacional.

Los actores locales, como los consejos comunitarios y resguardos indígenas, son fundamentales en las actividades de identificación y conceptualización de las ECC, además de que son clave en la construcción participativa de los subsistemas de áreas protegidas del orden regional y municipal.

Los avances en el tema de las ECC, en cuanto a las figuras identificadas, apuntan hacia la necesidad enfática de diferenciación entre ECC y áreas protegidas de tal forma que pueda contemplarse la posibilidad de que algunas figuras en el territorio sean incluidas en el SINAP.

05

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Pósteres

Contenidos

- ➔ Aportes locales a la estrategia de conectividades socioecosistémicas del Caribe colombiano...
pág. 311
- ➔ Ranas venenosas del Tolima para la protección del agua y la biodiversidad en el norte del Tolima
pág. 316
- ➔ Experiencias en el diseño de estructura ecológica principal basada en el análisis de servicios...
pág. 321
- ➔ Cerrando la brecha. Sistemas municipales de áreas protegidas, oportunidad estratégica...
pág. 325
- ➔ Mapa nacional de restauración
pág. 314
- ➔ La gestión de la biodiversidad en entornos urbano-regionales: la conservación en paisajes emergentes
pág. 319
- ➔ Fundamentos metodológicos para la declaratoria del delta del río Ranchería como Área Protegida Regional
pág. 323
- ➔ El Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali (SIDAP Cali): iniciativa para la conservación...
pág. 328



Índice

Aportes locales a la estrategia de conectividades socioecosistémicas del Caribe colombiano: Santuario de Fauna y Flora Los Colorados



Luz Elvira Angarita Jiménez, Tito Rodríguez, Jairo García & Rebecca Franke
*Parques Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial
Caribe, Santuario de Fauna y Flora los Colorados*

Las Autoridades Ambientales del Caribe Colombiano, articuladas en la Mesa de Trabajo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP Caribe), considerando las altas tasas de transformación de los ecosistemas de la región y reconociendo que un aspecto fundamental del ordenamiento territorial es la interconexión entre áreas protegidas (AP) de diferentes categorías, acordaron, en octubre de 2011, iniciar la construcción de la Estrategia de Conectividades socioecosistémicas para el Caribe (ECC), a partir de mosaicos de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos que tienen como núcleo las AP. Esta estrategia incluye los componentes de

conocimiento, posicionamiento y concertación de acciones específicas, se sustenta en el fortalecimiento de vínculos entre organizaciones sociales e instituciones, para la conservación de ecosistemas y el mantenimiento de su capacidad para la generación de servicios, indispensables para el desarrollo regional.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el SFF Los Colorados es una AP estratégica por la vulnerabilidad de su ecosistema y además se encuentra inmersa en una dinámica social, económica y ambiental diversa y cambiante, para el cual se han determinado acciones de manejo para su conservación que resultan ser insuficientes ante la magnitud de los problemas estructurales

ejercidos por comunidades desplazadas, el conflicto armado y una población urbana con necesidades básicas insatisfechas se convierte en un estudio de caso para la construcción de ECC.

De acuerdo con el análisis de amenazas para el Santuario, se identificaron dos problemas estructurales que comprometen la viabilidad en el corto y mediano plazo del AP: a) Una tasa de ocupación rural y urbana al interior del Santuario del 35% y b) El inadecuado ordenamiento ambiental por fuera de la AP. Con estos antecedentes y los análisis de integridad sobre los objetos de conservación, se concluye que el Santuario, por sus condiciones de tamaño, aislamiento y alta vulnerabilidad presenta un alto riesgo frente a las amenazas de su entorno, asociadas a los dos problemas estructurales. Ante esto, el AP avanza en diseñar y estructurar protocolos para la implementación de corredores socioecosistémicos que mejoren las condiciones de integridad de los ecosistemas de bosque seco (BS) y bosque seco de transición (BSt), en zonas adyacentes, ya que las condiciones actuales del BS en el departamento son de tipo secundario y en el nivel nacional solo tiene un 1% de representatividad de este ecosistema en el sistema de las AP.

El Santuario, busca aportar a un ordenamiento ambiental territorial que contribuya a proteger procesos ecológicos claves a partir de: a) La definición de una zona amortiguadora del AP, que permita disminuir las presiones a su interior y contribuya a los procesos de conectividad; b) La declaratoria de nuevas AP de carácter local, regional o nacional en las zonas adyacentes al Santuario, a partir de áreas núcleo de alta importancia ambiental y cultural; c) Implementación de corredores de conectividad prioritarios para las autoridades ambientales de Montes de María, que generen procesos equilibrados entre la producción sostenible

y la conservación de los bienes y servicios ambientales y d) Fortalecer los espacios locales y regionales ligados a la conservación de las AP de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, fomentado la gobernabilidad de las autoridades ambientales y públicas de la región.

Para complementar el proceso, el Santuario, en el marco de su plan estratégico, fortaleció la línea base de información primaria para la definición de conectividades a través del proyecto cofinanciado con Fundación Bachaqueros “Áreas protegidas locales de bosque seco tropical y diagnóstico de sus conectividades socio ecosistémicos para el fortalecimiento de los procesos de conservación en la zonas adyacentes al SFFLC” en el cual se realiza el estudio para la futura declaratoria de las AP locales prioritarias para mantener los procesos socioecológicos y conectividades del BsT de los Montes de María en las zonas adyacentes al Santuario, lo que permitió: 1) Identificar, seleccionar y priorizar las zonas a proteger en el área de estudio bajo el criterio de conectividad ecológica y social, 2) Avanzar en la caracterización los objetos de conservación de filtro grueso y fino de los sitios priorizados y 3) Construir los escenarios de conservación con base en los resultados de la caracterización. Con esto se construyeron las bases y lineamientos para estructurar la ECC del Santuario a escala predial, identificando las áreas núcleo de importancia ambiental y cultural adyacentes a partir de los análisis de integridad y la consolidación de una base cartográfica.

A partir estos resultados, se han formulado e implementando propuestas conjuntas con los socios estratégicos del AP (FHAC, Patrimonio Natural, CARDIQUE, Municipio de San Juan Nepomuceno, Universidad de Sucre y Colectivos Comunitarios de San Juan Nepomuceno) que apuntan a la implementación de cinco corredores socioecosistémicos identificados y priorizados

desde el Santuario hasta: 1) nacimientos del arroyo Salvador, 2) pasando por los Chivos hasta los nacimientos del arroyo Los Cacaos, 3) pasando por los Chivos, Páramo, Loro, Pujana, Cerro Maco y Las Mercedes, 4) pasando por los Chivos hasta los Petroglifos La Garra del Tigre y 5) por el bosque de galería del Arroyo de Los Cacaos y Arroyo Grande hasta Perico y Laguna.

El contar con una base de información primaria, confiable y robusta ha permitido al Santuario posicionarse a nivel local y regional en procesos de ordenamiento territorial como las discusiones sobre la Zona de Reserva Campesina de Montes de María y el ajuste de los planes y esquemas básicos de ordenamiento territorial de los municipios de San Juan

Nepomuceno, San Jacinto, María La Baja y Carmen de Bolívar. Además, los desarrollos metodológicos y conceptuales logrados a nivel local están disponibles para que el SIRAP Caribe los aplique en la implementación de su estrategia regional de conectividades.

Los avances en toma y análisis de información emprendidos por el Santuario son un aporte metodológico y conceptual a la ECC, pues permite avanzar, desde lo local, en la configuración de mosaicos de conservación favoreciendo la búsqueda de alternativas concertadas que armonicen las perspectivas del desarrollo regional, con el bienestar de las comunidades locales y de la sociedad regional en su conjunto.



Mapa nacional de restauración



Paola Isaacs Cubides & Wilson Ariel Ramírez

Instituto Alexander von Humboldt

El Instituto von Humboldt, como entidad del Sistema Nacional Ambiental, ha asumido la responsabilidad de elaborar el mapa nacional de prioridades de restauración para el país. Este busca ser una herramienta para la toma de decisiones en restauración, en lo relacionado a las compensaciones ambientales. Para su elaboración, se realizó un análisis multicriterio que incluyó indicadores de intervención a escala 1:100.000, como las capas de: 1) coberturas intervenidas (i.e. bosques fragmentados, vegetación secundaria, suelos desnudos y degradados), áreas quemadas y presencia de especies exóticas (i.e. plantaciones de coníferas); 2) mapa de deforestación años 2010-2012 como indicador pérdida de cobertura; 3) mapa de conflictos de uso del territorio en áreas sobreexplotadas o con suelos no adecuados;

4) capa de drenajes y cuerpos de agua en áreas agrícolas y 5) los títulos mineros vigentes. Adicionalmente, se incluyó un análisis de métricas del paisaje con base en tamaño, forma y contigüidad de los fragmentos. A cada variable le fue asignado un valor según la prioridad de restauración y se realizó posteriormente una ponderación otorgando mayor valor a aquellas capas que estuvieran relacionadas con la oferta de servicios ecosistémicos como son las coberturas naturales y la oferta de recurso hídrico (drenajes).

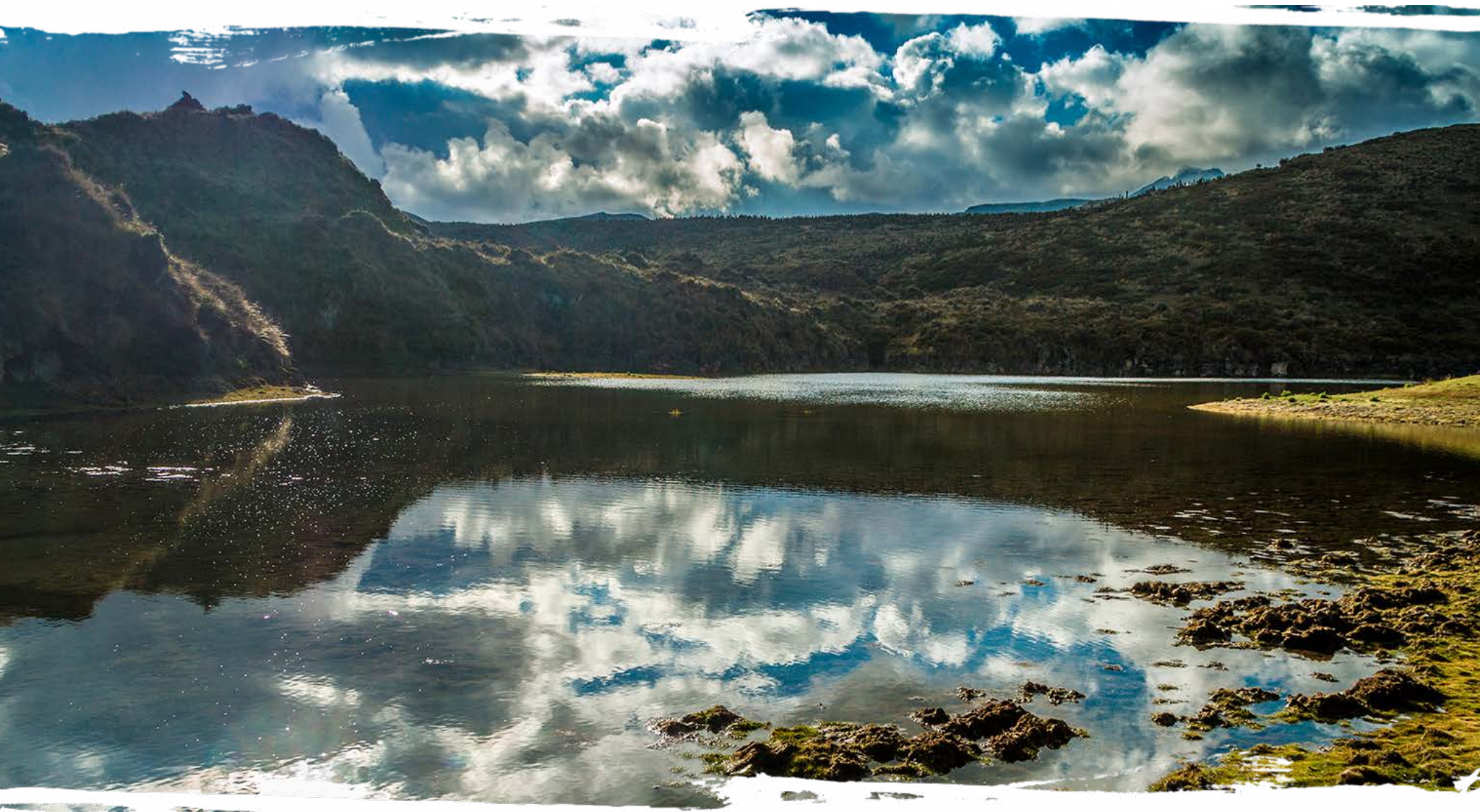
De las cerca de 75.000.000 ha evaluadas, las zonas con mayor prioridad de restauración se ubicaron en las regiones andinas, caribe y los llanos orientales, hacia los márgenes de cuencas especialmente. De estas, 24.500.000 ha presentan alguna prioridad de restauración, es decir el 21% del territorio continental del país.

Se presenta prioridad muy alta de restauración en aquellas zonas donde se sobreponen la mayoría de las áreas más degradadas, con 581.142 ha asociadas a suelos sobreutilizados, zonas de rondas desprovistas de vegetación, áreas mineras, presencia de vegetación intervenida y áreas deforestadas. Por su parte, se reporta una alta prioridad en 1.403.000 ha, especialmente para aquellas zonas de drenajes en conjunto con las demás variables. Para las capas asociadas con coberturas se reporta una prioridad media de restauración en 836.600 ha y el área restante presenta una o dos variables asociadas.

La mayor cantidad de área para restaurar se presenta en zonas con conflictos de uso del suelo por sobreexplotación 14.311.321 ha, coberturas intervenidas con 6.670.000 ha y 1.500.000 ha que presentan parches pequeños con formas regulares en matrices intervenidas. Si se hace la

evaluación por disturbios destacan los títulos mineros (773.000 ha), sistemas productivos (625.000 ha), y la deforestación (295.000 ha). Adicionalmente, el IGAC (2012) reporta cerca de 3.800.000 ha que presentan conflicto de uso del suelo por la presencia de coberturas de pastos y cultivos en las áreas protegidas, según nuestro mapa tienen prioridad muy alta, 14.000 ha, y alta, 5.200 ha, en áreas de drenajes especialmente.

Esta cartografía es el primer intento en el país a esta escala y debe convertirse en una oportunidad para direccionar mejor los esfuerzos de restauración en Colombia, en especial en esas zonas donde es posible llevar a cabo actividades de recuperación del paisaje y los servicios ecosistémicos siendo una herramienta complementaria a la conservación en las áreas protegidas. Sin embargo, las acciones de restauración específicas dependerán de esfuerzos regionales para trabajar a escalas más detalladas.



Ranas venenosas del Tolima para la protección del agua y la biodiversidad en el norte del Tolima



Victor Luna-Mora & Manuel Gilberto Guayara-Barragán

*Fundación Herencia Natural Colombia, Universidad del Tolima,
IUCN SSC Amphibian Specialist Group Regional*

Todos los días en Colombia se devoran y transforman los territorios más rápida y extensivamente que en ningún otro periodo de tiempo, en gran parte para resolver las demandas crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible, que necesitan las grandes selvas de cemento. A diferencia de otras épocas, las pérdidas que se sufren en la actualidad son irreversibles e irremediables, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación de agua, suelo, aire, el brote de nuevas enfermedades que afectan todas

las formas de vida. Desafortunadamente, esta crisis ambiental afecta toda la humanidad, pero son las poblaciones más humildes y con menos recursos económicos las que sufren con mayor impacto sus consecuencias.

La ranita venenosa del Tolima (*Andinobates tolimensis*) y la ranita venenosa punteada (*A. dorisswansonae*), son dos especies endémicas, simpátricas y en peligro de extinción (EN y CR); debido principalmente al impacto de las actividades agropecuarias insostenibles como la ganadería extensiva, cultivos forestales exóticos y la influencia

del cultivo predominante en la región el café, que ha generado, desde la década de los 90, una acelerada destrucción de los ecosistemas originales. En consecuencia, el paisaje de la zona rural está dominado por cultivos de café, potreros y parches de bosque Subandino altamente fragmentados, aislados y reducidos a pequeños remanentes en la ribera de los ríos y laderas empinadas.

Dado que, en países de gran diversidad biológica como Colombia, una sola estrategia no garantiza la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee, y un problema puede ser visto desde diferentes perspectivas; son muchos los retos que surgen día a día, siendo necesaria una sinergia de acciones en pro de la conservación. Por tal motivo, surge esta iniciativa que tiene como emblema dos especies de ranas venenosas y tres componentes de gran importancia: investigación participativa, educación y capacitación, los cuales han permitido avanzar en este largo proceso que recién comienza, aprendiendo y desaprendiendo a través de los errores cometidos, con la firme convicción de que “trabajando en conjunto se puede llegar más lejos”.

La investigación participativa, que es la práctica de hacer ciencia en conjunto, respeta el conocimiento local, cambia la forma de relacionarse con la comunidad como fuente de datos, al ser tratados como coinvestigadores en la generación de conocimiento, que construido en conjunto fortalece significativamente cualquier proceso en un territorio. A través de este proceso, se ha encontrado una mayor valoración por la tierra, por su trabajo y su papel como campesinos generadores de alimentos a millones de personas en las ciudades colombianas; además, la adopción de algunas prácticas recientes entre investigadores y campesinos como los acuerdos de conservación y el monitoreo de las especies de ranas venenosas para la identificación y priorización de zonas importantes para proteger, conservar y restaurar

como las fuentes hídricas y los nacimientos de agua, provee un importante paso en acciones futuras de conexión de remanentes de bosque y generación de corredores biológicos. Por último, un resultado de gran importancia para la continuidad del proceso es la obtención de nuevas generaciones de niños y jóvenes con conciencia ambiental, los cuales acompañan las investigaciones llevadas a cabo.

Para el segundo componente, se tomó como punto de partida la sensibilización de un grupo poco carismático para la comunidad y la educación ambiental como una herramienta clave para lograr cambios en la percepción de las comunidades con respecto a las problemáticas y desafíos ambientales actuales, de esta forma se desarrollaron actividades pedagógicas, lúdicas y culturales en torno a la protección del territorio y los recursos naturales, incorporando contenidos ecológicos básicos para el desarrollo de nuevas formas de abordar la realidad por medio de estrategias educativas y sociales que incluyan la interdisciplinariedad de las ciencias. Además, como parte de esta estrategia de educación se ha hecho énfasis en la divulgación de la información científica, por medio de un lenguaje coloquial, claro y de fácil entendimiento que pueda llegar a más personas y que sea publicado a diferentes niveles local, regional, nacional. Es necesario empoderar a las comunidades locales con la información científica que día a día generan investigadores, y que en un gran porcentaje, no retorna al sitio de estudio donde adquiere un gran valor. Actualmente, en el departamento del Tolima y en varios departamentos de Colombia, se presentan conflictos por la explotación minero-energética, particularmente en la zona de estudio, la minería a cielo abierto para la extracción de oro genera un gran riesgo ambiental y humano. Por tal motivo, el conocimiento de las especies endémicas y en peligro de extinción tiene un gran valor en procesos de defensa del territorio.

A nivel social, uno de los mayores impactos que ha tenido la iniciativa ha sido el desarrollo de talleres de formación y capacitación a campesinos y sus familias, de esta forma brindar herramientas y nuevos conocimientos para mejorar la calidad de sus cultivos, de su entorno y la calidad de vida de su comunidad ha sido una experiencia enriquecedora a nivel personal y colectivo. De esta forma, surge el Café Amigo de las Ranas Venenosas del Tolima, que ha sido construido con la participación activa de las comunidades locales y el apoyo de organizaciones ambientales como el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), generando procesos de capacitación en temas de calidad, prácticas de

producción y protección ambiental incentivado el mercado regional y se han eliminado intermediarios que aumentan los costos de producción y comercialización, propiciando un mercado justo y una retribución de las ganancias que son invertidas en suplir necesidades de la comunidad.

Son muchos los retos que debemos afrontar para lograr acciones de conservación efectivas para especies amenazadas en nuestros países, vale la pena generar estrategias conjuntas con las comunidades locales, ya que estas perduran en el tiempo y no depende de la presencia del investigador, de igual manera el empoderamiento de la información científica es una valiosa herramienta que debe ser puesta al servicio de las comunidades, ya que en muchos casos es allí donde adquiere un gran valor.



La gestión de la biodiversidad en entornos urbano-regionales: la conservación en paisajes emergentes



María Angélica Mejía & Germán A. Quimbayo

Instituto Alexander von Humboldt

Entre las transformaciones territoriales que más afectan el estado de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos se encuentra la expansión urbana y los efectos que se generan para soportar las demandas de las áreas urbanas y de sus habitantes. El aumento de la suburbanización alrededor a las ciudades, el desarrollo creciente de infraestructura energética y la extensión de las redes de infraestructura para la interconectividad, entre otros, son algunas de las principales actividades que transforman el territorio.

La reciente Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), ha enfatizado en la importancia de la expresión territorial de la biodiversidad, con el fin de promover acuerdos y acciones para que cobre relevancia como principal elemento estructurador de los procesos de ordenamiento territorial. En un intento por conciliar las bases del ordenamiento territorial, generalmente construidas desde lógicas urbanas, con las estrategias de conservación,

tradicionalmente asociadas a la declaratoria de áreas protegidas (en el ámbito rural), el Instituto Humboldt inició en 2011 una investigación aplicada para desarrollar los lineamientos de la PNGIBSE en entornos urbano-regionales.

La investigación se ha propuesto a aportar al fortalecimiento de la capacidad institucional de actores locales, regionales y nacionales para incluir criterios de biodiversidad en la planeación urbano-regional, además de acompañar procesos de política nacional, con el fin de enfatizar la naturaleza diversa de los sistemas urbanos del país. En cuanto al primer objetivo, la investigación ha desarrollado alianzas locales para abrir procesos de biodiversidad urbana en dos casos de estudio: Bogotá Distrito Capital y Medellín.

En un marco de estrategias complementarias para la conservación de la biodiversidad, el Instituto divulgará el abordaje y resultados a la fecha de esta investigación, que ilustre cómo la biodiversidad es vista más allá de figuras de protección propiamente dichas y desde entornos urbano-regionales.



Experiencias en el diseño de estructura ecológica principal basada en el análisis de servicios ecosistémicos



María Isabel Ochoa, Juan Camilo Patiño & Jorge Vásquez
Fundación Grupo Hábitat, Territorio, Medio Ambiente

El Decreto 3600 del 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial define la Estructura Ecológica Principal (EEP), como el “conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. Este Decreto incluye la EEP dentro de las categorías de suelo de protección, correspondientes a las áreas de conservación y protección ambiental, que deben hacer parte del contenido estructural de los planes de ordenamiento territorial.

Cuando se habla de EEP no solo se hace referencia a la biodiversidad de los ecosistemas naturales, sino que se constituye en una propuesta de ordenamiento de la cobertura vegetal, del uso y manejo de la tierra y del agua, que garantiza la conservación (preservación y restauración) de la biodiversidad, los recursos biológicos y los servicios ambientales (IDEAM, Van der Hammen & Andrade, 2003; IDEAM, 2012). Y al hablar de servicios ambientales se incluyen, entre otros, la regulación hídrica, la captura de carbono, la moderación de eventos climáticos extremos, la preservación de la calidad paisajística y cultural, entre otros.

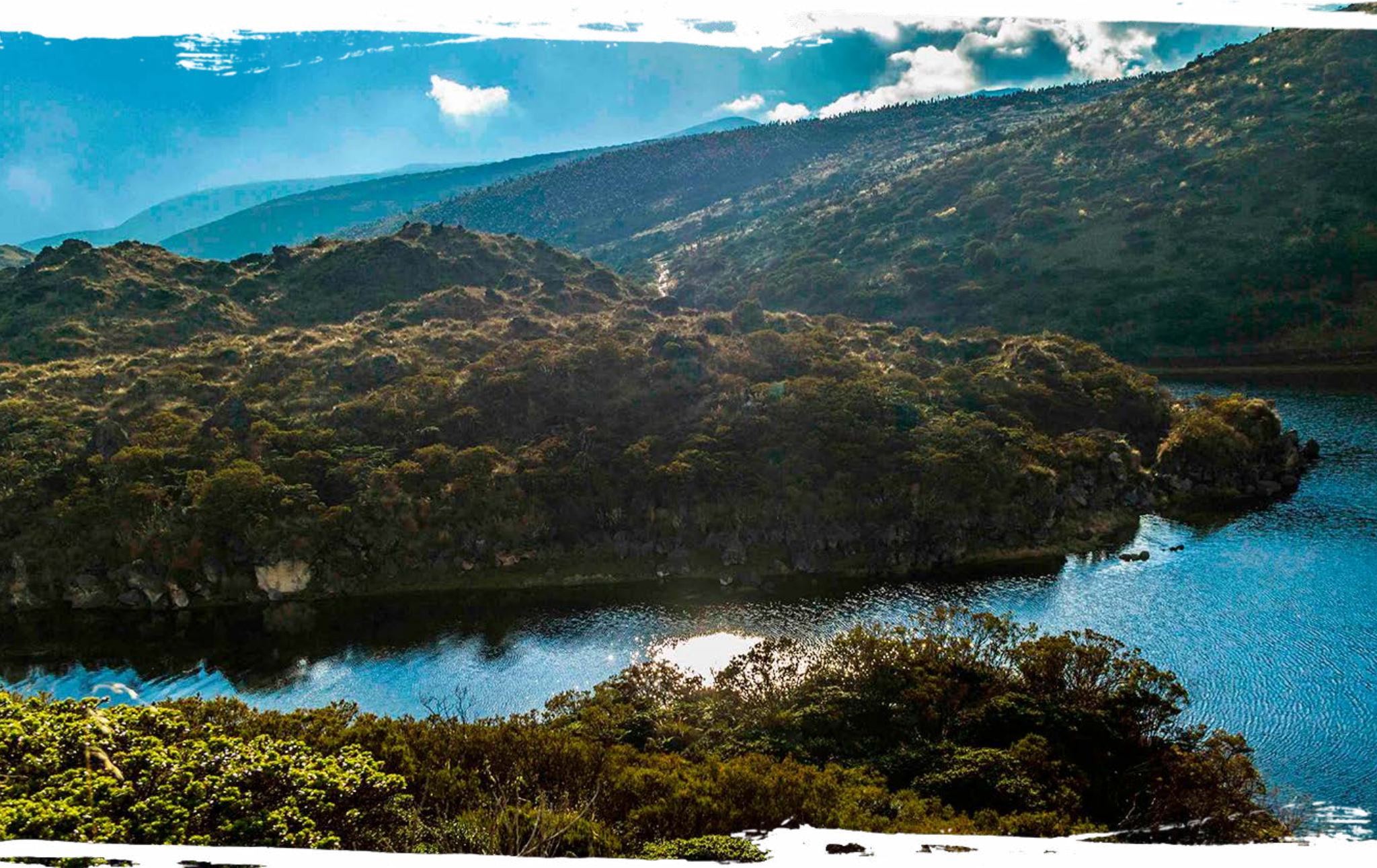
Desde el año 2008, la Fundación Grupo HTM, junto con Corpocaldas, ha llevado a cabo ejercicios

para la definición de la EEP a nivel regional y local: EEP de Caldas (2008) y EEP de los municipios de la región Centro-Sur del departamento de Caldas (2013, 2014), como insumo para la concreción de la base natural que soporta los atributos territoriales, en el marco del proceso de ajuste de los planes de ordenamiento territorial.

Uno de los mayores logros de estos estudios ha sido la adaptación metodológica de orientaciones conceptuales nacionales elaboradas y publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el año 2012, atemperándolas a las necesidades de enfoque y escala del nivel regional y municipal.

Para el IDEAM (2012), el principio fundamental que orienta el diseño de la EEP es el análisis de los servicios ecosistémicos que ofrece el territorio mediante su identificación, cuantificación, cualificación y espacialización.

El resultado final es el diseño de sistemas interconectados de las áreas que prioritariamente dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio y a la oferta de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de regulación y soporte y culturales, complementado por un portafolio de estrategias de gestión y financiación basado en las oportunidades y potencialidades que dicho análisis ofrece.



 Archivo Parques Nacionales Naturales.

Fundamentos metodológicos para la declaratoria del delta del río Ranchería como Área Protegida Regional



Juan Carlos Pino, Gregoria Fonseca & Carlos Castaño-Urbe
Fundación Herencia Ambiental Caribe, Corpoguajira

Un área de aproximadamente 3.600 ha ubicada en la desembocadura del río Ranchería define una porción de territorio estratégica para la ciudad de Riohacha y para unos 1.500 habitantes de 24 comunidades de la etnia wayúu asentados en esta zona de remate costero donde los procesos de colonización y mala planificación del territorio en materia urbanística han derivado en el deterioro y modificación de los sistemas naturales de la zona. Resultado de lo anterior, se ven amenazados aspectos tan determinantes de la dinámica de los asentamientos como la pesca, la capacidad de regulación de las inundaciones, así como componentes importantes de la biodiversidad como ecosistemas secos, manglares e incluso la promoción de una eventual extinción local de una especie insignia de la zona como lo es el cangrejo azul (*Cardisoma guanhumi*), en virtud de la caza indiscriminada.

Los procesos invasivos adelantados en los humedales urbanos de Riohacha como componentes fragmentarios del delta del Ranchería, han generado la pérdida paulatina de la capacidad de regulación de las inundaciones en virtud de la impermeabilización del suelo. De lo anterior, se comienzan a esbozar efectos sobre las poblaciones indígenas asentadas en el margen derecho del río, en detrimento de sus valores culturales, con condiciones de vida en extremo precarias, donde la disponibilidad de los recursos naturales sobre la base de una estructura ecológica de soporte se constituye en su única alternativa de supervivencia.

En tal sentido, se preparó un ejercicio de planificación que definiera los argumentos para su declaratoria, efectuando una pesquisa de sus principales componentes socio-ambientales y estableciera los derroteros de acción con

fundamento en objetos de conservación que fueron definidos conjuntamente con los actores sociales e institucionales, de una manera novedosa y eficaz.

La metodología utilizada fue una combinación de la planificación de sitio de TNC (2005) en lo relativo a la viabilidad de objetos de conservación y análisis de atributos clave, combinado con la DPSIR O DPEIR (en español, Direccionador-Presión-Estado-Impacto-Respuesta) desarrollado por la Organización para la Economía y Cooperación y Desarrollo (OECD 1994), para relacionar las actividades humanas con el estado del medio ambiente y tomar medidas participativas de manera clara, transparente y objetivas con todos los involucrados, aumentando así la sostenibilidad de las mismas.

Los aspectos más destacados del proceso permitió avanzar en los siguientes aspectos:

Caracterización biológica de grandes grupos y aspectos limnológicos en los que se destaca la presencia de 14 tipos diferentes de coberturas y 142 especies de aves, de las cuales 27 son migratorias, una especie endémica está fuertemente amenazada, cardenal guajiro (*Cardinalis phoeniceus*), y el 42% son acuáticas.

La composición de la biota de los cuerpos de agua y sus variables físico-químicas denotan niveles importantes de contaminación, fundamentalmente por la alta carga residual producto de la dinámica de asentamientos y deficiencia fuerte en sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Disminución progresiva de la riqueza de especies en varios grupos especialmente por la intervención del hábitat y los procesos de cambio de usos del suelo, agravado por situaciones climáticas extremas y manipulación hidráulica sin fundamento.

La priorización efectuada por el portafolio de AP del Caribe estableció la necesidad de generar mecanismos de protección a los herbazales de la alta y media Guajira, así como los Manglares del Delta –muy importantes estos– en la dinámica

pesquera de la región y en la protección de la línea de costa, consolidando, junto con el bosque ripario y el patrimonio cultural, 4 objetos de conservación (OdC) de filtro grueso, que sumados al Cangrejo Azul (*Cardisoma guanhumi*) y el cardenal guajiro (*Cardinalis phoeniceus*) de filtro fino son los ejes fundamentales de la planificación.

La definición de la ruta crítica para la declaratoria desarrollada con actores comunitarios (étnicos y no étnicos) e institucionales estableció que la categoría de protección más adecuada teniendo en cuenta las características de la zona y las necesidades de uso de los recursos naturales es la de Distrito de Conservación de Suelos.

La definición de una visión de territorio y escenarios prospectivos a 10 años enfocan la gestión en materializar los siguientes objetivos estratégicos o de conservación:

- Conservar especies amenazadas.
- Monitorear, regular y controlar el uso de los recursos naturales en el AP.
- Generar espacios de educación y capacitación a instituciones y comunidades a nivel local y departamental.
- Proteger bienes y servicios ambientales del delta del río Ranchería.
- Conservar, conocer, divulgar y rescatar el patrimonio cultural.
- Generar alternativas productivas sostenibles en el AP.

Lo anterior se materializaría a través del desarrollo desde 3 grandes componentes, que enmarcan 11 programas y que a su vez establecen 30 proyectos ligados de manera integral, transversalizados.

La estrategia social fue muy importante. Se realizó una consulta previa con las comunidades wayuu, que no solo fue exitosa y rápida, sino de gran apropiación por parte de todos los integrantes de la comunidad.

Cerrando la brecha. Sistemas municipales de áreas protegidas, oportunidad estratégica para complementar objetivos del SINAP Colombia



Julia Premauer, Laura Agudelo & Jorge Vásquez
Fundación Grupo Hábitat, Territorio, Medio Ambiente

La favorabilidad y variedad de las condiciones bioclimáticas, la histórica configuración urbano-regional y el modelo de desarrollo económico del país han originado una aguda transformación de los Andes colombianos. La magnitud de estas transformaciones, ampliamente documentada, permite reconocer una alta pérdida de biodiversidad en todos sus niveles y de sus servicios ecosistémicos asociados. A pesar de una mayor concientización social y de los esfuerzos institucionales por contrarrestar esta alteración y degradación ecosistémica, las tasas de deforestación actuales siguen siendo altas, alrededor

de 310.000 ha/año en promedio, según datos del IDEAM (2013), con lo que se compromete de manera aguda la sostenibilidad de las actividades productivas y la estabilidad ecológica y económica de numerosos centros poblados rurales y cabeceras municipales a lo largo y ancho de los Andes, región donde se produce el 32% de esta deforestación.

Antioquia no es ajena a esta situación; se estima que en el departamento tiene lugar el 9% de la deforestación anual nacional, debida a la ampliación de la frontera agrícola, especialmente para actividades de ganadería. Esta alteración de los ecosistemas es muy grave, considerando que Antioquia, de acuerdo con Álvarez y Cogollo

(2012), alberga una parte muy significativa de la biodiversidad colombiana para varios grupos biológicos: 49% de las especies de mariposas, 30% de las especies de plantas, 52% de las especies de aves, 51% de los mamíferos y el 30,6% de los anfibios.

Aún con serias dificultades en términos de su gestión, las áreas protegidas son la principal estrategia de conservación de la diversidad biológica en el mundo. Las autoridades ambientales nacionales y regionales competentes para su declaratoria en Antioquia, han aumentado los esfuerzos de identificación, priorización, y declaratoria de áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad. Hoy el departamento cuenta con 29 áreas protegidas declaradas, que suman cerca de 495.000 ha. A pesar de estos esfuerzos, se reconoce dentro del ámbito académico, institucional, y social, que buena parte de la biodiversidad aún no se encuentra representada en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia.

Por ello, la Fundación Grupo HTM (Hábitat, Territorio, Medio Ambiente), en el marco de la iniciativa Conserva Colombia, promovida por la Alianza Fondo Acción-The Nature Conservancy y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y las administraciones municipales de los municipios de Carolina del Príncipe y Urrao, adelanta actualmente estudios técnicos para estructurar y fortalecer Sistemas Municipales de Áreas Protegidas en estos municipios del norte y suroeste antioqueño.

A través de estos sistemas municipales de áreas protegidas se persiguen tres objetivos principales: i

Contribuir a la consolidación de un Sistema de Áreas Protegidas de Antioquia representativo de la diversidad ecosistémica departamental, aportando a su vez a las metas de conservación del País;

Construir o aplicar instrumentos de gestión y financiación que viabilicen escenarios locales de

conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para estos dos municipios;

Apoyar la construcción de capacidades comunitarias e institucionales locales para la protección del patrimonio natural del país.

El municipio de Urrao está localizado al norte de la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Presenta una gran diversidad sociocultural (comunidades indígenas, negritudes, colonos, y campesinos) y ecosistémica (que incluye desde el Páramo del Sol, mayor altura de Antioquia, a 4.080 msnm, hasta tierras muy húmedas y pluviales tropicales, a 350 msnm), lo que constituye una ventaja y un reto para la estructuración y consolidación del SIDAP.

Carolina del Príncipe pertenece a la subregión Norte y hace parte de la cuenca del río Nechí. Localizado a 1.800 msnm, es en su mayoría montañoso con climas medio y frío y con una economía de ganadería de leche principalmente. Más del 90% de las aguas del municipio son usadas para la generación de energía en los embalses Miraflores y Troneras. Debido a la importancia que los bosques tienen para el municipio por los servicios que ofrece y por su biodiversidad, su conservación tiene un especial interés para el SIDAP Antioquia.

La consolidación de estos Sistemas Municipales de Áreas Protegidas involucra tres macroprocesos: 1) Un proceso técnico de identificación y priorización de áreas, considerando las condiciones ecológicas y las demandas socioculturales que sobre el territorio municipal recaen; 2) Un proceso de identificación y caracterización de actores –comunitarios, públicos y privados– que constituya la base de apropiación, gobernabilidad y gobernanza del SIDAP; y 3) Un proceso de reconocimiento y diseño de instrumentos de gestión y financiación para el SIDAP, que contribuya a su sostenibilidad en el largo plazo.

A través de estos sistemas municipales, se quiere completar, con el concurso de los actores locales, regionales y nacionales, públicos y privados, procesos de conservación ecorregional. Los resultados generados permiten afirmar que el SIDAP Urrao y el SIDAP Carolina del Príncipe son una valiosa oportunidad de aumentar la permeabilidad ecológica de matrices muy alteradas, favoreciendo, con el concurso de actores estratégicos (consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas, empresas públicas de medellín), no solo la conservación de servicios ecosistémicos de alto interés local y zonal (regulación hídrica, moderación de eventos extremos por movimientos en masa e inundación, polinización y control de plagas, servicios ecosistémicos culturales, etc.), sino la protección de la biodiversidad colombiana a través de estrategias de conservación para especies emblemáticas (orquídeas, zamias, especies forestales

nativas, puma, oso andino, entre otros) y el aumento de la conectividad ecológica de áreas clave para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como los humedales y bosques del Murri, Arquía, Ocaidó y el Atrato, los sistemas de páramos y bosques alto-andinos de la cordillera Occidental, los páramos y bosques andinos de la cordillera Central, y los bosques húmedos tropicales del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

Este proceso busca ser además una contribución a las iniciativas institucionales (entes territoriales, corporaciones autónomas) de definición y gestión de estructuras ecológicas principales de carácter local y regional, en el marco de las regulaciones nacionales sobre la materia, por lo que resulta de todo interés para una organización no gubernamental como Grupo HTM, compartir y aportar las conclusiones que se derivan de esta experiencia.



El Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali (SIDAP Cali): iniciativa para la conservación de la biodiversidad urbana y rural



Andrés Urcuqui & Sandra Franco

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Santiago de Cali

En las últimas décadas, el desarrollo del municipio de Santiago de Cali ha provocado una transformación de los ecosistemas locales y el ambiente natural, a través de las actividades propias del crecimiento urbano, la producción agropecuaria, el uso del suelo, la extracción de los recursos naturales y la ocupación del territorio, entre otros. Si bien aún persisten áreas con una gran representatividad de la biodiversidad local, estas se encuentran altamente fragmentadas y aisladas de núcleos de conservación importantes, como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y la Reserva Forestal Protectora Nacional, además de presentar poca cobertura en niveles medios y altos y suplantación por gramas a nivel del suelo. Pese a ello, el municipio cuenta con una gran diversidad de especies de fauna silvestre que hace uso, en mayor o menor grado, del espacio urbano, adaptándose a las nuevas condiciones

del ambiente urbano y rural, pese a la reducción evidente en la riqueza de especies, en la composición biótica y en la abundancia de los individuos.

En efecto, la red hídrica, el sistema de humedales y las coberturas vegetales han contribuido a la permanencia de algunas especies y a la recolonización de otras debido a su estado de conservación. En este sentido, la avifauna es uno de los componentes faunísticos con mayor representatividad en la ciudad, característica que la ha posicionado como uno de los destinos de los ornitólogos y aficionados de las aves. Por lo anterior, las áreas de especial relevancia para el SIDAP Cali corresponden a los sistemas de humedales que brindan servicios de regulación hídrica y albergan aves con características singulares a las rondas hídricas de los ríos, quebradas y cauces que componen la red hídrica del municipio, a los ecoparques que figuran como espacios de conservación de la biodiversidad urbana y educación ambiental, las áreas privadas con



potencial de ser declaradas como reservas forestales de la sociedad civil y los corredores de conservación que enlazan zonas boscosas, parques y franjas de protección de ríos. De esta manera, se busca integrar las áreas urbanas a las zonas correspondientes al Parque Nacional Natural Farallones de Cali y la Reserva Forestal Nacional.

Si bien las áreas naturales se constituyen en un elemento fundamental para la conservación de la biodiversidad urbana, el SIDAP Cali está compuesto por un entramado social e institucional que sienta las bases para su consolidación: las autoridades ambientales (Parques Nacionales, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali), el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario, el Concejo Municipal de Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, entre otros. De esta manera, se han definido acciones y procesos de declaratoria,

con el fin de contribuir a la implementación del SIDAP Cali de forma participativa, como por ejemplo el proceso de declaratoria de un polígono en la cuenca del río Meléndez que alberga humedales y zonas de bosque seco premontano en áreas públicas y privadas, donde la comunidad es la principal gestora del proceso. Por otro lado, se ha abordado la conservación de la biodiversidad urbana dentro de los ecoparques, los cuales figuran como estrategias municipales de protección de áreas naturales y educación ambiental a las instituciones educativas, universidades, comunidades, etc. De la misma manera, dentro de los predios adquiridos por medio del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, el municipio ha iniciado procesos de conservación de la biodiversidad en cuencas abastecedoras y facilitado acciones de control a través de la presencia de “gestores ambientales”, quienes se encargan de la vigilancia y atención a la comunidad en los predios.

Teniendo en cuenta que el SIDAP Cali surge como una estrategia para la conservación de la

diversidad biológica, está constituido por una estructura operativa conformada por una Secretaría Técnica a cargo del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, una Mesa Municipal que reúne organizaciones públicas y privadas, secretarías municipales, autoridades ambientales y actores sociales, un Órgano Asesor fundamentado en centros de investigación y educación superior y unas instancias de participación local. Lo anterior busca consolidar la declaratoria de áreas protegidas desde una perspectiva local y participativa, con el fin que las de la ciudad puedan reducir el impacto de la expansión urbana, al preservar o crear hábitats y mantener corredores aptos para diversas especies a través de la matriz urbana. Consecuentemente, el ordenamiento del municipio de Santiago de Cali no puede hacerse pensando que solo las personas utilizan ese espacio, ya que una serie de animales conviven en ellos.

Finalmente, dentro del SIDAP se han propuesto 51 áreas de importancia para la

conservación, las cuales albergan 5 biomas (Páramo, Selva Andina, Selva Subandina, Subxerofítico y bosque seco y humedales) y 13 ecosistemas de los definidos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en una extensión de 42.527,27 ha. Si bien en gran parte de las áreas se deben iniciar los estudios de caracterización biológica, geomorfológica, socioeconómica y ambiental para adelantar el proceso de declaratoria, algunos ya cuentan con algún tipo de figura de conservación de interés nacional (Parque Nacional y Reserva Forestal) y local (Ecoparques Urbanos). De esta manera, dentro del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali se han definido como objetos de conservación los siguientes: sistema de la red hídrica, sistema de humedales, coberturas vegetales y comunidad de aves, los cuales representan los ejes para la conservación de la biodiversidad urbana y rural y la preservación de los servicios ecosistémicos.





06

Eventos paralelos

Contenidos



Conversatorio Conserva
Colombia: aporte regional...
pág. 334



Índice



01

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

Tomo II. Áreas protegidas: paisajes rurales y
urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Eventos paralelos

Conversatorio Conserva Colombia: aporte regional al Sistema Nacional de Áreas Protegidas



Índice



El miércoles 16 de julio de 2014, en el marco del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, reunimos a las organizaciones que han liderado los procesos de declaratoria de áreas protegidas de importancia regional y local, apoyadas por la iniciativa Conserva Colombia, que cumplió 5 años el pasado 12 de junio de este año. Como moderador del conversatorio, invitamos a César Ruiz, Gerente Socioeconómico de Conservación Internacional.

La idea inicial de buscar en los ámbitos regionales y locales las nuevas áreas protegidas naturales que ayudaran a complementar el Sistema de Parques Nacionales y llenaran importantes vacíos de conservación en el país se ha convertido en un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, las corporaciones autónomas regionales, la Unidad de Parques Nacionales, los gobiernos locales, el sector privado¹ y los

socios de la alianza², para alcanzar las metas de conservación del país. Esta unión de fuerzas puede considerarse un modelo que demuestra el carácter descentralizado del SINAP y el interés que tienen las regiones en la protección de sus recursos naturales.

Desde su creación en 2009, Conserva Colombia ha apoyado 26 proyectos en 11 departamentos que suman cerca de 136.000 ha para la conservación, de las cuales 120.000 ha corresponden a bosques secos, muy secos y de transición. Estos tipos de ecosistemas fueron identificados en numerosos estudios como algunos de los más amenazados en relación a su baja representatividad en el SINAP y debido a las presiones que han tenido y siguen teniendo.

El programa ha invertido cerca de \$3.550 millones (financiamiento directo y contrapartidas) en los estudios biológicos y socioeconómicos básicos, en la elaboración de los documentos que

1 Carbones del Cerrejón y Phillip Morris International

2 TNC, USAID, Fundación Mario Santodomingo y Fondo Acción

soportan la declaratoria de las áreas protegidas y en el diseño de estrategias financieras que orienten las inversiones necesarias para una administración adecuada en el largo plazo.

En un conversatorio en el que faltó tiempo para expresar el entusiasmo y las lecciones aprendidas, se presentaron los resultados de varios proyectos apoyados técnica y financieramente por Conserva Colombia.

La alcaldesa de Toro, María de Fátima Roldán, relató cómo ella y su equipo lideraron desde su candidatura una apuesta ambientalmente sostenible para su municipio, participando inicialmente en las mesas del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) del Valle del Cauca y luego promoviendo la consolidación de su propio Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), sorteando amenazas de grandes proyectos de infraestructura que ponían en riesgo el territorio donde su familia ha vivido por siglos.

La Fundación Grupo HTM presentó los avances en los SIMAP de Carolina del Príncipe y Urrao en Antioquia. Jorge Vásquez, ingeniero forestal de la Fundación, habló sobre el acercamiento que lograron con las comunidades, integrando a los jóvenes en el diseño del logotipo del SIMAP Carolina del Príncipe, involucrando a grandes sectores productivos, como EPM y ganaderos, así como a las autoridades locales (Corantioquia y alcaldías).

El Grupo HTM opinó que

...las iniciativas locales de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos pueden ser una oportunidad muy valiosa de pensar el desarrollo territorial y de enriquecer la estrategia de conservación contemplada por el SINAP. Sinergias bien diseñadas e implementadas son necesarias para ello, donde operen actores institucionales de todo tipo: productivos,

comunitarios, académicos y gubernamentales. La tarea esencial es hacer explícitas las vinculaciones entre conservación de la biodiversidad, gestión del paisaje y calidad de vida de la población: transformar mentalidades e imaginarios culturales es crear corredores de conservación socioecológica.

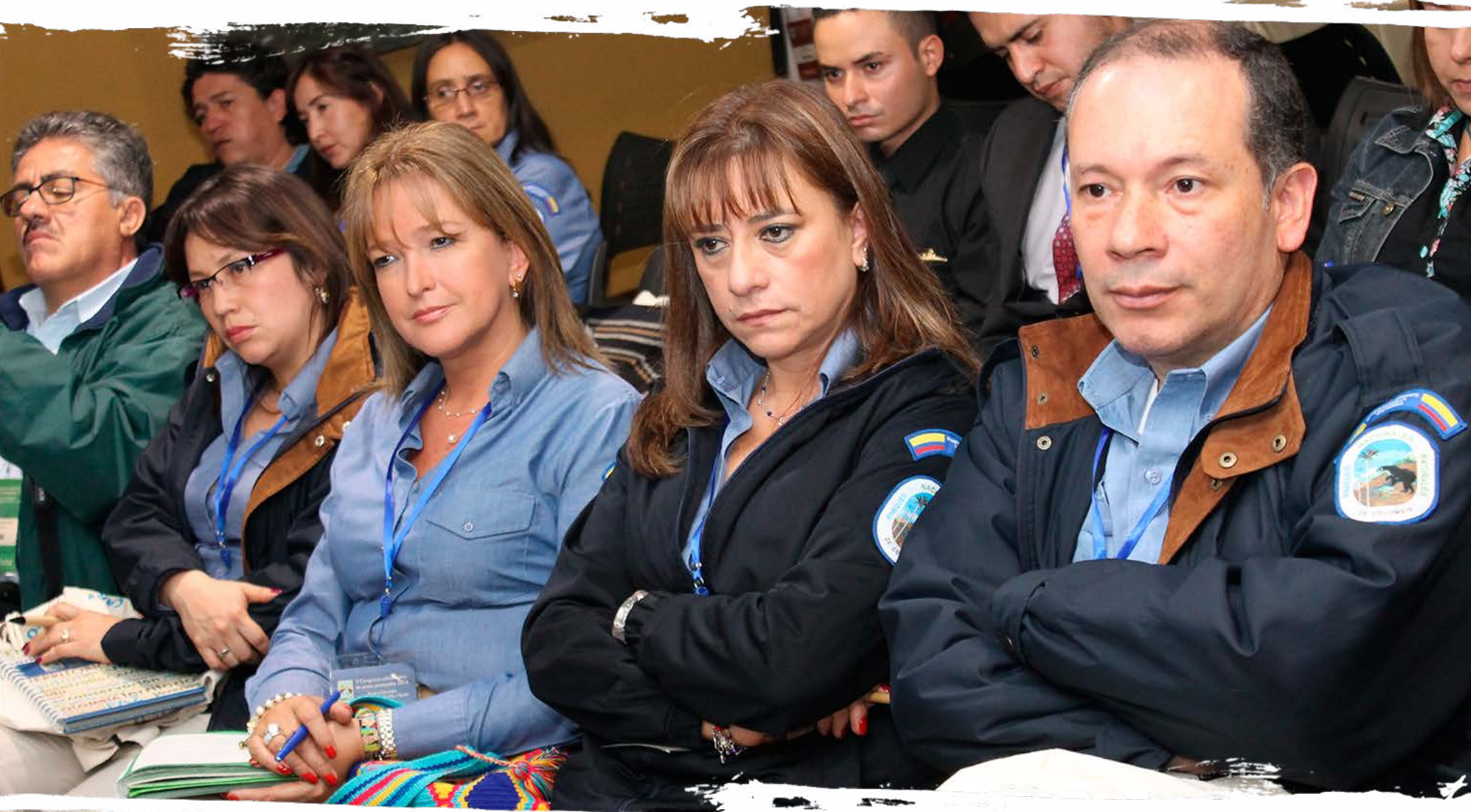
Además de los SIMAP, Conserva Colombia también apoyó la creación de varias RNSC en Valle del Cauca, Vichada y Casanare. La experiencia de Francisco Gómez, director de la Fundación Ambiente Colombia, se seleccionó como un proceso modelo, pues la meta de hectáreas que se pretendían conservar se superó más de 4 veces. Es decir, de las 200 ha proyectadas al inicio, se logró reunir, con el apoyo de 9 familias del municipio de El Cerrito, Valle, 850 ha para ser declaradas como RNSC, fortaleciendo las iniciativas de conservación de la zona de influencia del SIRAP Macizo Colombiano y el PNN Las Hermosas.

Al respecto, Francisco comentó que

...se logra un mayor grado de éxito cuando es la sociedad civil la que adquiere un compromiso y emprende acciones dirigidas hacia la protección del recurso hídrico y de ecosistemas, así como la recuperación ambiental, luego de comprender que, más que una obligación, es una alternativa para lograr mejorar las condiciones de vida de ellos mismos y de su entorno.

Quizá la estrategia más exitosa de Conserva Colombia fue el impulso que se dio a la creación de áreas protegidas locales (APL) en 8 departamentos del país, con más de 42 mil hectáreas de ecosistemas en estado crítico, como bosques secos y ecosistemas marino-costeros.

Una de las APL de mayor extensión es el Distrito de Conservación de Suelos (DCS)



del Cañón del Río Grande (6.418 ha) en el Valle del Cauca, cuya declaración como área protegida estuvo liderada por la Fundación GAIA. Ivonne Muñoz, su directora, comentó que ha sido un proceso donde la participación de las comunidades y autoridades locales han sido fundamental, quienes han redescubierto su región como un lugar privilegiado “único en el mundo”. Además de este DCS, la Fundación GAIA ha liderado los procesos de declaración de otras APL que, en suma, contribuyen a la conectividad entre las múltiples áreas protegidas de la región, como el PNN Farallones de Cali y las grandes Reservas Forestales del departamento, ubicadas en la cordillera occidental andina de Colombia.

Por su parte, Mónica Hernández, representante de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), habló sobre cómo los proyectos de Conserva Colombia se articulan con el SIDAP Valle del Cauca y explicó

cómo los ecosistemas que se pretenden conservar no estaban representados en el SINAP. Mónica comentó que los procesos adelantados dentro de los proyectos permitieron la “sensibilización y empoderamiento comunitario e institucional”, además de vincular activamente a las alcaldías de los municipios involucrados.

Una vez terminaron las presentaciones y dado que entre los asistentes se encontraban representantes de varias organizaciones que también adelantaron proyectos apoyados por Conserva Colombia, se inició la sección de preguntas abiertas.

Inicialmente, se indagó sobre la visión de los participantes sobre los impactos en las comunidades locales de los procesos de declaratoria de áreas protegidas. Quizá la principal consecuencia en las comunidades es la toma de conciencia o cambio de visión sobre su territorio y sobre la importancia

que tiene conservar sus recursos naturales y ordenar su uso. Comentaron sobre el temor que tienen muchas de las personas de “perder su tierra” o algunos derechos sobre ella con la declaratoria del área protegida y enfatizaron en la importancia de los procesos de consulta y de educación ambiental.

Sobre los principales obstáculos que han tenido en los procesos de declaratoria, identificaron las dificultades administrativas en los trámites que se deben surtir con las diferentes instituciones y agencias gubernamentales. También identificaron aspectos financieros como obstáculos debido a los numerosos imprevistos que surgen durante la ejecución de los proyectos.

Gina Rodríguez, bióloga directora de la Fundación Ecosistemas Secos de Colombia, comentó que uno de los principales retos que tuvieron durante los procesos de declaratoria para tres áreas protegidas en el departamento del Atlántico fue convencer a los distintos propietarios de los predios de la importancia de la conservación e involucrarlos en el proceso de planeación. No obstante, Gina enfatizó en que el gran reto era la siguiente fase: implementar los planes de manejo de las áreas declaradas y no perder el interés que se logró en las comunidades con la declaratoria. Al respecto, comentó:

No queremos que los procesos lleguen ahí... los propietarios empiezan primero a perder todo el interés y empiezan a hacer actividades que no deben hacer, entonces es como retroceder en lo que ya se había logrado... ese es un gran reto y ese es el paso a seguir.

Natalia Arango, Directora Ambiental del Fondo Acción, comentó que precisamente se están buscando alianzas con el sector privado para

apoyar la financiación, al menos parcial, de las áreas declaradas: “compartimos la preocupación de sacar áreas protegidas y que no haya una fuente que apoye la implementación”.

Por otro lado, Yuber García de la Fundación Trópico habló sobre el proceso que han llevado a cabo durante el último año para declarar una APL en los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, que reúne 10.800 ha de bosque seco en el departamento del Valle del Cauca. Comentó que la idea surgió inspirada por la experiencia del SIMAP Toro y estuvo de acuerdo en que uno de los mayores retos es la financiación de la administración de las áreas declaradas y la demora en el trámite para su inscripción. También habló sobre la amenaza que significa la expansión de actividades agrícolas y de ganadería extensiva en la zona.

Finalmente, Roció Vargas, una de líderes comunitarias que apoyó el proceso de declaratoria de la Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez en Cali, ejecutado por la Fundación Danza y Vida, comentó lo siguiente respecto a las experiencias alrededor de Conserva Colombia:

Son tan diversas y de tal importancia que ameritarían una difusión más grande, que se podía proponer un congreso o un foro nacional... personalmente me gustaría conocer más sobre cómo están realizando los planes de manejo de todas estas áreas, pues vi cosas muy interesantes y aplicables en nuestro territorio.

César Ruiz ofreció un cierre al conversatorio agradeciendo a los panelistas y asistentes por su voluntad de colaboración. Para concluir, sentenció:

...todas estas historias aportan, sin duda alguna, a esta construcción de país y de su conservación en la que todos somos responsables desde diferentes puntos de vista.



07

II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas **2014**

TOMO I. Áreas protegidas para el desarrollo

Conclusiones y recomendaciones

Contenidos



Áreas protegidas, paisajes rurales y urbanos: uniendo esfuerzos de conservación
pág. 341



Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación y sostenibilidad financiera
pág. 347



Estrategias complementarias de conservación y biodiversidad rural- urbana
pág. 352



Visiones institucionales y comunitarias frente al uso y ocupación de las áreas protegidas
pág. 345



Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas de áreas protegidas
pág. 350



Índice

Áreas protegidas, paisajes rurales y urbanos: uniendo esfuerzos de conservación

Actualmente, las presiones por uso en las áreas protegidas de carácter nacional, impactan tanto los ecosistemas como las poblaciones locales. Lo anterior se evidencia en las 25.159 ha que se deforestan al año, asociadas principalmente a procesos de transformación como cultivos agrícolas y pastos, cultivos de uso ilícito, ganadería y obras de infraestructura que afectan 37 de las 58 áreas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales. Situación muy similar puede estar sucediendo en otras categorías de áreas protegidas; sin embargo, no se tiene información consolidada al momento. Con este panorama se requiere armonizar los intereses de los actores involucrados, así como la definición de mecanismos de gestión en el ordenamiento ambiental del territorio que

facilite la adaptación a las dinámicas propias de cada región y que igualmente sea considerado en un posible escenario de posconflicto.

La consolidación del SINAP ha avanzado significativamente mediante la conformación de 5 de los 6 subsistemas regionales de áreas protegidas definidos para Colombia según los lineamientos del CONPES 3680 de 2010 y del Decreto 2372 de 2010. Estos cuentan con instancias directivas y técnicas de gestión y operación, espacios que se encargan de gestionar las 628 áreas protegidas registradas en las diferentes categorías. Sin embargo, existen vacíos en la categorización de figuras locales, en la identificación de prioridades de conservación, en la incidencia de procesos de ordenamiento territorial, en la articulación entre actores y en la estructuración de mecanismos de sostenibilidad financiera que garanticen las acciones definidas en los instrumentos de planificación a distintas escalas.

Los subsistemas vienen avanzando en la definición de un concepto de las estrategias complementarias de conservación, ya que son consideradas importantes porque apuntan a los objetivos de conservación generales del país. En los ejercicios que han realizado los SIRAP se han identificado preliminarmente diferentes estrategias, el número, hectáreas y tipo de gobernanza. No obstante, en la normatividad no se ha desarrollado el concepto que permita precisar el abordaje de estas estrategias.

Las áreas protegidas son fundamentales para mantener el patrimonio natural y cultural de la Nación. En ellas se conservan el 75% de lagunas y ciénagas y el 62% de los acuíferos del país, de donde se abastece de agua los centros poblados (aproximadamente 30 millones de colombianos). Otros aportes importantes están relacionados con la salud, la provisión de alimentos y los recursos genéticos, entre otros. Por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre el territorio frente al crecimiento económico, el desarrollo y bienestar de la población deben apuntar a evitar su deterioro y degradación.

Para garantizar tanto la integridad de los ecosistemas como su estructura y función, recientemente, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, se definió la conectividad como un cuarto atributo para la consolidación de los sistemas de áreas protegidas del mundo. Este atributo es fundamental para soportar las actividades económicas y el bienestar de la población. En tal sentido, es necesario lograr acuerdos que permitan vincular, diseñar e implementar otras figuras de conservación que aporten a este atributo, además de mantener y fortalecer la participación de los diferentes actores y otras formas de gobernanza.

Las distintas visiones, entre ellas institucionales y comunitarias, frente al uso y la ocupación en las áreas protegidas y las estrategias complementarias de conservación, evidencian dinámicas sociales



y ambientales particulares. En este sentido, en los paisajes urbanos y rurales se reconocen interacciones del orden nacional, regional y local, que involucran distintos tipos de actores con intereses comunes y disposición para trabajar conjuntamente. Lo anterior es fundamental para lograr acuerdos y formular acciones que redunden en el bienestar de las poblaciones, la conservación en las áreas protegidas y la construcción de paz.

En los últimos 50 años, la población urbana del país pasó del 39% al 76% del total nacional. Se estima que para el 2020 esta cifra superará el 80%, lo que conlleva a un incremento en las presiones de uso y manejo de las áreas naturales impactando los ecosistemas y las poblaciones, limitando la destinación de espacios de conservación y uso de la biodiversidad urbana. En consecuencia, no solo será necesario definir



mecanismos eficientes de gestión, como por ejemplo la creación de áreas protegidas urbanas y espacios de conservación para la biodiversidad como estrategia de adaptación a este escenario, sino que implicará reflexionar y generar cambios profundos sobre el diseño de las ciudades y la apropiación social de la importancia de la biodiversidad en las actividades cotidianas.

Es importante avanzar en la comprensión de los conflictos de uso y ocupación en las áreas protegidas como un aporte a la construcción de escenarios de paz. Para ello, se recomienda promover, empoderar y replicar, en los casos en los que sea posible, las iniciativas que incorporan prácticas de uso sostenible como una oportunidad de

generar ingresos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Éstas pueden dar un aporte no solo a la conservación del patrimonio natural y cultural del país, sino también para resolver las tensiones generadas en un posible escenario de posconflicto.

Por otra parte, los espacios de participación existentes, tanto para las comunidades como las instituciones, deben ser consolidados de forma incluyente y coordinada y ampliarse a otros sectores y crear nuevos si se requiere, de modo que se potencialicen las estrategias de conservación definidas, reconociendo a las áreas protegidas y otras estrategias de conservación, como mecanismos importantes para garantizar el bienestar de las poblaciones rurales y urbanas.

La participación tanto de comunidades locales como de instituciones es fundamental en los procesos de planificación y ordenamiento del uso de los territorios de las áreas protegidas. Para ello, es necesario profundizar en el alcance y la capacidad de las comunidades locales para aportar a los procesos de conservación que se encuentran en curso. También es importante revisar los mecanismos de participación empleados hasta el momento, con el fin de determinar su efectividad y repensar, si es necesario, si se requiere la aplicación de nuevos.

En cuanto a la normatividad relacionada con el uso y la ocupación de las áreas protegidas, es importante revisar su pertinencia pues, en algunos casos, resulta obsoleta y en otros es muy general o otra contradictoria, generando tensiones en dichos territorios. Con respecto a la resolución de conflictos relacionados con los usos y la ocupación de las áreas protegidas se recomienda fortalecer la articulación y coordinación interministerial para brindar soluciones integrales a los inconvenientes que se presentan en las áreas protegidas y otras figuras de conservación existentes.

En cuanto a los subsistemas deben mantener el proceso de definición de prioridades y declaración de áreas protegidas a escalas regionales y locales en ecosistemas priorizados (ecosistemas secos, marinos y costeros y de la Orinoquia), incorporando criterios complementarios a los ecológicos como servicios ecosistémicos, elementos culturales y deben además participar en la integración de portafolios de prioridades de conservación realizados a diferentes escalas que permitan orientar una articulación efectiva de los procesos de planificación de ordenamiento territorial.

Es necesario incrementar los ejercicios que definen los vacíos y prioridades de conservación para aumentar los ecosistemas no o pobremente representados. Un SINAP bien conectado exige el desarrollo de aptitudes y enfoques para poder incidir en procesos que involucren diferentes actores en relación a la planificación territorial y los diferentes mecanismos para su implementación y gestión.

Se requiere consolidar una estrategia financiera robusta que permita la consecución, la administración y el manejo efectivo y eficaz de los recursos para adelantar acciones prioritarias de conservación. Lo anterior debe estar apalancado en la consecución de recursos financieros que garanticen la sostenibilidad de las acciones.

Es necesario generar un mayor conocimiento de las estrategias complementarias para lograr su posicionamiento como figura, desde lo jurídico, institucional, regional y local, así como lograr un entendimiento de éstas como una oportunidad de conservación distinta al de las categorías de áreas protegidas establecidas

Por lo cual es necesario que para realizar un análisis fiable se prioricen actividades a futuro para completar estos datos; se requiere enfocar los esfuerzos hacia una definición única asociada a las estrategias, con el fin de poder asegurar su diferenciación con otras categorías y avanzar en un marco normativo específico.



Visiones institucionales y comunitarias frente al uso y ocupación de las áreas protegidas

Es justo reconocer el cambio de posiciones que se ha dado por parte de los actores institucionales y de los comunitarios para enfrentar la problemática que históricamente ha tenido Parques Nacionales Naturales, especialmente lo que hace referencia al uso y la ocupación. Fue claro en este simposio que existe una disposición para reconocer intereses, para reconocer los actores y para procurar soluciones conjuntas y comunes.

Existen coincidencias en cuanto a la participación tanto de instituciones como comunidades, es necesario profundizar en el tema de lo participativo puesto que el Estado colombiano ha reproducido, históricamente, los mismos modelos de participación en la construcción de procesos sobre los territorios.

Para ello, se recomienda profundizar en la discusión sobre el tema de lo participativo; ¿cuál es el enfoque?, ¿cuál es la concepción que se tiene de lo participativo?, ¿cuál es el alcance? y ¿qué capacidades tienen las comunidades que van a participar en la toma de decisiones y las orientaciones de la política? Lo anterior significa que se deben precisar los mecanismos a través de los cuales se va a lograr la participación en las distintas instancias de representatividad para la construcción de la política pública de uso y ocupación de tierras en áreas protegidas.

En cuanto a la institucionalidad pública, se destaca el hecho de que la UPRA, esté elaborando una política pública de uso y ocupación y ordenamiento territorial para el país y que Parques Nacionales, en la mesa conjunta que tiene, le apueste a la construcción de una política pública

en este mismo sentido. Por ello, es importante que lo participativo sea claro, transparente y lo más incluyente posible, pues es desde lo social que se reivindica su importancia y se garantiza su real implementación en los territorios, ya que las personas sobre el territorio son los verdaderos protagonistas de las mismas.

De forma paralela, tanto a la participación como a la construcción de la política pública de uso y ocupación de tierras, se debe continuar con el fortalecimiento organizacional. Es un hecho que, para cinco funcionarios y otros tantos contratistas de Parques Nacionales, es imposible realizar el control, monitoreo y demás gestiones que se requieren en las áreas protegidas, sin importar su extensión, por lo que es necesario fortalecerlo con recurso humano, técnico y con infraestructura y equipos. No es casualidad que buena parte del fracaso de las políticas públicas, en general, tiene que ver con la precariedad y con la crisis permanente que viven las instituciones que, por mas buenas intenciones que tengan, no tienen las condiciones ni los acompañamientos que se requieren para poder cumplir con sus objetivos misionales. Por lo tanto, se recomienda buscar alianzas y estrategias de cooperación tanto con la institucionalidad del Estado, como con organismos internacionales que posibiliten el mejoramiento de las organizaciones e instituciones encargadas de la gestión al interior de las áreas protegidas.

En cuanto al tema de la normatividad, actualmente algunas normas son obsoletas, ya que no dan cuenta de las transformaciones y de las realidades que vive el país; hay otras que son tan generales que dan lugar a todas las interpretaciones posibles y otras que son definitivamente contradictorias. Por lo anterior, se recomienda revisar el tema de la normatividad relacionada con el uso y la ocupación de las áreas protegidas, ya que probablemente sea necesario

reformular, reorientar y actualizar, para tener una aplicación real en terreno, al momento de ordenar los usos y la tenencia de tierras al interior de las áreas protegidas. De la misma manera se recomienda revisar pormenorizadamente el Decreto 622 de 1977, por el cual se rige Parques Nacionales y las coincidencias o tensiones que puede tener con los nuevos decretos que están orientando la nueva configuración de las áreas protegidas y los SIRAP.

Es necesaria una mayor articulación y coordinación interministerial e interinstitucional, para evitar que las normas que tiene el Ministerio de Ambiente, las del organismo encargado de otorgar las licencias ambientales, el código de minas, los decretos del Ministerio de Agricultura más los que rigen a Parques Nacionales se vuelvan contradictorias y afecten la integridad de las áreas, como en la calidad de vida de los habitantes aledaños a éstas.

Finalmente, en el tema del ordenamiento ambiental, que va muy de la mano con la incidencia que tiene la normatividad, debe tratar de compatibilizarse y discutir mas a fondo tanto las figuras consagradas normativamente como las figuras de ordenamiento territorial ambiental que vienen construyendo las comunidades. Es importante avanzar en la comprensión de los conflictos de uso y ocupación en las áreas protegidas como un aporte a la construcción de escenarios de paz. Para ello, se recomienda promover, empoderar y replicar, en los casos en los que sea posible, las iniciativas que incorporan prácticas de uso sostenible, como una oportunidad de generar ingresos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Estas pueden ser un aporte no solo a la conservación del patrimonio natural y cultural del país, sino también para resolver las tensiones generadas en un posible escenario de posconflicto.

Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación y sostenibilidad financiera

Avances en la consolidación de sistemas completos y ecológicamente representativos

Los subsistemas de áreas protegidas enfrentan retos para la participación efectiva de todos los actores, la construcción de instrumentos de planificación y la generación de acuerdos en los subsistemas. También se enfrentan en su diseño la declaración y manejo de las áreas protegidas, analizando oportunidades y amenazas a la biodiversidad que los colocan de cara a la construcción de mecanismos para la toma de decisiones que puedan responder a las necesidades que hoy tiene la conservación del patrimonio ecológico y cultural.

Con los casos seleccionados para la primera parte del Simposio 6 se observaron procesos de participación efectiva.

Se conocieron experiencias de construcción de estrategias que garantizan que los actores se comprometan y que sus capacidades incidan en los procesos de planificación y la gestión proyectos, entre otras acciones a favor del subsistema. En este sentido, la conformación del SIDAP Caquetá presentó la conformación de un sistema desde los procesos locales de conservación; la experiencia de asociación municipal del Parque Nacional Natural Tatamá resaltó el valor de la coordinación de los municipios en el ordenamiento del territorio y la articulación de los esfuerzos en torno a la conservación de esta área protegida; el SIDAP Valle muestra cómo su proceso ha logrado avanzar de manera integral para buscar una sostenibilidad técnica, social y financiera;

y el SIRAP Pacífico mostró todo el esfuerzo de planificación colectiva institucional en el marco del cual ha avanzado el proceso de consolidación del Subsistema, teniendo como meta estratégica la articulación a este escenario de trabajo de los actores de comunidades negras e indígenas y demás actores estratégicos de la región (municipios, departamentos, universidades y varias ONG), que desarrollan acciones orientadas a la conservación de la diversidad biocultural del pacífico Colombiano.

Sostenibilidad financiera y el manejo de sistemas efectivamente gestionados como aporte a la construcción del SINAP

Una de las preguntas más frecuentes que se plantean los gestores de la conservación es: ¿cómo lograr la sostenibilidad financiera de los procesos? El Simposio 6 la abordó conociendo cuatro casos específicos.

El Ministerio de Ambiente de Ecuador presentó como la sostenibilidad financiera del SNAP como parte central de su política pública para priorizar el manejo adecuado de sus áreas protegidas y como un actor clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país, ha permitido un giro de más del 400% en la disponibilidad de recursos públicos durante los últimos años, incorporar nuevas unidades de conservación, mejorar su infraestructura y a través de fondos concursables desarrollar proyectos productivos con las comunidades locales como estrategia para la superación de la pobreza del quintil más pobre del país.

Por su parte, la Estrategia de Sostenibilidad Financiera colombiana plantea que la sostenibilidad financiera de las áreas debe partir desde la generación de ingresos propios,

derivados del reconocimiento de los servicios ecosistémicos provistos por las áreas y se socializan las experiencias que se han desarrollado desde Parques Nacionales Naturales.

En el ámbito local, se presentaron dos casos que aportan a la reflexión sobre los posibles caminos de sostenibilidad atada al logro de los objetivos de conservación de los subsistemas. El primero de Cornare con el BanCO2, una estrategia de pago por servicios ambientales que permite a las empresas, instituciones y ciudadanos compensar su huella de carbono y la pérdida de biodiversidad, promoviendo la conservación de las áreas protegidas y los bosques naturales de la región, realizando pagos directos a las familias que conservan, con lo que se mejora su calidad de vida. El segundo caso de Buga expuso una experiencia de las alianzas públicas-privadas, en el que la empresa Aguas de Buga, a través de herramientas de manejo del paisaje y planificación predial, mejora el estado de conservación de la cuenca alta y disminuye los riesgos de suspensión del servicio de acueducto por sedimentos provenientes de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Buga.

Por su parte, la experiencia del SIRAP Eje Cafetero permitió reflexionar la implementación de metodologías de análisis de efectividad a nivel de área protegida y de subsistema, y cómo dicha herramienta permite afianzar y consolidar su ejercicio de gestión y planificación.

De acuerdo con estos planteamientos, se reconocen los siguientes retos para la consolidación de los subsistemas de áreas protegidas de acuerdo a los tres atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP):

Completo

- Fortalecer y ampliar la participación en los Subsistemas regionales y temáticos de áreas protegidas y demás instancias para la consolidación del SINAP.



- Gestión coordinada entre autoridades ambientales y los sectores económicos del país para el posicionamiento y reconocimiento del SINAP, a partir de un ejercicio de planificación intersectorial efectiva y el ordenamiento territorial.
- Es necesario avanzar en el proceso de reglamentación de categorías de áreas protegidas que incluyan el nivel local y respondan a procesos de gobernanza que tengan en cuenta las necesidades de conservación municipales y de los grupos étnicos.

Ecológicamente representativo

- Mantener el proceso de definición de prioridades y declaración de áreas protegidas a escalas regionales y locales en ecosistemas priorizados (ecosistemas secos, marinos y costeros y de la Orinoquia), incorporando criterios complementarios a los ecológicos como servicios ecosistémicos, especies, elementos culturales y cambio climático, entre otros, que respondan a los tres objetivos generales de conservación.

- Avanzar en la integración de portafolios de prioridades de conservación realizados a diferentes escalas que permitan orientar una articulación efectiva con los diferentes procesos planificación intersectorial.
- Generar acciones complementarias de ordenamiento territorial que aporten a la conectividad del SINAP.

Efectivamente gestionado

- Implementar efectivamente la estrategia de sostenibilidad con instrumentos y mecanismos económicos para su formalización.
- Fortalecer el trabajo regional para la sostenibilidad financiera de las diferentes categorías de áreas protegidas.
- Implementar mecanismos operativos con recursos financieros de asignaciones presupuestales y otras herramientas fiscales.
- Articular y fortalecer distintas estrategias de sostenibilidad de departamentos, corporaciones autónomas regionales y municipios a través de los SIRAP, SIDAP y sistemas locales/ municipales de áreas protegidas.
- Avanzar en la homologación y consolidación de la información para la estimación de las brechas financieras y los beneficios generados por las áreas protegidas.
- Promover ejercicios regionales de análisis de efectividad de manejo, a nivel de sitio y a nivel de sistema.
- Fortalecer la evaluación de efectividad de manejo para el SINAP a nivel de área y sistema que permita fortalecer la gestión de las áreas en los aspectos más estratégicos para el logro de los objetivos de conservación.
- Retroalimentación de experiencias internacionales de consolidación de sistemas de áreas protegidas.

Las reservas naturales de la sociedad civil en los subsistemas de áreas protegidas

- Los procesos de participación de la sociedad civil deben ir acompañados de ejercicios de formación y capacitación en política social y derecho que permitan incrementar la participación ciudadana, de tal forma que los mecanismos diseñados para tal fin sean efectivos en el ejercicio de ciudadanía y favorezcan procesos de desarrollo sostenible.
- Los propietarios, organizaciones, entidades públicas y demás actores de la conservación, deben creer y asumir su papel fundamental en la protección de la biodiversidad.
- El Gobierno Nacional debe fomentar la captación de recursos, a través de impuestos sobre las empresas de desarrollo sectorial, que causan efectos negativos sobre la biodiversidad, y estos recursos deben dirigirse exclusivamente a la protección de ecosistemas frágiles y al fomento de la conservación en el país.
- Se deben adoptar y fortalecer, los mecanismos legales, jurídicos y administrativos que garantizan la conservación privada en el país, para lograrlo, es necesario incrementar el presupuesto de las autoridades ambientales, gobernaciones y otras entidades, responsables de la conservación de la biodiversidad.
- Se deben construir Planes de Desarrollo Sostenibles diferenciados de acuerdo con el contexto regional, en los cuales se recoja los aspectos sociales, biológicos, culturales y económicos, que permitan armonizar políticas de desarrollo económico con la protección de ecosistemas.

- El desarrollo sectorial del país debe estar mediado por el equilibrio entre desarrollo económico y la sostenibilidad de los ecosistemas y culturas que habitan en el territorio.
- Se deben incrementar las acciones encaminadas hacia la educación ambiental, la investigación científica, los esquemas de monitoreo participativo, el conocimiento, la capacitación y el intercambio de experiencias, buscando que la voluntad de conservar de las comunidades locales sea un ejercicio de reconocimiento y empoderamiento en favor de la conservación pública y privada. Así mismo, es necesario que los programas de formación y capacitación para los funcionarios del Estado, en todos sus niveles, incluyan temas de conservación y protección de la biodiversidad.
- Los decretos y leyes que regulan y legalizan las RNSC deben complementarse con mecanismos normativos que favorezcan la conservación privada y fomenten herramientas de compensación, por ejemplo con esquemas de pago por servicios ambientales, de acuerdo con la función que estas cumplen. Estos mecanismos normativos deberán incluir, la exclusión de las RNSC como zonas potenciales para la explotación minera e hidrocarburífera.
- Generar incentivos claros y contundentes que fomenten la creación, manejo y gestión de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y otras figuras de conservación privada. Así mismo, incentivar a las RNSC que realizan papeles más activos, fomentando su trabajo como ejemplo para crear nodos de conservación.
- Articular políticas públicas a través de la participación social, vinculando a actores privados, con los cuales se orienten en conjunto las políticas de desarrollo local y regional.



Estrategias complementarias de conservación y biodiversidad rural-urbana

Las estrategias complementarias de conservación son fundamentales para mantener el patrimonio natural y cultural de la Nación; por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre el territorio, frente al crecimiento económico, el desarrollo y bienestar de la población deben apuntar a reconocerlas, respaldarlas jurídicamente, posicionarlas y a evitar el deterioro y degradación de sus territorios.

El país ha avanzado en la consolidación del SINAP definiendo categorías de áreas protegidas, creando instancias operativas nacionales, regionales y locales, identificando vacíos y prioridades de conservación y estructurando mecanismos de sostenibilidad financiera, es hora de avanzar en la misma dirección con las estrategias complementarias de conservación.

Pese a que actualmente existen escenarios de participación incluyentes y coordinados para desarrollar estrategias complementarias de conservación, se debe avanzar en una conceptualización más robusta sobre cuál es el rol de las mismas en el ordenamiento territorial, como figura innovadora o tradicional ya que constituyen una forma de repensar el ordenamiento y no está exclusivamente ligado cumplir los objetivos generales de conservación. Por tanto, se espera consolidar dichos escenarios, crear nuevos ampliarlos a otros sectores, con el fin de fortalecer y potenciar las estrategias ya existentes, reconociendo las estrategias complementarias como un mecanismo importante para garantizar el bienestar de las poblaciones rurales y urbanas.



Estrategias complementarias de conservación: necesidad de posicionamiento, conceptos y normatividad

Se debe continuar construyendo de manera conjunta y articulada una definición de estrategia complementaria de conservación, así como las identificación de las estrategias regionales y locales en donde los SIRAP juegan un papel clave en el cumplimiento de dicho objetivo.

Es necesario generar mediante una construcción participativa que involucre todos los actores, un mayor conocimiento de las experiencias e importancia que suponen las estrategias complementarias de conservación para lograr su posicionamiento como figura, reconociendo su papel y las dinámicas que en esta se desarrollan, para así posicionarlas desde lo jurídico, institucional, regional y local, con el fin de lograr el entendimiento de éstas como una oportunidad de conservación distinta a las áreas protegidas.

Se requiere avanzar en la consolidación de la información de estrategias complementarias de conservación y figuras de ordenamiento diferentes a las categorías de áreas protegidas, contemplando la necesidad de propiciar arreglos institucionales y esquemas de gobernanza para garantizar su administración y gestión efectiva.

Avanzar en la conceptualización de las estrategias complementarias de conservación, asegurará que las áreas a nivel local, regional y otras iniciativas de conservación sean posicionadas y diferenciadas, con un marco normativo que blinde estas de las problemáticas que actualmente presentan al no estar reconocidas como integrantes del SINAP.

Es fundamental seguir trazando lineamientos en la diferenciación entre estrategia complementaria de conservación y área protegida local, área protegida urbana y étnica. Por lo tanto, se requiere que el país avance en la reglamentación de este tipo de áreas protegidas de modo que se establezca la posibilidad de su declaratoria e inclusión en el SINAP como áreas protegidas en los casos meritorios.

Estrategias Complementarias de Conservación: esfuerzo desde lo local, ganancia nacional

Las ECC en lo local son un esfuerzo que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades que de estas dependen, buscar el reconocimiento desde su identidad y la apropiación de las mismas en estas iniciativas, asegurará que se construyan las bases necesarias para una efectiva participación, gestión, administración y manejo.

Las decisiones que se tomen en torno a las ECC, deben no solo garantizar el derecho ambiental, sino también los derechos colectivos de las comunidades que son parte fundamental en el ejercicio actual de posicionamiento de estas figuras de conservación que también contemplan lo cultural y tradicional.

Se debe asegurar el surgimiento y la permanencia de las estrategias complementarias desde lo local, ya que de estas dependen las comunidades, gran parte de este reto está en la búsqueda de estrategias financieras como la compensación, pagos por servicios ambientales, exenciones tributarias, bonos por agua, que cimenten la funcionalidad a largo plazo de estas figuras de conservación.

Oportunidades para la conservación

El reconocimiento y la interacción de las distintas visiones y conflictos frente al uso y la ocupación de las áreas protegidas, las estrategias complementarias de conservación y en general, del suelo y el subsuelo del territorio, es fundamental para llegar a

acuerdos y formular acciones que redunden en el bienestar de las poblaciones en estos territorios y la construcción de paz.

Biodiversidad urbana: grandes ciudades y conservación

Las dinámicas sociales y ecológicas en los paisajes urbanos son un reto, no solo para la administración de las áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación, sino para la gestión integral de la biodiversidad y el agua en el territorio, como bases para el bienestar humano.

Ciudades y pueblos deben diseñar de manera amplia y participativa, estrategias y herramientas de planificación y gestión territorial, que aseguren un desarrollo y modelo de ocupación del territorio ecológica y socialmente balanceado, a fin de mantener los servicios ecosistémicos de los cuales dependen.

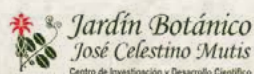
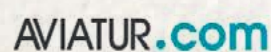
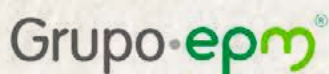






Parcs
Canada

Parks
Canada





II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas
2014